CHARLES TILLY

Las revoluciones europeas, 1492-1992



Primera edición en BIBLIOTECA DE BOLSILLO: febrero de 2000

Título original:
EUROPEAN REVOLUTIONS, 1492-1992

Traducción del inglés de Juan Faci

Diseño de la colección: Joan Batallé
Ilustración de la cubierta: Claude Nicolas de La Croix, *Ordonnance du roi*, 1773

ISBN: 84-8432-028-6
Depósito legal: B. 2.632-2000
Impreso en España

2000. – ROMANYÀ/VALLS, S.A., Capellades (Barcelona)

Prefacio

EUROPA SE ESTÁ CONSTRUYENDO. Esta gran esperanza sólo se realizará si se tiene en cuenta el pasado: una Europa sin historia sería huérfana y desdichada. Porque el hoy procede del ayer, y el mañana surge del hoy. La memoria del pasado no debe paralizar el presente, sino ayudarle a que sea distinto en la fidelidad, y nuevo en el progreso. Europa, entre el Atlántico, Asia y África, existe desde hace mucho tiempo, dibujada por la geografía, modelada por la historia, desde que los griegos le pusieron ese nombre que ha perdurado hasta hoy. El futuro debe basarse en esa herencia que, desde la Antigüedad, incluso desde la prehistoria, ha convertido a Europa en un mundo de riqueza excepcional, de extraordinaria creatividad en su unidad y su diversidad.

La colección «La construcción de Europa», surgida de la iniciativa de cinco editores de lenguas y nacionalidades diferentes: Beck de Munich, Basil Blackwell de Oxford, Crítica de Barcelona, Laterza de Roma y Bari y Le Seuil de París, pretende mostrar la evolución de Europa con sus indudables ventajas, sin disimular por ello las dificultades heredadas. El camino hacia la unidad del continente ha estado jalonado de disputas, conflictos, divisiones y contradicciones internas. Esta colección no las piensa ocultar. Para acometer la empresa europea hay que conocer todo el pasado, con una perspectiva de futuro. De ahí el título «activo» de la colección. No hemos creído oportuno escribir una historia sintética de Europa. Los ensayos que proponemos son obra de los mejores historiadores actuales, sean o no europeos, sean o no reconocidos. Ellos abordarán los temas esenciales de la historia europea en los ámbitos económico, político, social, religioso y cultural, basándose tanto en la larga tradición historiográfica que arranca de Heródoto, como en los nuevos planteamientos ela-

borados en Europa, que han renovado profundamente la ciencia histórica del siglo XX, *sobre todo en los últimos decenios. Son ensayos muy accesibles, inspirados en un deseo de claridad.*

Y nuestra ambición es aportar elementos de respuesta a la gran pregunta de quienes construyen y construirán Europa, y a todos los que se interesan por ello en el mundo: «¿Quiénes son los europeos? ¿De dónde vienen? ¿Adónde van?».

JACQUES LE GOFF

A Chris, Kit, Laura y Sarah,
antes mis hijos y ahora mis amigos

Prólogo

Cuando Jacques Le Goff me invitó a escribir un libro sobre las revoluciones europeas, acepté su propuesta con agrado. Acababa de terminar un libro sobre los estados europeos y un ensayo sobre la naturaleza cambiante de las revoluciones europeas. ¿Qué podía ser, pues, más sencillo y más agradable que inspirarme en el primero y ampliar el segundo? Pensé que los importantes estudios críticos y trabajos de síntesis sobre los estudios relativos a la revolución, las rebeliones y procesos conexos que habían publicado recientemente Rod Aya, Jack Goldstone, Michael Kimmel y James Rule facilitarían mi tarea. Imaginé, por tanto, que se trataría de un trabajo sin mayor complicación, algo así como dar un curso a estudiantes universitarios: una teoría general de la revolución, un estado de la cuestión de las principales revoluciones europeas, un breve resumen de los acontecimientos, comparaciones sugestivas, conclusiones provisionales y sugerencias para profundizar en el estudio del tema.

El plan de trabajo era sumamente atractivo, pero no había tenido en cuenta mi sentido de la responsabilidad y mi curiosidad. Aunque durante los últimos treinta años había realizado trabajos sobre diversas revoluciones y ocasionalmente había abordado la conceptualización de los procesos revolucionarios, nunca había intentado formular una teoría general —o, lo que es lo mismo, una historia general— de las revoluciones. Descubrí que no podría escribir este libro sin reflexionar al menos sobre lo que suponen esas generalizaciones. La labor consiguiente fue atractiva y formativa, pero no resultó en modo alguno fácil. Terminé lleno de escepticismo sobre los intentos de formular modelos únicos de revolución. No pude tampoco cumplir el plazo fijado, que la consolidación de la Comunidad Europea en 1992 y 1993 hacía más urgente.

En mi condición de historiador especializado he trabajado principalmente en la historia de Francia desde el siglo XVII hasta el presente y en la de Gran Bretaña, centrando mi atención en el período 1750-1850. En cuanto a los demás países, he recurrido a las síntesis disponibles en las bibliotecas que suelo frecuentar. En la bibliografía que se incluye en el libro figuran las obras que he consultado. Aunque con un grado distinto de dificultad, puedo manejarme con el inglés, alemán, ruso, la mayor parte de las lenguas románicas y otras lenguas estrechamente relacionadas con estas últimas. He consultado en mayor número las obras inglesas y he ignorado por completo las obras escritas en turco, finlandés, húngaro y árabe. Como consecuencia, los únicos «hechos» que en este libro sorprenderán a los especialistas en las diferentes zonas y épocas que en él se incluyen serán, sin duda, mis errores factuales. Con toda seguridad, al estudiar la historia de un continente durante un lapso de medio milenio, he identificado erróneamente a algunas personas, lugares y procesos, he interpretado desacertadamente algunas causas y he establecido nexos incorrectos entre los acontecimientos. En aquellos períodos que conozco bien, las nuevas interpretaciones que se ofrecen en este libro tienen numerosos predecesores; presentan nuevas versiones de viejos argumentos. Con toda seguridad, eso ocurrirá también en los estudios que no conozco tan profundamente, como los que se refieren a los Balcanes. Me atrevo a pedir a los historiadores que no pasen por alto mis errores, pero que se pregunten, antes de rechazar todo el análisis, si esos errores invalidan las comparaciones generales que se realizan en el libro.

Algunos fragmentos del libro adaptan materiales de publicaciones anteriores: «State and Counterrevolution in France», *Social Research*, 56 (1989), pp. 71-97; «Changing Forms of Revolution», en E. E. Rice, ed., *Revolution and Counter-Revolution*, Blackwell Publishers, Oxford, 1991, pp. 1-25; «Conclusions», en Leopold Haimson y Giulio Sapelli, eds., *Strikes, Social Conflict and the First World War. An International Perspective*, Feltrinelli, Milán, 1992, pp. 587-598. Aunque pueda tratarse de viejas ideas, todo el texto es nuevo.

Varias secciones del libro han sido duramente criticadas en versiones anteriores y en presentaciones orales, por parte de Rod Aya, Karen Barkey, Perry Chang, Randall Collins, Rafael Cruz, Jeff Goodwin, Michael Hanagan, Robert Jervis, Nikki Keddie, Sadrul Khan, Roy Licklider, Gloria Martínez Dorado, Tony Pereira, Ariel Salzmann, The-

da Skocpol, Jack Snyder, Michele Stoddard, Sidney Tarrow, Wayne TeBrake, Bridget Welsh, Harrison White y Viviana Zelizer. (Tarrow y TeBrake me instaron a realizar cambios importantes en la estructura de la obra, que me fue imposible introducir. Eso les dará derecho a decirme «ya te lo habíamos dicho» si el lector no comprende la argumentación del libro. Por fortuna, ambos autores están escribiendo sendos trabajos sobre temas relacionados, en los que podrán corregir mis errores.) Carol Stevens me prestó una gran ayuda con las fuentes rusas. En el seminario organizado por la New School sobre la formación del Estado y la acción colectiva y en el seminario especial organizado por Harrison White y el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Columbia se examinaron con rigor varias partes del manuscrito. Laura Kalmanowiecki y Hong Xu me prestaron una ayuda indispensable para el manejo de las fuentes y Brigitte Lee preparó el original de forma impecable. Adele Rotman me prestó un valioso asesoramiento sobre la forma de organizar y terminar el libro. Ninguno de estos amigos de cuya ayuda me he beneficiado ha visto la versión definitiva y, por tanto, ninguno de ellos puede ser responsable de los errores que yo haya podido cometer. Yo asumiré la responsabilidad de esos errores.

Nueva York

NORUEGA
SUECIA
FINLANDIA
Oslo
Estocolmo
ESTONIA
LIVONIA
GOTLAND
ESCOCIA
MAR DEL NORTE
DINAMARCA
Copenhague
IRLANDA
INGLATERRA
GALES
Londres
HOLSTEIN
Hamburgo
POMERANIA
CURLANDIA
PRUSIA
Moscú
RUSIA
Volga
HOLANDA
Rin
BRANDEBURGO
Vistula
Varsovia
LITUANIA
OCÉANO ATLÁNTICO
Colonia
HESSE
LUSACIA
POLONIA
SILESIA
VOLINIA
Sena
París
LUX.
SAJONIA
ALTO PALATINADO
BAJO PALATINADO
BRETAÑA
Loira
BOHEMIA
MORAVIA
GALITZIA
Dniéper
Dniéster
PODOLIA
BAVIERA
AUSTRIA
LORENA
FRANCO CONDADO
Munich
Viena
MOLDAVIA
ESTIRIA
CONF. HELVÉTICA
TIROL
CARINTIA
HUNGRÍA
FRANCIA
SABOYA
Milán
Venecia
TRANSILVANIA
Ródano
Génova
Duero
Ebro
VALAQUIA
Danubio
BOSNIA
MAR NEGRO
Florencia
ESTADOS PONTIFICIOS
SERBIA
BULGARIA
Madrid
Tajo
Lisboa
PORTUGAL
ARAGÓN
CASTILLA
DALMACIA
IMPERIO OTOMANO
Constantinopla
Roma
ESPAÑA
NÁPOLES
Nápoles
MAR MEDITERRÁNEO
ALBANIA
SICILIA
MOREA

Europa en 1519

SUECIA
FINLANDIA
NORUEGA
Bergen
Oslo
Estocolmo
Helsinki
San Petersburgo
RUSIA
Tallin
Novgorod
REINO UNIDO
MAR DEL NORTE
ESTONIA
Volga
Kalinin
Gorki
Edimburgo
Belfast
DINAMARCA
Riga
LETONIA
Moscú
Dublín
Copenhague
LITUANIA
Smolensko
Vilnius
PAÍSES BAJOS
RUSIA
Cardiff
Hamburgo
Londres
Amsterdam
Berlín
POLONIA
BIELORRUSIA
OCÉANO ATLÁNTICO
ALEMANIA
Varsovia
Bruselas
BÉLGICA
Dresden
Rin
Kiev
Praga
Vistula
Dniéper
París
Sena
CHECOSLOVAQUIA
Lvov
UCRANIA
Rostov
Loira
Munich
Dniéster
Berna
SUIZA
Viena
AUSTRIA
Budapest
MOLDAVIA
Odesa
MAR CASPIO
FRANCIA
HUNGRÍA
RUMANIA
Ródano
Venecia
ESLOVENIA
Turín
Milán
Zagreb
Bucarest
Tbilisi
Bakú
Duero
Ebro
CROACIA
Belgrado
Danubio
MAR NEGRO
Marsella
BOSNIA
Sarajevo
Madrid
Florencia
BULGARIA
Lisboa
PORTUGAL
Tajo
Barcelona
ITALIA
YUGOSLAVIA
Sofía
Roma
Estambul
ALBANIA
ESPAÑA
Nápoles
Tirana
TURQUÍA
MAR MEDITERRÁNEO
GRECIA
Palermo
Atenas

Europa en 1992

CAPÍTULO UNO

Conflicto, revuelta y revolución

El retorno de la revolución

La historia repudia la arrogancia. En 1989 una serie de intelectuales franceses y de francófilos anunciaron el bicentenario de la gran revolución francesa con réquiems por la revolución. El provocador historiador François Furet declaró que la revolución francesa iniciada en 1789 había concluido por fin, porque la institución de un presidente elegido por la población y de un consejo constitucional habían limitado, finalmente, los poderes de la asamblea nacional, porque la iglesia católica estaba reconciliándose con los partidos políticos y —¡en no poca medida!— porque el partido comunista, heredero de los jacobinos, estaba en trance de desaparición como fuerza política de primer orden. En todos los países de Europa occidental y en América Latina, continuaba Furet, el marxismo estaba desapareciendo a medida que la gente descubría los «riesgos del maximalismo revolucionario» (Furet, 1989, p. 28).

En el prólogo de un diccionario de la revolución —gran éxito de ventas— publicado ese mismo año, Furet y Mona Ozouf mencionaban una paradoja de la escena política francesa: un *coup d'état* había curado esa herida abierta que había sido la revolución durante casi doscientos años. La toma del poder por De Gaulle cuando los nacionalistas franceses se rebelaron contra la descolonización puso fin al mito revolucionario: «al parecer, De Gaulle dio con la clave para crear una república monárquica que al cabo de doscientos años ha reconciliado al Ancient Régime con la Revolución» (Furet y Ozouf, 1989, p. xxi). La revolución había terminado; Francia podía finalmente ocuparse de los asuntos políticos que los lamentables acontecimientos de 1789 habían interrumpido con tanta brusquedad. La mayor parte de

los europeos, no sólo los franceses, compartían la idea de que la era de la revolución había terminado. En Europa occidental, la población parecía demasiado próspera y egoísta para la revolución y en Europa oriental, los gobiernos parecían demasiado represivos y los ciudadanos demasiado divididos.

En 1988 Jacques Denoyelle afirmó, refiriéndose a Occidente en general y a Francia en particular, que la experiencia del socialismo autoritario y el advenimiento del individualismo democrático «se unieron para hacer de la rebelión violenta un recuerdo del pasado, una utopía desprovista de su maquillaje» (Grambelle y Trebitsch, 1989, II, p. 306). Después de todo, en una época dominada por el consumismo y en la que los estados acumulaban tanto poder, poco podían hacer los disidentes de los países europeos salvo poner bombas, garabatear graffiti, maldecir o abandonar. Reforma o represión, tal vez; revolución, nunca. ¿Acaso no había enseñado eso el triste remedo de programas revolucionarios que se formulara en 1968?

Sin embargo, en 1989 los habitantes de Europa oriental invalidaron totalmente cualquier análisis que contemplara el fin de la rebelión. Hicieron sus propias revoluciones y, más aún, el Estado dominante, la Unión Soviética, les ayudó de manera inconsciente. En los años posteriores a su ascenso al poder en 1985, el líder de la Unión Soviética, Mijail Gorbachov afirmó rotundamente que, dado que pretendía reducir los elevados gastos militares, no sólo trataría de establecer la paz con los Estados Unidos y la OTAN, sino también reducir la intervención militar de la Unión Soviética en los asuntos internos de otros estados. La costosa y desmoralizadora intervención de la Unión Soviética en Afganistán, que desembocó en una situación sin salida y fue el enfrentamiento más directo con el poder militar norteamericano desde hacía muchos años, había socavado el prestigio militar de la Unión Soviética y había sembrado algunas dudas sobre la política de equiparación militar con los Estados Unidos. El programa de no interferencia y de desmilitarización de Gorbachov se extendió a los países satélites de la Unión Soviética de la Europa oriental.

Cuando la Unión Soviética redujo su presencia y sus gastos militares, los ciudadanos de otros estados de la Europa oriental comenzaron a comprender que sus gobernantes tenían menos probabilidades de obtener el apoyo militar soviético para hacer frente a los problemas internos. En la Unión Soviética, los habitantes de regiones

no rusas comenzaron a llegar a la misma conclusión y la relajación de la represión indujo a presentar públicamente una serie de reclamaciones largo tiempo silenciadas.

Los problemas surgieron rápidamente, aunque de forma diversa, en Polonia, Hungría, Checoslovaquia y Alemania oriental. En los tres primeros países, existían desde hacía diez años o más diversas formas de oposición, que adquirió mucha mayor fuerza en los años de relajación a partir de 1985. En junio de 1989, los polacos eligieron a 99 de los 100 candidatos anticomunistas de Solidaridad que se presentaron a una elección democrática para la Cámara Alta. En la Cámara Baja, la ley electoral había limitado la presencia de Solidaridad al 35 por 100 de los escaños, pero en agosto de 1989 el partido agrario abandonó la alianza que mantenía desde hacía cuarenta años con los comunistas, para dar a Solidaridad la mayoría y al país un primer ministro no comunista, Tadeusz Mazowiecki. Los soviéticos no reaccionaron ante esos sucesos. En Hungría se estaba produciendo un proceso similar, aunque más limitado, de desalojo del partido comunista. A finales de ese año se había disuelto el hasta entonces hegemónico Partido Socialista Húngaro de los Trabajadores y un referéndum nacional había ratificado por abrumadora mayoría la disolución de las células del partido en las fábricas, el desmantelamiento de su milicia y la revelación a la opinión pública de los bienes del disuelto partido.

En Checoslovaquia, los líderes políticos continuaron utilizando la fuerza para reprimir las manifestaciones hasta el mes de noviembre. Sin embargo, el flujo de exiliados procedentes de la Alemania oriental, la condena de la invasión de Checoslovaquia en 1968 por dos de los países que habían participado en ella (Hungría y Polonia) y las profundas transformaciones que se estaban registrando en los países ex comunistas vecinos fueron otros tantos factores que renovaron la presión sobre el régimen. A mediados de noviembre, las manifestaciones masivas que tuvieron lugar en Praga y en otros lugares colocaron al gobierno en una situación sin salida, estimularon la formación de una oposición pública en el foro cívico e impulsaron una serie de decisiones políticas improvisadas que llevaron a Alexander Dubcek, exiliado durante tantos años, a la presidencia del Parlamento y a Václav Havel, que recientemente había sido encarcelado, a desempeñar el cargo de presidente de la república. La ironía había triunfado.

Los alemanes orientales, a diferencia de sus vecinos, apenas ha-

bían ofrecido resistencia abierta al régimen comunista. Sin embargo, en el otoño de 1989, las autoridades checas, polacas y húngaras permitieron que millares de alemanes orientales (que se hallaban en sus países supuestamente como turistas en vacaciones) entraran en Alemania occidental. La no intervención de las fuerzas soviéticas y la incapacidad del régimen de Alemania oriental para poner fin a esa sangría indicaron de forma aún más dramática que los tiempos habían cambiado. En el interior del país, los alemanes orientales comenzaron a manifestarse exigiendo la reforma democrática y protestando contra las malas condiciones de vida. Luego, la embajada soviética en Praga recibió respetuosamente a una delegación de disidentes del foro cívico, episodio del que tomaron buena nota todos los líderes de la oposición de Europa oriental. Muy poco después, en formas y en grados diversos, las rebeliones populares que estallaron en Rumania, Bulgaria y Albania desalojaron también del poder a los líderes comunistas.

Por si eso fuera poco, las exigencias de independencia o autonomía cobraron fuerza en algunas regiones de Yugoslavia, Checoslovaquia y la propia Unión Soviética, en donde se inició un proceso que desembocó en su desintegración total antes de finales de 1991. La modificación de la situación en la Unión Soviética precipitó también cambios importantes en el equilibrio de poder fuera de Europa, en Mongolia, Etiopía, Somalia y otros países. Una serie de estados africanos en los que la guerra fría había facilitado la implantación de la tiranía, comenzaron a caminar hacia la democracia o la anarquía. De ningún modo puede considerarse que todos esos enfrentamientos eran revoluciones, pero desde luego demostraron el potencial revolucionario de unas poblaciones que, durante mucho tiempo, habían sido consideradas fragmentadas y dóciles.

¿Qué acontecimientos europeos de 1989 pueden considerarse, de hecho, revoluciones? Ello depende de la amplitud con que se defina el término. Si se aplica un criterio restrictivo, en el sentido de que una revolución se asemeja fuertemente a los enfrentamientos ocurridos en Francia entre 1789 y 1799 y en Rusia entre 1917 y 1921, ninguno de los conflictos ocurridos en Europa oriental en 1989 obtiene el calificativo de revolucionario. Difícilmente pueden encontrarse equivalentes de los Estados Generales, los soviets, Robespierre, Lenin o la Constitución Civil del Clero. Pero si en el concepto de revolución se incluye todo cambio brusco y trascendente de los gobernantes de un país, en

la mayor parte de los países de Europa oriental se registraron revoluciones durante ese año.

Una definición restrictiva tiene la ventaja de que se ajusta a la idea del *Manifiesto comunista* de un acontecimiento singular, que posiblemente sólo ocurre en condiciones excepcionales y que modifica la historia de todo un pueblo. Desde Marx y Engels, son tantos los militantes que han estructurado la teoría y la práctica en torno a esa idea de la revolución que merece una consideración especial. Sin embargo, el aspecto positivo de una definición en sentido amplio es que pone de relieve problemas importantes que no salen a la luz en la definición restrictiva: ¿hasta qué punto y en qué forma las grandes revoluciones se adaptan a la política no revolucionaria? y, en especial, ¿cómo afectan a las revoluciones los cambios importantes en la organización de los estados? Ambos interrogantes, referidos a Europa entre 1492 y 1992, han dado origen a este libro.

Hace ya varios siglos que los historiadores empezaron a estudiar las relaciones entre los estados y la revolución. En los últimos decenios, historiadores como R. R. Palmer, Perez Zagorin, Roland Mousnier, Peter Blickle e Yves-Marie Bercé han escrito incluso historias generales de la rebelión y la revolución, circunscritas a períodos limitados de la historia europea (véanse Palmer, 1959, 1964; Zagorin, 1982; Mousnier, 1967; Blickle, 1988; Bercé, 1980). No faltan relatos históricos ni teorías amplias de la revolución (para ejemplos, resúmenes y análisis críticos, véanse Amann, 1962; Arendt, 1963; Aya, 1990; Baechler, 1970; Brinton, 1938; Dunn, 1989; Friedrich, 1966; Goldstone, 1986; Hobsbawm, 1986; Kimmel, 1990; Laqueur, 1968; Rule y Tilly, 1972; Trotsky, 1932). Lo que falta, en cambio, es un análisis sistemático y de carácter histórico que lo relacione firmemente con nuestro conocimiento acumulativo respecto a la formación de los estados y la contienda política normal. El presente libro afronta ese reto para los últimos quinientos años de la historia europea.

Este libro relaciona las revoluciones europeas de los cinco últimos siglos con las transformaciones que se han registrado en la naturaleza de los estados y en las relaciones entre ellos. Lleva a cabo una exposición general de las revoluciones en Europa, sus causas y sus efectos y presta una atención especial a la correspondencia existente entre las alteraciones ocurridas en el ámbito del poder de los estados y los cambios por lo que respecta a la naturaleza, al lugar y el resultado de las

revoluciones. Además, aunque reserva un lugar destacado a las revoluciones inglesa, francesa y rusa, el libro no se ocupa tanto de las características comunes de las grandes revoluciones como de su importancia respecto a las transformaciones políticas de Europa a largo plazo. De esta forma, vincula el pasado, el presente y el futuro.

En las páginas que siguen se analizan las revoluciones europeas, definidas en sentido amplio, planteando tres tipos de interrogantes. En primer lugar, en qué forma se ha modificado la transferencia por la fuerza del poder del Estado en función de las transformaciones ocurridas en la estructura social europea, especialmente en la organización de los estados y las relaciones entre ellos. En segundo lugar, la correspondencia que existe entre los cambios ocurridos en las revoluciones y las alteraciones respecto a los conflictos y la acción colectiva no revolucionarios. En tercer lugar, cuál es la dinámica de las revoluciones y si se ha modificado sistemáticamente durante los cinco siglos que se examinan. Sea cual fuere la respuesta a dichos interrogantes, puede establecerse una conclusión, la de que:

— al margen de otras consecuencias que puedan conllevar, las revoluciones suponen una transferencia por la fuerza del poder del Estado, y en consecuencia

— para describir adecuadamente las revoluciones hay que tener en cuenta, entre otras cosas, cómo cambian los estados y el uso de la fuerza en el tiempo, en el espacio y en el marco social.

La posibilidad y la naturaleza de la revolución cambiaron con la organización de estados y de sistemas de estados y cambiarán de nuevo con las alteraciones que puedan producirse en el futuro en el sistema de poder de los estados. Las revoluciones se han transformado porque se han transformado los estados. Al margen de otras consecuencias que puedan conllevar, las revoluciones suponen, obviamente, apoderarse del poder de los estados y, por consiguiente, su probabilidad y naturaleza varían en función del sistema de estados en vigor.

No sólo la organización de un Estado determinado lo hace más o menos susceptible a la revolución, sino que las relaciones entre los estados influyen en aspectos tales como el lugar, la probabilidad, la naturaleza y el resultado de la revolución. Consideremos, por ejemplo, las revoluciones rusas de 1905 y 1917: en ambos casos, la derrota en la guerra desacreditó al Estado, tanto en sentido literal como metafórico, pues en ambas ocasiones la bancarrota del Estado contribuyó poderosamente a su hundimiento político. Japón contribuyó a desencadenar la revolución de 1905 al derrotar a los ejércitos rusos, de la misma forma que Alemania contribuyó a desencadenar las revoluciones rusas de 1917. Generalmente, las guerras ejercieron una poderosa influencia sobre las perspectivas revolucionarias en Europa. Una guerra no se produce como consecuencia de la acción de un solo Estado, por agresivo que pueda ser, sino de las interacciones entre estados, de los alineamientos que se producen dentro del sistema de estados en su conjunto. Además, las reacciones de otros estados frente a las luchas internas de otro país influyen no poco en el resultado de esas luchas. Bastaría con preguntar a cualquier ciudadano del Líbano o de Afganistán sobre la influencia exterior. Para saber qué estados son susceptibles de sufrir una revolución, es necesario examinar no sólo su política interna, sino también su posición en el sistema de relaciones entre los estados.

Las revoluciones no se producen en el dominio aislado del poder del Estado, sin importar cuál sea la organización social. Al contrario, los procesos sociales que se desarrollan en el entorno de un Estado afectan profundamente a la perspectiva y naturaleza de la revolución, pero lo hacen indirectamente, en tres maneras esenciales: 1) dan forma a la estructura del Estado y a su relación con la población que lo constituye; 2) establecen quiénes son los protagonistas principales en una comunidad política (*polity*) concreta y cuál es su planteamiento respecto a la lucha política; 3) determinan la presión que ha de soportar el Estado y de dónde procede dicha presión. Por ejemplo, la transición de la economía agraria a la industrial no sólo modifica la naturaleza del Estado sino que, además, reduce la importancia de señores, campesinos o trabajadores rurales sin tierra en la lucha por el poder. Así pues, las revoluciones adoptan formas muy distintas en un escenario agrario y en un entorno industrial. Si no aumenta la producción y no se realiza con mayor eficacia la recaudación de los ingresos estatales, un crecimiento demográfico prolongado debilita la capacidad de cualquier Estado para llevar a cabo sus actividades, entre ellas la guerra y la represión de la oposición interna. Siendo iguales todos los demás aspectos, un Estado debilitado es más susceptible de sufrir una revolución que un Estado fuerte. Muchas veces, para

analizar los cambios en la estructura del Estado hay que examinar las transformaciones que experimenta el sistema social en el seno del cual cambian los Estados y tienen lugar las revoluciones.

El concepto amplio de revolución que se adopta en este libro sostiene que las grandes revoluciones no experimentan una evolución *sui generis*, según unas leyes que las apartan totalmente de las formas más rutinarias de cambio político. Consideremos la diferencia que existe entre los eclipses solares y los embotellamientos de tráfico. Las revoluciones no recuerdan a los eclipses de Sol, que, en virtud de la regularidad con que se produce el movimiento de los cuerpos celestes, se repiten según un plan exacto y en condiciones que se pueden explicar y que son perfectamente comprensibles. Los eclipses se producen en esas condiciones y no en otras. En cambio, las revoluciones recuerdan a los embotellamientos de tráfico, que son muy diversos en cuanto a su forma e intensidad, que desaparecen de forma imperceptible para dejar paso a un flujo normal de vehículos, que se forman a partir de dicho flujo y que ocurren en diferentes circunstancias y por un cúmulo de razones diferentes. Sin embargo, los embotellamientos de tráfico no se producen al azar, sino según unas claras pautas determinadas por cuestiones tales como la coordinación del tráfico, la reacción de los conductores ante las condiciones meteorológicas, los sistemas de mantenimiento y construcción de las carreteras, el lugar donde se producen accidentes y averías de los automóviles, y otra serie de factores, cada uno de los cuales es independiente de los otros pero relativamente predecible. La coincidencia de esos factores es tan compleja que parece casi fruto del azar. En un lugar, la niebla densa, por ejemplo, es una condición suficiente para que se produzca un embotellamiento de tráfico, en otro la causa puede ser la detención de un coche y en un tercero el levantamiento de un puente levadizo.

Una vez se han producido, en los embotellamientos de tráfico existen unas pautas establecidas, como los esfuerzos de los conductores de la periferia del atasco para alejarse y la rivalidad entre los que se hallan en el centro para conseguir pequeñas ventajas. Por otra parte, los embotellamientos tienen consecuencias importantes, no sólo para la vida diaria de quienes se ven atrapados, sino también para el estado de sus vehículos, la contaminación del medio ambiente, la utilización del transporte público, el despliegue de la policía, el número de nuevos accidentes de tráfico, y muchos otros aspectos.

Considerados por separado, cada uno de los mecanismos causantes —la reacción de los conductores ante las condiciones meteorológicas, el mantenimiento de las carreteras, etc.— responde a unas pautas comprensibles. Tanto la policía de tráfico como los estudiosos de los embotellamientos han codificado esas pautas mejor que los estudiosos de la revolución han codificado las suyas. Con ciertas reservas, como el caso de acontecimientos impredecibles (la súbita enfermedad de un guardia de tráfico y el caos producido por una suma de factores), se podría incluso simular su interacción en un ordenador. Sería más fácil elaborar un modelo estándar para un caso especial, por ejemplo el atasco espectacular de decenas de coches en una carretera si se produce una gran nevada. Sin embargo, ni en el caso de los embotellamientos de tráfico ni en el de las revoluciones existe una teoría general que especifique una serie de condiciones necesarias y suficientes, unas secuencias internas invariables y las consecuencias precisas. Además, en ambos casos, son una serie de diferentes conjunciones de escenarios y mecanismos causales los que producen el resultado crítico: las revoluciones o los embotellamientos de tráfico. Esa es la razón por la que cada vez que alguien propone un modelo único y general de revolución algún otro menciona inmediatamente casos que no «encajan» y propone modificaciones de la teoría o incluso una nueva teoría.

Pero si es imposible especificar las condiciones —necesarias y suficientes— variables de la revolución para todos los tiempos y lugares, sin embargo es perfectamente posible mostrar qué mecanismos causales similares intervienen en una amplia gama de situaciones revolucionarias, mecanismos tales como la demostración dramática de que un Estado, hasta entonces formidable, es vulnerable, y la disolución parcial de los poderes del Estado que habitualmente se produce en los momentos de desmovilización cuando concluye una guerra. Sustento la convicción, y espero poder mostrar que es cierta, que el mismo tipo de mecanismos subyace en una amplia gama de acontecimientos a los que llamaré revoluciones y en una gran variedad de conflictos que no desembocan en una revolución. Espero mostrar también que la variación en la naturaleza e incidencia de las revoluciones resulta de la modificación de esos mecanismos recurrentes. Finalmente, espero poder mostrar que esos mecanismos se refieren principalmente al funcionamiento rutinario y a la transformación de los estados. De

la misma forma que las pautas según las cuales se producen los embotellamientos de tráfico responden a la manera uniforme en que los vehículos circulan por las calles y las carreteras —cómo actúan los transeúntes ante los accidentes de tráfico, cómo cambian las luces de los semáforos, cómo aparcan los conductores de los camiones de reparto, en qué forma la jornada laboral y los horarios de los trenes inducen a tomar el coche para el desplazamiento laboral—, las pautas a las que se atienen las revoluciones derivan de determinadas características de los estados que condicionan su funcionamiento en situaciones no revolucionarias. Tal es la hipótesis de trabajo en la que se basa mi análisis de las revoluciones europeas.

Intentemos, pues, definir con mayor precisión el término revolución. Consideremos que la revolución es una transferencia por la fuerza del poder del Estado, proceso en el cual al menos dos bloques diferentes tienen aspiraciones, incompatibles entre sí, a controlar el Estado, y en el que una fracción importante de la población sometida a la jurisdicción del Estado apoya las aspiraciones de cada uno de los bloques. Dichos bloques pueden ser grupos homogéneos, como por ejemplo la clase de los grandes terratenientes, pero frecuentemente están formados por coaliciones de gobernantes, miembros de la población y pretendientes al poder. En una revolución, la comunidad política no se comporta como antes; la distinción entre gobernantes, miembros de la población y pretendientes al poder se hace menos nítida y luego se modifica. Muchas veces, en el curso de una revolución, aquellos que en principio no luchaban por el poder se movilizan y participan en el proceso. Cuando el poder del Estado se ve seriamente amenazado, todos los intereses que dependen de la acción del Estado están en peligro. Si existe una mínima organización y vinculación entre los miembros de la población, ver súbitamente amenazados unos intereses compartidos es un poderoso acicate para que la población se movilice.

Recapitulemos los elementos que se han mencionado: dos o más bloques de poder con un apoyo importante, aspiraciones incompatibles con respecto al Estado, transferencia de poder. Se trata, por tanto, de una secuencia revolucionaria completa, que va desde la ruptura de la soberanía y la hegemonía, a través de un período de enfrentamientos, hasta el restablecimiento de la soberanía y la hegemonía bajo una nueva dirección. El proceso de enfrentamiento y cambio desde el momento en que se plantea la situación de soberanía múltiple hasta que ésta deja de existir constituye el proceso revolucionario. A fin de evitar las ocupaciones del poder momentáneas, añadamos la estipulación de que el nuevo régimen debe detentar el poder durante un período significativo, de al menos un mes. Y para no tener en cuenta el desafío al poder del Estado de carácter estrictamente local, estipulemos también que el bloque más reducido debe controlar al menos una circunscripción importante del Estado, ya sea geográfica o administrativa.

Los términos de la definición no impiden distinguir la subclase tradicional de las grandes revoluciones, en las que las divisiones son profundas, los enfrentamientos masivos, las transferencias de poder radicales y las consiguientes transformaciones de la vida social amplias y duraderas. De hecho, en capítulos posteriores se examinarán de forma pormenorizada las célebres revoluciones inglesa, francesa y rusa. Ahora bien, ese análisis se realizará ateniéndose al esquema de la definición en sentido amplio, en el intento de diferenciar las condiciones en las que se producen las grandes revoluciones, las pequeñas revoluciones, las guerras civiles y otras transferencias violentas del poder. Con arreglo a dicha definición, las rebeliones que son aplastadas, los golpes incruentos y las transformaciones sociales impuestas desde arriba no pueden considerarse plenamente como revoluciones pero pertenecen a una categoría próxima. De hecho, se podría ampliar o reducir el alcance de la definición sin que ello influyera demasiado en el análisis. A lo largo del libro se afirmará repetidamente y se ilustrará profusamente que esos otros acontecimientos que se acaban de mencionar tienen muchas características en común con los procesos a los que se refiere la definición, que todos ellos se integran en el mismo ámbito de transformación.

Las situaciones revolucionarias

Según esta definición, una revolución tiene dos componentes: una situación revolucionaria y un resultado revolucionario. La *situación* revolucionaria —la idea está tomada directamente del concepto de poder dual de Leon Trotsky— entraña una soberanía múltiple: dos o más bloques tienen aspiraciones, incompatibles entre sí, a controlar el Estado, o a ser el Estado. Ello ocurre cuando los miembros de una co-

munidad anteriormente subordinada (por ejemplo, Lituania en el seno de la Unión Soviética en 1990) proclama su soberanía, o cuando grupos que no están en el poder se movilizan y constituyen un bloque que consigue hacerse con el control de una parte del Estado (por ejemplo, las coaliciones entre intelectuales, burgueses y trabajadores cualificados que se formaron en muchos lugares en 1848) y cuando un Estado se fragmenta en dos o más bloques, cada uno de los cuales controla una parte importante del mismo (por ejemplo, la división de la *gentry* inglesa entre «cabezas redondas» (*Roundheads*) y «caballeros» (*Cavaliers*) con posterioridad a 1640). En una situación revolucionaria convergen tres causas inmediatas:

1. la aparición de contendientes, o de coaliciones de contendientes, con aspiraciones, incompatibles entre sí, de controlar el Estado o una parte del mismo;
2. el apoyo de esas aspiraciones por parte de un sector importante de los ciudadanos;
3. la incapacidad —o falta de voluntad— de los gobernantes para suprimir la coalición alternativa y/o el apoyo a sus aspiraciones.

Estas causas son sólo causas inmediatas; una explicación completa de cualquier revolución exige especificar, primero, por qué aparecieron las coaliciones de contendientes, por qué un número importante de ciudadanos aceptó sus pretensiones y por qué los gobernantes no podían o no querían reprimir su oposición.

Una gran parte de este libro se dedicará a explicar por qué ocurrieron cada uno de esos fenómenos y cómo se modificaron las condiciones para que ocurrieran. Habrá que preguntarse, por ejemplo, por qué los contendientes son en algunos casos redes de patronos-clientes, otras veces clases sociales, en otras ocasiones comunidades locales, a veces congregaciones religiosas, y en otros casos grupos étnicos. Más que uniformidad, encontraremos variabilidad en el conjunto de circunstancias en que se producen las causas inmediatas. Esa uniformidad se encontrará no en las condiciones generales de la revolución, sino en los mecanismos que en ocasiones producen una protesta ineficaz, otras veces guerras civiles y más raramente divisiones políticas que conllevan una transformación total de la vida social.

Enumerar las causas inmediatas de las situaciones revolucionarias es como mencionar los componentes de un embotellamiento de tráfico. Las causas surgen inevitablemente de la definición de revolución como una transferencia forzosa de poder que implica la ruptura del Estado en al menos dos bloques. Son tautológicamente ciertas. Esas obviedades tiene la ventaja de especificar exactamente qué es lo que se ha de explicar y, en consecuencia, de dirigir la búsqueda de causas más y más contingentes. Asimismo, ponen en evidencia que las situaciones revolucionarias consisten en la convergencia de condiciones políticas variables —aspiración exclusiva al control del Estado, apoyo de tales aspiraciones, negativa del Estado a suprimir las coaliciones y aspiraciones que se le oponen— que se manifiestan en muchos casos en situaciones no revolucionarias.

Los mecanismos causales cruciales de las revoluciones se agrupan en tres categorías: los que provocan la aparición de aspiraciones antagónicas al control del Estado, los que determinan el apoyo a tales aspiraciones y los que hacen que quienes controlan el poder del Estado no estén dispuestos a suprimir las coaliciones y aspiraciones que se les oponen. En el primer conjunto de mecanismos se incluyen, por ejemplo, la movilización de sectores afines de la población cuya identidad compartida se ve amenazada por la acción del Estado y la difusión de la convicción de que el Estado atraviesa una situación nueva de vulnerabilidad. Los mismos mecanismos producen en algunas circunstancias un enfrentamiento no revolucionario por el poder, y en otras dan lugar a situaciones revolucionarias. Nuestra labor consiste en comprender esos mecanismos en general y en especificar las condiciones en las que concurren para producir situaciones revolucionarias.

Generalmente, las revoluciones de mayor envergadura contienen no una sino una sucesión de situaciones revolucionarias. Cambian los oponentes, cambian los gobernantes y también cambian las aspiraciones, el apoyo de los ciudadanos a esas aspiraciones y la capacidad de los gobernantes para hacer frente a la acción de los oponentes. En las revoluciones más largas y complejas fluctúa también la profundidad y la naturaleza de las situaciones revolucionarias, con fases en las que la mayor parte de los ciudadanos están alineados en uno u otro bando y en que ninguno de ambos bandos ejerce el control del Estado, que alternan con otros momentos en que una coalición consigue el control efectivo de todo el aparato del Estado. Por esas razones, es discutible si la revolución francesa de 1789-1799 es una serie

continua de situaciones revolucionarias o media docena de situaciones revolucionarias separadas por períodos transitorios de consolidación del poder del Estado.

Las situaciones revolucionarias exacerban un fenómeno político que es más común e igualmente crucial en las situaciones no revolucionarias: el cambio en el poder del Estado que amenaza a todos aquellos grupos vinculados de alguna forma a la estructura de poder existente, al tiempo que ofrece nuevas oportunidades a todos los grupos —especialmente a los que controlan el poder— que pueden ver favorecidos sus intereses si actúan con rapidez. Aunque el grado extremo de conjunción entre oportunidad y amenaza distingue a las situaciones plenamente revolucionarias de otras situaciones próximas a ellas, esa conjunción ayuda a reconocer la afinidad entre ambos tipos de situaciones. Los fenómenos que acompañan a la derrota en un conflicto bélico, la desintegración de un imperio y un movimiento de protesta pueden producirse con o sin que tenga lugar una división clara en la comunidad política, pero en todas esas situaciones hay unos rasgos que son típicos de las revoluciones.

Aun cuando no se produzca una división abierta en la comunidad política, esa situación se presenta con frecuencia al término de las guerras. Prácticamente todos los estados adoptan más compromisos, en el curso de la movilización bélica, de los que pueden cumplir cuando concluye. Esos compromisos adoptan la forma de una deuda pública acumulada, promesas a los grupos organizados de trabajadores, capitalistas, sectores de la administración o grupos étnicos, que forman parte de la oposición y que suspenden sus reivindicaciones para colaborar en el esfuerzo bélico, la responsabilidad con respecto a los veteranos de guerra y sus familias, etc. Además, en tiempo de guerra los estados suelen establecer un control mucho más estricto sobre la vida económica y social, control que se empieza a relajar al terminar el conflicto, en el momento en que se desmoviliza la producción militar y los antiguos combatientes se reintegran en la vida económica civil. Cuanto mayor sea la pérdida de capacidad y credibilidad que ha sufrido el Estado durante la guerra (la situación extrema es la derrota total a manos de una potencia ocupante), más graves serán los problemas.

Estas circunstancias amenazan viejos derechos y hacen al Estado vulnerable ante las nuevas reivindicaciones. Consideremos, por ejemplo, la situación al terminar la primera guerra mundial, momento en que todos los estados beligerantes, incluso los Estados Unidos que no intervinieron hasta las fases postreras de la guerra, hubieron de afrontar una fuerte oposición por parte de sectores políticos que anteriormente habían colaborado en el esfuerzo bélico. La gravedad de los problemas de cada Estado estuvo en relación directa con las pérdidas sufridas durante la guerra. Sólo en Rusia y en Alemania, donde las pérdidas ocasionadas por la guerra habían sido extraordinariamente cuantiosas, estallaron situaciones plenamente revolucionarias. Ahora bien, la política italiana de posguerra, con huelgas importantes, ocupaciones masivas de fábricas y un rápido incremento del activismo fascista, no tardó en situarse al borde de la revolución. Entretanto, Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, por ese orden, afrontaron riesgos menos graves para el orden establecido. Otros países de Europa, Irlanda, Holanda y los estados de los imperios turco y austrohúngaro, en proceso de descomposición, también vivieron en mayor o menor grado situaciones revolucionarias.

Ciertamente, la desintegración de imperios, coaliciones y federaciones tiene rasgos comunes con las situaciones revolucionarias. La defección no reprimida de uno de los miembros envía un cúmulo de señales: la misma posibilidad de la defección, la pérdida de capacidad del poder central ejecutivo para mantener sus compromisos y mantener a raya a otros miembros, la posibilidad de acceder a bienes que antes estaban bajo el control central, la posibilidad de cooperar con otros secesionistas y el probable incremento del costo de la lealtad al poder central. Mijaíl Gorbachov sufrió los efectos de esa lógica amarga una vez que Estonia, Letonia y Lituania abandonaron la Unión Soviética, para lo cual contaron con el total apoyo de las potencias occidentales. Y lo mismo les había ocurrido, varios decenios o varios siglos antes, a los gobernantes de los imperios borgoñón, habsburgo, turco y austrohúngaro cuando los dominios que los integraban se independizaban con la connivencia de las potencias rivales, que se beneficiaban del proceso.

De igual forma, las situaciones revolucionarias tienen algo en común con los movimientos de protesta que terminan sin producir cambios fundamentales. Como señala Sidney Tarrow (1989), los movimientos sociales (abiertos desafíos a las autoridades públicas en nombre de sectores de población agraviados) se producen muchas veces en olea-

das, como lo demuestran las protestas de estudiantes y obreros en 1968 en gran parte de Europa y América. Durante esas oleadas, una serie de peticiones parecen inducir otras, las organizaciones que participan en el movimiento social compiten entre sí por conseguir el mayor apoyo posible y las exigencias son cada vez más radicales para luego ir perdiendo fuerza. Frecuentemente, ese proceso sirve a los activistas para experimentar nuevas formas de organizarse, estructurar sus demandas, combatir a sus enemigos y mantener lo que ya poseen. Al finalizar el ciclo, algunos protagonistas nuevos han conseguido cuando menos una pequeña parcela de poder, otros miembros de la comunidad política han perdido poder, el marco de los asuntos públicos se ha alterado un tanto y los modos de lucha han cambiado al menos ligeramente.

Durante los ciclos de protesta, las primeras peticiones sirven para dos objetivos fundamentalmente. En primer lugar, demuestran la vulnerabilidad de las autoridades ante esas exigencias, lo cual indica inmediatamente a otros grupos que tal vez la ocasión es propicia para que planteen sus propias exigencias. En segundo lugar, inevitablemente lesionan los intereses de otros grupos, ya sea porque las concesiones a un grupo determinado disminuirán la recompensa que pueda conseguir otro, o porque las exigencias planteadas suponen un ataque directo contra los intereses de un grupo bien situado en el contexto de la comunidad. El paralelismo con las situaciones revolucionarias es evidente. Ciertamente, la multiplicación de situaciones revolucionarias en estados adyacentes, caso de las numerosas revoluciones y semirrevoluciones europeas de 1848, tiene numerosos rasgos en común con otros movimientos de protesta menos virulentos (Tarrow y Soule, 1991). La demostración de que un Estado importante es vulnerable a las exigencias revolucionarias indica la posibilidad de plantear exigencias similares en otros estados, pone en circulación doctrinas y técnicas revolucionarias y reduce la probabilidad de que el Estado en el que se registra la revolución intervenga para sostener a otros viejos regímenes vecinos.

En las crisis políticas que se producen al concluir una guerra, en la desintegración de imperios, federaciones o coaliciones y en los movimientos de protesta, las causas inmediatas son similares a las que provocan las situaciones revolucionarias: 1) aparición de contendientes, o coaliciones de contendientes, con fuertes aspiraciones a controlar el Estado o una parte del mismo; 2) apoyo de esas aspiraciones por un sector importante de los ciudadanos; y 3) incapacidad —o falta de voluntad— de los gobernantes para suprimir las coaliciones alternativas y/o el apoyo a sus aspiraciones. La diferencia reside especialmente en el alcance y exclusividad de las aspiraciones a controlar el Estado. No puede decirse que haya surgido una situación revolucionaria en tanto en cuanto todos los principales protagonistas consideran que el Estado continuará actuando y dando satisfacción a sus intereses. Cuando uno o más participantes, distintos de los gobernantes en el poder, plantean la pretensión de hacerse con el control del Estado, puede afirmarse que una simple reivindicación se ha convertido en situación revolucionaria.

Los resultados revolucionarios

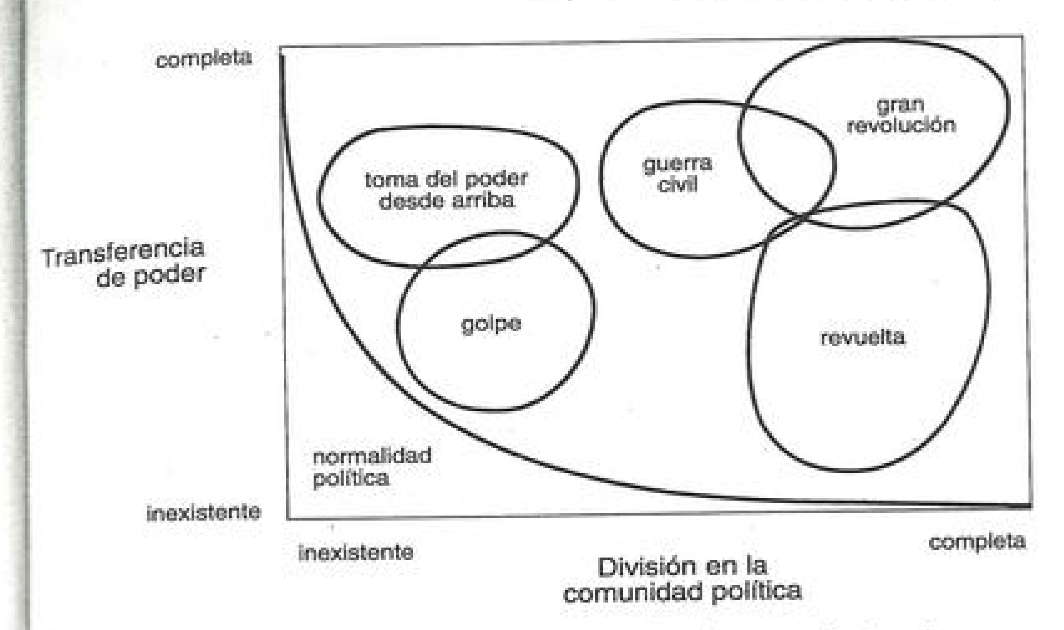
Un *resultado* revolucionario se produce cuando tiene lugar una transferencia de poder de manos de quienes lo detentaban antes de que se planteara una situación de soberanía múltiple, a una nueva coalición gobernante, en la que, ciertamente, pueden estar incluidos algunos elementos de la coalición gobernante anterior. En una situación revolucionaria, es más probable que se produzca un resultado revolucionario si se forman coaliciones importantes entre los que aspiran a ocupar el poder y algunos miembros actuales del Estado (es decir, si algunos miembros o incluso algunos gobernantes hacen defección del gobierno) y si la coalición revolucionaria cuenta con un ejército importante. De forma más general, las causas inmediatas de los resultados revolucionarios son las defecciones de miembros del Estado, la obtención de un ejército por las coaliciones revolucionarias, la neutralización o defección de la fuerza armada del régimen y el control del aparato del Estado por miembros de una coalición revolucionaria. Cuando todos esos procesos ocurren con rapidez, se ha producido una transferencia revolucionaria de poder. Una vez más, las causas se siguen de manera tautológica a partir de la definición de la revolución como una transferencia por la fuerza del poder de un Estado que supone una ruptura, y una vez más dicha definición orienta la búsqueda de las causas a más largo plazo.

Pocas situaciones revolucionarias tienen un resultado revolucionario. En muchos casos, los que detentan el poder del Estado vencen

a sus oponentes; con frecuencia incluyen en sus filas a algunos de ellos y rechazan al resto; a veces la guerra civil provoca la división permanente del Estado. En ocasiones, un resultado revolucionario —la transferencia total del poder del Estado— se produce tan gradualmente o tan rápidamente que no llega a aparecer una soberanía múltiple. Sólo en el caso, poco frecuente, en que esa soberanía múltiple deriva en el control del Estado por elementos nuevos se puede hablar de una revolución en sentido pleno.

Sin embargo, con arreglo a esa definición, muchas guerras civiles y muchas guerras de sucesión entran en la categoría de revoluciones, en la medida en que el poder cambia de manos después de un ruptura por la fuerza de la soberanía. Lo mismo cabe decir de algunos casos de conquista militar del poder, si se produce una ruptura abierta en la comunidad política, y de los movimientos de independencia que triunfan por medios violentos. Sin duda, entran en esa categoría las revoluciones británicas de 1640-1660 y 1687-1689, aunque no puede decirse lo mismo de la fracasada Comuna de París de 1871, porque no entrañó una transferencia duradera del poder. De acuerdo con dicha definición, no es necesario que se produzca una alteración fundamental de la estructura social, aunque en general, cuanto mayor es el cambio que determina una revolución en la coalición gobernante, más profunda es la transformación de otros aspectos de la vida social. En definitiva, esta concepción de la revolución incluye una gama de acontecimientos mucho más amplia que las grandes revoluciones, pero una serie de acontecimientos mucho menor que la violencia civil, la protesta, la transferencia de poder o la rebelión.

La distinción entre situaciones revolucionarias y resultados revolucionarios permite apreciar mejor la relación que existe entre diversos tipos de acción política que contienen elementos revolucionarios. La figura 1.1 recoge algunos de ellos esquemáticamente. Por definición, una gran revolución entraña una división fundamental en el gobierno (una situación profundamente revolucionaria) y una amplia transferencia de poder (un resultado revolucionario trascendente). Ciertamente, la guerra civil implica una situación profundamente revolucionaria, pero no conduce necesariamente a un resultado revolucionario, una transferencia decisiva de poder. A la inversa, una toma del poder desde arriba puede implicar una importante transferencia de poder (resultado revolucionario), pero no una división profunda en



1.1. Tipos de revoluciones en función de las situaciones revolucionarias y sus resultados.

el gobierno (situación revolucionaria). En todo caso, en todos esos fenómenos hay una cuestión de grado y de cronología: las revueltas se transforman en grandes revoluciones y los golpes devienen importantes transferencias de poder. Pero todos esos procesos tienen algunos rasgos revolucionarios.

Esta definición amplia de revolución suscita una cuestión empírica: ¿por qué las transferencias por la fuerza del poder del Estado tienen resultados tan sorprendentemente diversos, que van desde la alteración de la vida social al restablecimiento del *statu quo ante*? Para responder a esa interrogante parece necesario examinar atentamente la interacción entre la naturaleza de la coalición que accede al poder, el proceso por el que se divide la comunidad política y el propio proceso revolucionario.

Perspectivas

Un aspecto debe haber quedado claro ya en relación con el análisis de la revolución: para comprender cómo las situaciones revolucionarias y los resultados revolucionarios se conjugan para dar lugar a revoluciones en sentido pleno, hay que analizarlos por separado. La historia de las situaciones revolucionarias nos lleva a examinar numerosos enfrentamientos que no produjeron una transferencia sustancial de poder, de la misma forma que el estudio de los resultados revolucionarios hace necesario considerar en que forma se modificó, en general, el control de los estados. Analizar esos dos aspectos para luego relacionarlos es el objetivo de este libro. Dado que otros estudios anteriores han prestado tanta atención a los determinantes de los resultados revolucionarios, este libro compensa esa tendencia al centrarse en el inicio de las situaciones revolucionarias y en los procesos revolucionarios como tales.

Intenta, también, evitar uno de los más graves errores en los que incurren los análisis de la revolución: la teleología. Los historiadores de la Inglaterra del siglo XVII, de la Francia del XVIII o de la Rusia del siglo XIX y comienzos del XX tienen una fuerte tendencia a considerar los períodos que estudian como preparativos para las grandes revoluciones que en ellos se produjeron. Todo converge en 1640, 1688, 1789, 1799, 1905 o 1917. Ello hace que los acontecimientos anteriores pierdan su contingencia, que se invierta la relación de causa y efecto y que desaparezca la posibilidad de otros resultados distintos de la revolución que de hecho se produjo. Aunque, sin duda, quien está impregnado de un sentido teleológico encontrará un razonamiento causal en las páginas que siguen, en general consideran la historia como un principio y un final de posibilidades, como un proceso de selección fuertemente condicionado por la historia anterior.

En la medida en que sus explicaciones invocan generalizaciones causales, los análisis que siguen se refieren a mecanismos sociales que operan e interactúan en pequeña escala, y no a grandes secuencias, cambios lineales de vastas estructuras sociales o fuerzas históricas universales. Por ejemplo, sostengo que la relación entre una forma de fiscalidad y la economía en la que se enmarca (por ejemplo, la existencia de impuestos indirectos en las economías con un grado elevado de comercialización o en una economía de subsistencia) influye fuertemente no sólo en su eficacia financiera sino también en el grado de resistencia popular que suscita el impuesto y en el tipo de organización gubernamental que genera. En cambio, nunca afirmaré que un tipo o un nivel determinado de fiscalidad favorezca la aparición de situaciones revolucionarias en cualquier Estado y en cualquier contexto social. El mecanismo fundamental radica en la resistencia popular que generan una determinada conjunción de estrategia fiscal y entorno económico. Sin embargo, el hecho de que esa resistencia favorezca una situación revolucionaria depende de otras circunstancias que nada tienen que ver con la política fiscal, circunstancias tales como que los rebeldes cuenten o no con el apoyo de otros poderes externos.

Subrayaré también que el hecho de que en los comienzos de la Edad Moderna las jefaturas de los estados recayeran, por herencia, en el seno de casa reales, unido a las estrategias de concertación de matrimonios a nivel internacional, hizo vulnerables a dichos estados ante las crisis sucesorias. Los regímenes dinásticos corrían el peligro de verse sumidos en situaciones revolucionarias cuando el heredero (o, más aún, la heredera) era muy joven o carecía de la competencia necesaria para ocupar el cargo y cuando dos o más familias tenían aspiraciones legítimas al trono. Sin embargo, sería absurdo argumentar que en la Europa de nuestro tiempo el acceso de un incompetente al poder es una condición necesaria o suficiente para que se produzca una revolución. ¡Qué ocurriría si ello fuera así! El tipo de fiscalidad y la organización de la sucesión real influyen en el funcionamiento del gobierno en un gran número de estados, pero sólo en determinadas condiciones fomentan o inhiben la revolución. Las constantes históricas no se manifiestan en secuencias repetidas, estructuras replicadas y tendencias recurrentes a gran escala, sino en los mecanismos causales que vinculan series contingentes de circunstancias.

No pretendo afirmar, en modo alguno, que no existen pautas generales subyacentes en la aparición y evolución de las situaciones y resultados revolucionarios. Bien al contrario, los capítulos que siguen mostrarán repetidamente cómo, en diferentes combinaciones, la naturaleza de la estructura impositiva, la disponibilidad de aliados poderosos por parte de los insurrectos populares, las formas de sucesión, la vulnerabilidad de las monarquías con ocasión de una sucesión conflictiva y otra serie de mecanismos fomentaron o inhibieron los procesos revolucionarios. Dichos mecanismos variaron sistemáticamen-

te al compás de los profundos cambios que experimentaron las economías, los estados y los sistemas de estados en Europa. Desde luego, existen constantes históricas que se manifiestan en el funcionamiento de esos mecanismos.

Los capítulos que siguen no demostrarán mis argumentos más allá de la duda. Según mis propios conceptos de la investigación histórica, este libro ofrece simplemente ilustraciones de sus tesis principales. He trabajado de forma selectiva en los archivos nacionales británicos pertinentes que contienen la documentación relativa a los decenios transcurridos entre 1750 y 1830, y en los archivos nacionales, regionales o locales franceses para el período transcurrido entre 1600 y 1980. Para el resto, mis afirmaciones se basan en una lectura incompleta de los estudios y síntesis que han publicado otros historiadores. No conozco por igual todas las lenguas y las publicaciones históricas necesarias para emprender una investigación exhaustiva de las revoluciones europeas entre 1492 y 1992 (la sola idea le hace a uno sobresaltarse). Aunque un día un equipo de investigadores o un ordenador podrá elaborar un análisis que contenga todos los estudios críticos existentes, todo lo que puede hacer hasta entonces el estudioso individual es abordar una pequeña parte del problema o atreverse a presentar una síntesis provisional. He dedicado una gran parte de mi vida académica a hacer lo primero. Heme aquí intentando lo segundo.

Las cronologías de las guerras y de las situaciones revolucionarias señalan lo que es necesario explicar en la mayor parte de los capítulos que siguen. Dichas cronologías proceden de compilaciones clásicas como la de Jack S. Levy, *War in the Modern Great Power System, 1495-1975*, y la de Evan Luard, *War in International Society*, modificadas por la información procedente de las historias nacionales que he consultado. De forma genérica he incluido como situaciones revolucionarias secuencias de acontecimientos en las que esos estudios indican que durante un mes o más una parte importante, una región o ciudad de un Estado permanecieron bajo el dominio de un oponente, o de un núcleo de oponentes, al gobierno establecido. He actuado con honestidad al enumerar en las cronologías los principales acontecimientos a analizar, y ello me hace vulnerable a la crítica, pues, sin duda, he omitido acontecimientos importantes y he clasificado otros erróneamente. Antes de que los especialistas en la historia de uno u otro país rechacen las cronologías, y por tanto la argumentación del libro, les pediría que consideren si los errores invalidan mis conclusiones generales sobre las tendencias y diferencias. Si las dudas acerca de la argumentación inducen a críticos bien informados a investigar y refutar, sólo puedo animarles a ello. En efecto, la idea que me ha llevado a escribir este libro no ha sido la de cerrar una línea de investigación, sino la de intentar abrirla.

Si este libro ofrece, como espero, una imagen coherente de los cambios y variaciones ocurridos en la naturaleza de las revoluciones europeas, los observadores de otras partes del mundo tendrán buenas razones para prestarle atención. Teóricamente, en los estudios de la revolución en todas las zonas del mundo han tenido un peso exagerado las revoluciones europeas. Las revoluciones francesa y bolchevique continúan siendo el modelo de lo que podría suponer la revolución en América Latina o en Asia. Además, debido a la posición dominante de los estados europeos, las revoluciones europeas influyeron en los cambios políticos en zonas muy alejadas del continente, como cuando Toussaint l'Ouverture y sus aliados aprovecharon la coyuntura de la revolución francesa para establecer una república negra libre en la colonia francesa de Haití. La reafirmación del poder económico europeo en la actualidad garantiza que las revoluciones europeas pasadas, presentes y futuras continúen influyendo en todas partes. Finalmente, el sistema de estados vigente en el conjunto del mundo actual se originó en Europa y todavía lleva el sello europeo. Existen buenas razones para pensar que si se comprende la relación existente entre la revolución y la transformación del sistema de estados europeo se comprenderán mejor las revoluciones presentes y futuras fuera de Europa.

Con la finalidad de alcanzar ese objetivo, el libro presenta un esquema general de los cambios sociales y políticos ocurridos en Europa y su impacto sobre las situaciones revolucionarias desde 1492 hasta el momento presente (capítulo 2), una comparación preliminar de las situaciones revolucionarias en los Países Bajos, la península ibérica y los Balcanes desde 1492 (capítulo 3), un examen más detallado de las revoluciones en las islas Británicas, especialmente durante las revueltas del siglo XVII (capítulo 4), Francia, con referencia especial a la centuria posterior a 1750 (capítulo 5), y Rusia, particularmente en el siglo XX (capítulo 6). A continuación, el capítulo 7 ofrece un examen comparativo de las revoluciones y presenta unas reflexiones

finales. Los capítulos centrales del libro destacan los siglos en los que se produjeron las grandes luchas revolucionarias en los Países Bajos (1550-1650), las islas Británicas (1600-1700), Francia (1750-1850) y Rusia (1900-1992). Al terminar la obra deberíamos poder, al menos, situar claramente las revoluciones ocurridas en Europa oriental en 1989 y en los años posteriores en el contexto de un período revolucionario de quinientos años.

CAPÍTULO DOS

Las transformaciones de Europa

El cambio desde 1492

Comencemos nuestro estudio quinientos años atrás, en 1492. El punto de partida es arbitrario pero no disparatado. En los años postreros del siglo XV se produjeron acontecimientos decisivos para la economía y la política europeas. El viaje de exploración de Colón de 1492 inició la integración definitiva del continente americano en la órbita de Europa. Muy pronto, los españoles extendieron al Caribe los experimentos que habían realizado en el cultivo de productos tropicales como el azúcar, experimentos que también habían hecho sus vecinos portugueses en otras islas más cercanas del Atlántico como las Canarias, y comenzaron a comprar esclavos africanos para encomendarles los más duros trabajos. Pero si la flora y la fauna europeas (por ejemplo, el diente de león, el caballo y el virus del sarampión) se difundieron por América, también los productos del continente americano adquirieron pronto una presencia importante en la vida europea. A la aventura americana del siglo XV debe Europa no sólo la Coca- Cola, el tango y el jazz sino también el maíz, la patata, el tabaco y, tal vez, la sífilis.

Esa expansión hacia las Américas fue tan sólo una parte del proceso que permitió a Europa convertirse en el centro económico del mundo. Hasta el siglo XIV, Europa había sido la periferia noroccidental de un vasto sistema económico que se extendía hacia el Pacífico y cuyo eje eran los territorios del Asia central dominados por los mongoles. Con anterioridad, en Europa surgieron y se derrumbaron diversos imperios, particularmente en torno al Mediterráneo y el mar Negro, pero el imperio romano solo abarcó la mitad del espacio europeo y lo incorporó plenamente al sistema comercial, político y cultu-

ral eurasiático. Ni las débiles corrientes comerciales ni los dispersos núcleos de agricultura productiva permitían obtener los recursos necesarios para financiar grandes ejércitos, las jerarquías eclesiásticas, complejas burocracias y suntuosas cortes reales. En el noroeste de Europa, ni siquiera los osados y rapaces vikingos consiguieron formar un imperio importante.

Cuando los imperios bizantino, persa, árabe y, luego, musulmán desplazaron a los romanos y subordinaron de nuevo el sector suroriental de Europa al eje Bagdad-Hangzhou, que dominaba el comercio de la seda, el resto de Europa se fragmentó y perdió importancia. Sin embargo, entre los siglos x y xiii todo el sistema eurasiático demostró tan gran vigor que facilitó la prosperidad de una gran parte de Europa: floreció el comercio, aumentó la población y crecieron las ciudades, especialmente en aquellos sectores del continente que tenían una relación más estrecha con las grandes corrientes del comercio eurasiático. En el año 1000, las ciudades más grandes del mundo eran, probablemente, Constantinopla, Córdoba, Kaifeng, Sián, Kyoto, El Cairo y Hasa; en esa jerarquía quedaban muy por detrás las ciudades europeas de Sevilla, Palermo y Kiev. Así pues, al cumplirse el milenio, las mayores ciudades del mundo eran extraeuropeas y las principales ciudades de Europa pertenecían a la órbita del islam.

Hacia el año 1300, los primeros lugares de la lista los ocupaban Hangzhou, Pekín, El Cairo y Cantón, mientras que París, Granada, Constantinopla, Venecia, Milán y Génova figuraban entre las veinte ciudades más importantes. Hacia 1500, las ciudades más grandes del mundo eran, con toda probabilidad, Pekín, Vijayanagar, El Cairo y Hangzhou —dos en China, una en la India, y una en el África musulmana— y París, Constantinopla, Adrianópolis y Nápoles ocupaban el vértice de la jerarquía europea, aunque eran todavía mucho más pequeñas que sus homólogas asiáticas. Aunque en 1700 la ciudad japonesa de Edo era probablemente la más grande del mundo, por primera vez tres de las diez ciudades mayores del planeta eran europeas: Constantinopla, Londres y París (Chandler y Fox, 1974, pp. 308-321). Así pues, entre el año 1000 y 1700, y especialmente a partir del año 1500, se había producido un notable cambio en la jerarquía, en favor del norte de Europa.

¿Qué había ocurrido durante aquellos setecientos años? En los dos siglos transcurridos a partir del año 1300, la peste negra interrumpió de forma intermitente la relación entre Europa y Asia, la fragmentación del imperio mongol erigió formidables barreras en las rutas comerciales terrestres, se interrumpió el floreciente comercio marítimo de China, las embarcaciones de las potencias atlánticas comenzaron a predominar sobre las galeras que hasta entonces habían dominado el Mediterráneo, los europeos empezaron a utilizar la pólvora procedente de Asia, y la conquista de Constantinopla a manos de los turcos en 1453 (el primer gran despliegue en Europa de la artillería para las operaciones de asedio) definió la confrontación de la cristiandad con el islam y cimentó una relación de amor-odio entre la Turquía musulmana y la Rusia ortodoxa. Todos esos cambios hicieron de Europa una entidad más unida y autónoma de lo que lo había sido nunca hasta entonces. Europa y los sectores adyacentes del vasto complejo tardaron un siglo, o más, en recuperarse de la devastación demográfica causada por la peste negra. El crecimiento demográfico, muy rápido entre los siglos x y xiii, se interrumpió a mediados del siglo xiv para acelerarse de nuevo en el siglo xvi. Muy pronto se reanudó el crecimiento de todo el sistema eurasiático y a partir de ese momento Europa ocupó, en relación con el resto del mundo, una posición más destacada que la que había tenido nunca, más notoria que durante el imperio romano.

No puede afirmarse que Europa ingresara en el mundo actual en torno a 1492. Lo cierto es que la estructura política de 1492 era profundamente distinta de la actual. En ese momento, el reino de Aragón, reforzado por el poder marítimo catalán, se extendía desde la península ibérica hasta Cerdeña y Sicilia. El papa gobernaba uno de los mayores estados de Italia. El reino de Polonia, extraordinariamente extenso, ejercía una soberanía superficial sobre una gran parte de la Europa oriental y el territorio que ahora llamamos Rusia se hallaba fragmentado en zonas controladas por el príncipe de Moscú, la república de Pskov, la Horda de Oro, los tártaros de Crimea y muchas otras potencias conquistadoras procedentes de la estepa eurasiática. Una gran parte de «Alemania» estaba sometida nominalmente a la soberanía de los Habsburgo, pero de hecho estaba formada por obispados semiindependientes, ciudades libres, ducados y otras pequeñas jurisdicciones. En 1492 China tenía un extraordinario peso en Oriente. Las tierras y mares del islam se extendían a ambos lados de las principales corrientes comerciales y culturales del mundo y la influencia islá-

mica se expandía todavía desde el sureste asiático hasta África. En el océano Índico y las rutas terrestres hacia Asia, los europeos siguieron durante mucho tiempo a los comerciantes musulmanes, o pactaron con ellos, antes de comenzar a desplazarlos. La búsqueda por parte de Colón de una ruta occidental hacia «las Indias» no era una vana quimera, sino una empresa que podía reportar beneficios sustanciales si se culminaba con éxito. En 1492 las embarcaciones europeas hacían frente al expansivo imperio turco y ya habían penetrado en el espacio comercial musulmán del océano Índico. En 1498 Vasco de Gama alcanzó la India desde Portugal. Comerciantes y marinos portugueses, y luego españoles y holandeses, comenzaron a dominar los mares extraeuropeos. En 1500-1501, la flota de Pedrálvarez Cabral avistó Brasil antes de poner rumbo al este hacia la India y luego regresar a Portugal. Entre 1519 y 1522 uno de los barcos de la flota de Fernando Magallanes circunnavegó el globo, a pesar de que el propio Magallanes había muerto en las Filipinas.

Desde una perspectiva planetaria, Europa estaba convirtiéndose en un polo importante de actividad económica y política. Desde un punto de vista europeo, más limitado, en los años postreros del siglo XV comenzó un proceso de desplazamiento del centro comercial de gravedad desde el sureste hasta el noroeste, del Mediterráneo y el mar Negro hacia el Atlántico. Aunque fueron los estados de la península ibérica los que dirigieron esa reorientación, pronto participaron en ella los puertos franceses, los Países Bajos, el Báltico y luego las islas Británicas. Por ejemplo, en 1496 Flandes e Inglaterra firmaron el *Intercursus Magnus*, un tratado comercial que concedía ventajas mutuas y reconocía la importancia del comercio de la lana y de tejidos que ya era la actividad que los relacionaba. El Atlántico, que durante tanto tiempo había sido el extremo de la periferia, comenzaba a adquirir una nueva importancia.

En 1492 la monarquía dual de Castilla y Aragón —herencias vinculadas pero no fusionadas de Fernando e Isabel— completó la conquista de Granada. La conquista acabó con el último vestigio importante de los otrora grandes imperios musulmanes de la península ibérica, al mismo tiempo que, al verse amenazados de muerte, los judíos españoles que no se convirtieron, al menos de forma nominal, al catolicismo comenzaron su diáspora por toda Europa y en torno al Mediterráneo. Sólo dos años más tarde y como respuesta, en parte, a la amenaza que entrañaba la existencia de una España unificada, Francia comenzó una invasión militar de Italia preñada de consecuencias. Casi inmediatamente, España envió sus ejércitos a Italia para oponerse a los franceses y las ciudades-Estado italianas, siempre enfrentadas pero relativamente autónomas, quedaron a merced de la política de las grandes potencias.

Esa tentativa francesa de alcanzar la hegemonía en Italia supuso el comienzo de la era de las guerras a escala europea. Los Valois franceses y los Habsburgo españoles se enfrentaron en once ocasiones entre 1494 y 1559, fecha de la firma del tratado de Cateau-Cambrésis. A partir de 1492, la naturaleza de la guerra y el sistema internacional se transformaron rápidamente. Durante las guerras de Borgoña del decenio de 1470, la infantería suiza, constituida por piqueros dispuestos en formación cuadrada, había demostrado su habilidad para derrotar a la caballería. Esa modificación estratégica, unida al recurso generalizado a las fortificaciones para la defensa frente a la artillería en los asedios, multiplicó las necesidades financieras y de recursos humanos de los ejércitos, por no mencionar la demanda de arquitectos militares y de mercenarios suizos. A su vez, esas guerras dieron forma al sistema europeo de estados, sentaron las bases de las conquistas europeas fuera del continente y contribuyeron a dar forma al tipo de estados centralizados, diferenciados, autónomos y burocráticos que acabarían por prevalecer en Europa y, luego, en todo el mundo.

Al mismo tiempo, la expansión del comercio europeo a lo largo de las rutas marítimas de los océanos Atlántico, Pacífico e Índico fueron un poderoso estímulo para la acumulación de capital, que a su vez proporcionó a los estados guerreros una riqueza creciente en la que sustentar sus fuerzas armadas. Comenzó así a aflorar lo que Immanuel Wallerstein llama el sistema capitalista mundial, centrado en Europa. Naturalmente, los acontecimientos de ese gran año de 1492 no fueron la causa de ese cúmulo de procesos trascendentales. Sin embargo, el rápido cambio de posición de la península ibérica y la penetración en el Atlántico, aspectos en los que el año 1492 fue de importancia crucial, impulsó fuertemente aquellos procesos. Así pues, iniciar el análisis de la evolución de los estados, las economías, los conflictos políticos y las revoluciones en 1492 permite contemplar con perspectiva todo el período en el que existió lo que podría calificarse como un sistema europeo de estados coherente.

En el mapa de 1492 cabe reconocer a Inglaterra, Irlanda, Escocia y Francia con unas fronteras que se aproximan a las actuales, aunque ello conllevaría ignorar las notables conquistas posteriores de Francia hacia el este, sin mencionar la tumultuosa formación de lo que ahora se llama, no sin cierta exageración, el Reino Unido. En total, unas doscientas entidades de carácter estatal, muchas de ellas con algunos territorios comunes y en no pocos casos con un conglomerado confuso de gobiernos semiautónomos, compartían el mapa europeo de 1492.

En 1992, y a pesar de la desintegración de la Unión Soviética, esas doscientas entidades se habían consolidado en un conjunto de unos treinta y cinco estados soberanos, de los que solamente Andorra, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, San Marino y el Vaticano recordaban a los miniestados tan comunes cinco siglos antes. Ni siquiera el reconocimiento de todos los intentos de independencia en los antiguos límites de la Unión Soviética y en Yugoslavia devolvería a Europa un aspecto parecido a la fragmentación política de 1492. Bien al contrario, en 1992 muchos indicios apuntan hacia una creciente consolidación de los estados europeos en entidades de gran amplitud que incluirán a la Comunidad Europea o se parecerán a ella. Aunque probablemente las regiones y las nacionalidades verán reconocida una mayor autonomía que en los estados actuales, de hecho la soberanía tiende a situarse en conglomerados de estados. Si la Comunidad crea su propio ejército unificado, el proceso que seguirá la soberanía será el de un alud invertido.

Más aún, en 1992, el sistema mundial de estados en su conjunto está experimentando profundas alteraciones: se ha desintegrado la Unión Soviética, la confrontación bipolar de bloques encabezados por la Unión Soviética y los Estados Unidos ha dejado de dominar la política mundial, continúa expandiéndose el poder de estados como Japón y Alemania, débiles desde el punto de vista militar pero económicamente fuertes, y el capital multinacional que controla el tráfico de drogas, armas, productos electrónicos, comunicaciones y petróleo está adquiriendo un enorme poder y movilidad con una independencia parcial de los estados cuyos habitantes crearon y acumularon el capital. En definitiva, 1492 no es un año en que se constituyen el tipo de estados europeos que han predominado en los últimos siglos, sino un punto de partida para los trascendentales cambios

que se registrarían a partir de entonces en la estructura de los estados.

Pero no sólo cambiaron los estados, sino que a partir de 1492 todo el conjunto de la vida europea adoptó un aspecto diferente. Recordemos la situación de Europa a finales del siglo XV: junto con la India y el Asia oriental, era ya una de las tres grandes regiones del mundo que contaba con una agricultura productiva y, en consecuencia, con una gran densidad de población y unas ciudades importantes. En torno a los Alpes y en las costas del Mediterráneo, el Atlántico, el Báltico y el mar Negro se había formado una red de ciudades mercantiles bien conectadas, la mayor parte de ellas con amplias zonas de influencia en las que se conjugaba la industria a pequeña escala con la agricultura comercial. El resto de Europa estaba dividido en dos tipos de regiones: las de los señores-guerreros (algunos de ellos miembros también de la jerarquía eclesiástica) que obtenían sus ingresos de sus hogares campesinos, y otras regiones en las que los pequeños propietarios agrarios, los pescadores y quienes vivían de la riqueza de los bosques coexistían con comerciantes, soldados, eclesiásticos y funcionarios. Hungría es un ejemplo del primer tipo de regiones y Escandinavia del segundo.

A partir de 1492, esa Europa diversa pero cada vez más interrelacionada protagonizó, ante la admiración del mundo, un proceso sin precedentes de industrialización, urbanización, proletarización y crecimiento demográfico. Naturalmente, todos esos fenómenos no se produjeron inmediatamente ni al mismo tiempo. Si en el siglo XVI la urbanización y el crecimiento demográfico progresaron de forma notable, el siglo XVI fue un período de ralentización de ambos fenómenos, que se aceleraron de nuevo, con más ímpetu que nunca, a partir de 1750, para no perder impulso hasta bien entrado el siglo XX. De hecho, el fenómeno demográfico afectó a toda Eurasia, con un amplio crecimiento de la población durante el siglo XVI y los primeros años del siglo XVII, un siglo de recesión a continuación, una nueva fase de crecimiento en el siglo XVIII, y con períodos de insuficiente producción de alimentos y de subidas de precios en los momentos de crecimiento rápido (Goldstone, 1991, p. 355).

Sin embargo, el crecimiento demográfico tuvo consecuencias muy diferentes en las diversas regiones de Eurasia. En China y Japón, el Estado consiguió limitar el ascenso de los grandes señores y los capitalistas, haciendo que una parte importante de sus rentas y beneficios

revirtieran en la burocracia. En Europa, donde no existía un imperio que pudiera dificultar el avance de los señores y los capitalistas, la elevación de los precios y el abaratamiento de la mano de obra beneficiaron a esos dos grupos sociales, permitiéndoles aliarse o incluso fusionarse en muchas partes del continente. Allí donde existían mercados para sus cultivos, los señores, sus tenentes y los principales terratenientes se convirtieron en los exponentes del capitalismo agrícola, favoreciendo la multiplicación de los asalariados sin tierra. Luego, los comerciantes encabezaron el proceso hacia el capitalismo industrial.

Es más difícil establecer una precisión cronológica para la industrialización que para la urbanización y el crecimiento demográfico, porque la expansión de la producción industrial comenzó en los hogares rurales y en pequeños talleres dispersos, en un medio en el que la población dividía el año —o incluso el día— entre la industria, el comercio y el cultivo. Sin embargo, en términos generales se puede afirmar que en los siglos XVII y XVIII tuvo lugar un desarrollo masivo de la industria dispersa y a pequeña escala en las ciudades y en el campo, en torno a centros como Lieja y Zurich, con una fuerte acumulación de capital, mientras que los siglos XIX y XX habrían sido el período en el que el capital, los trabajadores y la manufactura se habrían concentrado cada vez más en las ciudades, reservándose al campo una función exclusivamente agrícola. Además, en el siglo XX la manufactura empezó a estabilizarse desde el punto de vista de la mano de obra empleada y de la producción, mientras continuaban creciendo las industrias de servicios —gobierno, transportes, bancos, educación, sanidad, etc.— a expensas de la silvicultura, la agricultura y la pesca.

La transformación de la organización productiva entrañó la proletarización de la población europea. La proletarización consiste en la dependencia creciente de las economías familiares del trabajo asalariado y/o en la reducción del control que ejercen sobre los medios de producción. Pese a la imagen decimonónica de los «proletarios» como mugrientos obreros de las fábricas, hasta bien entrado el siglo XIX la proletarización europea se produjo fundamentalmente en el campo y en las pequeñas ciudades, donde entre los señores, comerciantes, campesinos y artesanos comenzó a aumentar el número de trabajadores agrícolas sin tierra, tejedores u otros obreros a tiempo parcial que trabajaban por horas, días, meses, años, por trabajos o por piezas. El cuadro 2.1 presenta una estimación de esos cambios (tomado

CUADRO 2.1. La proletarización europea, 1500-1990.

	Millones de personas, incluidas las personas dependientes 1500	1800	1900	1990
Población total	56	150	285	800
No proletarios	39	50	85	200
Urbanos	1	10	75	450
Proletarios rurales	16	90	125	150

de Tilly, 1984, p. 36). No ofrece cifras exactas, sino estimaciones. Las cifras correspondientes a 1990 son menos exactas aún que las que corresponden a los años anteriores. Paradójicamente, la formación de regímenes socialistas estatales a partir de 1917 hace más difícil la estimación del número de proletarios, precisamente en el momento en que mejora la calidad de las estadísticas. Por ejemplo, ¿eran proletarios los miembros de las granjas colectivas? Con todo, las conclusiones generales son claras: con anterioridad a 1800, rápido crecimiento de los propietarios rurales; en el siglo XIX, gran desarrollo del proletariado urbano; desde 1900 se estabiliza prácticamente el número de proletarios rurales y el proletariado urbano aumenta mucho más deprisa que la población.

Dichas transformaciones significan que las *dramatis personae* del conflicto político, la acción colectiva y las revoluciones cambiaron totalmente entre 1492 y 1992. Aparecieron en el escenario un gran número de nuevos actores, como los trabajadores de las fábricas y los capitalistas industriales. Incluso aquellos cuya denominación no varió, como los sacerdotes, los campesinos y los señores, tenían sólo un parecido muy superficial con sus predecesores. También se modificaron profundamente las situaciones a las que hubieron de enfrentarse los gobernantes, sus clientes, sus aliados y sus oponentes. Un entorno de trabajadores asalariados urbanos supone una dinámica política totalmente distinta de la que deriva de un mundo predominantemente rural de comerciantes y cultivadores. Difícilmente pueden haber permanecido invariables las revoluciones y otros procesos políticos conexos en medio de todos esos cambios, especialmente porque los estados, el blanco de la revolución, también experimentaron transformaciones profundas.

De los estados segmentados a los estados consolidados

Durante milenios, el núcleo esencial de la historia de los estados en todo el mundo era la interacción de la guerra, los diferentes tipos de organizaciones que intervenían en ella y la población que soportaba los costes de la guerra. Sólo en los últimos siglos los estados han alcanzado la fuerza suficiente como para controlar la vida diaria —y nocturna— de la mayor parte de los ciudadanos. La expansión reciente de los estados comenzó con la multiplicación de las acciones bélicas y de sus costes a partir de 1750, con la creación de grandes ejércitos profesionales, formados por la población de los estados, bien equipados y financiados con dinero público. Los enfrentamientos masivos, que conllevó la multiplicación de las actividades bélicas, transformaron al Estado en un instrumento poderoso que podía utilizarse para alcanzar más de un objetivo. En efecto, una vez que el Estado hubo alcanzado ese poder, amplios sectores de la población plantearon sus exigencias al Estado para conseguir sus objetivos (en su mayor parte no militares). A lo largo de una centuria o más de enfrentamientos, los estados hubieron de hacerse cargo de aspectos tales como las infraestructuras económicas, la educación, la asistencia social e incluso la gestión económica. Así pues, el aparato voluminoso, exigente y eficaz de los estados occidentales actuales poco se parece al aparato insignificante, caprichoso, aunque en muchos casos mortífero, de los estados de unos siglos atrás.

Los estados europeos del período anterior no eran simplemente una miniatura de sus sucesores, elefantes pigmeos que anunciaban la aparición de mastodontes; el período que comienza en 1492 contempló cambios drásticos en la conformación de los estados europeos. Dichos cambios se concentraron durante el siglo que comienza en 1750, aunque en algunas zonas de Europa se produjeron antes del siglo XVIII y pese al hecho de que la expansión del Estado continuó a ritmo acelerado a partir de 1850. En el curso de esa transición crucial, las tropas de mercenarios y los ejércitos privados, cuya presencia había dominado la actividad bélica europea durante varios siglos, desaparecieron prácticamente del escenario continental. Las fuerzas militares comenzaron a estar subordinadas a la administración civil, se agudizó la separación entre ejércitos y policía (aquéllos dedicados fundamentalmente a luchar contra otras organizaciones armadas y ésta para ocuparse de la población civil), los estados crearon una administración amplia y relativamente uniforme a nivel municipal y regional, se amplió y se regularizó la burocracia central (tanto la que se encargaba de las actividades militares como la que se ocupaba de las actividades civiles), los sistemas fiscales y las finanzas públicas alcanzaron un enorme peso en el Estado y las instituciones representativas (aunque elitistas) alcanzaron un lugar importante en las luchas nacionales por el poder, al nacer una política popular orientada a influir en esas instituciones representativas y en el ejecutivo central.

Bajo el impulso de la reorganización militar, en los mayores estados europeos se sustituyó el control indirecto por el control directo. Los gobernantes, en lugar de apoyarse en intermediarios en gran medida autónomos, como los grandes señores, la jerarquía eclesiástica, los municipios y los comerciantes para que gobernaran en su nombre, crearon aparatos estatales que ejercían su control sobre las comunidades, incluso sobre las unidades familiares, mediante la fiscalidad, el servicio militar obligatorio, el registro de la población, la educación pública y otras formas de control. Representantes de los gobiernos centrales se dedicaron a una nueva labor de fomentar la prioridad de una versión unitaria de la cultura nacional en materia de lengua, comunicación, arte, educación y creencias políticas. Reservaron los recursos —capital, mano de obra, bienes, dinero, tecnología— para utilizarlos dentro de sus límites nacionales, controlando su movimiento sobre unas fronteras definidas cada vez con mayor precisión por geógrafos, generales y políticos, diseñando una política nacional para decidir su utilización, coordinando sus usos y estableciendo la prioridad de los derechos del Estado sobre dichos recursos.

La revolución francesa y el imperio napoleónico protagonizaron la más radical de esas transformaciones, pero (en parte como consecuencia de la conquista y el ejemplo francés, en parte por el enorme incremento de los ejércitos y las flotas ocasionado por las guerras francesas) la mayor parte de los restantes estados europeos avanzaron en la misma dirección. En el proceso, llevaron a cabo una definición más amplia, más activa y más igualitaria de la ciudadanía: fuertes obligaciones mutuas de la población y los representantes del Estado sobre la base única de la residencia autorizada. Con notorias y evidentes variaciones entre una Rusia dominada por la nobleza, una Suiza fragmentada y una Gran Bretaña dividida en clases pero parcialmente de-

mocrática, sus gobernantes fortalecieron en todas partes el poder de sus estados, teniendo para ello que realizar intensas negociaciones con las poblaciones nacionales.

La trayectoria precisa de esos cambios varió muy sustancialmente de una a otra región y de una época a otra. En diferentes ocasiones a partir de 1492, prosperaron en alguna parte de Europa ciudades-Estado, imperios, federaciones, repúblicas, reinos centralizados, monarquías electivas con una débil estructura unitaria y numerosas variantes de todos ellos. En todos los casos se trataba de estados *segmentados* hasta cierto punto: consistían en un pequeño segmento, como un obispado formado por una ciudad y su zona de influencia inmediata, o estaban formados por un mosaico de unidades diferentes, cada una de las cuales gozaba de una individualidad y autonomía considerables. Las diferencias más acusadas tenían que ver con la concentración de capital y de medios coercitivos en el entorno de los diferentes estados. Allí donde se produjeron grandes concentraciones de capital —especialmente en la franja urbana que se extendía desde el norte de Italia, en torno a los Alpes, hasta los Países Bajos— los comerciantes y financieros desempeñaron un papel de primer orden en la formación y transformación de los estados. En dichas regiones, los capitalistas proveyeron la financiación de actividades del Estado, especialmente la guerra, pero erigieron fuertes obstáculos para la creación de grandes ejércitos profesionales, burocracias perdurables o un poder central fuerte. La consecuencia fue que en las regiones urbanas predominaron ciudades-Estado y federaciones influyentes pero débiles desde el punto de vista organizativo, como Génova, Dubrovnik, Suiza y la República de Holanda. Siguieron la senda de la *utilización intensiva del capital.*

En las zonas de Europa en las que predominaba la ganadería y la agricultura de subsistencia, el capital fue escaso y disperso durante mucho tiempo, los magnates sofocaban el desarrollo de las ciudades y del comercio, predominaban la conquista y la política dinástica y la única forma en que los gobernantes pudieron aumentar la fuerza de sus estados fue apoderándose de los ejércitos privados formados por los grandes señores o absorbiéndolos. En esas regiones, el empeño en crear una fuerza armada masiva y centralizada produjo, cuando tuvo éxito, la paradójica combinación de una amplia y privilegiada clase nobiliaria y una importante burocracia estatal. Rusia, Hungría,

Polonia, Portugal y Castilla son ilustraciones de diferentes versiones de esa senda de *uso intensivo de la coerción.*

Hay que mencionar, por último, aquellas regiones en las que concurrieron una cierta concentración de capital y la existencia de una fuerza armada importante en manos de señores autónomos, zonas que los historiadores de la Edad Media describen con el término «feudal» y los de los siglos XVII y XVIII con el término «absolutista». La estructura que predominaba en dichas zonas era la existencia de redes de ciudades comerciales entrelazadas con grandes áreas agrícolas que producían excedentes (y en las que existían manufacturas según el modelo del *domestic system*) para el mercado urbano. En ese entorno, los gobernantes ampliaron su poder, frecuentemente, enfrentando a la burguesía con la nobleza, para luego fusionarlas en el servicio a la corona. Cuando a partir de 1700 la actividad bélica comenzó a ser extraordinariamente costosa, este tipo de estados se mostraron más capaces que los de las otras zonas a las que antes se ha hecho alusión para reclutar, equipar y financiar grandes ejércitos permanentes con los recursos y el material humano que aportaba su propia población. Ello les permitió llegar a ser los estados dominantes en Europa, desde el punto de vista militar y diplomático. Inglaterra, Francia y Prusia son los países que mejor ejemplifican esa senda de *coerción capitalizada.*

La organización de la guerra marcó la naturaleza de los estados y, por consiguiente, de las revoluciones. ¿En qué sentido influyó la guerra? Después de algunas experiencias en la formación de ejércitos nacionales durante el siglo XVII, particularmente en Suecia y Rusia, el siglo XVIII contempló el declive definitivo de los ejércitos de mercenarios, que dieron paso a los grandes ejércitos y flotas profesionales, formados casi en su totalidad mediante levas obligatorias de la población nacional y que se financiaban fundamentalmente con los impuestos que pagaba la población. En este sentido, la *levée en masse* de 1793 fue un hito importante. Excepto cuando existía una amenaza de invasión, la población se resistía enérgicamente al reclutamiento obligatorio. Sin embargo, los funcionarios del Estado doblegaron su resistencia. Una vez que Francia, Prusia y algunas otras potencias pusieron en pie de guerra flotas y ejércitos muy numerosos mediante ese sistema, el mercado de mercenarios se hundió en casi toda Europa y a partir de entonces todos los estados que aspiraban a tener importancia en el ámbito militar actuaban como aquellas grandes potencias.

La formación de grandes ejércitos de esas características tuvo una serie de consecuencias inesperadas pero trascendentales: llevó a los gobernantes a librar luchas constantes y a negociar con sus súbditos, amplió los límites de la definición de la ciudadanía, impulsó ideas y prácticas de soberanía popular, dio lugar a la presentación de reivindicaciones al Estado por parte de los súbditos en forma de peticiones y otras fórmulas parecidas, reforzó las instituciones representativas, determinó el incremento de la burocracia central del Estado, indujo al Estado a abandonar el sistema de gobierno indirecto para ejercer un control directo, amplió los controles del Estado sobre las existencias y el flujo de la mano de obra, el capital, los bienes y el dinero en el interior del país y a través de las fronteras nacionales, cada vez mejor definidas, amplió las obligaciones del Estado para con los veteranos del ejército y sus familias, convirtió a los veteranos en un colectivo con influencia política y favoreció la posibilidad de compartir experiencias a través del servicio militar. Por ejemplo, en Gran Bretaña, en el período bélico que transcurre entre 1792 y 1815 no sólo se produjo un extraordinario incremento de las fuerzas armadas y de la fiscalidad, un crecimiento sustancial y un aumento de la centralización del Estado nacional y un gran reforzamiento de los poderes del Parlamento, sino también una gran transformación de la acción colectiva popular en el sentido de crear bases asociativas, prestar atención a las cuestiones nacionales y presentar reclamaciones al Parlamento (Tilly, 1982, 1991a, 1991b).

Esta multiplicidad de cambios pueden agruparse en tres categorías que se superponen en parte: 1) circunscripción, 2) control y 3) obligación. Los estados, en mucha mayor medida que hasta entonces, impidieron el movimiento del capital, mano de obra, tecnología y dinero a través de unas fronteras cada vez más definidas, destinando todos esos recursos para utilizarlos dentro de las fronteras nacionales en beneficio del Estado y (a veces) de sus ciudadanos. Todos los estados tienen la prioridad en el seno de unos territorios relativamente bien definidos. Esa es una de las formas en que se aprecia que se trata de estados y no de familias, grupos, iglesias, corporaciones o cualquier otra cosa. Sin embargo, existen notables diferencias respecto al grado de cercanía y unión de dichos territorios y en cuanto al grado de control que el Estado ejerce en ellos. En la Europa del siglo XVIII, en los estados de mayor tamaño, el control sobre unas fronteras mal definidas dominadas por pequeños enclaves era, en general, bastante laxo; además, la autoridad del Estado no intervenía muy intensamente en estas fronteras o dejaba esa tarea a unos intermediarios que gozaban de una amplia autonomía. Los trabajadores emigrantes, los comerciantes, los productos y el dinero se encontraban con los obstáculos que planteaban los bandoleros y las aduanas, pero por lo demás circulaban con facilidad y sin el control del Estado en el interior y a través de las fronteras.

Por otra parte, pocos estados poseían sistemas eficaces de registro de la propiedad o de las personas, como lo atestiguan la excepcionalidad de las estimaciones de la base impositiva y la sorpresa provocada por los resultados de los censos del siglo XIX. Incluso el servicio militar obligatorio, allí donde existía en el siglo XVIII, dependía de que se supiera, a nivel local, quienes eran los varones que estaban sujetos al mismo y, en consecuencia, los fraudes eran muy frecuentes. Sin embargo, con la creación de los ejércitos nacionales permanentes y la infraestructura consiguiente, los estados europeos se tomaron en serio la tarea de establecer las circunscripciones. Trazaban los límites, los negociaban con los habitantes de las circunscripciones vecinas, apostaban guardas para vigilarlos, inspeccionaban los bienes y las personas que los atravesaban, expedían o negaban pasaportes y visados para personas que vivían a ambos lados de los límites y las mitificaban calificándolas de naturales, adecuadas e incluso predestinadas.

En el interior de esas fronteras, los estados comenzaron también a ejercer un control mucho más estricto sobre la población, los recursos y las actividades, decretando impuestos, realizando levas, manteniendo el orden público y erigiendo sistemas de vigilancia. Con la formación de ejércitos nacionales masivos y con el consiguiente crecimiento de los presupuestos estatales, prácticamente todos los estados implantaron sistemas de control más amplios, estrictos y directos. El control central se extendía, evidentemente, sobre las propiedades, la producción y la actividad política; los gobernantes dejaron de recurrir a la colaboración de los magnates, que gozaban de una amplia autonomía, y comenzaron a ejercer el control directo, creando una administración que surgía directamente del poder central y que ejercía su control sobre las comunidades y los hogares individuales. Ello incluía, como una de las medidas principales, el control cultural, el

hecho de designar o crear una única tradición lingüística, histórica, artística y práctica que tuviera prioridad sobre las restantes tradiciones existentes en el territorio nacional. Los estados comenzaron a poner en marcha sistemas nacionales de educación, a imponer una lengua nacional, a organizar exposiciones y museos, a conceder subvenciones en el terreno de las artes y a utilizar otros medios para exhibir la producción o el patrimonio cultural, a construir redes de comunicaciones y a inventar banderas, símbolos, himnos, fiestas, rituales y tradiciones nacionales.

Como consecuencia, las poblaciones nacionales perdieron parte de su carácter políglota, aunque en muy pocos casos se aproximaron siquiera a la homogeneidad que entrañaba el Estado-nación ideal. El efecto de homogeneización se extendió a cuestiones tan profundas como el comportamiento demográfico (Watkins, 1990; Winter, 1986). Habitualmente, las burguesías y las clases ilustradas colaboraron en ese empeño, que en sus primeras fases desacreditaba el carácter exclusivo y el egoísmo de la aristocracia, y en ocasiones incluso de la corona. Después de todo, con anterioridad al siglo XIX la aristocracia y la monarquía hablaban una lengua diferente de la que utilizaba la masa de la población a la que gobernaban. Una vez iniciado, el proceso ya no se interrumpió, porque las ventajas que entrañaba hablar una lengua nacional y adoptar un estilo nacional en lugar de continuar viviendo en el seno de un sistema limitado y estigmatizado se hicieron cada vez más evidentes para los miembros de las minorías nacionales.

Ese proceso conllevó un nivel de obligaciones sin precedentes del Estado para con los ciudadanos y, especialmente, de los ciudadanos para con el Estado. Como resultado de la coerción, la lucha y la negociación sobre los recursos necesarios para la guerra, los residentes del territorio nacional se vieron cada vez más obligados a otorgar al Estado trabajo, bienes, dinero y lealtad, pero al mismo tiempo adquirieron también derechos de reparación, expresión y compensación. Ese proceso amplió los horizontes de la política de participación popular y dio a los grupos de intereses la oportunidad de exigir servicios y protección del Estado en forma de infraestructuras económicas, servicio de policía, tribunales de justicia, educación, asistencia social y muchos otros. Con la expansión de ese tipo de obligaciones recíprocas, los europeos alumbraron un concepto de ciudadanía que no se aplicaba sólo al reducido círculo de la clase gobernante, sino a la mayor parte de la población. El concepto de ciudadanía comenzó a adquirir el significado que en la actualidad le atribuyen los europeos: un conjunto de derechos y obligaciones con respecto al Estado que se aplican más o menos equitativamente al conjunto de la población nacida en su territorio o «naturalizada» en él.

Aunque con anterioridad a 1800 florecieron en Europa muchos otros tipos de Estado, todos ellos segmentados en una u otra forma, lo cierto es que a partir del siglo XVIII comenzó a prevalecer un tipo concreto de Estado, que podríamos denominar Estado consolidado: amplio, diferenciado, que gobernaba directamente territorios heterogéneos y que aspiraba a imponer un sistema fiscal, monetario, judicial, legislativo, militar y cultural unitario a sus ciudadanos. La aparición del Estado consolidado fue un acontecimiento histórico trascendental; en comparación con él, prácticamente todos los tipos de Estado anteriores parecían insignificantes. Los imperios centralizados que surgieron intermitentemente en China fueron los predecesores más notables del Estado consolidado europeo; ni siquiera el Estado japonés, poderoso, pero segmentado, resistía la comparación con sus homólogos europeos.

Fueron muchos los que hablaron del Estado-nación para referirse a este nuevo tipo de Estado. Yo me refería al Estado «nacional» hasta que comprendí la confusión que dicho término causaba. El término Estado-nación es equívoco, pues expresa un programa y no una realidad, y la expresión Estado nacional se presta casi a la misma confusión. Aunque muchos estados consolidados afirmaban contener un cuerpo homogéneo de ciudadanos procedente de un solo pueblo, en realidad en muy pocos de ellos se daba esa situación: tal vez en Suecia y Noruega después de su separación en 1905 (si se ignoran los pueblos de Laponia), Finlandia tras la finización de los decenios de 1920 y 1930 (olvidando también a los pueblos de Laponia), Dinamarca tras el hundimiento de su imperio, Irlanda y los Países Bajos si no se tiene en cuenta la escisión protestante-católica, Hungría después de la magiarización posterior a 1866 y de su contracción a raíz de los acuerdos que pusieron fin a la primera guerra mundial, y no muchos otros (Østergard, 1992). Ciertamente, en Bélgica, Suiza, el Reino Unido, España, Francia y Prusia no han existido nunca poblaciones homogéneas desde el punto de vista cultural. Sin embargo, esa pretensión representaba dos realidades fundamentales: en primer lugar, un intento

sin precedentes por parte de los gobernantes de imponer una lengua, un sistema educativo, unas prácticas culturales y unas lealtades uniformes; en segundo lugar, la legitimación del principio de que si existía una población coherente y homogénea tenía el derecho a adoptar una posición política distinta, incluso a poseer su propio Estado. Ambas se convirtieron en dos principios esenciales del nacionalismo.

La modificación de los conflictos

La prolongada transformación que experimentaron las economías, las culturas y los estados europeos afectó profundamente la naturaleza de los conflictos y, naturalmente, de la revolución. Consideremos los diferentes tipos de reivindicaciones de carácter popular: expresión visible de peticiones, amenazas, súplicas, ataques y todo tipo de llamamientos a la acción o al reconocimiento. Podemos centrarnos en las reclamaciones que son *contenciosas* (es decir, suponen una amenaza para los intereses de otro), *colectivas* (es decir, los individuos conciertan sus reclamaciones) y son presentadas por o en nombre de personas relativamente *indefensas*. ¿En qué condiciones plantea esas reclamaciones la gente común? Los estudios recientes sobre esta cuestión nos alejan de la consideración, dominante en otro tiempo, del «comportamiento colectivo» como un aspecto separado, en gran medida apolítico, producido por la disolución de los controles sociales convencionales y caracterizado por actuaciones que desafían la racionalidad convencional (véanse por ejemplo Aya, 1990; McPhail, 1991; Rule, 1989). Aunque en todo análisis actual de la cuestión de las reivindicaciones predomina la controversia, en conjunto los estudios recientes se refieren a ella como un proceso eminentemente político basado en intereses articulados y poblaciones relativamente organizadas.

Según la nueva interpretación, la gente común plantea exigencias colectivas cuando tiene intereses comunes, una organización compartida, recursos disponibles y una cierta seguridad frente a la represión, al tiempo que percibe una oportunidad o una amenaza para sus intereses comunes. Esas exigencias resultan más viables y más acuciantes, afirman la mayor parte de los analistas, cuando la población en cuestión posee una identidad social destacada y una organización interna que la refuerza, cuando a esa identidad se unen unos derechos

o privilegios sólidos y cuando los individuos comparten una serie de agravios contra unos enemigos o rivales bien definidos. El hecho de plantear exigencias (lejos de ser la característica habitual de individuos desorganizados o grupos desarraigados) sólo se produce cuando existe una organización social relativamente compacta. Además, plantear exigencias implica no sólo una acción de grupo, sino una *interacción* de grupo. Como mínimo, vinculan a quienes plantean esas exigencias con el objeto de sus reclamaciones. Más frecuentemente, constituyen tan sólo una parte de un proceso constante de tira y afloja entre múltiples protagonistas. Por consiguiente, las teorías que pretenden explicar la «protesta» haciendo referencia, tan sólo, a la condición de quienes protestan, distan mucho de tener en cuenta todos los factores. Generalmente, esas interpretaciones proceden de las autoridades o de sus simpatizantes.

No es posible concretar más esas apreciaciones sumamente abstractas sin buscar la dimensión histórica del problema. En el caso de Europa, a partir de 1492, significa, en primer lugar, prestar atención a las grandes transformaciones sociales del continente, que constituyeron el contexto para que evolucionaran las formas de reivindicación y, en segundo lugar, examinar la historia de dichas formas mediante el estudio de la acción colectiva. Una serie de cambios estructurales influyeron en la naturaleza y la incidencia del planteamiento de reivindicaciones: la urbanización que se aceleró a partir de 1800, la evolución del capitalismo mercantil hacia el capitalismo industrial, la rápida proletarización de la mano de obra rural y urbana, el importante crecimiento demográfico, la emigración masiva y el dominio creciente de unos estados grandes, codiciosos y burocráticos. Esos procesos facilitaron el marco para que se produjeran cambios y variaciones en el proceso de reivindicación colectiva.

Entre dichos cambios, la aproximación histórica de la cuestión en Europa desde 1492 debe subrayar los procesos fundamentales ocurridos en el continente: la transformación de los estados y el desarrollo del capitalismo. Ambos factores estimularon las protestas, porque suscitaron conflictos fundamentales. En primer lugar, los estados crecieron extrayendo recursos —hombres, dinero y bienes— de la población y el éxito del Estado suponía la derrota de otros que tenían derecho a dichos recursos. Aunque una parte importante de las fuerzas armadas estaban formadas por mercenarios extranjeros, cuando un Esta-

do destinaba a ellas el equivalente del 5 o el 6 por 100 del conjunto de su población (hombres, mujeres y niños), como ocurrió en Inglaterra hacia 1700, las familias, las explotaciones agrícolas y los talleres notaban la ausencia de los jóvenes.

En segundo lugar, los estados en proceso de consolidación competían con otros gobiernos tanto dentro como fuera de su territorio por conseguir la adhesión y el apoyo material de la misma población. Allí donde los grandes magnates contaban con importantes clientelas, acababan perdiéndolas a medida que los estados reducían gradualmente la autonomía nobiliaria. Finalmente, diversos grupos dentro de la órbita del Estado competían por los recursos, servicios y beneficios que se hallaban ya bajo control estatal. Cuando se impuso con toda evidencia el hecho de que los tribunales reales podían hacer cumplir sus decisiones y estaban decididos a hacerlas cumplir, los señores, los campesinos y el clero comenzaron a competir para salir vencedores en los procesos legales. Los tres tipos de conflicto suscitaron amplias reivindicaciones: la resistencia al reclutamiento obligatorio o a los impuestos, los enfrentamientos entre los reyes y los grandes magnates y las peticiones de que el Estado ofreciera recompensas o impusiera castigos.

De igual forma, el desarrollo del capitalismo entrañó tres conflictos fundamentales: 1) entre el capital y el trabajo; 2) entre los capitalistas y otros elementos que tenían derechos sobre la tierra, el trabajo y otros medios de producción y 3) entre competidores dentro de los mismos mercados, mercados de bienes, de mano de obra y de capital. También estos conflictos generaron protestas: huelgas e insurrecciones de los trabajadores, oposición a los cercados, intentos de defender por medios violentos los monopolios de empleo frente a elementos ajenos al sistema. En ocasiones, los conflictos con el Estado y los conflictos con el capital coincidían, como cuando los trabajadores se rebelaban contra un Estado dominado por los capitalistas.

Sin embargo, los caminos y las combinaciones alternativas de la transformación del Estado y del capitalismo influyeron decisivamente en la cronología, la naturaleza, la base social y el resultado de las protestas colectivas. Por ejemplo, las rebeliones campesinas masivas tuvieron lugar principalmente en estados de grandes dimensiones, escasamente capitalizados y con un elevado poder de coerción, mientras que las luchas de los gremios por alcanzar poder y privilegios se concentraron en los territorios en los que se había desarrollado un intenso capitalismo comercial y en los estados capitalizados. En 1493, el pueblo llano de Alsacia, que había sido reducido a la servidumbre por sus ambiciosos señores, enarboló un estandarte que reproducía una pesada bota campesina (una *Bundschuh*) y se rebeló contra sus señores en nombre de la justicia divina (Blickle, 1981, p. XIII). En las regiones agrarias en las que predominaba un régimen señorial opresivo, como lo ilustra la guerra de los campesinos alemanes treinta años más tarde, la *Bundschuh* era absolutamente característica de la época. Pero en el siglo XVII, esa forma de levantamientos campesinos profundamente religiosos e igualitarios había desaparecido ya en casi toda Europa.

Con el paso de los siglos cambiaron totalmente las pautas de los conflictos y rebeliones. A medida que se nacionalizaron la economía y el Estado, en toda Europa se sustituyeron, en cierta medida, las rebeliones locales por las rebeliones nacionales, los movimientos de protesta dirigidos contra los patronos, o en los que éstos actuaban como intermediarios, por la protesta directa dirigida a las autoridades regionales y nacionales, las protestas realizadas en nombre de grupos compactos por las presentadas en nombre de sectores enteros de la población. Aunque esa transición no fue nunca completa, es indudable que se produjo un cambio importante por lo que respecta al origen y al objeto de las protestas colectivas. Así, los trabajadores sustituyeron, al menos en parte, las protestas contra propietarios individuales por las protestas contra los propietarios de toda una industria o contra el Estado nacional. Hay que decir, sin embargo, que la vía hacia la nacionalización no fue la misma en todas partes, sino que dependió de las transformaciones, de signo diverso, que se operaron en relación con el capital y el poder coercitivo.

Los cambios históricos que se registraron en los repertorios de la acción colectiva hicieron cristalizar los efectos del capital y la coerción. En una población homogénea hay un número limitado de formas establecidas para realizar protestas, formas de acción elaboradas en el curso de los enfrentamientos surgidos durante los movimientos de protesta anteriores. Por ejemplo, los trabajadores ingleses del siglo XVIII podían presentar peticiones, practicar ceremonias de humillación, organizar huelgas de toda la comunidad contra los propietarios, apoyar (pero no votar) a los candidatos al Parlamento y protestar por otros

procedimientos. Sin embargo, no podían recurrir a la huelga empresa por empresa, no podían contar con sindicatos, no podían apelar a un partido político y realizar otra serie de acciones que canalizarían las protestas de sus sucesores del siglo XIX Cada una de las acciones vinculaba a grupos particulares de trabajadores con otros grupos específicos: propietarios, otros trabajadores, la *gentry* local, etc. Esas formas de presentar protestas a otros protagonistas, y las respuestas de éstos, constituían el repertorio de acciones colectivas de los trabajadores. Esas acciones colectivas variaban de un grupo a otro, de una región a otra y de uno a otro período.

Los repertorios de acciones colectivas constreñían las acciones de protesta de los trabajadores y de cualquier otro grupo, debido a lo cual determinado tipo de protestas eran viables y otras casi imposibles. Así, los trabajadores del siglo XVIII a los que se ha aludido, poseían medios muy eficaces para sancionar a un posible esquirol en una huelga, pero no tenían a su alcance un procedimiento directo para enfrentarse a un parlamentario detestable. Los enfrentamientos introdujeron nuevos elementos en ese repertorio de acciones colectivas, pues los protagonistas de las protestas o las autoridades introdujeron innovaciones —generalmente ligeras variantes de las formas establecidas de acción— y consiguieron imponer las innovaciones a sus interlocutores. Los enfrentamientos también eliminaron determinados elementos de ese repertorio, pues la represión o el fracaso indicaban que una u otra forma de acción eran ineficaces o demasiado costosas. La historia de las cencerradas (del *rough music* o del *charivari* en Inglaterra y Francia) muestra elementos de innovación y fracaso (Le Goff y Schmitt, 1981; Thompson, 1972). En el contexto de ese tipo de actividades durante el Antiguo Régimen, los jóvenes de una localidad se reunían para golpear las cacerolas, insultar, cantar canciones obscenas o protestar ruidosamente ante la casa de quienes golpeaban a sus esposas, de los adúlteros, de los cornudos, de los ancianos que contraían matrimonio con mujeres jóvenes y de todos aquellos que habían violado el código local de la vida marital. En el siglo XIX esa venerable forma de mofa agresiva de los pecados domésticos que tenía lugar en el ámbito local comenzó a ser utilizada por algunos innovadores en las luchas de la política nacional. Sin embargo, esa utilización en la vida política precedió su rápido declive como medio de manifestar la desaprobación colectiva.

De igual forma, la huelga fábrica por fábrica sustituyó a esa forma de huelga más general en el contexto de la cual un gran número de integrantes de un oficio se reunían a las puertas de la ciudad, deliberaban, iban de taller en taller para hacer salir a los trabajadores, regresaban al límite de la ciudad, formulaban peticiones y enviaban una delegación a parlamentar con los maestros del gremio. En una gran parte de Europa, los trabajadores aprendieron, a través del ejemplo, la organización deliberada y la experiencia local, que las posibilidades de hacer frente a todos los propietarios era cada vez menor a medida que las grandes fábricas y la proletarización sustituían al sistema artesanal de pequeños talleres. Entonces, recurrieron al sistema de imponer el cierre de una sola empresa. Finalmente, los europeos llegaron a considerar normal la huelga en una empresa individual y como excepcional la huelga de todo un ramo industrial.

Sidney Tarrow y Sarah Soule han señalado un nuevo rasgo de la nueva forma de actuar decimonónica: era de tipo *modular* (Tarrow y Soule, 1991). Los métodos del siglo XVIII se adaptaban perfectamente a situaciones particulares como la lucha contra el cercamiento de las tierras comunales (donde frecuentemente se producía el derribo masivo de cercas y la utilización de la tierra) o la ridiculización de un trabajador que trabajaba por menos dinero del que correspondía al salario estipulado (que suponía pasear al transgresor por la ciudad a lomos de un burro exponiéndole a los insultos y a todo tipo de proyectiles). Pero esos métodos no se adaptaban fácilmente a situaciones diversas, mientras que los del siglo XIX servían para cuestiones, grupos o localidades diversas y con frecuencia se generalizaban a escala nacional. Por ejemplo, la asamblea pública, la manifestación y la presentación de quejas servían a intereses muy distintos, pues competidores y enemigos utilizaban exactamente las mismas formas de protesta con la esperanza de vencer a sus adversarios.

Con el desarrollo del capitalismo y la transformación de los estados cambiaron el repertorio de las protestas y la naturaleza y objeto de las mismas, así como la condición de quienes protestaban. Por ejemplo, en aquellos estados en los que además de una economía capitalista relativamente desarrollada había fuertes instituciones representativas nacionales, tomó forma el movimiento social nacional en el siglo XIX. La esencia del movimiento social nacional consiste en plantear exigencias explícitas y públicas a las autoridades nacionales

—generalmente a funcionarios del Estado— en nombre de todo un sector desfavorecido de la población: todas las mujeres, todos los bretones, todos los trabajadores, todos los flamencos, etc. Guarda una fuerte similitud con la campaña electoral. Las diferencias más importantes radican en que el movimiento social nacional puede durar mucho más tiempo que una campaña electoral y en que los grupos bien instalados raramente se unen a la protesta de los movimientos sociales, antes bien son objeto de esas protestas. Aunque con anterioridad a 1800 ocurrieron ocasionalmente procesos similares en momentos de fragmentación provisional de la soberanía, por ejemplo durante las revoluciones inglesa y francesa, de hecho los movimientos nacionales sociales sólo llegaron a ser la forma habitual de protesta en Europa occidental después de las guerras napoleónicas.

El movimiento social nacional surgió de otras formas anteriores de desafío organizado a las autoridades políticas. Cuando los estados presionaban a la población solicitando contribuciones mucho mayores (en forma de impuestos, reclutamiento obligatorio y confiscaciones) al esfuerzo bélico, una serie de figuras políticas descubrieron que era posible convertir la idea, básicamente conservadora, de los derechos populares antiguos en una doctrina progresista de la soberanía popular. Por esa razón, la guerra norteamericana, la Revolución francesa y las guerras napoleónicas dieron un fuerte impulso a esa nueva forma de protesta. Pese a que se introdujeron cambios importantes en cuanto a la forma y la táctica, la innovación perduró hasta la época actual. En Francia, las propias autoridades del Estado participaron en la institucionalización de las prácticas del movimiento social. Mientras la policía y el ejército combatían a los manifestantes callejeros y trataban de encontrar nuevas tácticas de contención, el poder legislativo nacional elaboraba leyes en el marco de las cuales la policía, el ejército y los tribunales podían colaborar para poner límites a la protesta callejera. Pero a través de la represión, la negociación, la contención y la actividad legislativa, las autoridades contribuyeron a canalizar ese movimiento. Además, los esfuerzos realizados para conseguir controlarlo alteraron la organización de las autoridades. Por ejemplo, la creación de fuerzas de policía nacionales aumentó la efectividad del control de las multitudes y del espionaje político, pero también supuso crear una burocracia y adoptar una serie de compromisos con la población que no podían ser fácilmente ignorados.

El movimiento social nacional, tanto en la versión decimonónica como en la del siglo XX, se centra en la interacción entre supuestos portavoces del sector menos favorecido de la población y representantes del poder. Entre sus métodos de acción característicos figuran las concentraciones, manifestaciones, reuniones, presentación de quejas y distribución de propaganda, aspectos todos ellos que encuentran su paralelismo en las campañas electorales. Las más de las veces lleva a cabo su labor a través de organizaciones sociales, asociaciones formadas en torno a un interés concreto y un programa bien definido, aunque a veces cambiante. Ese hecho ha llevado con frecuencia a los estudiosos a considerar erróneamente a las organizaciones como si *fueran* el movimiento. El error es más comprensible porque los organizadores del movimiento social tienen gran interés en presentarse como portavoces de sectores amplios, determinados, duraderos y organizados de la población agraviada. En muchos casos, las organizaciones del movimiento social sobreviven al propio movimiento; muchos de esos movimientos centran su actuación en afirmar la identidad, mantener la estructura organizativa y ejercer una presión política de carácter general.

Habitualmente, los movimientos sociales nacionales se forman mediante coaliciones de organizaciones y redes de activistas, apareciendo nuevas organizaciones y pseudoorganizaciones a raíz de los esfuerzos realizados para movilizar a la población. Históricamente, los tipos de protesta que representan los movimientos sociales son extraordinariamente raros. Si se examinan las situaciones revolucionarias en diferentes regiones de Europa, con anterioridad a 1800 sólo encontramos movimientos importantes de protesta popular contra las autoridades nacionales en el contexto de divisiones prolongadas y profundas como la guerra de los campesinos en Alemania, en 1524-1525. Sin embargo, durante los últimos 150 años han pasado a ser el método habitual por el que el sector menos favorecido de la población hace patentes sus agravios y exigencias. Y, desde luego, han sido eficaces dentro de unos límites. En un momento u otro, han promovido la extensión del sufragio, la ampliación de los beneficios asistenciales y la aparición de nuevos protagonistas políticos en la mayor parte de los países europeos.

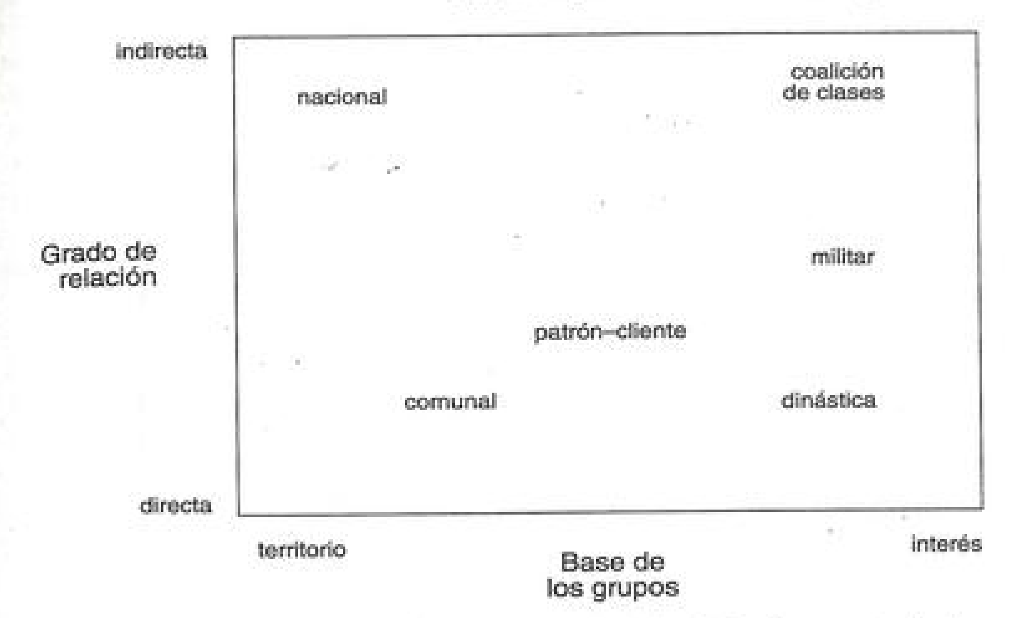
Así pues, las formas de protesta abarcan desde la maniobra más sutil a las revoluciones sociales, desde las formas sofocadas de oposición de la Italia fascista al derrocamiento del poder ruso en Finlandia

tras la primera guerra mundial. En la larga trayectoria que lleva desde 1492 hasta 1992, los cambios más significativos ocurridos en Europa a este respecto fueron la nacionalización de las divisiones que entrañaban los grandes conflictos, la multiplicación de las protestas dirigidas directamente al poder del Estado, la proliferación de bases asociativas para la acción colectiva y la importancia creciente, en la acción colectiva, de las divisiones de clases inherentes al capitalismo. Todos esos cambios derivaron directamente del desarrollo de estados consolidados y de la expansión del capitalismo.

Tipos de situaciones revolucionarias

Hubo también profundos cambios que alteraron la naturaleza de la revolución. En la Europa del siglo XVI se produjeron frecuentes revoluciones, y otro tanto cabe decir respecto a la Europa del siglo XX, pero estas últimas eran de naturaleza totalmente distinta. En una simplificación bidimensional, las distintas formas de situaciones revolucionarias se podrían definir en función de las coaliciones revolucionarias que implicaban. Los distintos tipos surgen del entrecruzamiento de dos dimensiones: 1) la *base de la formación del grupo*: territorio o interés; 2) el *grado de relación entre los miembros*: directa o indirecta. La figura 2.1 resume esas relaciones.

Se trata, naturalmente, de procesos continuos, que representan el grado relativamente directo de las relaciones entre los miembros del grupo y el peso relativo de los factores territorio e interés. Por ejemplo, en situaciones revolucionarias del tipo patrono-cliente, comunidades enteras con un escaso grado de cohesión se unieron a sus patronos, que eran grandes señores, para plantear una resistencia encarnizada a la autoridad real. Conjugaron las bases de conexión territorial y de interés. Encontraremos numerosas alianzas de este tipo durante los siglos XVI y XVII, para verlas desaparecer en el XVIII. La formación de juntas militares fue más frecuente durante el siglo XIX en la península ibérica, en los Balcanes y en otras zonas de Europa, por razones que serán analizadas. Por lo general, realizaban su intento de hacerse con el poder en alianza con una facción dinástica o con un sector de la burguesía, progresista o conservador. Implicaban la existencia de un interés común, pero las conexiones entre las diferentes unidades mili-



2.1. Tipos de coaliciones revolucionarias en función de los factores territorio e interés y del grado de relación entre los protagonistas.

tares que realizaban el trabajo sucio de conquistar el poder se establecían habitualmente de forma indirecta, a través de oficiales ambiciosos.

La resistencia de comunidades enteras a los recaudadores de impuestos, que fue habitual durante el período de formación de grandes ejércitos entre los siglos XVII y XIX, era de carácter comunal: relativamente simple en su estructura, unificada en gran medida por el territorio y los lazos sociales que generaba. En general, las revoluciones comunales las protagonizaban miembros de comunidades constituidas, como aldeas de campesinos, gremios artesanales y órdenes religiosas. Muchas situaciones revolucionarias adoptaron una forma comunal, pero nunca se produjo un resultado revolucionario puramente comunal. Los casos más próximos a ese modelo fueron las luchas triunfantes para establecer iglesias protestantes locales durante el siglo XVI. Pero, incluso en esas ocasiones, fue la protección de grandes señores o de oligarquías urbanas la garantía del éxito.

Las situaciones revolucionarias dinásticas eran protagonizadas por los grandes señores —especialmente aquellos con un derecho dinásti-

co a ocupar el poder— y sus clientelas. Frecuentemente, intervenían para intentar conquistar el poder nacional o para proteger sus privilegios frente al poder real. En las revoluciones dinásticas se enmarcan las repetidas guerras de sucesión en las que se vieron envueltas las monarquías europeas hasta el siglo XVIII. En muchos casos, las dinastías carecían de una base territorial bien definida, pero tenían conexiones que desbordaban ampliamente las fronteras nacionales. Cuando confluían las revoluciones comunales y las revoluciones dinásticas se convertían en movimientos extraordinariamente fuertes.

Las revoluciones que implicaban una coalición de clases se ajustan más a los modelos marxistas clásicos, pero en ellas hay que incluir muchos conflictos en los que tomaban parte elementos importantes de las clases dirigentes. En ese modelo hay que incluir la Fronda francesa, la rebelión holandesa contra España y las grandes revoluciones inglesa, francesa y rusa. Finalmente, las revoluciones nacionales tenían en común con las revoluciones comunales el hecho de que las protagonizaban poblaciones contiguas y los lazos que creaba la contigüidad, pero tenían lugar a una escala más amplia y con una división de funciones más compleja entre intelectuales, activistas políticos, miembros del ejército y personas comunes de una supuesta nacionalidad. Tanto las revoluciones que implicaban una coalición de clases como las revoluciones nacionales se generalizaron y triunfaron con mayor frecuencia, porque fueron favorecidas por la forma en que se modificaron la organización de los estados y el sistema de estados.

El esquema bidimensional clasifica las coaliciones que forman *situaciones* revolucionarias antes que aquellas que procuran resultados revolucionarios; identifica los principales alineamientos entre los oponentes, destacando a quienes se oponen al control del Estado. En muchas ocasiones, los resultados diferían por completo de las divisiones con las que comenzaban las revoluciones, como lo ilustran los conflictos de 1826 en el imperio turco. Comenzaron con la resistencia de los jenízaros a las medidas decretadas por el sultán para limitar su enorme poder, pero terminaron con la masacre y disolución de los jenízaros. De la misma forma, la disolución de la Unión Soviética en 1991 comenzó con un intento de golpe por parte de elementos centralizadores, defensores del antiguo Estado burocrático, pero terminó con el estallido de una serie de revoluciones nacionales.

Cada época —o antes bien, cada conjunto de condiciones políticas, económicas y culturales— generó un tipo de revolución, de protagonistas revolucionarios y de resultados de la acción revolucionaria. Así, durante una gran parte de los siglos XVI y XVII, el hecho de que las aspiraciones al poder del Estado dependieran de dinastías únicas y de sus clientelas significó que los gobernantes fueran vulnerables a las perturbaciones de la línea sucesoria (la muerte de un rey sin un heredero masculino adulto, la rivalidad entre posibles herederos), ante la competencia por hacerse con sus clientelas en la que entraban otros patronos (un futuro rey ofrece nuevos privilegios) o ante la resistencia a unas exigencias excesivas (oposición a pagar nuevos impuestos para las guerras de la monarquía, que debía haber financiado sus ejércitos con los ingresos ordinarios). En cualquiera de esas circunstancias, quienes detentaban el poder y sus clientelas tenían razones para aspirar al poder del Estado, los grupos comunales establecidos y sus clientelas tenían razones para rechazar la autoridad real y cada uno de esos grupos tenía razones para aliarse con el otro.

Sin embargo, los siglos XVII y XVIII contemplaron la consolidación general del poder real en una gran parte de Europa. Durante el período en el que aumentaron rápidamente la intensidad, los gastos y la profesionalización de las actividades militares, los gobernantes intentaron subordinar a la nobleza y a las ciudades, que hasta entonces gozaban de gran autonomía, y trataron también de apoderarse de sus ejércitos. Asimismo, procuraron conseguir que los financieros les prestaran dinero y recaudaran sus impuestos y los ejércitos de mercenarios devastaron la tierra y expoliaron a las ciudades y a sus habitantes, mientras aumentaban vertiginosamente los impuestos. Cada una de esas medidas amenazaba con provocar la resistencia colectiva, especialmente si las demandas del Estado desbordaban los recursos disponibles, ya fuera porque el crecimiento de los ingresos por habitante se había desacelerado o porque las exigencias del Estado aumentaban muy rápidamente. En esos casos, toda una clase social o todo un sector de la población con lazos comunes sufría simultáneamente la presión del Estado y era muy probable que se rebelara. Paradójicamente, la tendencia de los estados a imponer el sistema de gobierno directo favoreció que en las situaciones revolucionarias predominaran las conexiones indirectas entre los protagonistas. A escala nacional, sólo los grupos vinculados por intermediarios, activistas y coaliciones podían conquistar el poder del Estado.

Consolidación, nacionalismo y revolución

¿Qué relación puede establecerse entre las revoluciones que implican una coalición de clases, las revoluciones nacionales y la consolidación de los estados? Como se ha visto anteriormente, allí donde se crearon grandes ejércitos permanentes cuyo material humano era aportado por la población nacional, el Estado vio cómo se expandían aceleradamente su alcance y dimensión. Los gobernantes circunscribieron sus territorios nacionales y forzaron la utilización de los recursos en el interior de las fronteras, controlando las existencias y los flujos del capital, la mano de obra, las mercancías y el dinero. En cooperación con aquellas clases que también estaban interesadas en la identidad nacional, los gobernantes intentaron homogeneizar las poblaciones nacionales imponiendo una lengua común, creando sistemas nacionales de educación y dando forma y difusión a una herencia cultural común.

Se formó así el mito y, luego, la realidad parcial del Estado-nación, a medida que otros estados y los pactos internacionales reforzaban la legitimación de los estados sobre la base de la identidad compartida. Al mismo tiempo, los conflictos en torno a la construcción de un ejército hicieron necesario negociar con amplios sectores de la población y determinaron la ampliación del concepto de ciudadanía y el desplazamiento hacia la órbita del Estado de numerosas actividades, cuestiones y disputas de las que hasta entonces apenas se había ocupado. Como consecuencia de esa expansión y homogeneización, aumentaron de forma evidente las ventajas de quienes controlaban el Estado nacional con respecto a aquellos que no lo hacían. Ello se aplicaba a un amplio espectro de grupos de intereses, entre ellos los depositarios del poder regional que habían actuado hasta entonces como representantes de grupos culturales con una personalidad propia. Aumentaron así rápidamente los incentivos para aspirar a una parte del poder del Estado o a conseguir un Estado separado, y todo ello fomentó las movilizaciones revolucionarias.

Dos fenómenos distintos fueron designados con el término «nacionalismo». Uno podría denominarse nacionalismo *dirigido por el Estado* y el otro nacionalismo *en busca de un Estado*. En el primero de ellos, los gobernantes perseguían agresivamente un interés nacional definido mientras planteaban, con éxito, exigencias a una ciudadanía definida en términos amplios, en nombre de toda la nación y con exclusión de otras lealtades que pudieran tener los ciudadanos. En el segundo tipo de nacionalismo, los representantes de una población que no ejercía un control colectivo sobre un Estado aspiraban a conseguir un estatuto político singular o incluso un Estado separado. A veces, ambos tipos de nacionalismo confluían en el irredentismo, la exigencia de que unos territorios ocupados por poblaciones emparentadas en Estados adyacentes se incorporaran a un supuesto Estado padre. En cualquier caso, ambos fenómenos coincidían en insistir en que los estados debían corresponder a pueblos homogéneos, que los pueblos homogéneos tenían intereses políticos peculiares, que los miembros de pueblos homogéneos tenían un profundo deber de lealtad hacia los estados que encarnaban su patrimonio y que, en consecuencia, el mundo debía estar formado por estados-nación constituidos por ciudadanos imbuidos de un intenso patriotismo.

El nacionalismo europeo que nació en el siglo XVIII tenía sus precedentes. La idea de que la nación existía y debía tener prioridad sobre otras lealtades tenía una larga historia, asentada en las críticas de los estados existentes (Greenfeld, 1990; C. C. O'Brien, 1989). Ahora bien, la cuestión que aquí centra nuestro interés es cómo esa idea pasó a ser un programa —o, por mejor decir, un conjunto de programas enfrentados— que concitó el apoyo de millones de personas y que fue la justificación de centenares de situaciones revolucionarias europeas.

Durante la Reforma protestante del siglo XVI, coincidieron muchas veces las reivindicaciones de autonomía religiosa y política, especialmente en aquellas zonas del Sacro Imperio Romano y de las posesiones de los Habsburgo donde los municipios o los príncipes desafiaron a su soberano al oponerse a su aliado, el papa de la Iglesia católica. En Rusia, Serbia y Grecia, las iglesias ortodoxas establecidas favorecieron el poder del Estado, de la misma forma que las iglesias protestantes nacionales fortalecieron posteriormente los estados de Inglaterra, Escocia, Holanda y Escandinavia. La religión continuó suscitando la solidaridad en la comunidad y la rivalidad política en los estados. Ahora bien, la lengua común, la tierra y el mito sobre los orígenes adquirieron preeminencia sobre la religión como base de las reivindicaciones revolucionarias.

Desde 1789, los gobernantes europeos ejercieron cada vez mayor presión sobre los ciudadanos en nombre de la nación, insistiendo al

mismo tiempo en que en el orden de prioridades de los ciudadanos la nación debía predominar sobre otros intereses. Los estados comenzaron a aplicar programas de adoctrinamiento normativo con la finalidad de homogeneizar las diferentes formaciones que los constituían y activar sus compromisos nacionales. Aumentó así la uniformidad cultural dentro de los estados, pero también la peculiaridad cultural de los estados, y los portavoces de las minorías nacionales reclamaron un tratamiento político singular o incluso estados separados, con mucha mayor frecuencia que antes de 1789. Así, aunque el período de 150 años que comienza en 1789 es considerado como la época de las revoluciones de clase por excelencia, incluso en dicho período la mayor parte de las conquistas por la fuerza del poder del Estado se produjeron en nombre de poblaciones oprimidas, concentradas desde el punto de vista geográfico (Luard, 1987, pp. 54-58).

¿Por qué floreció el nacionalismo? Floreció porque frente a unas contiendas bélicas que exigían que las poblaciones nacionales aportaran mayores recursos que antes, tanto en hombres como en suministros y dinero, las mujeres y (en una medida abrumadora) los hombres que gobernaban los estados europeos reclamaron y acumularon un volumen mucho mayor de recursos que antes, encontraron ventajoso homogeneizar y comprometer a sus poblaciones, tomaron las medidas necesarias para ello, se aliaron con sectores de la burguesía que compartían el interés de promover su concepto de identidad nacional sobre las identidades locales, redujeron la influencia de los intermediarios culturales como tales y, por consiguiente, ahondaron las diferencias relativas a la cuota de poder entre aquellos cuya cultura ocupaba un lugar predominante en el Estado y aquellos otros a cuya cultura no se le reservaba una posición tan ventajosa.

Este amplio proceso conducido desde arriba constituyó el nacionalismo dirigido por el Estado, que pasó a ser la dinámica política normal en un mundo en el que hasta hacía poco tiempo había predominado una política totalmente diferente de intereses dinásticos, gobierno indirecto, representación virtual, intermediación entre múltiples grupos étnicos y profundo particularismo. El nacionalismo dirigido por el Estado activó la formación, la movilización y las actitudes reivindicativas de los grupos étnicos. Y lo hizo legitimando el poderoso principio de correspondencia entre población y Estado, incrementando enormemente las ventajas que suponía para cualquier grupo controlar su propio Estado (por no hablar de las desventajas de no controlar el Estado), situando, más frecuentemente, a minorías culturales de un Estado junto a mayorías culturales de los estados vecinos, reduciendo la tolerancia del Estado respecto a los enclaves culturales singulares e intentando la asimilación forzosa de las minorías, lo cual amenazó la posición de las *intelligentsias* y burguesías regionales como intermediarios culturales. Las modalidades precisas de movilización y resistencia fueron distintas según la composición de clases de la población, el grado de urbanización, la amplitud y multiplicidad de las diferencias culturales y la virulencia de los intentos de asimilación. Sin embargo, en toda Europa, cuando los grupos que controlaban el aparato del Estado pusieron en marcha campañas de homogeneización y asimilación, hubieron de afrontar no sólo amplios movimientos de resistencia, sino nuevas exigencias de autonomía política, e incluso de independencia. El nacionalismo dirigido por el Estado generó el nacionalismo en busca de un Estado.

Acción colectiva, conflicto y revolución

Así pues, las dos formas de nacionalismo fueron, en los siglos XIX y XX, importantes puntos de partida de la acción colectiva y el enfrentamiento en Europa. Al mismo tiempo, las divisiones que había producido el capitalismo agrario e industrial adquirieron mayor importancia como fundamentos de la reivindicación y otras formas de asociación especializada cobraron mayor peso como vehículos políticos. La consecuencia fue que las revoluciones por razones de interés, las revoluciones nacionales y diferentes combinaciones de ambas sustituyeron a las revoluciones dinásticas y comunales que habían predominado entre los siglos XVI y XVIII.

Recordemos la definición de revolución que habíamos establecido: transferencia por la fuerza del poder estatal, proceso en el cual al menos dos bloques diferentes tienen aspiraciones, incompatibles entre sí, a controlar el Estado, y en el que una fracción importante de la población sometida a la jurisdicción del Estado apoya las aspiraciones de cada uno de los bloques. Recordemos también que se pueden señalar dos elementos en una revolución en sentido pleno: la situación revolucionaria y el resultado revolucionario. Las condiciones inmediatas en cada uno de los casos son las siguientes:

Situación revolucionaria	*Resultado revolucionario*
1 La aparición de contendientes o coaliciones de contendientes, con aspiraciones exclusivas, incompatibles entre sí, al control del Estado o de una parte del mismo.	1 Defecciones de miembros de la comunidad política.
2 Apoyo de esas aspiraciones por parte de un sector importante de los ciudadanos.	2 Adquisición de un ejército por parte de las coaliciones revolucionarias.
3 Incapacidad —o falta de voluntad— de los gobernantes para suprimir la coalición alternativa y/o el apoyo de sus aspiraciones.	3 Neutralización o defección del ejército del régimen.
	4 Control del aparato del Estado por miembros de una coalición revolucionaria.

Los cambios trascendentales que se registraron en la organización social europea entre 1492 y 1992 alteraron las condiciones de todo ese conjunto de causas inmediatas. Por ejemplo, en la época en que existían estados dinásticos, los contendientes con aspiraciones exclusivas, incompatibles entre sí, al control del Estado aparecían frecuentemente a la muerte del soberano. Hermanos, hijos ilegítimos, sobrinos, primos y pretendientes reivindicaban la corona. La cuestión era si un sector de los ciudadanos (especialmente, en este caso, la nobleza) apoyaría esas aspiraciones y si quienes apoyaban una opción diferente les derrotarían. Sin embargo, cuando declinó el orden dinástico lo hizo también esa fuente de situaciones revolucionarias.

También la adquisición de un ejército por parte de las coaliciones revolucionarias y la neutralización del ejército de un gobierno se hizo mucho más difícil con la desmilitarización de los grandes señores, la desaparición de las fuerzas mercenarias, el desarme de los ciudadanos y la creación de ejércitos permanentes bajo el control central. Así, la posibilidad de que se produjera la transferencia revolucionaria del poder dependía cada vez más de circunstancias excepcionales, como el fin de una guerra en la que el Estado salía derrotado; la defección de las tropas gubernamentales era cada vez más crucial por lo que respecta a las situaciones revolucionarias. Por otra parte, la aparición

de una burguesía industrial y de un proletariado urbano, organizados en sociedades de asistencia mutua, clubes políticos y otro tipo de asociaciones, hizo mucho más probable que un sector significativo de la población planteara reivindicaciones revolucionarias o las apoyara. Cada uno de los cambios de importancia que se han señalado anteriormente en los dominios de la economía, la cultura y la estructura política afectaron a la probabilidad y a la naturaleza de la revolución.

Además, las transformaciones que influyeron en la incidencia de la revolución modificaron los conflictos populares en general. Un tipo de conflictos desembocaba en el otro. Así, los nacionalistas se manifestaban con frecuencia y a veces creaban situaciones revolucionarias; los campesinos que se movilizaban por motivos religiosos en ocasiones atacaban a sus señores e incluso se enfrentaban con las tropas reales; los radicales organizados, con frecuencia se reunían para denunciar al régimen y, de vez en cuando, participaban en las insurrecciones. Pero esto ya no debería constituir una sorpresa. Las revoluciones son parte integrante de los conflictos colectivos. Las mismas condiciones que transforman estos conflictos colectivos modifican las condiciones de las situaciones revolucionarias y los resultados revolucionarios. En el próximo capítulo se documentarán y compararán esos cambios en tres regiones muy diversas de Europa en el período transcurrido entre 1492 y 1992, concediendo la mayor atención a los Países Bajos (especialmente en sus luchas revolucionarias de 1550-1650) para contrastarlos luego con la península ibérica y los Balcanes.

CAPÍTULO TRES

Revoluciones, rebeliones y guerras civiles en los Países Bajos y en otras partes

Los Países Bajos, patria de la revolución burguesa

EN 1492, QUIEN VISITABA LOS PAÍSES BAJOS BORGOÑONES contemplaba una de las zonas más activas del mundo por lo que respecta al comercio y la cultura. Se hallaba también en un centro importante de poder político, un poder segmentado de forma peculiar. Al igual que en una gran parte del centro y norte de Italia, en Suiza y en el sur de Alemania, los municipios y su *hinterland* constituían las unidades esenciales de gobierno, pese a que, nominalmente, estuvieran integradas en otras unidades políticas más amplias. En 1492, los Países Bajos formaban parte, al menos nominalmente, de un imperio llamado Borgoña. Antes de morir en combate en Nancy, en 1477, el duque Carlos el Temerario había conseguido adueñarse no sólo de Borgoña y gran parte de Lorena, sino también de Flandes, Brabante, Luxemburgo, Holanda, Zelanda y Hainaut, es decir, el territorio correspondiente a los deltas del Rin, el Escalda y el Mosa. Los dominios de Carlos el Temerario en los Países Bajos coincidían aproximadamente con los territorios actuales de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, aunque con muy importantes excepciones. En efecto, aunque incluían una parte sustancial de lo que es en la actualidad el norte de Francia, quedaban fuera de ellos Frisia y Groninga y los obispados independientes de Overijssel, Utrecht, Lieja, Tournai y Cambrai.

En la actualidad, el Benelux tiene la reputación de ser un territorio en el que reina la paz, a pesar de que se producen enfrentamientos recurrentes a propósito de la lengua, la política social y la inmigración. En comparación con Yugoslavia, por ejemplo, los ciudadanos de esos tres pequeños y acaudalados estados parecen inclinados a resolver sus diferencias sin recurrir a la violencia. Sin embargo, si se contemplan los Países Bajos desde una perspectiva cronológica más amplia, se advierte que las guerras, rebeliones y revoluciones han sido numerosas. En el siglo XV, los Países Bajos borgoñones ya habían conocido una larga sucesión de rebeliones y durante los dos siglos siguientes fueron testigo de una de las más virulentas luchas revolucionarias que se produjeron en Europa; luego, en los siglos XVIII y XIX, la historia de los estados que allí se formaron es una historia de continuos conflictos. Sin duda, las formas, circunstancias y resultados de las situaciones revolucionarias que vivieron los Países Bajos cambiaron profundamente a lo largo de los cinco siglos transcurridos a partir de 1492. Ello es lo que induce a examinarlos con toda atención.

En el presente capítulo se examina la cronología de las múltiples revoluciones ocurridas en los Países Bajos entre 1492 y 1992, para luego analizar los cambios que experimentó la revolución en dos zonas de Europa muy diferentes: la península ibérica y los Balcanes. Así pues, se compara la evolución de la revolución en una región de alta densidad de capital (los Países Bajos) con una región en la que existía un elevado grado de coerción (los Balcanes) y otra en la que predominaba la coerción capitalizada (la península ibérica). En cada una de dichas regiones se produce el paso de unas situaciones revolucionarias de carácter comunal, dinástico y dominadas por el binomio patrono-cliente a otras en las que predominan el elemento nacional y las coaliciones de clases. Ahora bien, las trayectorias y la cronología son muy diversas en función de las distintas combinaciones que se producen entre capital y coerción. En la península ibérica y en los Balcanes, aunque no en los Países Bajos, se dan también las condiciones para que los militares profesionales participen activamente en las situaciones revolucionarias.

En este capítulo se establecen tres conclusiones fundamentales. En primer lugar, la naturaleza de las revoluciones experimentó una importante transformación durante el período de quinientos años a que se hace referencia, en consonancia con los mismos procesos que desembocaron en la creación de estados consolidados. En segundo lugar, la organización e incidencia de la revolución variaron notable-

mente de una a otra región de Europa, especialmente en función del predominio relativo del capital y de la coerción en cada región. En tercer lugar, las revoluciones y otros conflictos políticos no revolucionarios son diferentes de una a otra región y de un período a otro. La experiencia de los Países Bajos ilustra ampliamente la relación que existe entre la revolución y la formación del Estado y los cambios que experimentaron las situaciones revolucionarias de un período a otro, pero apenas aporta información sobre la variación regional en el conjunto de Europa. Para analizar este último aspecto, será necesario establecer comparaciones con las penínsulas ibérica y balcánica.

La batalla de Nancy puso fin a la formación de un pequeño imperio por parte de Carlos el Temerario. Lanceros suizos, aliados con ejércitos franceses, rechazaron el ataque de la caballería de Carlos y se apoderaron de su artillería. Su muerte sin dejar un heredero masculino claro dividió sus dominios: Borgoña propiamente dicha revirtió directamente a la corona francesa, Lorena recuperó su autonomía parcial como ducado de Francia y los magnates de las provincias litorales ofrecieron su lealtad a la hija de Carlos, María. En su oposición a la autoridad central, las zonas que Carlos el Temerario había agrupado por medio de la fuerza exhibieron una solidaridad de la que raramente hacían gala para una cooperación positiva. A partir de ese momento, las provincias de los Países Bajos descubrieron dos deseos contradictorios: por una parte, tener un soberano cuyas conexiones internacionales les protegieran de la invasión; por otra, conservar una gran libertad de acción en los asuntos comerciales y regionales. En 1477 y ante la inexistencia de un gobernante fuerte, los Estados Generales de los Países Bajos se reunieron por iniciativa propia, promulgaron un Gran Privilegio que reconocía los derechos de las ciudades y provincias que los constituían, crearon un efímero (aunque representativo) consejo de gobierno y aprobaron la utilización del holandés en los actos oficiales. Al mismo tiempo, decidieron mantener a María bajo un respetuoso pero firme arresto domiciliario en Gante.

María (que tenía entonces 19 años), amenazada por la invasión francesa y presionada por los Estados Generales, no tardó en contraer matrimonio con Maximiliano, heredero de los territorios Habsburgo. Margarita de York (tercera esposa de Carlos el Temerario y madrastra de María de Borgoña) era hermana del monarca inglés Eduardo IV y su intervención permitió establecer una alianza formal con

Inglaterra en 1481. El proceso de formación de la herencia de la joven María fue, pues, el que modeló el destino de unas naciones. Las guerras con Francia y los enfrentamientos con los poderes regionales continuaron durante quince años. En 1483, Maximiliano estaba ya en guerra con Gante y Brujas. Ahora bien, hacia 1492 los Habsburgo ejercían ya el control sobre la mayor parte de la región a través de una serie de gobernadores generales permanentes. El último gran rebelde, Felipe de Cleves, depuso su resistencia y partió hacia Francia en octubre de ese año. Durante algunos decenios la mayor parte de los Países Bajos tuvieron un cierto grado de personalidad y unidad. Si Borgoña había dejado de ser independiente, los Países Bajos borgoñones eran ahora un segmento relativamente coherente de los dominios de los Habsburgo y estaban estrechamente vinculados al Sacro Imperio Romano.

Ese segmento no era sólo coherente, sino también floreciente. Sus artesanos trabajaban la lana procedente de España e Inglaterra y enviaban sus tejidos hacia diversas partes del mundo conocido. Sus comerciantes dominaban el lucrativo comercio del Báltico y estaban comenzando a competir con sus homólogos españoles y portugueses por el comercio del océano Índico. Cuando Hugo Grocio publicó su famoso tratado sobre la libertad de los mares en 1609, lo subtituló *El derecho que asiste a los holandeses de participar en el comercio de las Indias orientales*. Aunque las ciudades de los Países Bajos estaban comenzando entonces a tener una presencia importante en ese comercio, ya servían como centro de distribución para todo el mundo.

Los Países Bajos, una región con una agricultura eficaz y comercializada, una amplia red de comunicaciones, un veloz sistema de transporte fluvial y una producción textil en pequeña escala pero bien organizada, ejemplificaban la conjunción de capitalismo y Renacimiento. Hablar de Renacimiento supone hacer referencia a las regiones urbanas que circundaban los Alpes desde el norte de Italia hasta los Países Bajos. En el siglo XV, la vitalidad renacentista se desplazó hacia el norte. Después de todo, hacia 1492 artistas como El Bosco, Sebastian Brant, Hans Memling, Gerard David y Quentin Metsys pintaban sus obras maestras en las ciudades de los Países Bajos borgoñones o en sus proximidades. Como ponen frecuentemente de relieve sus retratos de dignatarios y la inclusión de sus mecenas en composiciones religiosas en las que aparecen como figuras arrodilladas en actitud pia-

dosa, sus patronos pertenecían a la burguesía y al patriciado acomodados y cultivados. En conjunto, la nobleza territorial, el sector más importante del clero, la oligarquía urbana y, especialmente, la burguesía comerciante de los Países Bajos disfrutaban de un enorme poder en el mundo europeo del capital y el comercio.

En una gran parte de la región, el pueblo común hablaba, en sus actividades cotidianas, diversos dialectos que luego se consolidarían en el holandés. Sin embargo, en Flandes y en el sur de Brabante, los patricios solían utilizar el francés, mientras que sus vecinos burgueses del norte estaban sustituyendo el latín por el holandés en la administración y en la actividad intelectual. Al sur de una línea que unía aproximadamente Aquisgrán con Calais, el pueblo común hablaba, por lo general, diversas variantes del francés, entre las que destaca el valón. En el sur de los Países Bajos, a la geografía lingüística correspondía una orientación mucho más clara hacia Francia y una división política más intensa sobre la lengua. En Amberes y más al norte persistieron durante más tiempo los lazos con Inglaterra, lazos que se hicieron más intensos cuando aumentó el volumen del comercio anglo-holandés y proliferaron las conexiones dinásticas con los ingleses. Pese a las diferencias existentes entre el norte y el sur, todas las ciudades de los Países Bajos mantenían una estrecha relación gracias al intenso intercambio de productos, capital, personas e información. Además, sus comerciantes tenían algunos conocimientos de francés o de inglés y estaban familiarizados con el bajo alemán, que era la *lingua franca* comercial en el gran triángulo que formaban los Países Bajos con Escandinavia y el sur de Alemania. Convirtieron a los Países Bajos borgoñones en una gran encrucijada europea.

Dadas las extensas redes comerciales existentes y los *hinterlands* agrícolas con que contaban, en 1492 las ciudades europeas de 10.000 o más habitantes ocupaban un lugar destacado en la vida del continente. En el conjunto de Europa había más de 150 ciudades de tales características. En las postrimerías de la centuria, las ciudades de los Países Bajos con 10.000 habitantes o más eran Amsterdam, Amberes, Brujas, Bruselas, Delft, Dordrecht, Gante, Gouda, Groninga, Haarlem, 's-Hertogenbosc, Leiden, Lovaina, Lieja, Lille, Maastricht, Mechelen, Mons, Nimega, Tournai, Utrecht, Ypres y tal vez Valenciennes. Un siglo antes, Gante y Brujas formaban el núcleo de un gran sistema comercial. Amberes había pasado al primer plano más recientemente y en el norte un grupo de ciudades próximas a Amsterdam experimentaban un crecimiento todavía más rápido. Los Países Bajos borgoñones aglutinaban casi una sexta parte de las ciudades europeas en una zona que abarcaba la centésima parte del territorio continental y un 25 por 100 de su población. El 18,5 por 100 de la población de la región vivía en ciudades de 10.000 habitantes o más, porcentaje que era, con mucho, el más elevado de todas las grandes regiones europeas (De Vries, 1984, p. 39; véase también Prevenier y Blockmans, 1985, p. 392).

Las luchas políticas en los Países Bajos

Una densidad urbana tan elevada induce a pensar que la soberanía política de la región estaba muy fragmentada y que su burguesía era vigorosa e influyente. Así ocurría, pese a la existencia de una administración borgoñona. La burguesía borgoñona pretendía ampliar su influencia desde las ciudades hacia su *hinterland*, y se oponía a todo lo que no fuera una consolidación provisional del poder de las autoridades superiores sobre las ciudades. Estructuró un sistema descentralizado de gobierno en el que los municipios y las entidades de ellos dependientes, gobernados por oligarquías locales, constituían las unidades esenciales, mientras que las provincias eran federaciones de municipios y el Estado regional tenía sólo una importancia marginal. Además, a nivel provincial, los burgueses de Holanda (la provincia dominante del norte) crearon un sistema de finanzas públicas mediante títulos de la renta (*renten*), asegurado por futuros ingresos fiscales específicos que se convirtió en la base de un sistema barato y seguro de crédito en gran parte de los Países Bajos. La fiscalidad que gravaba la floreciente actividad comercial permitió a los holandeses evitar la bancarrota y el envilecimiento de la moneda, expedientes a los que recurrieron frecuentemente monarquías en dificultades como Francia y España. El sistema fiscal permitía a los holandeses financiar sus guerras con rapidez y eficacia y sirvió de modelo para las finanzas públicas británicas cuando Guillermo de Orange se convirtió en rey de Inglaterra en 1689 (Tracy, 1985; 't Hart, 1989, 1990, 1991).

El único problema radicaba en que elementos intrusos como los duques de Borgoña seguían intentando dominar y administrar la prós-

pera región para sus propios fines dinásticos, pero la burguesía sólo esperaba obtener de los grandes poderes territoriales la garantía de que la protegerían de la invasión y la ocupación. Además, esos príncipes pretendían reclutar y financiar ejércitos profesionales a expensas de la población local, mientras que, excepto durante las invasiones, la burguesía prefería las milicias urbanas y las flotas que podían utilizarse para una doble finalidad. Los príncipes se especializaban en la organización y el uso de la fuerza militar y los comerciantes en la protección del comercio. Príncipes y burgueses tenían intereses encontrados.

Como consecuencia, en esa región mercantil estallaron repetidas rebeliones y una serie de revoluciones, entre 1477 y 1847, instaurándose luego un sistema político liberal burgués, relativamente pacífico, aunque conflictivo. Durante los siglos XV y XVI, los enfrentamientos fueron constantes. Por ejemplo, en 1484 Maximiliano intentó presionar a sus supuestos súbditos ordenando que todos los comerciantes extranjeros abandonaran el gran centro de Brujas. Entonces, los dignatarios de Brujas se alinearon al lado de los enemigos de Maximiliano. En 1488, fuerzas rebeldes a cuyo frente se hallaba Felipe de Cleves mantuvieron prisionero a Maximiliano en Brujas durante cuatro meses, obligándole a ceder el gobierno de Flandes a un consejo de regencia del que formaban parte dignatarios regionales y su esposa María.

En aquella ocasión, Maximiliano recuperó el poder. En el decenio de 1490, Flandes y los Países Bajos borgoñones iniciaron un período de tres décadas de expansión económica y reconstrucción política, durante el cual no estallaron rebeliones importantes contra los Habsburgo salvo en Güeldres y Frisia, zonas cuya soberanía aún se disputaba fuertemente. En 1492 un observador podía haber profetizado plausiblemente la integración de los Países Bajos en otro imperio, el mayor que había de conocer Europa desde los tiempos de Roma, un imperio Habsburgo que se había formado por matrimonio, por herencia y por conquista. Felipe el Hermoso, hijo de María y de Maximiliano, contrajo matrimonio con Juana, hija de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Juana iba a pasar una gran parte de su vida encerrada por su locura, pero antes de ello dio a luz a Carlos de Luxemburgo (conocido también como Carlos de Gante), que llegaría a ser el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano, autoridad suprema de todos los Habsburgo. Carlos V hubo de vencer no pocas resistencias para establecer su dominio. Por ejemplo, en 1539, la burguesía de Gante se rebeló, al amparo de un fuerte apoyo popular, contra la imposición de gravámenes dictados por el emperador al negarse la población a prestar el servicio militar. La población se declaró dispuesta a suministrar soldados, pero no dinero.

Sin embargo, Carlos V necesitaba dinero para poder formar su propio ejército y no tener que confiar en unas tropas que dependían de unos súbditos poco dispuestos a colaborar con él. Muy pronto regresó a los Países Bajos desde España con gran fasto, acompañado de casi 5.000 soldados para sofocar la resistencia de sus oponentes. El emperador hizo ejecutar a nueve de los rebeldes, suspendió los privilegios de la ciudad, retiró las campanas de su campanario, confiscó la artillería de Gante, derribó las puertas, rellenó el foso que rodeaba la ciudad, estableció una guarnición real... y recaudó el dinero que había exigido. Pero Carlos V y sus tropas no tenían el don de la ubicuidad y en muchas ocasiones el emperador tuvo que recurrir a la negociación para hacer frente a la resistencia.

En 1548 Carlos V anexionó todas las provincias de los Países Bajos al círculo borgoñón del imperio. Durante el reinado de Carlos V, la administración de los Países Bajos estuvo en manos de una gobernadora, miembro cercano de su familia, mientras en cada provincia había un gobernador subordinado (un estatúder: *Stadhouder*, literalmente 'lugarteniente') que representaba al poder central. Carlos V, nacido en los Países Bajos y cuya lengua materna era el flamenco, consiguió controlar desde Madrid a la burguesía y a la nobleza de la región hasta su abdicación en 1555. Luego, cuando su hijo Felipe II, nacido en España, asumió el poder, estallaron nuevos enfrentamientos.

Durante el reinado de Felipe II, la población de las ciudades del norte, al igual que habían hecho sus vecinos alemanes anteriormente, se convirtieron en masa al protestantismo, abrazando su variante calvinista. Fuera de España e Italia, el protestantismo, en una u otra de sus diferentes versiones, ejercía un gran atractivo popular en una gran parte de la Europa católica. Por ejemplo, en Polonia-Lituania y en Livonia fueron muchos los que lo abrazaron a principios del siglo XVI. Pero para que la conversión al protestantismo perdurara era necesaria la cooperación o, al menos, la tolerancia de las autoridades. Así, en las zonas de influencia de Polonia y Livonia, solamente Estonia

y Finlandia siguieron siendo mayoritariamente protestantes. En Francia, una gran parte de la población abrazó el calvinismo en el siglo XVI, pero retornó al catolicismo en el siglo XVII. Si la guerra de los campesinos de 1524-1525 no se hubiera saldado con una sangrienta derrota, el protestantismo habría perdurado en una zona más extensa del sur y el norte de Alemania.

En el conjunto de Europa, los movimientos protestantes populares que triunfaron en su intento de ruptura con la Iglesia católica, tuvieron lugar de forma abrumadoramente mayoritaria en las zonas de confluencia del imperio y del poder Habsburgo, aunque en Escandinavia y en Inglaterra los gobernantes instituyeron también su propia versión de la Iglesia nacional protestante. Aunque Zwinglio aspiraba a establecer un movimiento «comunal» entre las comunidades campesinas independientes, en conjunto el protestantismo encontraba su fuerza en las ciudades y en sus zonas de influencia, donde la aristocracia terrateniente era relativamente débil. En ese sentido, representaba una revolución no explicitada contra la alianza de las autoridades imperiales y aristocráticas (Blickle, 1987; Wuthnow, 1989, pp. 52-82). En muchas zonas de Europa central, las oligarquías urbanas luteranas, zwinglianas y calvinistas se aliaron con poderosos movimientos populares (Brady, 1985).

En 1967 Guy E. Swanson publicó un importante libro sobre la Reforma, que sin embargo se dejó de lado casi inmediatamente en el debate académico, porque nadie sabía qué decir acerca de las teorías que exponía. Basándose en una teoría fuertemente influida por las ideas de Émile Durkheim, Swanson afirmaba que el triunfo de determinadas concepciones religiosas dependía en gran medida de las relaciones de la población con la autoridad a la que estaba sometida. En sus trabajos anteriores, Swanson había examinado la correspondencia existente entre la teología y la estructura de poder en una amplia gama de poblaciones no cultas. En su libro de 1967, examinaba 41 jurisdicciones regionales en Europa, entre ellas 10 estados alemanes, 13 cantones suizos, la mayor parte de los grandes estados de la Europa católica, algunos estados de menor rango y las Highlands y las Lowlands escocesas consideradas por separado. He aquí las correspondencias que establece:

Tipo	Descripción	Credo religioso
Comensalista	*El gobernante representa directamente al cuerpo político* (Appenzell, Florencia, Friburgo, Glaris, Polonia, Schwyz, Unterwalden, Uri, Venecia, Zug)	Católico
Centralista	*El gobernante acumula todo el poder* (Austria, Baviera, Berg, Francia, Irlanda, Jülich, Lucerna, Portugal, Highlands escocesas, Solothurn, España)	Católico
Centralista limitado	*El gobernante comparte el poder con otras autoridades* (Brandemburgo, Dinamarca, Inglaterra, Hesse, Prusia, Sajonia, Suecia, Württemberg)	Anglicano/Luterano
Equilibrado	*Equilibrio de poder entre el gobernante y representantes de la población* (Bohemia, Ginebra, Hungría, Lowlands escocesas, Transilvania, Cleves, Mark)	Calvinista
Heterárquico	*Representa el dominio de intereses específicos* (Basilea, Berna, Schaffhausen, Provincias Unidas, Zürich)	Calvinista

La estructura de la autoridad refleja las relaciones entre el ejecutivo, las asambleas representativas y los grupos de intereses específicos. Swanson sitúa una unidad política en una categoría religiosa determinada si adopta dicha categoría como religión oficial de forma perdurable o (en ausencia de una religión oficial) si al menos el 60 por 100 de la población ha elegido dicho credo religioso hasta finales del siglo XVIII. El criterio seguido por Swanson elimina las subdivisiones protestantes de las entidades políticas más grandes existentes en el siglo XVI (por ejemplo, Estonia) que más tarde serían estados mayoritariamente protestantes, así como algunos estados del siglo XVI (Polonia-Lituania) donde el protestantismo hizo progresos importantes

para luego retroceder como consecuencia de la persecución oficial. En la distribución de Swanson, sólo en Appenzell y Glaris (donde una mayoría importante de la población adoptó creencias zwinglianas o calvinistas pese a que el gobernante ostentaba la representación directa del cuerpo político) no se cumplían sus previsiones teóricas.

Es fácil discrepar de las definiciones y evaluaciones de Swanson y criticar la heterogeneidad de las unidades que compara. Es discutible hasta qué punto los gobernantes ejercían todo el poder, incluso desde el punto de vista de los principios constitucionales, en Francia, Irlanda y las Highlands escocesas, por ejemplo. Sin embargo, la revisión de las relaciones entre el ejecutivo, las asambleas representativas y los grupos de intereses específicos daría como resultado grupos similares de unidades políticas y las diferencias entre las diversas categorías en cuanto a la orientación religiosa seguirían siendo notables. Con independencia de la actitud que se adopte ante la *explicación* durkheimiana de Swanson, por lo que respecta a la relación entre régimen y religión, la *correlación* sigue siendo notable.

Propondré mi propia interpretación de los datos que presenta Swanson. Las oligarquías urbanas autónomas y las monarquías fuertes conservaron la ortodoxia católica, los monarcas que compartían el poder con grupos rivales importantes de la nobleza y la burguesía optaron por el poder económico y político de las iglesias estatales controladas por la monarquía y aquellos regímenes en los que el conjunto de la población ejercía una influencia importante —aunque indirecta— abrazaron el calvinismo y el zwinglianismo. Los credos protestantes rivales presentaban escasas diferencias desde el punto de vista teológico; las cuestiones candentes eran las que hacían referencia a quiénes y cómo detentarían el gobierno de la Iglesia. En definitiva, las formas más radicales de protestantismo tuvieron un gran atractivo popular en una gran parte de la Europa católica, especialmente en las zonas donde se había desarrollado el capitalismo comercial. Que esos países abrazaran el credo protestante o permanecieran en él dependía de si las clases dirigentes bloqueaban o apoyaban las reivindicaciones de la burguesía y de las clases trabajadoras. En ese sentido, se registró un importantísimo avance del protestantismo popular alentado por un impulso democrático.

Felipe II advirtió ese fenómeno con toda lucidez, cuando afirmó en 1559 que «un cambio de religión no se produce excepto cuando

va acompañado de un movimiento hacia el establecimiento de una república y frecuentemente los pobres, los vagos y vagabundos adoptan un nuevo credo para atacar la propiedad de los ricos» (Van Kalken, 1946, p. 241). La fórmula (ciudad fuerte + nobleza débil = Reforma) se ajusta a la distribución geográfica del protestantismo en los Países Bajos. En el sur, la conjunción de una aristocracia terrateniente más fuerte, de unos lazos estrechos de la nobleza con los círculos eclesiásticos y de un control imperial más amplio redujo las oportunidades para que se estableciera una alianza duradera entre la burguesía y el artesanado en favor de la Reforma. Aunque hacia 1540 Amberes se había convertido en un bastión calvinista, en general el sur de los Países Bajos permaneció en el seno de la Iglesia católica. Pese a los intentos de Carlos V de impedir los ataques contra su religión, que lo eran también, al menos de forma indirecta, contra su autoridad, el norte abrazó de forma masiva el protestantismo. En 1559 Felipe II trató de fortalecer la posición católica aumentando el número de obispados y arrebatando a la nobleza regional la designación de los obispos, pero esa maniobra sólo sirvió para provocar un movimiento de resistencia entre la aristocracia y el clero católico que, de otro modo, le habrían apoyado contra el protestantismo.

Los enfrentamientos continuaron. Cuando la gobernadora general Margarita de Parma (hermanastra de Felipe II) y su consejero, el cardenal Granvela, instauraron una serie de impuestos ordinarios para financiar la guarnición española, promulgaron edictos contra los herejes y amenazaron con establecer la Inquisición, una liga aristocrática (el compromiso de Breda) se posicionó a favor de las libertades regionales, mientras que en las regiones textiles de Flandes, por no mencionar algunas zonas dispersas en el norte, hasta Frisia, el pueblo llano penetró en las iglesias católicas para saquearlas y destruir las imágenes sagradas. En 1567 Felipe II envió un ejército español al mando del duque de Alba, que se apresuró a sofocar la oposición y que ejecutó a grandes figuras nobiliarias como Egmont y Hoorn, a pesar de que también ellos se habían opuesto a las revueltas populares. Durante los dos años siguientes, el Tribunal de los Tumultos creado por el duque de Alba hizo ejecutar al menos a 8.000 sospechosos (Van Kalken, 1946, p. 251). Así comenzó la serie de conflictos que los holandeses conocerían más tarde como la guerra de los Ochenta Años y que los historiadores denominan ahora la rebelión de los Países Bajos.

Otro gran magnate, Guillermo de Orange, escapó ante la llegada del duque de Alba. Posteriormente, invadió los Países Bajos, pero se retiró impelido por la superioridad de las fuerzas del duque. Luego, la imposición de nuevos y elevados gravámenes por parte del duque de Alba para financiar la guarnición militar provocó una nueva insurrección de la nobleza y la burguesía unidas. Cuando el ejército rebelde de los «mendigos del mar» capturó Brill en 1572, el movimiento de resistencia contra el dominio español se extendió a todos los Países Bajos, cobrando especial fuerza en las provincias del norte. A partir de aquel momento, los holandeses detentaron el dominio de los mares vecinos. Pero la situación en tierra era diferente. Cuando sus tropas se comportaron bien, el duque de Alba y su sucesor, Requesens, consiguieron derrotar muchas veces a sus enemigos en el campo de batalla y conquistar ciudades rebeldes. Sin embargo, tenían que afrontar un problema de extraordinaria gravedad: España no les enviaba dinero suficiente para pagar y abastecer a sus ejércitos, lo cual les obligaba a intentar que la población local aportara los fondos y los suministros necesarios y ello redobló la resistencia en un momento en que las tropas de mercenarios, que no habían recibido su soldada, devastaban ciudades y tenían que alimentarse con los productos que daba la tierra. Por ejemplo, en 1574 las tropas de Requesens derrotaron a los rebeldes Luis y Enrique de Nassau en las proximidades de Nimega, acción en la que murieron los dos generales rebeldes, pero el amotinamiento de las tropas españolas, que no habían cobrado su paga desde hacía 28 meses, impidió a Requesens explotar al máximo esa victoria.

Tras el saqueo de Amberes, Maastricht, Gante y otras plazas por las tropas españolas en 1576, todas las provincias se unieron en la Pacificación de Gante, que por primera vez aglutinó sus esfuerzos para expulsar a los españoles. Entre otras cosas, la Pacificación estableció una tolerancia limitada del protestantismo en 15 provincias, así como la hegemonía protestante en Holanda y Zelanda. Con independencia del calificativo que se aplique a los veinte años anteriores de guerra, para entonces los Países Bajos borgoñones estaban inmersos en una situación profundamente revolucionaria. En 1572 la provincia de Holanda se hallaba ya en una situación de rebelión abierta. Sin embargo, quedaba todavía por ver si se produciría un resultado revolucionario.

Don Juan de Austria, que sucedió a Requesens, no consiguió sofocar la rebelión, pero el duque de Parma, que desempeñó el puesto de gobernador entre 1578 y 1592, reconquistó las provincias del sur por la fuerza de las armas y, al mismo tiempo, les prometió respetar sus derechos tradicionales. La ruptura de la alianza de las fuerzas rebeldes impulsó a las provincias del norte a constituir la Unión de Utrecht, en la que se integraron también algunas ciudades del sur como Brujas, Gante y Amberes (1579). Los pasos que dieron a continuación fueron el rechazo de la autoridad de Felipe II (1581) y la designación de un estatúder, el calvinista Guillermo de Orange. El estatúder ejercía básicamente las funciones de gobernador general en nombre de una oscura soberanía, que según algunos residía en los Estados Generales, según otros en las ciudades y provincias, y de acuerdo con una tercera opinión, en la población de los Países Bajos en general. Como, a pesar de algunos intentos frustrados realizados en el entorno de las monarquías francesa e inglesa, las provincias rebeldes no consiguieron un gobernante nominal que tuviera una posición de fuerza en el escenario internacional y estuviera dispuesto a aceptar sus condiciones restrictivas, la estructura política que crearon los principales líderes durante aquellos años cruciales se parecía a una confederación de ciudades-Estado coordinada por un ejecutivo cuya autoridad dependía de que desempeñara adecuadamente sus funciones; funcionaba, pues, como una especie de república. El estatúder no era un rey.

De cualquier forma, por contingente que pudiera ser el poder de Guillermo de Orange, Felipe II le consideraba su enemigo, hasta el punto de que en 1580 exilió al estatúder y confiscó sus propiedades estipulando que:

> Para que este objetivo pueda alcanzarse con mayor prontitud y nuestro pueblo pueda verse libre más rápidamente de su tiranía y opresión, y deseoso de recompensar la virtud y castigar el crimen, prometemos bajo la palabra de rey y de servidor de Dios que si alguien, ya sea súbdito nuestro o extranjero, llevado de su buena voluntad y de un fuerte deseo de servirnos a nos y al bien público, puede ejecutar nuestra orden y liberarnos de esta plaga, entregándonos a Guillermo de Orange vivo o muerto o, simplemente, dándole muerte, le otorgaremos a él y a sus herederos la suma de 25.000 coronas de oro, en forma de tierra o en efectivo, según desee, inmediatamente después de que haya completado su proeza. Si ha cometido algún crimen o transgredido la ley de alguna forma, prometemos perdonarle. Además, si no es noble, le otorgaremos la nobleza por su valor (Rowen, 1972, p. 79).

Dos hombres intentaron obtener el premio. Después de que el primero hiriera gravemente a Guillermo de Orange en 1582, el segundo, Balthazar Gérards, le asesinó en Delft. Ello ocurrió en 1584, cuatro años después de que Felipe II realizara su invitación al homicidio.

Pero el asesinato de Guillermo de Orange no significó la derrota de los holandeses. Gracias a la ayuda militar inglesa (un momento crucial fue la derrota de la Armada Invencible a manos de los ingleses en 1588) y a la ventaja que supuso el hecho de que España estuviera también en guerra con Francia, Mauricio de Nassau y su ejército holandés rechazaron a los españoles hasta que la firma de una tregua en 1609 otorgó la independencia *de facto* al territorio que ya se conocía como las Provincias Unidas. Mucho antes, Inglaterra y Francia, en una acción premeditada, ya habían reconocido a las provincias como un Estado independiente. Sin embargo, no fue hasta el tratado de Westfalia de 1648 cuando la República de Holanda obtuvo el reconocimiento internacional como entidad independiente.

Como tantas veces ocurre, la coalición vencedora tuvo dificultades para evitar la división interna, especialmente cuando la victoria adquirió mayores visos de realidad. Desde el establecimiento de la tregua hasta la firma del tratado, la profunda división que se produjo respecto del poder de la Iglesia calvinista desembocó en el juicio y ejecución de Johan van Oldenbarnevelt, gran pensionario de los estados de Holanda, así como en la condena a cadena perpetua de Hugo Grocio, teórico de derecho internacional y partidario de Oldenbarnevelt. Tras la firma de la paz de 1648, la Iglesia reformada holandesa, al igual que su homóloga anglicana, se convirtió en la Iglesia oficial en casi todas las provincias, y los católicos, judíos o disidentes, que constituían las dos terceras partes de la población holandesa, fueron excluidos de los altos cargos.

¿Puede calificarse de revolución la guerra de los Ochenta Años, o alguna parte de la misma? Ciertamente, el control del Estado cambió de manos a través de la lucha armada, en el curso de la cual al menos dos bloques diferentes tenían aspiraciones, incompatibles entre sí, a controlar el Estado y una fracción importante de la población sometida a la jurisdicción del Estado apoyó las pretensiones de cada uno de los bloques. Desde nuestro punto de vista, los tumultos de 1567 a 1648 constituyeron una revolución. Muy fácil sería el análisis de la revuelta de los Países Bajos si sólo se hubiera producido una ruptura y sólo se hubieran constituido dos bloques opuestos. Durante la insurrección existieron 17 entidades formalmente autónomas, cada una de ellas con una relación distinta con España y con los demás estados. La situaciones revolucionarias surgieron como los cráteres en Marte y hubo resultados revolucionarios más de una vez en el norte, en el sur y en ambas zonas al mismo tiempo.

Todavía en 1618, la fatídica división entre Mauricio de Nassau y Johan van Oldenbarnevelt provocó una nueva situación revolucionaria. Algunos historiadores han calificado la guerra de los Ochenta Años como una gran revolución «comparable a las grandes revoluciones que se han producido en los tiempos modernos y merecedora de ocupar un lugar entre ellas» (Griffiths, 1960, p. 452). Se trata de una afirmación plausible. Consideradas por separado, las revueltas del norte y del sur adquieren la consideración de un movimiento de independencia unido a una revuelta fallida. Sin embargo, si se consideran en conjunto, constituyen una profunda transformación de las condiciones de gobierno en el conjunto de los Países Bajos. No dejaría de estar justificada la afirmación de que los Países Bajos establecieron el modelo europeo de revolución burguesa.

De los Países Bajos meridionales a Bélgica

La revolución no desapareció entonces en el sur. Los Países Bajos españoles se incorporaron a la rama austríaca de los Habsburgo con el Tratado de Utrecht (1713), con la salvedad de que el obispado de Lieja se convirtió en un sector independiente del imperio. Como consecuencia de la guerra que acababa de librarse, los Países Bajos austríacos se encontraron bajo la ocupación holandesa, con la obligación de pagar 500.000 escudos anuales para financiar las ocho plazas fuertes holandesas que existían en el territorio, y con la desembocadura del Escalda cerrada. Aunque los ejércitos franceses, contra los cuales se erigió la llamada barrera de ocho fortalezas, consiguieron hacerla sumamente permeable durante la guerra de Sucesión austríaca (1740-1748), las guarniciones holandesas retornaron a los Países Bajos austríacos al terminar la guerra. Durante el resto de la centuria, la dinastía austríaca sometió a la región a un control mucho más estrecho que el que había conseguido establecer España. El sector más

poderoso de la nobleza y el clero en general colaboraron con el régimen imperial, mientras la burguesía soñaba con su perdida autoridad. Por otra parte, las clases trabajadoras sólo protagonizaron algún levantamiento aislado.

En 1781 el nuevo emperador José II, modelo perfecto del déspota ilustrado, visitó las provincias meridionales de los Países Bajos, siendo la primera visita que realizaba un soberano nominal desde 1559. A continuación, llevó a cabo una serie de reformas administrativas, que debilitaron el poder de la Iglesia e intensificaron el control central. En una maniobra que concitó un amplio apoyo, completó la expulsión de las fuerzas holandesas del territorio austríaco. Sin embargo, en su empeño de reorganizar la geografía administrativa del país se encontró con la resistencia de la mayor parte de los organismos que lentamente habían ido formando el gobierno de la región: el consejo de Brabante, los estados de Brabante, los municipios y los gremios de comerciantes. La «revolución de Brabante» enarboló una bandera conservadora, exigiendo que se suprimiera la tolerancia religiosa y se restablecieran los privilegios de las provincias, al tiempo que trataba de conseguir apoyo exterior en su oposición al imperio. Pero había también en ella una vertiente populista alimentada por la difusión de la masonería, que cobró fuerza desde el momento en que estalló en Francia la revolución de 1789. Aquel año, una serie de levantamientos armados, apoyados por un ejército patriota con base en la república holandesa, expulsó a la administración austríaca de Gante, Brujas, Namur y Bruselas. El *manifeste du peuple brabançon*, que se hizo público entonces, adaptaba y traducía la declaración de 1581 que había negado a Felipe II su autoridad en nombre de las libertades locales y regionales (Kossmann, 1978, p. 59). El carácter burgués de los movimientos revolucionarios de los Países Bajos se hizo aún más evidente.

En 1790 una asamblea de delegados de los estados provinciales del sur, con la excepción de Luxemburgo, declaró la creación de unos estados unidos *à l'américaine*, sin que faltara el Congreso y la Declaración de Independencia. Para entonces se había abierto ya una brecha entre estatalistas y demócratas, que estuvo a punto de desembocar en una guerra civil. Antes de que finalizara el año 1790, las tropas austríacas habían dispersado lo que quedaba del régimen revolucionario. Muchos demócratas huyeron a Francia, mientras que los estatalistas buscaron refugio en Inglaterra u Holanda. Mientras tanto, el principado de Lieja protagonizó su versión de la revolución parisiense, tomando incluso la Bastilla local. La revolución de Lieja, por producirse en un Estado eclesiástico, estuvo teñida de un anticlericalismo mucho más intenso que la revolución belga, que determinó que encontrara escaso apoyo entre la población belga, predominantemente católica. Cuando las tropas austríacas volvieron a ocupar Lieja en 1791, apenas encontraron resistencia. A mediados de 1791, la reacción ya había triunfado en Bélgica y Lieja.

Fue entonces el turno de los franceses, que eligieron los Países Bajos como campo de batalla contra Austria y sus restantes enemigos. Cuando el general francés Dumouriez penetró con sus tropas en Bélgica en 1792, esperaba ser recibido como un liberador democrático, pero aunque un reducido número de demócratas le tendieron una mano fraternal, los estatalistas le consideraron una amenaza. Sin embargo, sus partidarios belgas organizaron un aparato político similar al de los jacobinos franceses. Entretanto, la Convención de Lieja votó la unión con Francia. En 1793 regresaron los ejércitos austríacos, recuperando extensas zonas del sur de los Países Bajos convirtiendo el resto del territorio en un campo de batalla. Los ejércitos franceses contraatacaron. En 1795 ya controlaban los Países Bajos hasta Amsterdam. En 1794 y 1795, los invasores franceses pusieron en marcha la integración de Bélgica en su sistema político nacional, decretando la secularización de numerosos cargos religiosos e imponiendo el francés como lengua oficial. Desde ese momento hasta 1814, Bélgica fue un territorio ocupado y luego una parte de un reino satélite. Nació así un Estado centralizado a imagen francesa. Los belgas conocieron incluso su pequeña Vendée, un amplio movimiento rural de resistencia al servicio militar obligatorio, en 1798.

Los belicosos holandeses

Pero ¿qué ocurría en el norte? Al tiempo que protagonizaban su rebelión en los siglos XVI y XVII, las provincias del norte alcanzaron la condición de gran potencia comercial a escala mundial, por ejemplo estableciendo la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602. Constituían un Estado sorprendente: un archipiélago de repúblicas burguesas, cada una con su propia milicia, que defendían con toda ener-

gía sus privilegios locales frente a las exigencias del estatúder e incluso de la institución que ellos mismos habían creado, los Estados Generales. Sin embargo, las provincias y los Estados llevaron a cabo una división de competencias extraordinariamente eficaz, según la cual a las provincias les correspondía las tareas de la fiscalidad y la administración, mientras que los Estados se encargaban de la guerra.

A comienzos del siglo XVII, las Provincias Unidas luchaban contra Inglaterra y otros rivales por el poder imperial y muchas veces salían vencedoras. En el cuadro 3.1 se enumeran las principales guerras en las que participaron directamente los holandeses. Hay que decir que las fechas que se ofrecen en el cuadro tienen una falsa precisión, pues en el Atlántico, el Pacífico y el Índico las flotas holandesas luchaban casi continuamente, mientras que en la Europa del siglo XVII algunas guerras se prolongaban sin que algunos años hubiera luchas muy intensas. Sin embargo, la crónica de los siglos XVII y XVIII sitúa a los holandeses entre las potencias más belicosas del mundo. Los holandeses estuvieron en guerra, durante el siglo XVII, al menos cuatro años de cada cinco. La cronología registra la penetración de fuerzas holandesas en el Mediterráneo y el Adriático (donde se unieron a otra gran potencia marítima, Venecia, para combatir a los corsarios uskok que gozaban del apoyo de los Habsburgo austríacos), el largo y parcialmente satisfactorio enfrentamiento con Portugal por alcanzar una posición de privilegio en los mares, y el ingente esfuerzo colonial realizado antes de que las Provincias Unidas hubieran alcanzado el reconocimiento formal como potencia independiente. Tras la guerra de Sucesión española, los holandeses redujeron su actividad militar y a partir de 1715 no participaron de forma muy activa en las guerras europeas. Como la economía mercantil continuó expandiéndose, es en esa retirada militar en la que piensan los historiadores cuando se refieren al «declive» holandés del siglo XVIII.

La guerra tenía otra consecuencia: generalmente incrementaba el poder político del estatúder. Además, en tiempo de guerra aumentaba el apoyo popular al estatúder —orangismo—, fomentando no sólo el ensalzamiento del líder nacional sino los ataques contra las clases dirigentes urbanas (Dekker, 1982, pp. 41-45). Por otra parte, la guerra también redoblaba la importancia del apoyo fiscal de las provincias al gobierno central, lo que daba a aquéllas y a sus municipios un cierto poder. En 1650, poco después de que fuera proclamada la inde-

CUADRO 3.1. Guerras holandesas en los siglos XVII y XVIII.

1567-1648	Guerra hispano-holandesa (intermitente)	1652-1653	Guerra con Portugal en el océano Índico y en el Atlántico
1605-1606	Guerra con Portugal a propósito de Malaca	1652-1655	Guerra naval anglo-holandesa
1615-1618	Guerra veneciana contra los uskok y los Habsburgo austríacos	1654-1670	Conquista holandesa de Sumatra
1611-1628	Guerra holandesa de Ceilán, que supuso el enfrentamiento con fuerzas portuguesas	1654-1660	Gran Guerra del Norte
1616-1619	Conquista holandesa de Macassar	1657-1661	Guerra con Portugal
1619	Conquista holandesa de Java	1661-1662	Guerra contra los chinos en Taiwan
1622	Guerra con Portugal por Macao	1663-1667	Guerra naval anglo-holandesa
1624-1654	Guerra con Portugal en Brasil (intermitente)	1669-1681	Intervención holandesa en Java
1628-1629	Guerra de Holanda-Mataram-Java	1672-1679	Guerra con Luis XIV
1638-1640	Guerra con Portugal en Ceilán y Goa	1679-1680	Guerra contra Argel
1640-1641	Guerra con Portugal en Malaca	1688-1697	Guerra de la Liga de Augsburgo
1641	Guerra con Portugal en Angola	1701-1714	Guerra de Sucesión española
1646	Conquista holandesa de las Molucas	1703-1705	Conquista holandesa de Java y Mataram
1648	Guerra con Portugal en Angola	1715-1726	Guerra contra Argel
1650-1656	Conquista holandesa de Amboyna	1718-1720	Guerra de la Cuádruple Alianza
1651	Conquista holandesa de Ceram	1740-1748	Guerra de Sucesión austríaca
		1780-1783	Guerra de Independencia norteamericana
		1795	Guerra revolucionaria en Francia

pendencia, el estatúder Guillermo II intentó capitalizar el entusiasmo popular ampliando su cuota de poder en Holanda, pero su fracaso reafirmó la autonomía de las provincias. Durante un siglo más, sus sucesores tuvieron que conformarse con una autoridad más bien precaria, a pesar del apoyo que recibían en tiempo de guerra.

Tras contraer matrimonio con la hija de Jacobo II, María, en 1677, el estatúder Guillermo III se convirtió en rey de Inglaterra en el curso de la revolución gloriosa de 1688-1689. En ese momento, los holandeses y los ingleses, antiguos enemigos, se convirtieron en aliados militares, pues las familias gobernantes de ambos países concertaron matrimonios mixtos durante casi un siglo. Aunque el estatúder consiguió aumentar su poder en asuntos y en épocas de guerra, sin embargo, las provincias (especialmente Holanda) se comportaban habitualmente como estados casi soberanos. Cada provincia elegía su propio estatúder o decidía no tenerlo. Cuando invadió Inglaterra encabezando la revuelta protestante en 1688, Guillermo III no era, de hecho, estatúder de las Provincias Unidas, sino estatúder electo en cinco de las siete provincias holandesas. A la muerte de Guillermo III en 1702, todas las provincias excepto Groninga y Frisia (que tenían un estatúder diferente) decidieron dejar el cargo vacante. No fue hasta 1747, con ocasión de la participación del sur de los Países Bajos en la guerra de Sucesión austríaca y tras una importante rebelión, cuando los Estados Generales designaron de nuevo un estatúder hereditario para todo el país. Pero incluso entonces se encontró muchas veces con la oposición de una o más provincias.

En el decenio de 1780, un partido patriótico movilizó por primera vez a escala nacional la oposición al estatúder. La participación holandesa en la guerra de Independencia norteamericana había inducido a los oponentes del estatúder a creer que era posible poner fin a la forma arbitraria de gobierno a través de la acción popular colectiva. Los puntos fundamentales de su concepto de libertad eran la autonomía local y el dominio de las clases acomodadas, lo cual les hizo perder el apoyo de los trabajadores. Sin embargo, entre 1785 y 1787 (en que Guillermo V requirió el apoyo de tropas prusianas), los patriotas protagonizaron revoluciones democrático-burguesas, que entrañaron la formación de milicias populares independientes en Holanda y en otras partes. Francia prestó subrepticiamente apoyo financiero y político a los patriotas y Gran Bretaña hizo lo mismo con sus enemigos orangistas. La invasión prusiana sofocó una situación revolucionaria que todavía estaba en fase de formación.

Algunos patriotas recuperaron el poder cuando los invasores franceses establecieron la República de Batavia (1795) y continuaron detentándolo cuando se formó el reino satélite de Holanda, cuyo rey era el hermano de Napoleón, Luis Bonaparte (1806-1810). Bajo los dos regímenes citados, los ricos territorios de los Países Bajos hubieron de pagar un importante tributo a Francia. En 1810, cuando se produjo la abdicación de Luis Bonaparte, tras oponerse a una sangría de los recursos de Holanda para financiar la expansión imperial, Napoleón incorporó a Holanda a su imperio, cada vez menos francés. Para entonces, la administración francesa había sustituido la antigua estructura federal por un Estado central burocratizado similar al que se había formado en Bélgica. A finales de 1813, el hijo del fallecido estatúder retornó a los Países Bajos cuando estaba tocando a su fin la ocupación francesa, encabezando una «revuelta» que se tradujo en la toma del poder cuando los franceses se retiraron. Dos semanas después, una comisión comenzó a redactar una nueva constitución y el príncipe de Orange quedó al frente de un Estado provisional.

Entonces, los aliados victoriosos integraron las provincias del norte y del sur, incluida Lieja, en un nuevo reino de los Países Bajos que recordaba a los Países Bajos borgoñones de antaño, pero en el norte e incorporando los enclaves que habían existido en el Estado anterior. Guillermo, príncipe de Orange, se convirtió en rey de una monarquía constitucional en la que tenían el mismo peso el norte y el sur, a pesar de que el sur estaba mucho más poblado. El rey, que gobernaba con una administración de tipo francés regida durante mucho tiempo por los preceptos del *Code Napoléon* y del *Code pénal*, gozaba de una considerable autonomía gracias a que controlaba directamente los ingresos coloniales.

Los conflictos entre el sur y el norte continuaron hasta 1839 y concluyeron con la separación definitiva de las dos zonas. En 1828 se constituyó una Unión Belga de Oposiciones para hacer frente a los candidatos oficiales y propuso una reorganización federalista de los Países Bajos, el sur frente al norte. En octubre de 1830, se formó una coalición entre la burguesía y la clase obrera tras el estallido revolucionario francés que tuvo lugar ese año, coalición que reclamó una administración autónoma, luchó contra las tropas holandesas y consiguió

la intervención de potencias extranjeras. Tras un año de negociaciones internacionales, los belgas eligieron como rey a Leopoldo de Sajonia-Coburgo, viudo de la heredera al trono británico y, por tanto, tío y mentor de Victoria, que a su vez se convertiría en reina de Gran Bretaña seis años más tarde. Bélgica sufrió una invasión holandesa cuando el rey de Holanda Guillermo rechazó los términos del acuerdo alcanzado.

Se produjo entonces una respuesta francesa, que conllevó la invasión de Holanda, una prolongada ocupación y una negociación (en el curso de la cual Leopoldo fortaleció su posición en el trono contrayendo matrimonio con la hija del nuevo rey de Francia Luis Felipe) y los holandeses finalmente aceptaron un armisticio en 1833 y en 1839 reconocieron plenamente la existencia de Bélgica. Entretanto, los belgas aprobaron una constitución profundamente liberal, que fomentó aún más la movilización política. Además, se adhirieron a la neutralidad política sancionada por el acuerdo internacional de 1839. En 1847, la coalición liberal-clerical que gobernaba en Bélgica dejó paso a un sistema de partidos en el que predominaban los liberales burgueses. El nuevo régimen se adelantó a las revoluciones de 1848 ampliando enormemente el derecho de voto y concediendo a la pequeña burguesía y a los trabajadores organizados una mayor presencia en la política nacional. También en 1848 proliferaron y triunfaron en los Países Bajos movimientos reformistas encabezados por la burguesía, antes de que en otros países se produjeran aquel año movimientos revolucionarios.

Desde mediados del siglo XIX y hasta las ocupaciones que sufrieron en los períodos de guerra durante el siglo XX, ni Holanda ni Bélgica vivieron una situación auténticamente revolucionaria, es decir, una división en dos o más bloques detentando cada uno de ellos un cierto poder. A mediados del siglo XIX surgió rápidamente en Bélgica una de las grandes concentraciones de la industria pesada de Europa, lo cual conllevó una notable expansión de la clase obrera. También comenzó a crear colonias en África prácticamente con la misma celeridad. En la política nacional belga se produjo una aguda división entre católicos, liberales, y, más tarde, socialistas. Los conflictos entre el sector organizado de lengua flamenca y los francófonos, que disfrutaban de una mejor situación económica, agitó continuamente la política belga. La línea divisoria entre flamencos y franceses no sólo señalaba una zona de enfrentamiento político, sino también una gran división social. Por ejemplo, los cambios en cuanto a la fertilidad se producían precisamente en la frontera lingüística (Lesthaeghe, 1977, pp. 111-114).

Con todo, los conflictos planteados en Bélgica durante los siglos XIX y XX no supusieron una amenaza para la continuidad del Estado mayor que las huelgas, las manifestaciones de masas y las turbulentas campañas electorales que estaban convirtiéndose en moneda corriente en la política democrática de gran parte de Europa. Las fuerzas alemanas ocuparon Bélgica e impusieron su propio régimen durante la mayor parte de la primera guerra mundial y, nuevamente, en la segunda guerra mundial. Al terminar esta última, las divisiones lingüísticas, religiosas, regionales y de clases provocaron intensos enfrentamientos que, sin embargo, estuvieron lejos de provocar un estallido revolucionario. La situación de mayor gravedad se produjo en 1950 con la abdicación de Leopoldo III, que había sido monarca durante la guerra, cuando un referéndum reveló que gozaba de un apoyo mayoritario, pero sufría una fuerte oposición por parte de los sectores francófonos y anticlericales, siendo muchos los que pensaban que había cooperado en demasía con los ocupantes nazis.

También en el norte de los Países Bajos se impulsaron reformas liberales en 1848, produciéndose una división política en función de las clases y la religión, pero no de la lengua. Aunque en Holanda, que carecía de recursos minerales y que ya ocupaba una posición dominante en el comercio mundial, nunca se desarrolló una industria pesada tan importante como en Bélgica, lo cierto es que durante el siglo XIX se intensificó su desarrollo industrial, utilizando el petróleo y otros productos procedentes de las colonias para mejorar su posición en la economía europea. El país mantuvo una difícil neutralidad durante la primera guerra mundial, pero no pudo impedir la ocupación alemana durante la segunda guerra mundial. En 1918 surgió un movimiento revolucionario que, sin embargo, perdió fuerza rápidamente. Aunque la izquierda y la extrema derecha se enfrentaron violentamente durante los años 1930, esos enfrentamientos nunca estuvieron cerca de provocar una situación revolucionaria.

La creación de una unión económica y diplomática entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo con posterioridad a 1950 abrió la vía a la participación de los tres países como un bloque en la Comunidad Euro-

pea. Su unión redujo aún más la probabilidad de que se produjeran situaciones revolucionarias en cualquiera de ellos, al reforzar la posibilidad de que dos de esos países pudieran intervenir para apuntalar el régimen del tercer país que pudiera verse afectado por una situación súbita de debilidad. Aunque en Holanda continuaron surgiendo movimientos de liberación como el de los Provos (*provocateurs*) de los años 1960, la política nacional discurrió en gran medida por los canales establecidos por las instituciones liberales-democráticas del siglo XIX. Tanto en el norte como en el sur, las revoluciones burguesas habían ofrecido el contexto adecuado para la política burguesa.

Evaluación de las revoluciones de los Países Bajos

Entre 1477 y 1992 se produjeron en los Países Bajos numerosas situaciones revolucionarias y un reducido número de resultados revolucionarios: la obtención del poder autónomo por los Estados Generales (1477), la rebelión momentáneamente triunfante de 1484-1488, la Pacificación de Gante (1576), el rechazo de Felipe II como soberano (1581), el establecimiento de la República de Holanda (1609 y/o 1648), las revoluciones patriota y brabantina del decenio de 1780, las múltiples transferencias de poder bajo la influencia de la revolución y el imperio franceses, la creación del reino de los Países Bajos después de la guerra y la revolución belga de 1830. La República de Holanda, que aportó un nuevo rey, también intervino en la revolución gloriosa inglesa de 1688-1689. Durante el siglo XX, las ocupaciones alemanas fueron, en cierto modo, revoluciones, aunque muchos calificarían los acontecimientos de otra forma.

Más discutible es si el extraordinario éxito del calvinismo en Amberes y en el norte durante el siglo XVI fue también una revolución. Según la definición a la que aquí nos atenemos, no lo fue, pese a que tuvo importantes repercusiones en los enfrentamientos, en las revoluciones y en la vida social posteriores. Las reformas constitucionales belgas de 1847 y las reformas holandesas de 1848 también serían consideradas revolucionarias según los parámetros de otras definiciones, pero no lo son de acuerdo con los criterios de este libro. Sea como fuere, hay un hecho evidente: durante los cinco últimos siglos de la historia de Holanda y Bélgica abundaron las situaciones y los resul-

CUADRO 3.2. Situaciones revolucionarias en los Países Bajos, 1492-1992.

1487-1493	Rebeliones de Gante, Lieja, Brujas, Lovaina y Cleves contra Borgoña
1498-1500	Reanudación de la guerra civil en Frisia
1514-1523	Enfrentamiento entre Borgoña y Güeldres por el control de Frisia
1522-1528	Fuerte resistencia a la soberanía de Carlos V en los Países Bajos
1532	Insurrección popular en Bruselas
1539-1540	Rebelión de Gante
1566-1609	Revuelta de los Países Bajos (intervención alemana, francesa e inglesa)
1618	Conquista del poder por sectores calvinistas radicales en muchas ciudades
1650	Golpe fracasado de Guillermo II
1672	Toma del poder por la fracción orangista en muchas ciudades
1702	Desplazamiento de las clientelas orangistas en Güeldres y Overijssel
1747-1750	Revuelta orangista en las Provincias Unidas
1785-1787	Revolución patriota holandesa, sofocada por la intervención prusiana
1789-1790	Revolución de Brabante
1795-1798	Revolución bátava
1830-1833	Revolución belga contra Holanda (intervención francesa y británica)

tados revolucionarios; al menos en seis ocasiones desembocaron en transferencias prolongadas de poder. Hay que decir también que la burguesía de la región, siempre poderosa, tuvo prácticamente en todos los casos un fuerte peso por lo que respecta a la naturaleza y el resultado de las situaciones revolucionarias.

En general, las situaciones y resultados revolucionarios adoptaron, en los Países Bajos, formas dinásticas o comunales entre los siglos XV y XVII, siendo la aristocracia y los municipios los principales protagonistas. Por esa razón, las guerras civiles, las guerras internacionales, las guerras privadas y las revoluciones eran categorías prácticamente intercambiables. Luego, las coaliciones de clase y las revoluciones nacionales sustituyeron a las formas comunales a medida que los estados en cuestión adquirieron una mayor dimensión y plantearon nuevas exigencias. A partir de entonces, quedó establecida una divisoria más clara entre las situaciones y resultados revolucionarios y los enfrentamientos bélicos. Al margen de la mistificación que considera, retrospectivamente, la rebelión del siglo XVI como la insurrec-

ción obligada de un pueblo unificado, en los Países Bajos se registraron dos grandes luchas nacionalistas, la primera cuando Bélgica se separó del reino de los Países Bajos en el decenio de 1830 y la segunda cuando en el seno de Bélgica flamencos y valones lucharon por el control del Estado y, al no conseguirlo, por defender sus posiciones en él. La primera supuso una revolución auténtica, aunque limitada; la segunda, una serie de luchas y la transformación del Estado, pero no implicó una situación revolucionaria abierta.

La diferencia entre los dos grandes episodios nacionalistas que ocurrieron en Bélgica pone de relieve otro aspecto crucial. Las revoluciones que ocurrieron en cada período compartieron muchas de las características de la política no revolucionaria de la época. No puede afirmarse que fueran situaciones idénticas. Es cierto que se plantearon situaciones revolucionarias, que se produjeron enfrentamientos armados y transferencias revolucionarias de poder porque se daban circunstancias excepcionales que inducían a luchar con quienes detentaban el poder y porque existían grandes posibilidades de derrocarlos. En 1567, cuando el duque de Alba penetró con sus ejércitos para luchar contra una sólida aristocracia y unas ciudades perfectamente movilizadas, a centenares de kilómetros de sus bases de aprovisionamiento, y luego intentó que la población local se hiciera cargo de unos gastos extraordinariamente elevados, incrementó la vulnerabilidad del régimen al mismo tiempo que redoblaba sus amenazas sobre unos derechos y privilegios establecidos. Esa combinación determinó la profundización de una situación revolucionaria. Sin embargo, tanto los protagonistas, como los intereses y los enfrentamientos tenían mucho en común con la política turbulenta de la región durante los noventa años anteriores, por no mencionar la centuria que seguiría.

Sin embargo, la enseñanza más valiosa que permite extraer este breve resumen es inesperada, aunque evidente retrospectivamente: unas revoluciones que parecen muy diferentes cuando se consideran desde el punto de vista de los resultados, tuvieron unos elementos y unos protagonistas muy similares. La revolución «victoriosa» del siglo XVI en el norte y la revolución «fracasada» en el sur se produjeron a partir de una misma situación y la diferencia en cuanto al resultado se debió a la fuerza relativa de los principales protagonistas en cada una de las zonas. En el mismo sentido, la revolución de Brabante de los

Países Bajos austríacos y la revolución patriota de la República de Holanda tienen muchos rasgos en común, a pesar del carácter aparentemente conservador de la primera, a juzgar por los resultados, y del carácter relativamente liberal de la segunda hasta el momento en que la aplastaron las tropas prusianas. De hecho, hubo incluso una interacción entre ambos procesos, dado que los revolucionarios de Brabante establecieron una base militar y política en Breda, en territorio holandés, con la ayuda de los patriotas holandeses. También en esta ocasión el equilibrio de fuerzas determinó una importante diferencia en cuanto al contenido aparente y al significado de la revolución. Si es bien cierto que los Países Bajos albergaron las revoluciones burguesas, la posición y las alianzas de la burguesía variaron sustancialmente de un momento y un lugar a otro y esa variación produjo revoluciones diferentes.

El caso de los Países Bajos, ejemplo extremo de formación de un Estado con una elevada concentración de capital, no prefiguró la experiencia de Europa en general. Por ejemplo, en el siglo XVI se produjeron en otras partes de Europa importantes levantamientos de campesinos que se veían amenazados con la servidumbre por unos señores que trataban de incrementar su poder económico y político. Ahora bien, este proceso no se manifestó en los Países Bajos porque allí existía ya una agricultura comercializada, los campesinos eran propietarios de tierras y los señores detentaban un poder político limitado frente a una burguesía en expansión. Además, ni siquiera en el decenio de 1780 se produjeron, ni en el norte ni en el sur de los Países Bajos, las movilizaciones revolucionarias masivas que tuvieron lugar en Inglaterra durante la década de 1640 y en Francia en la de 1790. Finalmente, con posterioridad al siglo XVI el grado de violencia colectiva que conocieron los Países Bajos fue mucho menor que en Rusia y Hungría. Sin duda, ello se explica por el interés de la burguesía en mantener el orden, por la temprana desaparición de los ejércitos privados, por la renuencia de las milicias urbanas a ejercer la violencia contra sus conciudadanos y por la relativa debilidad de los estados en los Países Bajos.

A la posición relevante y a la autonomía del patriciado y la burguesía de la región se sumó el alto grado de dependencia económica de los gobernantes con respecto a aquéllos para otorgar a los intermediarios un lugar muy destacado en la explotación de la riqueza de

los Países bajos. Duques, obispos y gobernadores poco podían hacer salvo negociar con los sectores acaudalados y con las ciudades de sus territorios, aunque sólo fuera porque cuando los gobernantes trataban de imponer su voluntad mediante la fuerza militar, siempre se constituía una coalición entre la burguesía y un sector de nobles disidentes. Cuando los gobernantes negociaban con eficacia conseguían grandes resultados desde el punto de vista militar, porque los financieros de la región podían obtener grandes sumas de dinero, rápidamente y a una baja tasa de interés, pues los ciudadanos ordinarios invertían grandes sumas en los títulos del Estado.

En el norte, la organización capitalista de la guerra determinó la existencia de una estructura estatal exigua y contingente, mientras que en el sur los gobernantes se conformaron con ejercer un gobierno indirecto y sólo pudieron conseguir escasos recursos durante la mayor parte del siglo XVIII. En ninguna de las dos zonas geográficas de los Países Bajos se creó una fuerte estructura burocrática estatal hasta la ocupación napoleónica.

Además, la consolidación del Estado en los Países Bajos se produjo con una importante intervención externa. Aunque los patriotas intentaron imponer una cierta liberalización del gobierno y el programa de soberanía popular de los demócratas entrañó una considerable supresión de privilegios, de no haberse producido el ejemplo de Francia, su ocupación y la reorganización deliberada de los dos estados, sin duda ambos habrían entrado en el siglo XIX con una estructura de gobierno mucho más fragmentada. Los franceses crearon en los Países Bajos unos estados centralizados, burocratizados y uniformes. Esas formas de organización, aunque no los estados concretos que habían impuesto los franceses, sobrevivieron a la derrota de Francia ocurrida en 1815.

Este curso de los acontecimientos era reflejo del predominio del comercio y del capital, y de la debilidad de los medios coercitivos. Allí donde el capital era escaso y la coerción intensa se formaba un tipo muy diferente de Estado. Generalmente, un poder de coerción elevado suponía el dominio de la aristocracia sobre la tierra, el campesinado, el comercio y el propio Estado. La organización de grandes ejércitos nacionales permanentes acabó por integrar a los miembros de la nobleza en el Estado como altos cargos y oficiales del ejército. Cuanto mayor era el poder y la autonomía que habían gozado anteriormente, mayor probabilidad existía de que ofrecieran su lealtad a cambio de importantes privilegios en sus propios dominios. Los junkers prusianos sirvieron a su monarca, y ello les valió ser ratificados en su condición de oficiales del ejército y también de jueces, administradores y dueños privilegiados de grandes propiedades. En las zonas donde eso ocurría, sólo la especialización de unos ejércitos muy costosos y la expansión del capitalismo del siglo XIX permitió imponer la forma de Estado consolidado que comenzaba a prevalecer en todo el continente. A la larga (pero sólo a la larga) esas transformaciones socavaron el dominio de los grandes aristócratas.

Modelos diferentes de Estado y, en consecuencia, modelos diferentes de revolución. En aquellas zonas de Europa donde existía un elevado grado de coerción, las situaciones revolucionarias adoptaron durante mucho tiempo las formas dinástica, comunal y patrono-cliente o las tres al mismo tiempo. Las revoluciones dinásticas solían producirse cuando la nobleza se oponía a la autoridad real o cuando una facción de la nobleza intentaba controlar a la corona. Las situaciones revolucionarias de tipo dinástico se producían con frecuencia —especialmente a la muerte de los monarcas— y muchas veces desembocaban en un resultado revolucionario, una transferencia por la fuerza del control del Estado. Las revoluciones comunales tenían lugar cuando el campesinado y el artesanado se unían para oponerse a los intentos de la nobleza de obtener a sus expensas mayores ingresos y servicios o de suprimir las comunidades que les daban una identidad colectiva. Aunque constantemente se daban casos de resistencia local a las exigencias de la nobleza, muy raras veces se producían situaciones revolucionarias de tipo comunal, en que el pueblo ordinario controlara una parte del aparato del Estado o creara su propio aparato.

Más raros aún fueron los resultados revolucionarios. El hecho de que los campesinos, los artesanos y las comunidades urbanas no tuvieran armas, que estaban en poder de la aristocracia, ponía a la población común en una situación de gran desventaja. No obstante, a veces se conjugaban las situaciones revolucionarias dinásticas y comunales cuando algunos nobles disidentes se ponían al lado de comunidades rebeldes. En tales casos podía producirse un terrible derramamiento de sangre. Las diversas alianzas de las ciudades borgoñonas con el duque Felipe de Cleves, el conde Lamoral de Egmont y los príncipes de Orange —ninguno de ellos comerciantes, sino miembros de

la alta nobleza— llevó a la burguesía a enfrentarse a las tropas españolas en una guerra abierta devastadora.

Finalmente, las situaciones revolucionarias nacionales y de coalición de clases sustituyeron a las revoluciones dinásticas, patrono-cliente y comunales en las regiones europeas donde existía un elevado grado de coerción, pero ello sólo ocurrió cuando se hubo formado una burguesía y un proletariado parcialmente independientes y capaces de articular reivindicaciones para conseguir libertades civiles, reformas del gobierno y autonomía regional. La creación de burocracias estatales, programas nacionales de educación y amplios sistemas de comunicación contribuyeron a producir esos cambios, pero las condiciones fundamentales fueron la expansión de la producción capitalista, la proliferación del comercio y el crecimiento de las ciudades, es decir, una disminución del grado de coerción y un incremento del capital en dichas regiones. En 1848 se produjeron en antiguos bastiones de la coerción, como Hungría y Sicilia, revoluciones encabezadas por la burguesía en nombre de una clase y de una nación.

Mencionar Hungría (que entonces formaba parte del imperio Habsburgo) y Sicilia (integrada a la sazón en el reino de las Dos Sicilias), supone subrayar el hecho de que los territorios de la mayor parte de los estados europeos eran mucho más complejos y cambiantes de lo que implica el esquematismo simple que yo he utilizado. Como se ha podido apreciar, incluso en los Países Bajos existía una notable heterogeneidad y se produjeron cambios frecuentes en la composición social de los diferentes estados como consecuencia del establecimiento de nuevas fronteras y nuevos gobiernos. La comparación con dos regiones muy distintas en las que existía un poder coercitivo relativamente intenso —primero la península ibérica y luego los Balcanes y Hungría— permitirá apreciar la importancia de los caminos tan diversos a través de los cuales se formaron y reformaron los estados.

Las revoluciones de la península ibérica

La península ibérica, a pesar de sus conexiones con los Países Bajos, conoció una experiencia radicalmente distinta por lo que respecta a la revolución. La evolución política de la región estuvo marcada por cuatro influencias: 1) el legado de un largo enfrentamiento con los

dominadores musulmanes, en el curso del cual tanto la nobleza como los municipios obtuvieron derechos excepcionales frente a la corona, especialmente en la corona de Castilla; 2) el contraste entre el interior, dominado por la aristocracia y dedicado a una economía ganadera de subsistencia, y las regiones costeras que participaban intensamente en el comercio mundial; 3) la existencia de unas dinastías con amplios intereses y recursos imperiales; 4) la vecindad con Francia, país en el que estaban en proceso de formación una gran maquinaria militar y una monarquía centralizada. Esos cuatro factores influyeron directamente en las revoluciones de la península ibérica entre los siglos XV y XVIII, y dejaron su huella en las repetidas transferencias violentas de poder que se produjeron posteriormente.

Desde el punto de vista económico, la península ibérica mantuvo durante mucho tiempo una extraña relación con el resto del mundo: en el interior, un mosaico de economías de subsistencia donde tenía enorme importancia la ganadería trashumante (especialmente los rebaños de ovejas de las que los magnates españoles obtenían la lana que les permitía participar en el comercio mundial), y en la periferia, puertos y capitales que mantenían estrechas conexiones con los imperios comerciales y políticos. Durante trescientos años a partir de 1492, tanto Portugal como España financiaron su monarquía con los ingresos obtenidos de las colonias y del comercio internacional, aunque estos ingresos no reportaron grandes beneficios a sus economías. Los expedientes a los que recurría la monarquía —obtener préstamos de banqueros extranjeros, realizar compras en el exterior y reexportar productos o plata procedentes de las colonias— recuerdan la situación de los estados productores de petróleo en el siglo XX, donde los ricos son cada vez más ricos, y los poderosos cada vez más poderosos, mientras que una gran mayoría de los habitantes (muchos de ellos no ciudadanos) permanecen al margen de los circuitos de la prosperidad.

En la península ibérica, el poder de los grandes nobles y del patriciado urbano del interior reforzó su ambigua relación con los mercados mundiales, retrasó las innovaciones económicas y acentuó la autarquía local. En el caso de España, la disminución de los ingresos procedentes de las colonias americanas y la insurrección de la mayor parte de ellas a partir de las guerras napoleónicas limitó la independencia de la corona antes de abrir el camino hacia una lenta comer-

cialización agrícola e industrial en el siglo XIX. Por su parte, Portugal formó poco menos que una monarquía dual con sus ricas colonias, especialmente Brasil, hasta 1820 y, luego, vio cómo, al igual que España, disminuía su importancia internacional.

Durante mucho tiempo los estados de la península ibérica funcionaron como organizaciones patrimoniales. En 1492, cuatro entidades políticas principales se repartían la península: Portugal, Castilla, Navarra y la Corona de Aragón. Navarra, un reino cerrado en el que los vascos constituían el grueso de la población, se extendía a ambos lados de los Pirineos. En 1512, Fernando de Aragón conquistó la fracción del reino que quedaba en la península ibérica y la anexionó a Castilla, dejando un pequeño reino al otro lado de los Pirineos, que se incorporó a la corona francesa con Enrique de Navarra, cuando éste se convirtió en Enrique IV de Francia. Portugal y la Corona de Aragón eran potencias marítimas que gravitaban en torno a Lisboa y Barcelona, respectivamente, mientras Castilla obtenía una gran parte de su riqueza de las exportaciones de la lana procedente del interior. Si los comerciantes portugueses y catalanes adquirieron una gran pujanza en sus territorios gracias a sus negocios en el extranjero, sus homólogos genoveses controlaban una parte importante del comercio de Castilla a través de diversos puertos como Sevilla y Cádiz. Los comerciantes castellanos, en cambio, tenían escaso poder.

Las familias reales de las cuatro coronas habían concertado frecuentes matrimonios entre sí, de tal forma que en la península podía haberse formado una distribución política en la que Portugal y Castilla se hubieran situado frente a Aragón y Navarra, o bien los cuatro territorios podían haberse unido bajo una sola corona. El matrimonio que celebraron en 1469 Fernando e Isabel, herederos, respectivamente, de las coronas de Aragón y de Castilla, hizo que estallara una guerra civil que les enfrentó a los perdedores, ayudados por los franceses. Sin embargo, ese matrimonio sentó las bases de un imperio. Fernando e Isabel fortalecieron su poder según los procedimientos habituales: confirmando los privilegios de los nobles y los municipios que colaboraron con ellos para llevar a la práctica sus programas dinástico, militar y fiscal. En 1492, la monarquía dual estaba empeñada en la conquista de Granada, último bastión musulmán de la península, que fue seguida por la conversión forzada de los vencidos y por la expulsión de los judíos que no se convirtieron al cristianismo, al tiempo que seguía la huella del reino portugués en el océano Atlántico. Poco después, Aragón y Castilla rivalizaron con Francia por el control de Italia.

En 1516 la corona unificada recayó en Carlos de Gante, que ya gobernaba en los Países Bajos (en la medida en que en esa región existía un auténtico gobierno centralizado), que pasó a ser Carlos I de España y en 1519 fue elegido emperador del Sacro Imperio Romano (en este caso con el nombre de Carlos V). En 1580, el hijo de Carlos, Felipe II, impuso su controvertido derecho al trono portugués, vacante desde hacía poco tiempo, mediante una invasión del país que eliminó a sus competidores. Sin dejar de ser una entidad política separada y una potencia comercial e imperial, Portugal se convirtió en un feudo español durante sesenta años, hasta 1640, fecha en que los portugueses protagonizaron una insurrección triunfante. A partir de entonces, Portugal y España subsistieron como estados separados con unas fronteras relativamente permanentes. Sin embargo, su singularidad y su permanencia como estados era relativa. España fue tan sólo un elemento de un conjunto de propiedades dinásticas hasta las invasiones napoleónicas. Ambos estados consiguieron y perdieron importantes imperios coloniales fuera de Europa. España, que se había incorporado los territorios de Navarra de este lado del Pirineo, cedió a Francia el Rosellón y parte de la Cerdaña en 1659; en el período napoleónico los franceses ocuparon temporalmente una gran parte de la península e intentaron reorganizarla. Aunque la reorganización impuesta por los franceses no perduró, quienes se enfrentaban a ellos se vieron obligados también a adoptar medidas de reforma de las instituciones en un sentido modernizador. España y Portugal, aunque todavía con demasiados rasgos patrimoniales, comenzaron la andadura que les llevaría a convertirse en estados consolidados.

El hecho de que la península ibérica siguiera un camino hacia el cambio en el que predominaría un elevado poder de coacción determinó el carácter de las revoluciones que se produjeron en ella. En el cuadro 3.3 se enumeran las situaciones revolucionarias en la península ibérica entre 1492 y 1992. Se incluyen algunos casos marginales como las expulsiones de los judíos, los moriscos y los jesuitas, episodios en que la resistencia abierta fue mínima. Dos rasgos sobresalen en las revoluciones de la península ibérica: la larga supervivencia de los conflictos dinásticos y la sucesión continuada, verdaderamente extraor-

CUADRO 3.3 Situaciones revolucionarias en la península ibérica, 1492-1992.

1492	Expulsión de los judíos
1499-1500	Sublevaciones de los moriscos
1520-1521	Guerra de las Comunidades; germanías
1568-1571	Levantamiento de los moriscos de Granada
1580	Felipe II invade Portugal y accede a su corona
1591	Rebelión de Aragón
1609	Expulsión de los moriscos
1640-1659	Revuelta de Cataluña
1640-1668	Revuelta y restauración de la independencia de Portugal
1667	Pedro II sucede como regente a su hermano Alfonso VI
1701-1714	Guerra de Sucesión española
1758	Atentado contra José I de Portugal
1759	Los jesuitas son expulsados de Portugal
1766	Motín de Esquilache
1767	Los jesuitas son expulsados de España
1793-1795	Guerra entre España y la República francesa
1808	Motín de Aranjuez. Insurrección popular contra los franceses
1808-1814	Guerra de la Independencia; se inicia la emancipación de las colonias americanas de España
1820	Insurrección de Riego, inicio del Trienio constitucional
1820	Revolución liberal en Oporto
1822-1823	Levantamientos absolutistas en España; restauración del absolutismo por los Cien mil hijos de San Luis
1823-1824	Movimientos antiliberales en Portugal
1827	Guerra de los Agraviados de Cataluña
1828	Golpe de estado absolutista de D. Miguel en Portugal; inicio de las guerras miguelistas (hasta 1834)
1832	Desembarco de los liberales portugueses cerca de Oporto
1833-1840	Primera guerra carlista
1836	Pronunciamiento de los sargentos en La Granja
1836	Revolución «setembrista» en Portugal
1840	Abdicación de la regente María Cristina; Espartero al poder
1842	Insurrección de Barcelona contra Espartero
1843	Insurrección centralista; los moderados se hacen con el poder
1846	Revuelta de Maria da Fonte en Portugal; golpe de estado («Emboscada»)
1847-1849	Segunda guerra carlista
1854	Revolución; inicio del Bienio progresista
1868	Revolución de septiembre; caída de los Borbones en España; inicio del Sexenio revolucionario
1872-1876	Tercera guerra carlista
1873	Primera República española
1874	Golpe de estado de Pavía; pronunciamiento de Martínez Campos y restauración de los Borbones
1891	Revuelta republicana en Oporto
1903-1906	Huelgas en Portugal
1908	Regicidio en Portugal; sube al trono Manuel II
1909	Semana Trágica en Barcelona
1910	Revolución y proclamación de la República en Portugal
1915	Dictadura y derrocamiento de Pimenta de Castro en Portugal
1917	Asamblea de parlamentarios; Juntas militares; huelga general
1917	Revuelta militar de Sidónio Pais, que asume la presidencia de la República portuguesa (muere al año siguiente como consecuencia de un atentado)
1919	Insurrección monárquica en Portugal
1923-1930	Dictadura del general Primo de Rivera
1926	Dictadura militar en Portugal
1930	Salazar en el poder
	Sublevación de Jaca
1931-1939	Segunda República española
1932	Sublevación del general Sanjurjo
1934	Revolución de octubre en Asturias y en Cataluña
1936-1939	Guerra civil española
1974	Revolución «de los claveles» en Portugal
1981	Golpe militar frustrado en España

dinaria, de situaciones revolucionarias desde las guerras contra Francia hasta la década de 1930. Aunque Portugal y España tuvieron un calendario revolucionario propio, en ambos países se produjeron levantamientos monárquicos hasta mucho después de 1850 y enfrentamientos civiles repetidos durante más de una centuria.

Con respecto a la amplitud e intensidad de las discordias, los principales procesos revolucionarios fueron, sin duda, las luchas de los comuneros y las germanías (entre 1519 y 1521), las revueltas de Portugal y Cataluña, que comenzaron en 1640, la guerra de Sucesión española (1701-1714), los conflictos civiles asociados a las guerras con Francia (1793-1814), los repetidos enfrentamientos por hacerse con el control de ambos estados entre 1820 y 1932 y la guerra civil española (1936-1939). Después de esta secuencia, las transiciones pacíficas a la muerte de Franco y de Salazar (a pesar de los golpes militares que se produjeron, o intentaron, en los países y del terrorismo en el País Vasco) constituyen casi un anticlímax.

Las rebeliones de los comuneros y las germanías estallaron cuando Carlos V y su círculo flamenco intentaron establecer un mayor control fiscal sobre sus territorios españoles para financiar su elección como emperador del Sacro Imperio Romano. El movimiento de los comuneros consistió esencialmente en la creación de juntas, que se hicieron con el control de las ciudades castellanas y de sus zonas adyacentes, negándose a proveer fondos al monarca mientras no se deshiciera de sus consejeros extranjeros, respetara sus libertades y se asentara en Castilla. Las juntas, en el tiempo que no dedicaban a sus luchas intestinas, expulsaban a los representantes de la monarquía, formaban ejércitos populares y luchaban contra las tropas del rey. En muchas ciudades la población atacó a los ricos y a la nobleza. El término germanías hace referencia a las hermandades, o gremios, de Valencia, que se enfrentaron en un conflicto armado con la nobleza y con sus vasallos moriscos, después de que una buena parte del sector más favorecido de la población hubiera abandonado la ciudad al declararse una epidemia de peste. Los movimientos de los comuneros y las germanías acentuaron su carácter antiaristocrático cuando la nobleza, en una actitud prudente, se alineó junto a la corona. Cuando las fuerzas populares se enfrentaron a las tropas reales en el campo de batalla, sufrieron una derrota aplastante. Los representantes del monarca ejecutaron públicamente a los cabecillas rebeldes: 150 murieron en Valencia y 200 en Mallorca. En 1522, Carlos V pudo regresar con todas las garantías a España.

Aunque el hijo de Carlos, Felipe II, hubo de hacer frente a los peligrosos levantamientos de los moriscos, convertidos forzadamente al cristianismo, hizo valer sus derechos al trono portugués por la fuerza de las armas y sofocó una grave revuelta en Aragón. La siguiente crisis revolucionaria importante de la península ibérica no se produjo hasta la guerra de los Treinta Años. La reanudación de la guerra con Francia en 1635 indujo a la corona a incrementar notablemente sus demandas de apoyo económico a todos los sectores de la población. Desde hacía unos años el valido de Felipe IV, Olivares, ejercía una dura presión sobre Cataluña para conseguir hombres y dinero para la guerra contra Francia. Olivares organizó una campaña desde Cataluña, para forzar la colaboración de los catalanes en el esfuerzo militar, pero su actitud provocó un amplio movimiento de resistencia. En junio de 1640, una multitud de segadores dio muerte en Barcelona al virrey, el conde de Santa Coloma. Poco después, tropas castellanas avanzaron sobre Cataluña, mientras las personalidades políticas catalanas intentaban obtener ayuda de Francia. El presidente de la Diputació, el canónigo Pau Claris, preservó la autoridad de la institución proclamando a Cataluña como una república independiente. El conflicto se prolongó hasta 1652, año en que los catalanes se reintegraron al imperio con las mismas libertades de que gozaban antes de separarse de él, pero la paz con Francia, en 1659, implicó la pérdida del Rosellón, del Conflent y de parte de la Cerdaña, que los franceses consiguieron arrebatar a Felipe IV.

En el curso de la revuelta catalana, Olivares ordenó al duque de Braganza y a la nobleza portuguesa, que no habían perdido la esperanza de recuperar su antigua autonomía, que ayudaran a los castellanos en el ataque contra Cataluña. Pero esa orden provocó una conspiración en Lisboa, que desembocó en la toma del palacio real, la ejecución y expulsión de los representantes de la monarquía y la proclamación de Braganza como rey, con la denominación de Juan IV. Durante cerca de treinta años, los ejércitos españoles intentaron, sin éxito, someter a los portugueses, pero en 1668 España reconoció finalmente la independencia de Portugal, después de que el año anterior el hermano del rey Alfonso, Pedro, protagonizara un golpe de estado. En 1648, España reconoció también, en el tratado de

Münster, la pérdida definitiva de la zona norte de los Países Bajos.

Más tarde, la península ibérica se vio desgarrada por la guerra de Sucesión española (1701-1714) cuando el empeño —con éxito— de Luis XIV de colocar a un Borbón en el trono español ensangrentó la península al precipitar la guerra civil entre los seguidores de los dos pretendientes al trono. Causó también la integración de los reinos de la Corona de Aragón en el régimen castellano, al tiempo que España se alejaba por completo de los Países Bajos, cuyas provincias del sur pasaron a poder de los Habsburgo austríacos.

Después de la guerra de Sucesión española, ni en Portugal ni en España se registraron situaciones revolucionarias de envergadura durante los años siguientes (si exceptuamos el llamado motín de Esquilache). La revolución francesa tuvo pocas repercusiones en la península, aunque España participó en el despliegue militar internacional contra la Francia revolucionaria en 1793-1795. Las guerras napoleónicas provocaron, sin embargo, una de las más graves crisis revolucionarias de la península. España no tardó en cambiar de bando. Bajo el impulso de su virtual dictador, Godoy, se alió primero con Napoleón contra Portugal, pero Napoleón quería convertir a España en un reino satélite. En 1808, una insurrección aristocrático-popular organizada en nombre del heredero, Fernando (el motín de Aranjuez), forzó la marcha de Godoy y la abdicación del monarca. Sin embargo, el nuevo rey se plegó a las exigencias de Napoleón de que restituyera la corona a su padre, quien, a su vez, la entregó a José Bonaparte, hermano de Napoleón.

Las insurrecciones populares, al frente de las cuales se pusieron generalmente las autoridades locales con el fin de controlar su evolución, dieron paso a una guerra contra los franceses en que colaboraban revolucionarios y conservadores, aplazando su enfrentamiento para el término del conflicto. Mientras tanto, el vacío de un poder legal —en teoría los franceses eran los continuadores legítimos de la monarquía española— y la difusión de las ideas liberales facilitaron que surgieran movimientos independentistas en la América colonial española.

Mientras los ejércitos regulares, con la colaboración de las fuerzas británicas mandadas por Wellington, y las guerrillas expulsaban a los franceses, los diputados patriotas reunidos en Cádiz, entre los cuales predominaban los liberales, promulgaron una constitución avanzada. Pero, al regresar Fernando VII de su cautiverio francés, se sirvió de un grupo de políticos y militares conservadores para llevar a cabo un golpe de estado que restableció el absolutismo.

La posición central que había adquirido el ejército desde la guerra contra Napoleón explica en parte la importancia que adquirió en la política española del siglo XIX. En la sucesión de los movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios que marcan los cambios de régimen —la alternancia en el poder de progresistas o de conservadores— desde 1814 hasta 1923, la revolución propiamente dicha es reemplazada por el «pronunciamiento» en que la iniciativa y la dirección corresponden a los militares, lo cual les permite controlar los cambios, de forma que las masas populares tengan un papel secundario, que no va mucho más allá de la aclamación a las tropas vencedoras. Así sucedió en 1820, en 1840, 1843, 1854, 1856, 1868, 1874 y en 1923, con el golpe militar del general Primo de Rivera, que instauró una primera dictadura. Lo cual no impediría que esas fuerzas populares marginadas se organizasen por su cuenta y diesen lugar, al margen de los cambios políticos orquestados desde arriba, a una sucesión de revueltas, huelgas y atentados terroristas que conmovieron las ciudades industriales y los campos de las zonas de latifundio.

En 1931 unas elecciones municipales dieron lugar a la marcha pacífica del monarca y a la proclamación de una República reformista, cuya acción se vio frenada por los impedimentos puestos por los extremistas de derecha e izquierda y condujo, finalmente, a la guerra civil que estalló en 1936.

Mientras tanto, la trayectoria de Portugal era igualmente turbulenta: golpes de estado, guerras civiles y rebeliones, hasta el establecimiento de una República en 1910, dieciséis años más de situaciones revolucionarias intermitentes y luego la consolidación en el poder de Oliveira Salazar durante los últimos años de la década de 1920, para conservar el control de Portugal durante más de cuarenta años.

También Francisco Franco conseguiría mantener su régimen durante cerca de cuatro decenios, pero conquistar el poder le costó tres años de luchas intestinas. La guerra civil comenzó como un intento de golpe militar organizado en el Marruecos bajo control español, pero continuó como una terrible serie de ataques, represalias y acciones revolucionarias, incluso en el seno de la coalición republicana. Aunque la lucha decisiva se libró entre nacionalistas y republicanos, en

el bando de estos últimos se produjeron graves enfrentamientos entre comunistas, estalinistas o trotskistas, y anarquistas. La intervención de la Alemania nazi y la Italia fascista, en favor de los nacionalistas, y la de la Unión Soviética y de unas brigadas internacionales de voluntarios, en favor de los republicanos, agudizaron el carácter sangriento de la guerra. Pero en 1939, la mejor organización militar y la superioridad de los suministros de que gozaban las fuerzas nacionales les permitieron derrotar a sus enemigos. Durante los treinta y cinco años siguientes, Franco gobernó España sin encontrar una fuerte oposición a su hegemonía.

Tanto en España como en Portugal, los dictadores, ya ancianos, establecieron en los años sesenta mecanismos constitucionales para facilitar la transición a un gobierno de representación limitada —una monarquía en España, una república en Portugal— produciéndose tan sólo episodios revolucionarios de poca importancia. Salazar murió en 1970 y Franco en 1975, sin que tuvieran lugar graves crisis sucesorias. Sin embargo, en 1974 un golpe de estado de los oficiales de menor rango, impulsados por la insatisfacción respecto al compromiso militar en las colonias africanas, provocó en Portugal una gran movilización popular contra el régimen de Marcelo Caetano, que encarnaba la sucesión del salazarismo. Portugal se balanceó en el borde de una situación revolucionaria durante dos años y luego retornó al caos rutinario de la política parlamentaria.

En España, el gobierno de Carrero Blanco, que se prolongó de 1969 a 1973, intentó sofocar la movilización obrera y la actividad creciente del movimiento separatista vasco (ETA). El asesinato de Carrero Blanco a manos de ETA puso fin a esa fase e inició un período de vacilaciones del gobierno, durante el cual se produjo la muerte de Franco. El heredero designado, el rey Juan Carlos, sobrevivió a la intensa actividad del movimiento obrero, encaminando aceleradamente al país a la celebración de un referéndum y de elecciones para determinar la naturaleza del nuevo régimen. En 1981, un grupo de oficiales militares, rememorando lo que en el pasado era una acción política normal, intentaron, sin éxito, un golpe de estado. Así pues, tanto Portugal como España conocieron un último intento de intervención militar antes de crear su propia versión de la política parlamentaria.

En la península ibérica, el camino habitual desde las revoluciones comunales, patrono-cliente y dinásticas a las revoluciones de coalición de clases y nacionales se recorrió de forma distinta a la habitual. Ya en el siglo XVI se iniciaron en Aragón revoluciones nacionales que insistían en antiguos privilegios y pactos antes que en los derechos generales de independencia, por el estilo de las que se manifestaron en Portugal y en Cataluña durante el siglo XVII. Por otra parte, todavía en la década de 1870 Portugal y España continuaron protagonizando revoluciones dinásticas, al tiempo que tenían lugar revoluciones que implicaban una coalición de clases y en las que participaba activamente el estamento militar. El calendario revolucionario de la península ibérica se correspondió con exactitud con el proceso en que se formaron los estados en esa zona de Europa. Recapitulando los datos conocidos, los reinos de la península ibérica de los siglos XVI y XVII eran estados segmentados que se sostenían gracias a los ingresos procedentes de ultramar, al principio importantes y luego cada vez menores, limitados por una nobleza bien pertrechada, así como por los privilegios municipales y provinciales, y siempre empeñados en aumentar sus ingresos y mejorar sus perspectivas dinásticas y su posición internacional mediante el fortalecimiento del control central. Las revoluciones de ese período encarnaron la resistencia de diversos sectores políticos ante esas iniciativas.

Durante el siglo XVIII, las fuerzas centrípetas y centrífugas coexistieron en un difícil equilibrio, pero la resistencia armada a la invasión y ocupación francesa a partir de 1808 dio al ejército un poder autónomo que hasta entonces no había poseído. Durante el siglo XIX, y hasta bien entrado el XX, las alianzas de los jefes militares con sectores de la burguesía y/o pretendientes dinásticos (que en ocasiones se tiñeron de nacionalismo, como en Cataluña) dominaron las situaciones revolucionarias. Paulatinamente, los bloques dinásticos perdieron fuerza a medida que se fortalecían las coaliciones de clase, pero el ejército fue siempre un protagonista activo. Sin embargo, la instauración por el ejército de regímenes autoritarios acabó por integrar más firmemente a España y Portugal en la economía capitalista mundial, proceso que a su vez favoreció la formación de una importante clase obrera y de una burguesía en expansión. Cuando los dictadores, ya ancianos, relajaron el control central, la burguesía y la clase obrera formaron coaliciones que adquirieron un gran peso político. A la muerte de Franco y de Salazar, sus sucesores no sólo tuvieron que preocuparse de esas coaliciones, sino también de los vestigios del régimen

autoritario y de sus fuerzas armadas. Las negociaciones con esos tres sectores dieron forma a la vida política del decenio de 1980.

En definitiva, España y Portugal avanzaron por una senda revolucionaria muy diferente a la de los Países Bajos, y totalmente apartada del modelo de las grandes revoluciones. Tal vez la más clara divergencia radicó en la rápida transformación de una situación en que los ataques contra el Estado en nombre de los privilegios vulnerados eran muy infrecuentes, para dejar paso a un proceso de intervención permanente de los ejércitos profesionales en el funcionamiento del Estado, las más de las veces en alianza con una oposición civil. La creación de un ejército profesional, nacional y permanente a partir del siglo XIX y la gran consolidación del Estado bajo influencia francesa contribuyeron, sin duda, a esa transformación. Con todo, algunos aspectos de ese proceso se manifiestan también en otras partes de Europa, especialmente la presencia fundamental de las coaliciones entre la burguesía y la clase obrera en las revoluciones liberales a partir de 1830. Al tiempo que los estados y las economías de la península ibérica comenzaron a homologarse con los del resto de Europa, también lo hicieron las situaciones revolucionarias.

Los Balcanes y Hungría

La revolución siguió una trayectoria diferente en los Balcanes y en Hungría, una trayectoria que encaja perfectamente en la posición intermedia de la región. Durante siglos, los Balcanes constituyeron el límite occidental de las grandes invasiones y migraciones procedentes de la estepa eurasiática y un lugar de tránsito para el comercio entre Europa y Asia. En esta región, se levantan importantes cadenas montañosas en las vertientes del Adriático y el Mediterráneo, mientras que por el noreste se encuentran los montes Cárpatos y entre los macizos montañosos el Danubio y sus afluentes fluyen hasta el mar Negro a través de dos llanuras enmarcadas por los Alpes transilvanos. La población de la región estaba formada en su mayor parte por pequeños campesinos, pastores, pescadores y guerreros, aunque en las grandes llanuras los magnates acumulaban enormes propiedades y sometían a los campesinos a una situación de servidumbre.

Con anterioridad a 1492, los Balcanes revistieron importancia durante varios siglos como encrucijada del comercio eurasiático. La intensa actividad comercial permitió a los diversos dominios prosperar gracias a los tributos que gravaban el flujo de mercancías, en lugar de obtener todos sus ingresos de la población local. Sin embargo, a medida que los turcos comenzaron a monopolizar el comercio, y el tráfico del océano Índico redujo la importancia de las caravanas, esa estrategia empezó a ser menos viable. Los estados de la región se debilitaron y la aristocracia obtenía una porción cada vez más importante de sus ingresos explotando a los campesinos. La población de los Balcanes, su topografía y su situación geográfica intermedia, impidieron su integración en una unidad política y, en mayor medida aún, su unificación en una entidad coherente, aunque en diferentes momentos búlgaros, serbios, húngaros y turcos intentaron con todo su empeño dominar el conjunto de la península. Los turcos estuvieron a punto de lograrlo. Pero incluso bajo su dominio, los cabecillas de distintos grupos y familias y los grandes terratenientes gozaron de una gran autonomía al precio de un enfrentamiento incesante y sanguinario de unos con otros. La aristocracia y el estamento eclesiástico de la región elegían sus reyes —frecuentemente un rey por cada facción— y los pretendientes al trono tenían que luchar por su corona.

Habitualmente, los monarcas de los Balcanes adquirían su trono a la sombra de las grandes potencias. Durante la mayor parte del último milenio, los Balcanes se han encontrado en el límite de imperios enfrentados: mongol, tártaro, bizantino, ruso, polaco-lituano, Habsburgo y otomano. Cuando uno de esos imperios conseguía una gran expansión, sus rivales y víctimas locales encontraban poderosos aliados entre sus enemigos para socavar sus conquistas. Los gobernantes nominales de los Balcanes también encontraban una fuerte oposición entre sus competidores locales: los nobles que valoraban su libertad para poder explotar al campesinado, en ocasiones aspiraban al poder real, habitualmente intervenían en la designación de los monarcas y con frecuencia desempeñaban la lucrativa ocupación de recaudar los impuestos para el poder imperial. El imperio turco graduaba la fiscalidad en función de la distancia de Constantinopla y de la inseguridad de su control militar, exigiendo tan sólo un tributo ordinario en la periferia de los territorios conquistados, instaurando sistemas de gobierno indirecto (con diversas variantes de arrendamiento e impuestos) en las regiones de mayor penetración y organizando en el centro

una fiscalidad más o menos directa mediante agentes del Estado. Casi todas las zonas de los Balcanes sometidas al dominio turco correspondían a las primeras categorías.

La distancia a la que se hallaba un lugar en el conjunto influía en el apoyo relativo que pudieran prestar los ejércitos y funcionarios turcos a los príncipes o aristócratas. En conjunto, los tributos fortalecían a los príncipes y el arrendamiento de los impuestos reforzaba la posición de la aristocracia. Dado que dichos factores cambiaron a lo largo del tiempo, también se modificó la tendencia de los príncipes a encabezar rebeliones contra los turcos y de la aristocracia a rebelarse contra los príncipes. En general, aquellos a los que favorecía el régimen otomano lo apoyaban. Desde 1492 ha existido en esa región un tipo u otro de control imperial. En la actualidad, cuando el bloque soviético se ha desmembrado, la OTAN está desintegrándose y las potencias musulmanas se enfrentan unas con otras, es la primera vez desde hace varios cientos de años en que los Balcanes son vulnerables a la acción de un único imperio, una especie realmente exótica: la Comunidad Europea.

En 1492 los turcos se hallaban inmersos en un intenso proceso de expansión. Habían conquistado Constantinopla en 1453, Bosnia en 1462, Albania en 1467 y Crimea en 1474 y se cernían amenazantes sobre Hungría. En 1526 ocuparían Buda y también estaban en lucha con Venecia para conseguir controlar Dalmacia, Albania y Morea. En el cenit de su poder, a mediados del siglo XVI, los turcos dominaban casi toda la península balcánica, incluidas amplias zonas de la actual Hungría. De hecho, la expansión y contracción otomanas determinaron el proceso de las revoluciones balcánicas entre 1492 y 1992. Sólo a partir de la primera guerra mundial la población de la región dejó de estar estrechamente vinculada a la potencia cuya base de poder era Constantinopla.

El predominio de la conquista y del enfrentamiento territorial en los Balcanes difuminó la frontera entre guerra y revolución más intensamente que en otras partes de Europa. Además, la habitual actividad bélica en pequeña escala de los habitantes de las montañas y de los nómadas de la estepa suponía que algunas regiones se hallaran al borde de situaciones revolucionarias —soberanía estatal fuertemente contestada— durante varios decenios cada vez. Con los nuevos imperios surgieron múltiples divisiones religiosas (musulmanes, católicos, ortodoxos griegos, ortodoxos búlgaros, ortodoxos serbios, calvinistas, luteranos, unitarios y otros) y les sobrevivieron. Debido a ello, las fronteras religiosas y políticas fueron objeto de enfrentamientos durante más tiempo y con mayor dureza que en ninguna otra gran región de Europa. Las fuerzas conquistadoras siempre encontraban aspirantes locales a controlar el poder del Estado con quienes podía aliarse. En cierta manera, los Balcanes han vivido casi continuamente en medio de la revolución durante quinientos años.

La mayor diferencia que puede establecerse entre la región de los Balcanes y los Países Bajos durante los últimos quinientos años es el nivel mucho menos intenso de comercialización y urbanización que ha conocido aquélla. En comparación con la península ibérica, en los Balcanes la aristocracia y las ciudades autónomas han sido menos numerosas, pero la fragmentación de la soberanía ha sido todavía mayor y más cambiante. Estas diferencias influyeron profundamente en el esquema revolucionario de los Balcanes. Muy frecuentemente, las revoluciones comunales y dinásticas coincidían, pues cuando el campesinado se levantaba contra los señores, siempre había otros nobles rivales dispuestos a apoyarle. La expansión del imperio otomano en el siglo XVI, su consolidación durante el siglo XVII y su contracción entre los siglos XVIII y XX comportaron revoluciones en las que muchas veces se superpusieron los modelos comunal, dinástico, patrono-cliente, militar, nacional e incluso de coalición de clases.

El cuadro 3.4 recoge la cronología fundamental de las situaciones revolucionarias relativamente importantes y prolongadas en los Balcanes y en Hungría. En la cronología figura únicamente el oleaje más agitado de un mar siempre proceloso. Incluye, por ejemplo, las grandes rebeliones albanesas de 1910 y 1912, pero omite las insurrecciones, menos graves, de los albaneses en 1900, 1905, 1906, 1907 y 1909. Sobresalen tres tipos de acontecimientos: 1) guerras de sucesión del siglo XVI; 2) rebeliones campesinas desde comienzos del siglo XVI hasta los inicios del XX; y 3) resistencia de la población local y regional al dominio externo, desde la rebelión croata de 1570 a la guerra entre serbios y croatas de 1992.

La guerra de sucesión húngara de 1526-1528 ilustra la inestabilidad del control de la autoridad en esa fragmentada región. En 1526, las fuerzas otomanas infligieron una severa derrota a los nutridos ejércitos húngaros en Mohacz. El rey Luis de Hungría, miembro de la

Cuadro 3.4. Situaciones revolucionarias en los Balcanes y Hungría, 1492-1992.

1509-1512	Guerras de Sucesión turcas
1514	Levantamiento de campesinos húngaros
1515	Levantamiento de campesinos estirios
1526-1528	Guerra de Sucesión húngara
1566	Revuelta de jenízaros en Constantinopla y Belgrado
1570-1573	Rebelión en Croacia
1572-1574	Rebelión en Moldavia
1594-1598	Rebeliones en Valaquia-Moldavia-Transilvania
1604	Resistencia húngara a la Contrarreforma de los Habsburgo
1605-1606	Rebelión protestante en Hungría y Transilvania
1607-1608	Rebelión haiduk en Transilvania
1618	Rebelión protestante en Bohemia
1622	Golpe de estado jenízaro en Constantinopla
1655	Revuelta seimeni en Valaquia
1670-1682	Rebeliones intermitentes en Hungría
1683-1699	Incesantes rebeliones en Valaquia, Moldavia y zonas contiguas
1703-1711	Guerra de Independencia húngara contra los Habsburgo
1730-1731	Rebelión en Turquía
1770	Rebelión griega contra los turcos
1784-1785	Rebelión campesina en Transilvania
1803	Rebelión en Grecia
1803-1822	Rebelión y guerra civil en Albania
1803-1804	Rebelión búlgara en alianza con los jenízaros
1804-1817	Guerras de Independencia serbias (no se alcanza un acuerdo oficial hasta 1830)
1807	Revolución de los jenízaros en Adrianópolis y Constantinopla
1821-1824	Guerras de Independencia en Moldavia y Valaquia
1821-1825	Guerra de Independencia en Creta
1821-1831	Guerra de Independencia en Grecia
1826	Rebelión de los jenízaros en Constantinopla; disolución de los jenízaros
1830-1835	Guerra de Independencia en Albania
1831-1836	Guerra de Independencia en Bosnia
1843	Levantamiento proconstitucional en Grecia
1848	Guerra de Independencia en Moldavia
1848-1849	Revolución en Hungría, Bohemia, Moravia, Transilvania y Valaquia
1852-1859	Guerras de Independencia en Montenegro
1861	Revuelta de Herzegovina, apoyada por Montenegro
1862	Golpe militar en Grecia, derrocamiento del monarca
1862	Guerra de Independencia en Bosnia
1862	Guerra de Independencia en Serbia
1866-1868	Revuelta en Creta
1875-1878	Insurrecciones en Bosnia, Herzegovina y Bulgaria
1878	Guerras de Independencia en Bosnia, Herzegovina y Tesalia durante la guerra ruso-turca
1878	Guerra de Independencia en Creta
1885	Revolución probúlgara en Rumelia oriental
1888	Insurrección campesina en Rumania
1896-1898	Guerra de Independencia en Creta, intervención griega y británica
1902-1903	Guerra de Independencia en Macedonia
1905	Guerra de Independencia en Creta
1907	Insurrección campesina en Moldavia
1908-1909	Revolución de los Jóvenes Turcos en el imperio otomano, con la insurrección de Macedonia
1909	Guerra de Independencia en Rumania
1910	Insurrección albanesa
1912	Guerra de Independencia en Albania durante la guerra de los Balcanes
1918-1919	Guerra incruenta en Hungría, que termina con la intervención militar extranjera
1923	Derrocamiento de Stamboliski en Bulgaria
1935	Levantamiento venizelista en Grecia
1938	Revuelta en Creta
1943-1945	Resistencia antifascista en Yugoslavia y en otros lugares
1944-1949	Guerra civil griega, conquista soviética en Europa oriental
1955-1956	Guerra de la Enosis en Chipre, con intervención británica
1956	Revolución en Hungría abortada por la intervención soviética
1963-1964	Guerra civil en Chipre
1968	La intervención soviética pone fin a la liberalización del régimen en Checoslovaquia
1974	Guerra turco-chipriota, con guerra de guerrillas en Chipre
1989-1991	Derrocamiento de los regímenes comunistas en Albania, Bulgaria, Hungría, Rumania y Yugoslavia
1991-	Guerra civil en Croacia y Bosnia-Herzegovina

familia Habsburgo, murió mientras huía del campo de batalla. Poco después, una mayoría de la nobleza eligió como rey a Janos Zapolyai, un rico magnate y jefe militar. Sin embargo, una minoría, de la que formaba parte la viuda del monarca, optó por el archiduque Fernando, de la dinastía Habsburgo. Se produjo entonces un enfrentamiento abierto entre los partidarios de los monarcas rivales. En un principio, el archiduque Fernando consiguió destronar a Zapolyai, pero posteriormente fue derrotado por los turcos mientras Zapolyai (apoyado, e incluso reconocido temporalmente por los turcos) controló extensas zonas del país. Dadas las circunstancias, no es sorprendente que ni Zapolyai ni Fernando salieran triunfantes del conflicto. Fueron los turcos, *tertius gaudens*, los triunfadores. En 1541, los ejércitos otomanos ya habían conquistado Buda. Aunque Transilvania (cuyo primer príncipe fue el hijo de Zapolyai, aún menor de edad) pervivió como un Estado tampón semiindependiente, el imperio turco dominaba ya la mayor parte de la península balcánica.

Durante los dos siglos siguientes, los enfrentamientos dinásticos desgarraron frecuentemente la zona central del imperio, pero sólo afectaron a los Balcanes de forma indirecta. En Constantinopla y en su zona de influencia, las tropas jenízaras y las autoridades civiles lucharon por hacerse con el control desde los años 1560 hasta el siglo XIX en que se produjo la disolución de los jenízaros. Dejando al margen las incesantes luchas regionales, las rebeliones de importancia en las que participaron los jenízaros tuvieron lugar en 1566, 1622, 1803-1804, 1807 y 1826. En los Balcanes, esos conflictos fueron, fundamentalmente, la oportunidad para afirmar los derechos locales contra el centro debilitado. La revolución francesa apenas tuvo repercusiones directas en la región, en la que sin embargo influyeron más activamente las guerras napoleónicas. En efecto, en 1809 Francia arrebató a Austria lo que llamó las provincias ilíricas (Dalmacia, Istria, Carintia, Carniola y el territorio de la orilla derecha del Sava). Por otra parte, rechazó la petición de ayuda que le hicieron los nacionalistas serbios contra sus dominadores turcos. Las conquistas de Napoleón demostraron la vulnerabilidad de unos estados que antes parecían tener una fuerza abrumadora y ratificaron el principio de la nacionalidad como base para la formación de un Estado independiente. La aceleración de los movimientos de independencia a partir de 1803 supuso una ruptura profunda con respecto al panorama político

del siglo XVIII, en el que predominaban las rebeliones provinciales.

Por lo que respecta a su número, los conflictos con las potencias imperiales existentes o posibles dominaron los acontecimientos de la región durante el período de cinco siglos que comienza en 1492. La historia de las revoluciones balcánicas es, en gran medida, la de la modificación de lo que (desde la perspectiva actual de la mitología del Estado-nación) se llamarían guerras de liberación nacional y de sus participantes. Incluso las revoluciones burguesas-liberales de 1848-1849 en el imperio Habsburgo estuvieron informadas de un fuerte sentido de liberación nacional. Ateniéndome a la terminología teleológica de Evan Luard, he llamado a la mayor parte de esas situaciones revolucionarias «guerras de independencia», en la inteligencia de que, hasta 1815, a su conclusión seguía existiendo un soberano, ya fuera el antiguo u otro nuevo. En 1803, por ejemplo, el pachá de Janina se apoderó de la zona central y meridional de Albania y luego intentó redondear su nuevo reino con territorios griegos. No fue hasta 1822 cuando los ejércitos del sultán turco capturaron y ejecutaron al pachá, poniendo fin a la rebelión.

Durante el siglo XIX, al disminuir sensiblemente la fuerza del imperio turco, estallaron en toda la región balcánica, ocupada por los turcos, guerras de independencia apoyadas e instigadas muchas veces por otras potencias europeas. La guerra ruso-turca de 1877-1888 se vio acompañada de insurrecciones en Bosnia, Herzegovina, Tesalia y Creta. Los búlgaros se unieron a las fuerzas rusas contra los turcos y al terminar la guerra alcanzaron la independencia bajo la tutela de Rusia. También Rumania, Montenegro y Serbia vieron reconocida una precaria independencia. Pero al mismo tiempo, tropas austrohúngaras ocuparon los antiguos territorios turcos de Bosnia y Herzegovina. En 1808 el imperio austrohúngaro se anexionó ambos territorios, frustrando las ambiciones expansionistas de Serbia y el intento de Croacia (a la sazón una subdivisión de Hungría) de constituir una federación independiente de los eslavos del sur, literalmente una Yugoslavia. Ante la contracción del imperio turco, Rusia, Hungría y Austria se enfrentaron por la hegemonía en los Balcanes. La independencia seguía siendo ilusoria.

En los Balcanes, las rebeliones campesinas eran, en buena medida, levantamientos contra el imperio, porque el imperio turco solía conceder el derecho de recaudar los impuestos a los guerreros y aris-

tócratas, que eran el blanco principal de dichas rebeliones. La gran revuelta campesina húngara de 1514 no estuvo dirigida contra el imperio, porque en ese momento Hungría era todavía un Estado relativamente independiente; sólo doce años después los turcos ocuparían la mayor parte de su territorio. Sin embargo, dado que la nobleza constituía prácticamente el Estado y utilizaba su poder para someter cada vez más al campesinado, la revuelta tuvo, ciertamente, un importante componente antiestatal. Cuando el arzobispo Bakocz predicó la cruzada contra los turcos, respondieron a su llamada millares de campesinos voluntarios y ante la falta de nobles que pudieran dirigirla recurrió al guerrero profesional turco György Dózsa.

Sin embargo, a medida que el ejército avanzaba hacia el sur y aumentaba su fuerza, sus integrantes comenzaron a acusar a sus señores de traición, atacando los castillos de la aristocracia para hacer patente cuál era el espíritu que les guiaba. Hizo falta un ejército para sofocar la rebelión. Según cuenta Janos Bak,

> Dózsa y sus seguidores fueron hechos prisioneros y hacia el 25 de julio de 1514 sufrieron una terrible ejecución. Dózsa, acusado de pretender convertirse en rey, fue «entronizado» en una hoguera y a sus compañeros, que llevaban varios días sin comer, les obligaron a comer su carne abrasada. El cuerpo descuartizado del cabecilla campesino fue exhibido en las puertas de las ciudades por toda la llanura (Bak, en Sugar, 1990).

Cualquier enemigo de la nobleza húngara se convertía *ipso facto* en enemigo del Estado. El empalamiento, descuartizamiento y exhibición de los cuerpos mutilados había servido durante mucho tiempo a los gobernantes de la Europa suroriental para hacer ostentación de su poder. En respuesta a esa rebelión, o utilizándola como pretexto, la nobleza se apresuró a someter legalmente al campesinado a una servidumbre aún más intensa. Esa servidumbre, una de las más onerosas de Europa, perduró durante más de dos siglos.

La revuelta campesina de Valaquia en 1655 tuvo más trascendencia de lo habitual por una triple razón. En primer lugar, coincidió con una crisis económica y política en el régimen turco, que no encontraba los medios necesarios para financiar su pesada maquinaria militar. El sultán hizo ejecutar al gran visir Ibshir Pasha por no haber sido capaz de restablecer el orden. En segundo lugar, la rebelión contempló la alianza de los cuerpos de mercenarios (los seimeni), que el imperio trataba de desmantelar, con los campesinos, que asesinaron y robaron a los recaudadores de impuestos de la región (boyars). En tercer lugar, el gobernador de Valaquia solicitó la ayuda de fuerzas extranjeras (transilvanas) para ayudarle a dominar a los rebeldes. De esta forma, una rebelión campesina contra la nobleza tuvo repercusiones nacionales e internacionales.

Para ofrecer un tercer ejemplo, la revuelta campesina moldava de 1907 se centró más concretamente en cuestiones relacionadas con la tierra. Se inició con la reivindicación de que se redistribuyeran las propiedades de los grandes terratenientes y de los administradores judíos, y fue cobrando fuerza hasta convertirse en una gran concentración de campesinos en torno a la ciudad de Iassi. Mientras acudían hacia la concentración, los campesinos saquearon las casas de los señores, ocuparon la tierra y crearon sus propias unidades militares. Tuvieron que intervenir el ejército y las tropas de reserva, 120.000 hombres, para dispersarlos, al elevado precio de 10.000 rebeldes muertos (Berend y Ránki, 1977, p. 56). Pero para entonces Rumania era un Estado más o menos independiente atrapado entre el imperio austrohúngaro, todavía fuerte, y el imperio turco, que se hallaba en franco retroceso. Durante un tiempo, las rebeliones campesinas no entrañaron necesariamente la formación de coaliciones entre potencias extranjeras y pretendientes al poder.

Con el hundimiento de los imperios austrohúngaro y turco, al finalizar la primera guerra mundial, estallaron en los Balcanes múltiples revoluciones: las guerras de independencia de Bohemia, Moravia y Eslovaquia, que concluyeron con la formación de Checoslovaquia, la revolución incruenta en Hungría, que desembocó en una sangrienta intervención militar aliada, y la también incruenta revolución de Bulgaria, que terminó (solamente en 1923) con el derrocamiento violento de Stamboliski. Desde entonces y hasta el estallido de la segunda guerra mundial, sólo en Grecia se produjeron situaciones revolucionarias. Cuando avanzaron las fuerzas del Eje y (especialmente) cuando se retiraron, durante la segunda guerra mundial, los movimientos de resistencia de Grecia y Yugoslavia llevaron a esos países al borde de la revolución. Las múltiples fuerzas de resistencia se aliaron en Grecia

con liberadores británicos para librar una auténtica guerra civil que no concluyó hasta 1949.

Es discutible si los diferentes cambios de gobierno que se produjeron a continuación en la zona soviética de ocupación han de considerarse como revoluciones. Sin duda, el conflicto generado por las propuestas de los chipriotas griegos para la unión entre Chipre y Grecia (1955-1959), que desencadenaron una intervención militar británica, puede considerarse como una guerra civil. La reanudación de las hostilidades en 1963-1964 y, luego, en 1974, sumieron de nuevo a Chipre en una guerra civil. Las intervenciones soviéticas en Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968) pusieron fin a situaciones revolucionarias que habían sido provocadas por los intentos de liberalización que llevaron a cabo los regímenes locales en esos países satélites. Así pues, las revoluciones nacionales y antiimperialistas continuaron floreciendo en los Balcanes, pero culminaron en 1989.

Las revoluciones anticomunistas de los Balcanes, que estallaron en 1989, demostraron que los estados de la región habían alcanzado una importante consolidación bajo la influencia soviética. Sin duda, los menos consolidados eran aquellos que habían recibido una influencia menos directa de los soviéticos: Yugoslavia, Grecia y Turquía. Al desaparecer la amenaza soviética, e impulsada por la desintegración del imperio soviético y por el afán de establecer lazos más estrechos con la vigorosa economía de Europa occidental, Yugoslavia se deshizo en fragmentos en un proceso iniciado por la negativa de la etnia albanesa a aceptar un control central (es decir, serbio) más estrecho.

En 1991, serbios y croatas se enzarzaron en una guerra civil y las antiguas provincias trataron de obtener el reconocimiento internacional como estados independientes. Ello determinó que también se movilizaran las minorías étnicas de esos protoestados, constituyendo alianzas con otras etnias de los protoestados vecinos. En Grecia, los altercados parlamentarios y las acusaciones de corrupción que resultaron de la existencia de redes clientelares derribaron a Andreas Papandreu, pero no se produjo el estallido de una guerra civil. En Turquía (enfrentada desde hacía tiempo con Grecia a propósito de la división de Chipre en dos sectores, griego y turco), los refugiados turcos por razones étnicas, procedentes de Bulgaria, abrumaron una economía que experimentaba ya graves dificultades, el país sirvió como base para el ataque norteamericano contra Iraq y el desplazamiento

subsiguiente de los kurdos iraquíes fue la causa de que el Estado experimentara nuevas dificultades con la minoría kurda. Pero esos enfrentamientos endémicos tampoco degeneraron en una guerra civil.

Muy distinto fue el curso de los acontecimientos en Hungría, Bulgaria, Albania y Rumania. En Hungría, como fruto de intensas maniobras entre el sector crítico y los funcionarios en el poder, el partido obrero socialista húngaro se disolvió y un gobierno reorganizado se proclamó como república húngara (ya no popular), pero todo ello se produjo sin que tuviera lugar una ruptura abierta en el país. En Bulgaria, el gobernante comunista Todor Zhivkov, en el poder desde hacía tanto tiempo, perdió el cargo en un golpe incruento aprobado por los soviéticos. Se formaron entonces diversos sectores de oposición y los comunistas comenzaron a disolverse, pero tampoco en este caso se produjo una situación plenamente revolucionaria. De hecho, la situación más próxima a una ruptura revolucionaria se vivió en Bulgaria, antes de la caída de Zhivkov, en las confrontaciones con los musulmanes, que se resistían a su asimilación por la fuerza por la nacionalidad búlgara, y luego en la emigración a Turquía de unos 320.000 musulmanes. En Albania, el régimen paleocomunista sobrevivió a las tormentas de 1989, pero no a la crisis económica subsiguiente y a la sangría de refugiados hacia Italia. Sin embargo, tampoco allí se produjo una situación revolucionaria.

De los cuatro casos de hundimiento de regímenes comunistas, el de Rumania fue el más revolucionario en cuanto al proceso, si no en cuanto al resultado. Aunque ya a principios de 1989 se manifestaron algunos signos de oposición al gobierno autoritario de Ceausescu, la auténtica crisis comenzó con la resistencia de un pastor luterano húngaro, Laszlo Tokes, ante los intentos del gobierno de silenciar su defensa de los derechos étnicos y religiosos. Cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes que protestaban por la destitución de Tokes, establecieron más claramente que nunca la frontera que existía entre el régimen y la oposición. Al regreso de Ceausescu, unos días más tarde, de un viaje que había realizado a Irán, la convocatoria de una concentración en Bucarest en apoyo del régimen dio una oportunidad a la oposición. En lugar de aclamar a Ceausescu, la multitud le denigró. Después de todo un día de intensas maniobras, el grueso del ejército se unió a los manifestantes, un frente de salvación nacional ocupó el poder, el dictador y su esposa huye-

ron, otros opositores del régimen los capturaron, juzgaron y ejecutaron, y la guardia de seguridad de Ceausescu renunció a intentar restablecer el orden. Probablemente, centenares de personas murieron en una u otra fase de la contienda. Los enfrentamientos de Rumania tuvieron el aspecto de una revolución popular, pero también entroncaban con la larga tradición balcánica de guerras de independencia.

Comparaciones, nexos y conclusiones

Las trayectorias revolucionarias de los Países Bajos, la península ibérica y los Balcanes no fueron completamente independientes entre sí. En las tres regiones ocuparon una posición importante distintas ramas de la dinastía Habsburgo. Las conquistas de Napoleón contribuyeron a reorganizar los estados de los Países Bajos, la península ibérica y Dalmacia, y aceleraron las reivindicaciones independentistas en los territorios europeos del imperio turco. Por otra parte, las reformas que se impusieron en Holanda y Bélgica en 1847-1848, los golpes de estado liberales que se produjeron en España y Portugal a mediados del siglo XIX y las revoluciones de 1848-1849 en los territorios de los Habsburgo fueron movilizaciones de la burguesía contra viejos privilegios y sus fundamentos eran la soberanía popular, los derechos de los ciudadanos y el parlamentarismo. En las tres regiones mencionadas se dejaron sentir las profundas transformaciones del sistema de estados europeos que tuvieron lugar entre 1492 y 1992: la consolidación del poder político en estados centralizados, diferenciados, claramente delimitados y unificados, la creación de grandes ejércitos permanentes integrados por la población civil y el fortalecimiento de la capacidad del Estado en aspectos tales como la fiscalidad, el reclutamiento obligatorio, la educación, la justicia y la legislación.

Sin embargo, cada una de las tres regiones siguió una trayectoria revolucionaria diferente en función de dos factores esenciales: 1) el equilibrio entre coerción y capital en la región y 2) la diferente posición geopolítica y geoeconómica de la región. La evolución política de los Países Bajos es la de un territorio profundamente capitalista en el que las relaciones de la burguesía con la aristocracia, los trabajadores, los campesinos y los gobernantes definieron las posibilidades revolucionarias durante cinco siglos. En ningún caso se produjeron revueltas estrictamente campesinas ni conflictos exclusivamente dinásticos en la fase de transición de las revoluciones comunales/dinásticas/patrono-cliente a las revoluciones nacionales/de coalición de clases. Sin embargo, entre los estados vecinos se produjeron frecuentemente invasiones e intervenciones. Después de todo, la batalla de Waterloo, que determinó el destino de Napoleón, no tuvo lugar en Francia sino en el sur de los Países Bajos.

Por lo que respecta a la península ibérica, la viabilidad de las revoluciones pasó durante mucho tiempo por la coincidencia de factores opuestos: el medio rural dominado por la nobleza con los municipios privilegiados y con las regiones litorales, que participaban intensamente en el comercio mundial y en las empresas imperiales, los beneficios del imperio con la fragmentación de la soberanía, el orgullo de la monarquía con la incapacidad financiera del Estado, el peso de la burocracia con la autonomía de los magnates militares. En la península ibérica, las revoluciones comunales adquirieron un carácter nacional, mientras que los enfrentamientos dinásticos se perpetuaron para sumarse a las revoluciones nacionales y de coalición de clases.

En los Balcanes y en Hungría, la expansión y contracción de los imperios que tenían su base en otras partes determinaron la compleja trayectoria de las revoluciones. Mientras que las luchas dinásticas que se producían en el centro de unos imperios expansionistas influían en las situaciones revolucionarias locales, durante varios siglos las revoluciones dinásticas sólo se produjeron cuando estallaban revoluciones comunales —especialmente campesinas—. Frecuentemente, las situaciones revolucionarias comunales se planteaban de forma independiente cuando se producía el colapso del poder imperial. Las revoluciones nacionales empezaron a producirse pronto y con frecuencia, mientras que hasta época reciente las coaliciones de clase raramente provocaron situaciones revolucionarias en las que no hubiera un fuerte elemento nacionalista. El hecho de que, generalmente, los grandes terratenientes de las regiones otomanas fueran musulmanes y obtuvieran la independencia favoreció la estrecha asociación entre nacionalismo y coaliciones de clase.

Ciertamente, las diferencias entre las trayectorias revolucionarias de los Países Bajos, la península ibérica y los Balcanes son palmarias. Especialmente profundas son las diferencias que existen entre los Países Bajos y las otras dos regiones: en la península ibérica y en

los Balcanes continuaron produciéndose situaciones revolucionarias hasta un pasado reciente, y sin embargo se interrumpieron casi por completo en los Países Bajos al terminar la guerra de independencia contra España. La burguesía de los Países Bajos, una vez que se hizo con el control de su pequeño Estado, se dedicó de lleno a sus empresas comerciales y olvidó las luchas intestinas por la superioridad política. Con la excepción parcial de la revolución de independencia belga en 1830-1833, fuertemente teñida de nacionalismo, las escasas situaciones revolucionarias que se produjeron posteriormente en los Países Bajos enfrentaron a coaliciones de clase, encabezadas por la burguesía, con el poder central aristocrático y/o monárquico. En cambio, en la península ibérica y en los Balcanes las situaciones revolucionarias fueron especialmente frecuentes a partir de 1800, destacando los golpes de estado protagonizados por el ejército en la península ibérica y los movimientos independentistas en los Balcanes.

Si en las tres regiones las revoluciones nacionales y aquellas que implican una coalición de clases desplazaron a las revoluciones de carácter dinástico y comunal, a partir de 1492 las coaliciones entre las clases burguesa, aristocrática y campesina tuvieron más importancia en los Países Bajos de lo que es posible explicitar en una cronología básica, mientras que en la península ibérica se mezclaron muchas veces las revoluciones dinásticas y de coalición de clases y en los Balcanes se produjeron las revoluciones nacionales más importantes y prolongadas. Por consiguiente, el esquema (comunal + patrono-cliente + dinástico) → (militar) → (nacional + coalición de clases) ayuda a establecer la cronología básica y a clasificar las situaciones revolucionarias en Europa, pero exige introducir alguna modificación en función de los rasgos peculiares de la región por lo que respecta a la formación del Estado y a la transformación capitalista.

¿Qué tipo de modificación? Evidentemente, se trata de la correspondencia general entre situaciones políticas revolucionarias y no revolucionarias en unas regiones con características distintas, pues mientras en unas predominaba un intenso capitalismo en otras destacaba el alto grado de poder coercitivo. La aristocracia, sus ejércitos privados y el campesinado al que explotaban ocuparon durante mucho tiempo una posición dominante en los procesos revolucionarios allí donde existía un elevado grado de coerción, y la burguesía y el artesanado urbano ocupaban un lugar mucho más destacado en las zonas de capitalismo desarrollado. Los instrumentos militares de la rebelión se ajustaron básicamente al mismo esquema: las milicias burguesas predominaron en los Países Bajos, los ejércitos profesionales en la península ibérica, y los ejércitos privados y la guerrilla en los Balcanes. Como consecuencia, cuando las coaliciones de clase protagonizaban desde hacía ya mucho tiempo las situaciones revolucionarias en los Países Bajos, continuaban produciéndose revoluciones militares en la península ibérica y revoluciones nacionales en los Balcanes.

La trayectoria histórica de las tres regiones revela la relación entre revolución y contienda bélica. Prácticamente todas las transferencias violentas de poder que se produjeron en el período de 500 años que examinamos tuvieron lugar durante una guerra, como un hecho bélico o como una consecuencia de la guerra. La rebelión de los Países Bajos se inició como un movimiento de resistencia a los impuestos decretados para financiar la guerra y terminó en una serie de guerras internacionales. La guerra de los Treinta Años propició las grandes rebeliones de 1640 en Portugal y Cataluña. Son de destacar también las múltiples situaciones revolucionarias que desataron las guerras napoleónicas entre 1803 y 1815 y la guerra ruso-turca de 1878. Mientras Rusia y el imperio turco se enfrentaban en un conflicto titánico en el siglo XIX, los territorios de los Balcanes turcos comenzaron a independizarse o incluso a participar en las guerras por su cuenta. La guerra y la revolución no sólo se alimentaban mutuamente, sino que se diluían la una en la otra.

Ahora bien, la correspondencia entre guerra y revolución era imperfecta. Aunque las intervenciones militares garantizaban el resultado revolucionario, por ejemplo la revolución belga de 1830 y las revoluciones del imperio austríaco de 1848-1849 no fueron una consecuencia directa de la guerra internacional. Por otra parte, una contienda bélica no producía automáticamente una revolución: los Países Bajos sufrieron repetidas invasiones entre 1477 y 1945, pero sólo un número muy reducido de ellas desencadenó divisiones temporales en el Estado y únicamente media docena de ellas determinaron una transferencia de poder. Durante el siglo XIX, la relación entre guerra y revolución fue estrecha, aunque indirecta, en la península ibérica. Durante las guerras napoleónicas se crearon unas fuerzas armadas que tras el hundimiento de los imperios de la península ibérica durante y después de esas guerras quedaron como entidades autónomas con unas

obligaciones militares mucho menores en el plano internacional. Entonces, dedicaron sus energías a la conquista del poder del Estado. España y Portugal apenas participaron en conflictos internacionales entre 1815 y 1898, pero sufrieron numerosas transferencias violentas de poder, en muchos casos con una intervención armada de las potencias vecinas. La condición necesaria para la revolución no era la guerra, sino el colapso de la capacidad militar del Estado. Sin embargo, la mayor parte de las veces ese colapso se producía como consecuencia de la guerra.

¿Hasta qué punto esa forma de entender la relación entre la revolución y la transformación de los estados arroja luz sobre la trayectoria revolucionaria de las regiones a las que aún no hemos dedicado nuestra atención? ¿Acaso las grandes revoluciones de Inglaterra, Francia y Rusia, en particular, se ven bajo una luz diferente desde esa óptica? En los tres próximos capítulos analizaremos de manera convencional las revoluciones de las islas Británicas, Francia y Rusia. En cada caso, examinaremos todo el período desde 1492, pero en el proceso de análisis se prestará mayor atención a un siglo concreto en cada una de las zonas: 1600-1700 en el caso de las islas Británicas, 1750-1850 en el caso de Francia, y el siglo XX por lo que respecta a Rusia. El objetivo no será establecer un nuevo modelo de las grandes revoluciones, sino presentar bajo una nueva luz las relaciones entre las grandes revoluciones y su contexto político.

CAPÍTULO CUATRO

Las islas Británicas

Gran Bretaña y la revolución

La historia británica constituye un manual frecuentemente consultado para evitar la revolución, pero hasta qué punto sea válido depende totalmente del período y los lugares que se examinen. Si tan sólo se hace referencia a Inglaterra y Gales, ciertamente hay que remontarse hasta 1687 para contemplar una situación plenamente revolucionaria. Si se incluye Escocia, la cronología da un salto hacia adelante hasta 1745, y si se amplía la encuesta al conjunto del imperio británico, todavía en el decenio de 1950 tienen lugar rebeliones anticoloniales. En el caso de Irlanda, el Ulster aún esta ardiendo en llamas. En el período comprendido entre 1492 y 1992, la historia británica de la revolución sigue muchas otras trayectorias, pero comienza y termina en Irlanda. A lo largo de 500 años, los gobernantes ingleses intentaron repetidamente subyugar a Irlanda, al precio de repetidas situaciones revolucionarias y de, al menos, un resultado revolucionario. Dublín nunca renunció a su independencia frente a Londres. Todavía en la actualidad, el Ulster, desgarrado, hace que en Westminster se respire también su atmósfera profundamente revolucionaria.

Partiendo de la definición de que las islas Británicas están formadas básicamente por Irlanda, Escocia, Gales, Inglaterra y las islas inmediatamente adyacentes, y utilizando el término «británicos» en sentido amplio para designar a todos sus habitantes, preguntémonos cómo influyó la historia de los diferentes estados que ocuparon ese territorio en el devenir de sus revoluciones. Nos centraremos en el siglo XVII, el gran período revolucionario, pero situaremos el conjunto de levantamientos que se produjeron en ese período en la perspectiva más amplia de la formación del Estado británico. Descubriremos profundas

transformaciones en la naturaleza de las revoluciones británicas a medida que cambió la estructura de los estados británicos y se modificó la posición de Gran Bretaña en el sistema de estados.

Desafiemos también las posiciones teleológicas, según las cuales Irlanda y Gran Bretaña son el resultado natural de un largo proceso de desarrollo. Encontraremos, de esta forma, situaciones en los estados y en las revoluciones que podrían haber tenido un destino muy distinto, de manera que en la actualidad los estados podrían ser diferentes. Por lo que respecta a los conceptos de capital y coerción, apreciaremos la existencia de condiciones diversas, desde una elevada concentración de capital en Londres y sus áreas satélites hasta un fuerte acento en los principios de la coerción en Irlanda y las Highlands de Escocia. Observaremos la eclosión de Gran Bretaña como gran centro del capitalismo mundial en correspondencia con su desarrollo como potencia militar e imperial. Por lo que respecta a la formación de los estados, en contraste con la gran importancia del elemento capitalista en los Países Bajos y con la fuerza relativa de la coerción en la península ibérica y en los Balcanes, veremos cómo los estados británicos (especialmente Inglaterra) adoptaron una vía intermedia en la que el capital y la coerción eran a veces principios opuestos, para acabar integrándose perfectamente.

La densidad y el esquema de urbanización es testimonio de la posición cambiante de Gran Bretaña en la economía europea. A finales del siglo XV, la zona suroriental de Inglaterra formaba parte del límite occidental del sector de mayor densidad urbana de Europa, que tenía su centro en Flandes. Escocia e Irlanda quedaban totalmente al margen de él. Hacia 1750, la región de Londres era uno de los polos europeos más importantes de concentración urbana y tanto el sur de Escocia como la zona próxima a Dublín estaban claramente vinculados a Londres. Desde entonces han surgido otros centros europeos en competencia con Londres, pero las islas Británicas en conjunto han continuado formando parte de los territorios europeos más urbanizados. En el año 1500, entre las ciudades británicas que superaban los 5.000 habitantes se contaban Bristol, Colchester, Coventry, Edimburgo, Exeter, King's Lynn, Londres, Newcastle, Norwich, Oxford, Shrewsbury, Yarmouth y York, doce ciudades en Inglaterra, una en Escocia, ninguna en Gales y ninguna en Irlanda. En 1750 en las islas Británicas había al menos cuarenta y cinco ciudades de más de 5.000

habitantes, de ellas siete en Escocia y cinco en Irlanda; Londres solo tenía 675.000 habitantes (De Vries, 1984, pp. 270-271). En 1992 la población urbana del Reino Unido suponía el 95 por 100 del total, mientras que en Irlanda representaba el 60 por 100. De la mano de esa urbanización, tanto la importancia relativa del capital en la vida británica como la vinculación del capital británico con el capital mundial aumentaron enormemente.

En 1492 coexistían en las islas Británicas tres estados importantes y docenas de entidades semiautónomas (como las islas del Canal). Excepto en los momentos de la sucesión al trono, el Estado inglés había conseguido una notable preeminencia en su territorio, en tanto que el control que ejercía el Estado escocés sobre su zona de influencia era todavía incierto, y por lo que respecta al Estado irlandés, su autoridad era contestada permanentemente. Toda Inglaterra estaba sometida a la autoridad de su rey, pese a la considerable autonomía que gozaban algunos grandes magnates del norte, como los Percy, y aunque el Estado (por comparación, pongamos por caso, con los estados pontificios o Borgoña) no estaba en condiciones de plantear demasiadas exigencias a sus súbditos. Pero, a cambio, también era poco lo que hacía por ellos.

Las tropas inglesas habían sofocado el último levantamiento de Gales, el de Owen Glendower, en 1409. El apoyo que prestaron los galeses a Enrique Tudor en su enfrentamiento con Ricardo III, después del desembarco de aquél en 1485, cimentó los vínculos entre Gales e Inglaterra. Desde entonces, Inglaterra consideró Gales como una propiedad real. Por lo que respecta a los asuntos internacionales, Irlanda se comportaba como una colonia rebelde que sólo mantenía relaciones internacionales de manera furtiva e intermitente. Escocia detentaba una posición independiente como Estado europeo de segundo orden e Inglaterra era una potencia europea con la que había que contar. Hacia 1492, Inglaterra se estaba convirtiendo en una potencia marítima importante tanto en el comercio como en la guerra. En ambos aspectos, mantenía estrechos lazos con Flandes, que era entonces el centro del comercio textil europeo. Inglaterra, que durante mucho tiempo había ocupado una posición periférica en los asuntos europeos, se estaba convirtiendo en una gran potencia y ese proceso indujo también a los escoceses a intensificar sus conexiones europeas para tratar de contrarrestar el predominio inglés y, ocasionalmente, llevó a los aris-

tócratas irlandeses a establecer relaciones con gobernantes extranjeros.

En cuanto que potencia comercial, el Estado inglés obtenía una parte importante de sus ingresos fiscales de los derechos de aduana en lugar de basar su sistema impositivo en los impuestos de capitación o en los impuestos sobre las propiedades. Las rentas procedentes de los dominios reales todavía suponían en torno al 40 por 100 de los ingresos de Enrique VII, pero a medida que fueron aumentando los costes de la guerra, los monarcas Tudor recurrieron cada vez más a la exacción de impuestos (Clay, 1984, I, pp. 251-252). En 1610, de los ingresos ordinarios del Estado, que se cifraron en 461.500 libras, el 31 por 100 procedía de las rentas y derechos feudales, el 54 por 100 de los derechos de aduana y sólo el 15 por 100 de otras fuentes (Kennedy, 1964, p. 8). Hasta después del Parlamento Largo y la guerra civil, en el siglo XVII, la corona recaudaba esos ingresos «ordinarios» en virtud de su propia autoridad, pero recurría al Parlamento para obtener los fondos extraordinarios requeridos para financiar la guerra.

Los costos de la guerra aumentaron notablemente cuando Inglaterra comenzó a tener una presencia más activa en la política continental a partir de 1580. Como en otros lugares de Europa, el recurso creciente a la pólvora, la artillería, la guerra de asedio, la infantería mercenaria y las fortificaciones necesarias para resistir a todo ello hicieron aumentar el costo de los ejércitos reales y complicaron enormemente los problemas del aprovisionamiento militar. Ya no era posible que cada pequeña unidad se dotara de su propia infraestructura y de sus propias armas. Tres fueron las consecuencias: 1) la corona enajenó gradualmente sus propiedades; 2) los monarcas tuvieron que recurrir cada vez más al Parlamento para obtener ingresos procedentes de los impuestos territoriales; y 3) el Parlamento aumentó progresivamente su control sobre todos los ingresos de la monarquía. En la década de 1640, el Parlamento venció una prolongada resistencia a decretar impuestos sobre el consumo de alimentos y bebidas. Durante los siglos siguientes, el desarrollo comercial de Inglaterra determinó que los derechos aduaneros y los impuestos sobre el consumo fueran las fuentes más importantes de los ingresos del Estado. Su control por parte del Parlamento otorgó a los Lores y a los Comunes una importancia cada vez mayor en la vida pública.

En 1492 la Cámara de los Lores representaba a la nobleza y a la

Iglesia, mientras que la Cámara de los Comunes reunía a la *gentry* y a los comerciantes. Contando con el apoyo financiero del Parlamento, Enrique VII y los últimos monarcas Tudor fortalecieron considerablemente el poder del Estado y redujeron los ejércitos privados de los grandes magnates. También eliminaron prácticamente los castillos privados, excepto en las proximidades de la frontera con Escocia, al tiempo que construían plazas fortificadas controladas directamente por la corona. Enrique VIII apartó a la Iglesia de Inglaterra de la órbita de Roma, confiscó sus rentas y expropió sus monasterios, lo que le permitió aumentar sus ingresos y situar al clero bajo el control del Estado. En el período comprendido entre el reinado de Enrique VII y el de Isabel I, los Tudor consiguieron dominar a los magnates ingleses y expandir el Estado, proceso que aunque suscitó una larga serie de rebeliones acabó por ampliar los poderes del gobierno.

Como los holandeses medio siglo antes, los ingleses libraron cruentas batallas intestinas en el siglo XVII, precisamente en el momento en que en el exterior se estaban convirtiendo en una fuerza importante. Con la reorganización de las finanzas del Estado y de la administración bajo influencia holandesa, dieron forma a un Estado muy poco convencional: con una concentración de poder en el vértice mayor que en el Estado holandés, pero compacto, fiable, eficaz, y con una administración que, en los niveles local y regional, dependía todavía de la *gentry* y el clero, que gozaban de una amplia autonomía. La combinación de diversos factores (un monarca fuerte que ejercía un estricto control sobre las fuerzas armadas, un Parlamento que vigilaba estrechamente las finanzas del Estado, una red extensa de tribunales sancionados por la monarquía, una población rural en rápido proceso de proletarización, un campesinado en extinción, la proliferación de la manufactura a pequeña escala y una *yeomanry* próspera) y la colaboración entre los comerciantes y una nobleza emprendedora permitieron que Inglaterra se convirtiera en un Estado formidable.

Escocia estaba poblada por señores, campesinos, pastores y pescadores. El país mantuvo su independencia a pesar de los intentos de los ingleses por dominarlo, de los continuos matrimonios mixtos de los miembros de su familia real con los de la familia real de Inglaterra y de las continuadas operaciones militares de los ingleses para conquistarlo. En 1492 los Estuardo habían establecido un derecho a la sucesión hereditaria de la monarquía escocesa más firme que el de

ninguna otra dinastía en Polonia, Rusia o Hungría. Como factor de seguridad contra las amenazas inglesas, los monarcas escoceses habían establecido alianzas intermitentes con Francia desde 1295. Sin embargo, dichas alianzas no consiguieron mantener a raya a los ingleses. En 1513, el rey de Escocia, Jacobo IV, murió en el curso de una batalla con los ingleses en Flodden Field. Su sucesor, Jacobo V, murió en 1542 después de otra invasión inglesa.

No obstante, Escocia prosperó bajo las influencias francesa e inglesa, oscilando hacia la órbita de Francia cuando María, reina de Escocia, accedió también al trono de Francia en 1559. Luego, el hijo de María, Jacobo, se convirtió en rey de Inglaterra en 1603. Las doctrinas protestantes consiguieron gran difusión en Escocia a partir de la década de 1520. Apoyados por los ingleses, los escoceses establecieron una Iglesia protestante estatal en 1560 con el objetivo de hacer frente a su reina católica ausente. Los parientes y aliados franceses de la reina, ocupados por completo en sus propias guerras de religión, no pudieron impedir esa modificación. (Entre 1637 y 1660, la Escocia revolucionaria llevó a cabo la separación de la Iglesia y el Estado. En 1690, el nuevo monarca Guillermo de Orange contribuiría a la sustitución de la Iglesia episcopal escocesa por el presbiterianismo, que prescindía del episcopado. Sin embargo, la primera iglesia nacional escocesa era profundamente episcopal.) Ahora bien, el protestantismo no triunfó en todas partes en las islas Británicas: Irlanda seguiría siendo una colonia recalcitrante, totalmente católica, excepto por lo que respecta a los grandes magnates asentados en la isla por Inglaterra y a las pequeñas «plantaciones» del norte, formadas por elementos escoceses e ingleses.

En Irlanda, tierra eminentemente agraria, no existía un soberano que ejerciera su autoridad sobre el conjunto del territorio y los belicosos señores regionales gozaban de una considerable autonomía y se reunían en un Parlamento independiente, con sede en Dublín, que los gobernadores ingleses controlaban con gran dificultad. Excepto en la zona del Pale inglés (cuatro condados medievales que circundaban Dublín), la mayor parte de la población no hablaba inglés sino gaélico. La Iglesia católica era el principal factor de unificación de la población irlandesa. Desde 1492 se había acentuado el carácter gaélico de Irlanda, pues se había eclipsado el régimen anglo-normando establecido dos siglos antes. Frecuentemente, los enemigos del monarca inglés, tanto en el exterior como en la propia nación, se aliaban con aristócratas irlandeses, la mayor parte de los cuales no debían su título de nobleza al reconocimiento de sus servicios por parte de la monarquía, sino a su condición de jefes de clanes guerreros.

Por ejemplo, en 1487, una asamblea del clero y de la nobleza de Irlanda había coronado como rey de Inglaterra a Lambert Simnel, que era el pretendiente de la casa de York a la casa inglesa. Simnel inició en Irlanda su intento fracasado de invasión de Inglaterra, acompañado de soldados irlandeses. De nuevo en los años 1530, el principal ministro de Enrique VIII, Thomas Cromwell, provocó una gran revuelta en Irlanda al intentar desplazar al magnate anglo-irlandés, conde de Kildare, en favor de un diputado inglés más afecto a la corona y, por otra parte, aunque en 1541 Enrique VIII asumió el título de rey de Irlanda, su autoridad no era reconocida en todo el territorio. Si se contemplan desde la parte occidental del mar de Irlanda, las situaciones revolucionarias irlandesas —al menos hasta 1691— parecen, más que rebeliones en el seno de un Estado ya formado, una mezcla de resistencia generalizada a un intento de conquista desde el exterior y enfrentamientos por la supremacía local.

Se puede concluir, por tanto, que a pesar de que existió una permanente interacción entre ellas, Inglaterra, Escocia e Irlanda vivieron experiencias muy distintas por lo que respecta a la formación del Estado. Hasta el siglo XVIII, la trayectoria histórica de los tres países exige un análisis por separado y en el período posterior se hace necesario analizar de manera específica la experiencia revolucionaria de Irlanda, precisamente para poder apreciar su interdependencia con la historia política de Inglaterra, Gales y Escocia.

Si las guerras con Inglaterra dieron forma a los estados de Escocia, Gales e Irlanda, el Estado inglés fue fruto de esos enfrentamientos y de las guerras que le enfrentaron con el resto del mundo. El cuadro 4.1 enumera los principales enfrentamientos bélicos en los que participaron los estados británicos dentro y fuera de las islas Británicas entre 1492 y 1992. Este catálogo incompleto documenta tres hechos fundamentales: 1) la permanente actividad bélica de Inglaterra desde finales del siglo XV hasta el pasado reciente; 2) la expansión de las guerras británicas fuera del espacio europeo a partir de 1750, durante los períodos de colonización y descolonización; y 3) el hecho de que los ejércitos irlandeses y escoceses se concentraron, de forma

CUADRO 4.1. Guerras exteriores en las que participaron los estados británicos, 1492-1992.

1489-1492	Guerra franco-inglesa
1511-1514	Guerra de la Liga Santa
1512	Guerra de Navarra
1521-1526	Primera guerra de Carlos V
1526-1529	Segunda guerra de Carlos V
1544-1546	Guerra contra los turcos
1549-1550	Guerra franco-inglesa
1556-1559	Guerra franco-española
1562-1564	Primer enfrentamiento con los hugonotes
1568	Guerra hispano-inglesa en el Caribe
1585-1604	Enfrentamiento con la Armada Invencible
1618-1648	Guerra de los Treinta Años
1621	Guerra de los ingleses contra Argel
1624-1625	Guerra anglo-marroquí
1635-1637	Guerra anglo-marroquí
1650-1654	Guerra anglo-portuguesa
1652-1655	Conflicto naval anglo-holandés
1655-1659	Guerra anglo-española
1655	Conflicto entre Inglaterra y Túnez
1663-1667	Conflicto naval anglo-holandés (intervención francesa, 1665-1667)
1670	Conflicto entre Inglaterra y Argel
1672-1679	Invasión francesa de los Países Bajos
1675-1676	Conflicto entre Inglaterra y Trípoli
1681-1682	Conflicto entre Inglaterra y Argel
1688-1697	Guerra de la Liga de Augsburgo
1700-1721	Segunda guerra del Norte
1701-1714	Guerra de Sucesión española
1718-1720	Guerra de la Cuádruple Alianza
1726-1729	Guerra hispano-británica
1740-1748	Guerra de Sucesión austríaca
1753-1763	Guerra de los Siete Años y antecedentes norteamericanos
1757	Guerra de Bengala
1776-1783	Guerras mahrattas
1776-1783	Guerra de la revolución norteamericana
1781-1784, 1789-1792, 1798-1799	Guerras de Mysore
1792-1802	Guerras de la revolución francesa
1802-1804	Guerras mahrattas
1803-1815	Guerras napoleónicas
1806-1812	Guerra ruso-turca
1812-1814	Guerra de 1812 con EEUU
1814-1816	Guerra gurja
1816	Guerra de Argel
1817-1818	Guerras mahrattas
1821-1829	Guerra de Independencia griega
1823-1826	Guerra de Birmania
1824-1826	Guerra con los ashanti
1825-1830	Guerra con los tasmanios
1827	Bahía de Navarino
1828-1834	Intervención en la guerra civil portuguesa
1830-1833	Intervención en la guerra de Independencia belga
1833-1840	Intervención en la primera guerra carlista
1838-1842	Guerra afgano-británica
1839-1840	Intervención en la guerra turco-egipcia
1839-1842	Guerras en China
1839-1852	Intervención en la guerra argentino-uruguaya
1843	Guerra del Sind
1845-1846	Guerra sij
1845-1847	Guerra maorí
1846-1850	Intervención en la guerra civil portuguesa
1848-1849	Guerra sij
1851-1852	Guerra basuto
1852-1853	Guerra de Birmania
1854-1856	Guerra de Crimea
1856-1857	Guerra anglo-persa
1856-1860	Guerras en China
1857-1859	Motín en la India
1863-1865	Guerra en Bután
1863-1869	Guerra maorí
1865	Guerra con los ashanti
1867-1868	Guerra etíope
1873-1874	Guerra con los ashanti
1878-1881	Guerra afgana
1879-1880	Guerra zulú
1879-1881	Guerra en Transvaal
1880-1883	Guerra en Basutlandia
1882	Guerra en Egipto
1882-1885	Guerra sudanesa
1885-1886	Guerra en Birmania
1893-1894	Guerra con los matabele y los shonas
1894	Guerra con Bunyoro
1896-1899	Guerra con los matabele y los shonas
1896-1900	Guerra con los ashanti
1897	Guerra en Nigeria occidental
1897-1899	Guerra con los ugandeses, sudaneses
1899-1902	Guerra de los bóers
1899-1904	Guerra somalí
1900-1901	Intervención en la rebelión bóxer en China
1903	Guerra en el norte de Nigeria
1904	Guerra en el Tibet
1906	Guerra zulú
1913-1920	Guerra somalí
1914-1918	Primera guerra mundial
1918-1921	Guerra civil rusa
1919	Guerra afgana
1920-1922	Intervención en la guerra greco-turca
1921-1922	Guerra de Moplah
1939-1945	Segunda guerra mundial
1945-1949	Primera guerra árabe-israelí
1945-1949	Guerra de Indonesia
1946-1954	Guerra de Indochina
1947-1966	Guerra de Independencia malaya
1949-1953	Guerra de Corea
1952-1954	Guerra en Kenia (rebelión mau-mau)
1953-1957	Guerra del Sinaí
1955-1959	Guerra en Chipre
1963-1964	Intervención en la guerra civil chipriota
1963-1966	Intervención en la guerra Indonesia-Malaisia
1963-1967	Intervención en el sur de Arabia
1982	Guerra de las Malvinas con Argentina

casi exclusiva, en conflictos bélicos que estallaron en el ámbito de las islas Británicas. Fuera de ese espacio, las tropas autónomas escocesas e irlandesas sólo estuvieron presentes en condición de tropas mercenarias. En cambio, Inglaterra figuró, en el período comprendido entre el siglo XVI y la segunda guerra mundial, en el grupo de las principales potencias militares del mundo, lo cual le llevó a participar en conflictos armados por todo el planeta.

Si se exceptúan los grandes enfrentamientos bélicos en los que intervino para intentar conquistar una parte del territorio francés durante la guerra de los Cien Años, Inglaterra desempeñó un papel secundario en los conflictos europeos continentales hasta mediados del siglo XVI. Sin embargo, a partir de un momento que puede situarse en fecha no posterior a la destrucción de la Armada Invencible (1588), todas las grandes potencias europeas, incluido el imperio turco, tenían que tener en cuenta a los ejércitos ingleses. Desde comienzos del siglo XVII, las flotas inglesas luchan contra los corsarios del norte de África y con sus enemigos europeos en el Mediterráneo, al tiempo que compiten con Portugal, España y Holanda en el Caribe, en el Atlántico y en el Pacífico. Además, pese a algunos reveses como el que supuso la independencia de las trece ricas colonias americanas en 1783, los británicos ampliaron continuamente sus posesiones ultramarinas hasta bien entrado el siglo XX. Si en las zonas templadas complementó la conquista armada con una intensa colonización, tanto en ellas como en las zonas tropicales Gran Bretaña defendió su imperio por la fuerza de las armas.

Los conflictos bélicos se hicieron cada vez más frecuentes. Si desglosamos el número de nuevos conflictos bélicos iniciados en cada centuria, el resultado es el siguiente:

1492-1591	11
1592-1691	14
1692-1791	11
1792-1891	44
1892-1991	31

El siglo XIX figura en primer lugar por lo que respecta a la frecuencia de nuevos conflictos bélicos; en cambio, desde el punto de vista de la mortandad, ese lugar de privilegio corresponde al siglo XX, en el

que dos guerras mundiales eclipsaron, por su poder destructivo, cualquier otra acción militar en la que hubieran intervenido hasta entonces las fuerzas británicas. El extraordinario incremento de los conflictos bélicos a partir de 1790 se produjo en un escenario extraeuropeo y tuvo como objetivo la consecución de un imperio. Además, sólo a partir de la segunda guerra mundial predominaron los enfrentamientos derivados del abandono de las posesiones imperiales.

Durante varios siglos, fueron sobre todo los conflictos armados los que permitieron a los estados europeos establecer su autoridad sobre la población. Gran Bretaña no constituye una excepción en esa regla. A partir de la revolución gloriosa de 1687-1689, el poder estatal británico se afianzó en el curso de una actividad bélica incesante en Europa, en zonas de expansión colonial y en el mar. La consecución de una unión estable con Escocia (1707), aunque desencadenó enfrentamientos con los pretendientes Estuardo por el trono de Escocia en 1715 y 1745, fortaleció la posición del Estado en el interior y le permitió ampliar su presencia colonial en Europa. Las guerras con los colonos norteamericanos, con la Francia revolucionaria y con Napoleón también fortalecieron el Estado, pues el monarca y el Parlamento colaboraron para poner en marcha un sistema impositivo eficaz. El ejército dejó de intervenir en conflictos internos para concentrarse cada vez más en la conquista y control de las colonias rebeldes, incluyéndose en esa categoría Irlanda, que a la sazón (1800-1801) pertenecía nominalmente a un Reino Unido.

Durante los siglos XVIII y XIX, se produjo la concentración del capital británico, el país se industrializó, la agricultura completó su proceso de proletarización, aumentó el tamaño de las ciudades y tuvo lugar un crecimiento demográfico sin precedentes, a pesar de que en Inglaterra e Irlanda se registró un importante movimiento migratorio.

En el curso de duros enfrentamientos que tuvieron su origen en la conjunción de las exigencias cada vez más apremiantes por parte del Estado con el crecimiento del mundo capitalista, los británicos construyeron una gran estructura de intervención estatal. En comparación con otros estados europeos, las instituciones parlamentarias y las organizaciones cívicas voluntarias cumplieron una función de extraordinaria importancia en la vida pública. Sin embargo, todavía en el siglo XX, la movilización para la guerra seguía siendo la circuns-

tancia principal que permitía al Estado británico expandirse y emprender nuevas actividades (Cronin, 1991, pp. 2-4).

En el conjunto de Europa, la línea de demarcación entre las guerras y las situaciones revolucionarias sólo se estableció con claridad cuando los estados fijaron un estricto orden de prioridades en sus territorios, adquiriendo unas fronteras bien delimitadas y una sólida organización central. Ciertamente, esta generalización puede aplicarse a la experiencia británica. Así pues, los primeros conflictos que figuran en el catálogo de las principales situaciones revolucionarias (véase el cuadro 4.2) están muchas veces a caballo entre la guerra y la revolución. Según esta premisa, las guerras civiles y las rebeliones sacudieron a Escocia en quince ocasiones entre 1496 y 1745. Los ejércitos ingleses participaron prácticamente en todos esos conflictos.

¿Cuándo adquirieron una naturaleza verdaderamente revolucionaria los enfrentamientos armados entre los ejércitos escoceses e ingleses? Sin duda, cuando Inglaterra, Escocia y Gales formaron un solo Estado. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿A mediados del siglo XV, cuando las pretensiones inglesas a la soberanía sobre Escocia encontraron una cierta aceptación? ¿En 1603, con el advenimiento al trono de Inglaterra de un rey escocés? ¿En 1657-1659, cuando Cromwell impuso una estrecha, aunque abortada, unión de los dos países? ¿En 1707, cuando Inglaterra constituyó un Parlamento británico incorporando a él a la asamblea legislativa escocesa? Sea cual fuere el momento exacto en que se establezca esa transición, lo cierto es que la subordinación de Escocia a la hegemonía inglesa-británica se produjo por medio de un terrible enfrentamiento y no se afianzó al menos hasta 1746.

Más dramático es todavía el caso de Irlanda. Desde luego, los ingleses intentaron dominar Irlanda y recurrieron constantemente al método de la zanahoria y el palo, aunque más frecuentemente a este último. Irlanda se convirtió en el terreno de experimentación de diversas formas de vigilancia y represión, incluida la célebre policía decimonónica, que luego se impuso en Gran Bretaña (Broeker, 1970; Clark y Donnelly, 1983; Fitzpatrick, 1985; Palmer, 1988). Hasta comienzos del siglo XVIII, los belicosos aristócratas irlandeses lucharon incesantemente unos contra otros. Por otra parte, entre 1493 y 1969 tuvieron lugar más de quince conflictos armados importantes entre fuerzas británicas e irlandesas y, entre un conflicto y otro, constantes ataques y escaramuzas de gran virulencia que continúan produciéndose en la

CUADRO 4.2. Situaciones revolucionarias en las islas Británicas, 1492-1992.

1493-1496	Rebelión irlandesa a propósito de Perkin Warbeck	1595-1603	Rebelión de Hugh O'Neill en Irlanda, intervención española
1496-1497	Guerra de Sucesión anglo-escocesa	1608	Revuelta irlandesa de sir Cahir O'Doherty
1497	Revuelta de Cornualles	1639-1640	Rebelión escocesa: guerra de los obispos
1504	Guerra entre aliados ingleses y sus oponentes irlandeses en Irlanda	1641	Levantamiento en el Ulster
1513-1515	Guerra de Sucesión anglo-escocesa con intervención francesa	1642-1647	Guerra civil en Inglaterra, Irlanda y Escocia
1522-1523	Guerra anglo-escocesa	1648-1651	Segunda guerra civil en Inglaterra, Irlanda y Escocia
1532-1534	Guerra anglo-escocesa	1655	Levantamiento de Penruddock en Salisbury
1534-1536	Rebelión de Silken Thomas en Irlanda	1660	Golpe de Monk, restauración de Carlos II
1536-1537	*Pilgrimage of Grace*	1666	Revuelta de *covenanters* escoceses
1540-1543	Pacificación en Irlanda	1679	Rebelión de *covenanters* escoceses
1542-1550	Guerra de Sucesión con Escocia	1685	Rebeliones de Monmouth y Argyll
1549-1550	Rebelión de Kett, rebelión de Cornualles	1687-1692	Revolución gloriosa en Inglaterra, Escocia e Irlanda con intervención de Francia
1553-1554	Rebelión de Wyatt	1715-1716	Rebelión jacobita en Escocia
1559-1560	Guerra de Sucesión anglo-escocesa, intervención de Francia	1745-1746	Levantamiento en Escocia
1559-1567	Guerra de Sucesión en el condado de Tyrone, Irlanda; rebelión de Shane O'Neill	1798-1803	Insurrecciones de los United Irishmen, con intervención francesa
1565-1567	Guerras religiosas en Escocia	1916	Rebelión de Páscua en Irlanda
1568-1573	Primera rebelión de Desmond en Irlanda	1919-1923	Guerra civil en Irlanda; independencia irlandesa
1569	Rebelión de la nobleza católica del norte	1969-	Guerra intermitente de guerrillas en Irlanda del norte
1579-1580	Segunda rebelión de Desmond, rebelión en Leinster, intervención del papa y de España		
1595	Rebelión de nobles católicos en Escocia		

actualidad. En 1987 murieron noventa y tres personas pertenecientes a los dos bandos enfrentados. En 1988 hubo noventa y tres asesinatos políticos y en 1989 sesenta y dos.

En el siglo XI adquirieron preeminencia grupos de guerreros anglonormandos en algunas partes de Irlanda. A partir de 1550, el gobierno inglés comenzó a establecer en Irlanda colonias de ingleses —de hecho eran más numerosos los escoceses que los ingleses— y a confiscar sistemáticamente las propiedades de los señores católicos, sobre todo tras la invasión de Cromwell en 1649 y la de Guillermo de Orange en 1690. Como consecuencia de todo ello, si los católicos poseían el 59 por 100 del territorio irlandés en 1641, en 1688 controlaban el 22 por 100, en 1703 el 14 por 100 y tan sólo el 5 por 100 en 1778 (Moody y Martin, 1987, pp. 201 y 220). Pese a la proclamación del Reino Unido en 1800 y la integración del Parlamento irlandés en el Parlamento británico en 1801, Irlanda nunca se comportó como un segmento dócil de un Estado más amplio. Casi de forma permanente siempre había alguien, en alguna zona de Irlanda, que desafiaba abiertamente la soberanía británica. Desde 1504 hasta la actualidad, los irlandeses también lucharon entre sí por conseguir el control del Estado, aunque estuviera subordinado a Inglaterra.

En Inglaterra y Gales, la revolución siguió una trayectoria muy distinta. Inglaterra fue testigo de importantes rebeliones durante los períodos de consolidación del poder de los Tudor y los Estuardo: la revuelta de Cornualles (1497), el *Pilgrimage of Grace* (1536-1537), diversas rebeliones en el suroeste y en East Anglia (1549-1550), la rebelión de Wyatt (1553-1554), una revuelta de nobles católicos en el norte (1569), dos guerras civiles (1642-1647 y 1648-1651), la rebelión de Monmouth (1685) y la revolución gloriosa (1687-1689). A partir de entonces no se produjeron nuevas situaciones plenamente revolucionarias que entrañaran la fragmentación clara de la soberanía del Estado, en Inglaterra y Gales, donde a lo sumo se dejaron sentir algunos débiles ecos de las rebeliones de Escocia e Irlanda.

Sin embargo, la población de Inglaterra y Gales no se sometió dócilmente a la autoridad. En el siglo XVIII, ingleses y galeses se ganaron la fama de ingobernables, durante los primeros años de la revolución francesa pulularon los agitadores revolucionarios, las rebeliones agrarias se repitieron hasta las revueltas «Swing» y «Rebecca» de los años 1830, los jornaleros del campo protagonizaron nuevos conflictos rurales a finales del siglo XIX y los mineros galeses continuaron enfrentándose contra los patronos hasta que las minas de carbón comenzaron a agotarse en el decenio de 1920.

Los conflictos no desaparecieron, pero ya no eran conflictos armados. En Inglaterra y Gales, el control casi absoluto de las fuerzas armadas por parte del Estado refrenó los intentos de asaltar el poder y un proceso de arduas negociaciones generó los medios para plantear enérgicas reivindicaciones mediante un procedimiento que estaba lejos de ser revolucionario. Entre las cuestiones que se negociaron figuraban la ampliación del derecho de voto, la atenuación de las restricciones religiosas respecto al desempeño de los cargos públicos, la libertad de asociación y reunión, y la implantación de las concentraciones públicas, las campañas de protesta y las manifestaciones como formas de reivindicación política. Incluso las importantes movilizaciones surgidas en torno a la emancipación católica, la reforma parlamentaria y el cartismo entre 1823 y 1848 se produjeron en un contexto de una gran retórica sobre la revolución pero de escasa violencia y sin que se produjeran intentos serios de conquistar el poder por la fuerza.

Las luchas por el control

En el siglo XVI, ingleses, irlandeses y escoceses se enfrentaban a propósito de cuestiones importantes: quién y cómo gobernaría sus territorios. Entre 1492 y 1603 surgieron en las islas Británicas tres formas coincidentes de situaciones revolucionarias: 1) los conflictos sucesorios en Inglaterra, Irlanda o Escocia; 2) la resistencia directa a los intentos de las autoridades inglesas de aumentar su poder y conseguir mayores ingresos; y 3) los intentos de suprimir los cambios religiosos iniciados por la monarquía. Prevalecieron las situaciones revolucionarias dinásticas, las situaciones revolucionarias comunales y diversas combinaciones de ambas. A pesar de la tenaz resistencia que opusieron irlandeses y escoceses a la hegemonía inglesa, y aunque el campesinado y el artesanado tuvieron una participación importante en algunas rebeliones, difícilmente estaría justificado calificar alguna de las situaciones revolucionarias del siglo XVI como nacionales o de coalición de clases. Los principales protagonistas de los conflic-

tos sucesorios fueron los grandes magnates y sus clientelas. En los movimientos de resistencia a las nuevas exigencias de la monarquía, desempeñaron un papel importante grupos de intereses como los municipios y los gremios, y en los conflictos religiosos ocuparon el primer plano diversas «comunidades confesionales»: católicos, calvinistas, anabaptistas, etc. Sin duda, existía una estrecha relación entre el curso que tomaba la acción y sus protagonistas. Por ejemplo, la reforma religiosa reforzaba, generalmente, el control de la monarquía sobre el clero, las posesiones y las directrices de las iglesias estatales. Por consiguiente, quienes se resistían a la innovación religiosa defendían también derechos importantes e identidades de carácter religioso.

Muchas otras formas de enfrentamientos armados se produjeron durante esos tiempos turbulentos. La oposición a los cercamientos de las tierras comunales o de las tierras incultas señoriales, la desecación de los pantanos y la tala de los bosques atentaban contra el sustento de la población local que cazaba, recolectaba, pescaba o incluso cultivaba en una tierra sobre la que sólo tenían derechos consuetudinarios. Estos temas inspiraron la mayor parte de las revueltas rurales que se produjeron en Inglaterra desde 1492 hasta las revoluciones del siglo XVII (Manning, 1988; véase también Charlesworth, 1983, pp. 9-16). En las épocas de escasez y de precios elevados, también se produjeron en algunas ocasiones confiscaciones de cereales por la fuerza, especialmente en la zona de influencia de Londres y en las regiones textiles occidentales, pero generalmente en esas ocasiones no se recurría al uso de las armas (Charlesworth, 1983, pp. 68-74).

Todos estos acontecimientos estaban lejos de ser situaciones revolucionarias, porque raras veces ocurrían simultáneamente, porque sus protagonistas carecían de una fuerza armada importante y porque en ningún momento los rebeldes consiguieron un auténtico control sobre un segmento del Estado y tampoco obtuvieron el apoyo de una parte de la población para conseguir ese control. Es cierto que durante las grandes rebeliones que se produjeron en el período las cuestiones de los cercamientos, el cobro de rentas exorbitantes y otros abusos a los que se sometió a la población rural tuvieron su importancia, pero las cuestiones que suscitaron divisiones profundas en el país fueron los intentos de la monarquía de ampliar su poder, los conflictos sucesorios y las innovaciones religiosas.

Cinco factores explican el extraordinario potencial revolucionario

de tales fenómenos. En primer lugar, afectaban a amplias zonas del país y no sólo a algunas localidades dispersas, como ocurría en los enfrentamientos por la propiedad rural. En segundo lugar, todos ellos tenía repercusiones directas sobre el Estado. En tercer lugar, en ellos se veían implicados, muchas veces, identidades ampliamente compartidas y derechos y privilegios relacionados con ellas. En cuarto lugar, en tales ocasiones una parte de los nobles, entre ellos algunos que poseían su propia fuerza militar, se alineaban con determinados sectores del populacho contra los gobernantes del país. Por último, solían producirse en muchas zonas del país simultáneamente, circunstancia que favorecía enormemente que las rebeliones locales alcanzaran una dimensión nacional.

En el período comprendido entre 1492 y 1603, la mayor parte de las sucesiones al trono en Irlanda, Escocia e Inglaterra fueron aprovechadas por un sector de la nobleza, cuya influencia futura estaba en juego, para intentar hacerse con el poder. He aquí un ejemplo concreto: la entronización de María Tudor como reina de Inglaterra en 1553, al morir Eduardo VI a los dieciséis años de edad, suscitó una serie de enfrentamientos. En el reinado de Eduardo VI, que se prolongó durante seis años, y bajo la influencia del Lord Protector Somerset, la Iglesia oficial inglesa había dado pasos decisivos en la dirección de la doctrina y la práctica protestante. Pero María Tudor era católica y todavía soltera; por ello, los personajes más influyentes de la nobleza y el clero reconocieron tener un enorme interés respecto a la persona y los planes matrimoniales de la nueva soberana. Previendo las dificultades que surgirían después de su muerte, Eduardo había designado como sucesora a su prima, de credo protestante, lady Jane Grey. Poco después, el duque de Northumberland casó a su hijo con lady Jane, a la que proclamó reina a la muerte de Eduardo, pero no consiguió apoyo suficiente para imponer sus pretensiones. En definitiva, esas maniobras le costaron la vida y María Tudor concertó su matrimonio con Felipe, heredero de Carlos V de España y acérrimo católico.

En ese momento, un grupo de nobles propuso la unión matrimonial de María con el protestante Edward Courtenay, descendiente de Eduardo IV, y organizó una conspiración militar para apoyar su programa. Aunque la mayor parte de los conspiradores renunciaron a sus propósitos, estallaron diversas insurrecciones fracasadas en la zona

occidental del país y en las Midlands, antes de que sir Thomas Wyatt de Kent organizara un ejército de tres mil hombres, capturara algunos de los barcos de la reina que esperaban la llegada del futuro marido de María, Felipe, y amenazara Londres. Las fuerzas de la reina rechazaron con éxito el ataque de Wyatt y los tribunales reales decretaron la ejecución de Wyatt y de casi un centenar de conspiradores. También lady Jane Grey y su esposo perdieron la vida. Sólo entonces pudo María Tudor optar al trono con garantías de éxito. Poco después, casó con Felipe II, se alineó junto a España en la guerra contra Francia y comenzó a mandar a la hoguera a una parte del clero protestante. Los conspiradores protestantes habían previsto acertadamente las consecuencias de su advenimiento al trono y de su matrimonio.

Los soberanos de las islas Británicas planteaban constantemente nuevas y exorbitadas exigencias a sus súbditos con el fin de reforzar su poder militar, y ello generaba una resistencia revolucionaria. Los impuestos eran el elemento central de esas nuevas exigencias. Las más de las veces, los gobernantes preferían una aportación tributaria a la asistencia militar directa, pues el dinero les permitía contratar soldados profesionales que obedecían estrictamente sus órdenes (a condición de recibir puntualmente su soldada) y que una vez cumplida su misión partían hacia otro lugar. En cambio, los ejércitos privados y regionales, y por supuesto las milicias de los condados, establecían condiciones para participar en las empresas militares, permaneciendo luego como una fuerza armada que podía constituir una amenaza para el poder monárquico.

Por ejemplo, en 1497 Enrique VII pidió importantes «subsidios» en lugar del apoyo militar directo para su campaña contra Escocia, donde el pretendiente de la casa de York, Perkin Warbeck, había organizado un ejército. Una fuerza de unos quince mil hombres se dirigió desde Cornualles hacia Londres para oponerse a que se entregaran al monarca subsidios en efectivo. Tras un breve enfrentamiento, los ejércitos reales resultaron vencedores. Enrique hizo ejecutar públicamente a los principales cabecillas y decretó multas por valor de 14.699 libras contra los participantes en la rebelión (Fletcher, 1968, p. 16). Desde la perspectiva monárquica, la derrota de una insurrección presentaba una ventaja con respecto a la resistencia encubierta, en el sentido de que el fruto de las multas y las confiscaciones iba a parar a las arcas de la corona. Además, sancionaba públicamente el derecho

y la capacidad de la corona para recaudar los impuestos exigidos.

En contraste con la situación de los Países Bajos y, especialmente, de diversos estados alemanes, las luchas religiosas británicas del siglo XVI raramente enfrentaron a una población favorable a nuevas formas religiosas con la corona, decidida a preservar las formas tradicionales. Por el contrario, normalmente, los gobernantes ingleses alejaron a una población renuente de unas creencias y unas prácticas profundamente enraizadas, en nombre de una Iglesia estatal renovada. En Irlanda, las innovaciones inglesas toparon con la firme resistencia de los católicos. Es cierto, sin embargo, que en Escocia el calvinismo había alcanzado una sólida base popular antes de convertirse en el credo de la Iglesia oficial. Ahora bien, la mayor parte de las rebeliones que estallaron en las islas Británicas en el siglo XVI no se produjeron en nombre de nuevas creencias, sino cuando el Estado pretendió introducir nuevas formas religiosas que afectaban directamente a derechos e identidades bien establecidos. Esa situación sólo se modificó con el advenimiento de los Estuardo en el siglo XVII. Entonces, un poderoso grupo parlamentario, por no hablar de una extensa zona de Escocia, advocó un austero protestantismo contra el «papismo» de sus reyes. Las divisiones religiosas y sus implicaciones políticas se complicaron porque en Irlanda, importante vivero de soldados, continuó predominando el credo catolicorromano.

Las innovaciones religiosas del siglo XVI procedían de un Estado que estaba afirmando su independencia con respecto al papado, adaptándose a los cambios ocurridos en el pensamiento protestante y estableciendo un mayor control sobre los bienes y el aparato eclesiásticos. Por consiguiente, las situaciones revolucionarias tuvieron lugar cuando sectores importantes de la población se negaron abiertamente a aceptar las innovaciones, rechazando la autoridad del Estado para imponerlas. Parecidas divisiones entre la política religiosa del Estado y la práctica popular, reforzadas por un fuerte liderazgo regional por parte de la *gentry* y de la burguesía, se manifestaron en el *Pilgrimage of Grace* (1536-1537), en las luchas religiosas escocesas (1565-1567), en la rebelión de la aristocracia católica del norte (1569), en la rebelión de los nobles católicos escoceses (1595) y prácticamente en todas las situaciones revolucionarias que estallaron en Irlanda entre 1530 y 1600. Las rebeliones religiosas de ese período concitaron la participación de toda la población de una comunidad o una región en ma-

yor medida que los conflictos sucesorios o los movimientos de resistencia antifiscal. Sin duda, el espectacular fenómeno del *Pilgrimage of Grace* concitó el apoyo más masivo de la población, al enfrentar a comunidades enteras del norte, incluidos algunos caballeros, contra la medida de disolución de los monasterios decretada por Enrique VIII y, más en general, contra la política religiosa del monarca de controlar la Iglesia tradicional.

Las grandes rebeliones de 1549 conjugaron tres tipos de elementos —conflictos sucesorios, nuevas exigencias monárquicas e innovaciones religiosas— con cuestiones agrarias que por sí solas no habrían engendrado situaciones revolucionarias a gran escala. A la muerte de Enrique VIII, ocurrida en 1547, accedió al trono Eduardo VI, de diez años de edad a la sazón, recayendo el cargo de Lord Protector en el duque de Somerset, que pasó a ser el auténtico jefe del Estado. Esa situación provocó una crisis sucesoria, especialmente porque Somerset no tardó en decretar reformas religiosas de inspiración protestante y comenzó a atacar a sus rivales, que habían conseguido sustanciales parcelas de poder en el reinado de Enrique VIII.

En East Anglia, las cuestiones agrarias locales, entre ellas el problema de los cercamientos, provocaron fuertes controversias y acciones que paralizaban gran parte de la región. Cuando los rebeldes controlaron Norwich y otras extensas zonas de East Anglia, intentaron dar satisfacción a esos agravios. Sin embargo, fue la estrecha relación de dichos acontecimientos con la condena del duque de Norfolk, gran terrateniente conservador de East Anglia, en 1547, lo que favoreció que se formara una coalición de *yeomen* anticonservadores y de notables (MacCulloch, 1979, pp. 53-59). Bajo ese prisma, el conjunto de levantamientos que se produjeron adopta el perfil de una crisis de sucesión.

En el suroeste, la cuestión candente era la imposición del *Book of Common Prayer*, escrito en lengua inglesa, en sustitución del misal, en latín. Durante la rebelión del *Prayer Book*, grupos de rebeldes armados ocuparon numerosas ciudades en Cornualles y Devon, llegando incluso a sitiar Exeter (aunque sin éxito) durante más de un mes. Las peticiones de los rebeldes rezaban así:

1. Queremos que sean observados, conservados y cumplidos los concilios generales y los decretos sagrados de nuestros antepasados y a cualquiera que se oponga a ellos lo consideraremos hereje.
2. Queremos que las leyes de nuestro soberano rey Enrique VIII referentes a los seis artículos se utilicen de nuevo como se utilizaban durante su reinado.
3. Queremos que la Eucaristía presida el altar mayor y que se le rinda el culto debido, y a quienes no lo acepten los ejecutaremos como herejes contra la santa fe católica.
4. Queremos que la misa se diga en latín como se decía antes, y que sea celebrada por el sacerdote sin que participe con él hombre o mujer alguno (Cornwall, 1977, p. 115).

En definitiva, pedían que se anularan las reformas religiosas decretadas recientemente por la corona. No pretendían el retorno al catolicismo romano, sino el restablecimiento de los rituales y las prácticas que Enrique VIII había conservado de la Iglesia romana.

En resumen, los conflictos sucesorios, las rebeliones contra las exacciones reales y la resistencia a las innovaciones religiosas que se manifestaron en el período comprendido entre 1492 y 1603 reflejaban directamente la forma en que los monarcas de la dinastía Tudor estaban remodelando el Estado. Estas cuestiones no eran, en modo alguno, los únicos problemas respecto de los cuales estaba dispuesto a luchar el pueblo llano en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. Los cercamientos, las rentas abusivas, los diezmos eclesiásticos y otras cuestiones de índole similar provocaron repetidos conflictos y rebeliones de carácter rural, pero en ningún caso a escala estatal y sin que hubiera intento alguno de dominar o suplantar el aparato del Estado. Las situaciones revolucionarias se planteaban a propósito de problemas y divisiones que tenían un alcance nacional. Las transformaciones del Estado determinaron en gran medida cuáles serían esas cuestiones y divisiones.

Así pues, las condiciones que en el siglo XVI favorecían la aparición de situaciones revolucionarias eran muy distintas en Irlanda, Escocia e Inglaterra. En Irlanda, los señores ingleses trataban simplemente de conservar su posición en un medio hostil, proteger sus enclaves nacionales y conseguir que el país financiara los efectivos militares impuestos por los ingleses. Mientras tanto, los cabecillas irlandeses formaban alianzas y combatían entre sí para mejorar su posición. En

Escocia, los ingleses intentaron repetidamente, sin conseguirlo, establecer el control directo sobre el Estado y anular la amenaza recurrente de los escoceses de imponer su propia dinastía Tudor, mientras el rey y los grandes aristócratas de Escocia pretendían defender sus intereses frente a la invasión inglesa. En Inglaterra y Gales, los gobernantes ingleses extendían su control sobre la Iglesia y el aparato del Estado, limitando la autonomía y reduciendo los ejércitos privados de los grandes señores, aunque todavía sufrían la amenaza de ser derrocados cada vez que se producía una sucesión en el trono.

A la muerte de Isabel I, en 1603, los británicos habían creado un Estado fuerte en Inglaterra y Gales, aunque todavía no en Escocia e Irlanda. Sin embargo, el Estado estaba sometido a una gran presión financiera. El rápido crecimiento demográfico estaba provocando una importante alza de los precios, lo que suponía que cada año disminuía el poder adquisitivo de los ingresos fijos. Al mismo tiempo, los ingleses participaban cada vez más intensamente en diversos conflictos en el interior y en el extranjero. La contratación de tropas mercenarias suponía, con mucho, el mayor desembolso de la corona, un desembolso cada vez mayor. Para solucionar sus necesidades financieras, Isabel I hipotecó tierras de la corona y escudriñó todo el reino en busca de ingresos adicionales, pero al acabar su reinado Inglaterra había contraído una deuda de 60.000 libras con las Provincias Unidas y experimentaba enormes dificultades para financiar sus guerras en Irlanda y en los Países Bajos (Dietz, 1932, pp. 86-99). Jacobo I heredó un Estado acuciado por los problemas fiscales.

Once décadas revolucionarias

La presión fiscal contribuyó, de manera directa o indirecta, a provocar muchas de las situaciones revolucionarias del siglo XVII. En Irlanda, la centuria comenzó con una rebelión. Mientras Gran Bretaña luchaba con España en 1597, Hugh O'Neill, conde de Tyrone, se había unido a los señores del Ulster en su lucha para expulsar a los ingleses. Sin embargo, en 1603 los ingleses ya habían sofocado la rebelión, a pesar de que España apoyó a los rebeldes. Sólo cinco años más tarde, en 1608, sir Cahir O'Doherty organizó una rebelión irlandesa, la última hasta el levantamiento del Ulster en 1641, en el curso de la cual algunos «antiguos ingleses» protestantes hicieron causa común con sus vecinos católicos contra la intervención de Londres. Las luchas que se desarrollaron en Irlanda en 1642-1647 y 1648-1651 estuvieron relacionadas con las guerras civiles inglesas, durante las cuales Carlos I, tambaleante en el trono, consiguió el apoyo de renegados irlandeses. A la muerte de Carlos I, en 1649, una serie de cabecillas irlandeses continuaron combatiendo el dominio inglés, pero fueron aplastados de manera sangrienta por la fuerza invasora de Cromwell.

Cuando se produjo la invasión de Inglaterra por el protestante Guillermo de Orange (1687), la católica Irlanda se alzó de nuevo en armas. En 1689, el depuesto Jacobo II desembarcó en Irlanda y se unió a los ejércitos católicos en el asedio de Londonderry. Los irlandeses denominaron a los enfrentamientos subsiguientes como la guerra de los Dos Reyes: Rí Séamus y Rí Liam. Los monarcas ingleses rivales se enfrentaron en la batalla del Boyne (1690), después de la cual Jacobo huyó a Francia. Sus seguidores irlandeses continuaron la lucha con apoyo de Francia hasta 1692. Sin embargo, una vez alcanzada la paz no volvió a plantearse en Irlanda una situación revolucionaria importante en más de una centuria.

Por lo que respecta a los resultados revolucionarios, todo depende en gran medida del criterio temporal que se adopte. Si se califica de revolucionaria una transferencia sustancial de poder del Estado que persiste durante un mes o más, sin duda hay que considerar como un resultado revolucionario la abortada rebelión de Hugh O'Neill (1595-1603), ya que hizo huir de Irlanda a un grupo numeroso de aristócratas católicos irlandeses, y consiguió la ocupación de una importante extensión de tierras irlandesas por parte de los ingleses. También la transferencia masiva de tierra que se produjo tras la reconquista de Irlanda por Cromwell en 1649 entrañó una profunda modificación del poder del Estado, y la formación de una clase dirigente protestante. La restauración de Carlos II mitigó la revolución llevada a cabo por Cromwell, pero no anuló sus resultados. Las nuevas confiscaciones que siguieron a la subida al trono de Inglaterra de Guillermo de Orange no hicieron sino consolidar las revoluciones protestantes que los magnates ingleses habían realizado anteriormente en el siglo XVII.

En Escocia se manifestaron situaciones revolucionarias en 1639-1640, 1642-1647, 1648-1651, 1666, 1679, 1685, 1687-1692 y 1715-1716.

A partir de 1637, los escoceses estuvieron al borde de la rebelión en su oposición al intento de Inglaterra de imponer la conformidad episcopaliana, y constituyeron su propia Iglesia escocesa, sin obispos. Pero en 1639 se levantaron en armas y ocuparon uno de los bastiones importantes del poder civil, el castillo de Edimburgo. El primer enfrentamiento con Carlos I no terminó en un conflicto armado, pero la segunda guerra de los Obispos (1640) supuso la derrota de los británicos a manos de los escoceses, que además ocuparon el norte de Inglaterra, y el compromiso del monarca de pagar a la fuerza de ocupación, compromiso que obligó a Carlos I a reunir el Parlamento de Inglaterra después de once años de gobierno personal. Tras la pacificación de 1641, Carlos huyó a Escocia, apoyó al bando perdedor en la lucha por el poder de Escocia y dejó así a esta última en manos de los presbiterianos.

Al generalizarse la guerra civil en las islas Británicas, la mayoría de los escoceses apoyaron la causa parlamentaria, invadiendo nuevamente Inglaterra en 1644 y desgarrándose en una guerra civil en 1645. Sin embargo, en 1647 los ejércitos escoceses estaban ya apoyando a Carlos, que se había aliado con los presbiterianos parlamentarios contra el ejército. Cromwell derrotó a un ejército escocés invasor en Preston Pans (1648), pero muchos escoceses se pusieron del lado de Carlos II después de que su padre fuera decapitado en 1649. Carlos II desembarcó en Escocia (1650), donde sus seguidores le proclamaron rey y regresó a Inglaterra al frente de un ejército. Los ingleses no pudieron sofocar la resistencia escocesa hasta 1651. La siguiente rebelión escocesa estalló en 1666, cuando los presbiterianos se rebelaron sin éxito contra el predominio episcopaliano. En 1679 repitieron de nuevo el intento. En 1685 el duque de Argyll intentó sin éxito organizar una insurrección armada contra el dominio inglés y el episcopalismo, pero la invasión de Inglaterra por Guillermo de Orange en 1687 dio a los presbiterianos una nueva oportunidad.

Durante los cinco años siguientes, fuerzas escocesas lucharon entre sí y contra los ingleses, distribuyéndose habitualmente las fuerzas de la siguiente forma: habitantes de las Highlands + episcopalianos + seguidores de los Estuardo contra habitantes de las Lowlands + presbiterianos + seguidores de Guillermo de Orange. En 1708 Jacobo Eduardo (el viejo pretendiente) trató de penetrar sin éxito en Escocia y se retiró apresuradamente. Durante el levantamiento jacobita de

1715, que siguió al advenimiento de Jorge I de Hannover, Jacobo Eduardo se rebeló de nuevo, pero fue derrotado sin que se produjera una batalla importante. El segundo levantamiento jacobita de 1745-1746, en el curso del cual Inglaterra fue invadida por el hijo de Jacobo Eduardo, Carlos (el joven pretendiente), fue el levantamiento armado más importante que protagonizaron los escoceses contra la hegemonía inglesa.

Si en la Escocia del siglo XVII se produjeron situaciones revolucionarias, no puede decirse lo mismo respecto a los resultados revolucionarios. Lo más próximo a una situación de ese género fue la abolición de la Iglesia episcopal y de su jerarquía en el curso de la segunda guerra de los Obispos, que permitió a los presbiterianos obtener el reconocimiento oficial de un poder que ya habían ejercido de forma oficiosa. Podríamos situar también en el límite del resultado revolucionario la subordinación del Estado escocés al poder de Inglaterra que consiguió Cromwell (1652-1660). También correspondería la misma calificación a la restauración del episcopalismo por parte de Carlos II en 1660 y a la recuperación de la hegemonía por los presbiterianos en 1692. Sin embargo, en Escocia no se produjo un fenómeno similar al férreo sometimiento de la Irlanda católica a los aristócratas protestantes ingleses.

En Inglaterra y Gales se produjeron situaciones revolucionarias de importancia en 1642-1647, 1648-1651, 1655, 1660, 1685 y 1687-1689. Dos de ellas adoptaron la forma clásica de los conflictos sucesorios: el levantamiento de 1655, en el que el coronel John Penruddock trató de organizar apoyo militar para Carlos II, y el intento de 1685 de situar al hijo ilegítimo, pero protestante, de Carlos II, el duque de Monmouth, por delante del católico Jacobo en la línea de sucesión al trono. Todas las restantes situaciones revolucionarias conllevaron una división profunda de la población. Todas las revueltas, excepto las de 1655 y 1685, produjeron resultados revolucionarios, es decir, una transferencia importante del poder del Estado. Además, su efecto acumulativo dejó una huella duradera en la vida social británica: formación de un Estado compacto y eficaz desde el punto de vista financiero, establecimiento perdurable del dominio anglicano, freno al poder de la monarquía, importante control de los asuntos nacionales por parte de una coalición parlamentaria de aristócratas y comerciantes, entrega a la aristocracia y al clero de la regulación de los asuntos locales,

fomento de la proletarización e industrialización del país en su conjunto y favorecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo del capitalismo agrario y, luego, del capitalismo industrial.

Ese profundo impacto constituye el principal argumento para afirmar que en el período comprendido entre 1642 y 1692 se produjeron una o dos grandes revoluciones. Los *précis* realizados para Irlanda y Escocia ya han anticipado la mayor parte de esos rasgos, por una buena razón: las crisis irlandesas, escocesas e inglesas se entremezclaron. En 1642 el Parlamento culminó los diecisiete años de enfrentamiento con Carlos I negándose a financiar tropas para la pacificación de Irlanda y Escocia a menos que le concediera oficialmente importantes poderes. El rechazo de esas exigencias por parte de Carlos I, la organización de un ejército propio por el Parlamento y la movilización de Carlos I de su ejército en Nottingham desencadenó una división revolucionaria en el Estado. Se superaría temporalmente en 1647, cuando Carlos I pasó a ser prisionero del ejército, pero el abismo entre el ejército (en gran medida independiente) y el Parlamento (donde los presbiterianos eran un núcleo de enorme importancia) no se había abierto completamente. Al año siguiente, el ejército expulsó a los presbiterianos del Parlamento y de esa forma eran tres los conflictos en curso: el que enfrentaba a Escocia con Inglaterra, el que oponía a los presbiterianos con los independientes y el que estaba planteado entre los monárquicos y el ejército. La ejecución del monarca por orden de un tribunal militar (1649) sólo sirvió para acallar las divisiones, que duraron hasta las victorias militares de Cromwell de 1651. En ese momento, los revolucionarios emularon a sus predecesores entrando en lucha contra los holandeses hasta 1654. En 1655 el coronel Penruddock encabezó una pequeña rebelión en Salisbury contra el gobierno arbitrario de Cromwell, lo que sólo le sirvió para ser ejecutado.

En 1660, después de diecisiete meses de lucha entre el Parlamento y el ejército, tras la muerte de Cromwell, el general Monk acudió desde Escocia con un ejército y se hizo con el poder para restaurar el Parlamento, que, después de celebrar nuevas elecciones, invitó a Carlos II a ocupar el trono. Estallaron nuevas guerras con Holanda. Ya se han analizado anteriormente los conflictos que ocurrieron en Irlanda y Escocia entre 1687 y 1692: cuando el sucesor católico de Carlos II, Jacobo II, tuvo un hijo que con toda probabilidad sería educado como católico, sus enemigos invitaron al protestante Guillermo de Orange a desplazar al rey. Guillermo, en su condición de nieto de Carlos I y esposo de la princesa María, hija de Jacobo II, pero de religión protestante, tenía sólidos derechos al trono de Inglaterra. Cuando Guillermo de Orange desembarcó en Inglaterra estalló la guerra civil, Jacobo huyó, y Guillermo y María, con la colaboración estrecha de los comerciantes londinenses, establecieron un nuevo régimen. A finales de 1689, el Parlamento y los nuevos gobernantes ejercían ya el control efectivo de Inglaterra y Gales. Habrían de pasar tres años más antes de completar el dominio sobre Irlanda y Escocia. A pesar de todos los conflictos en estos dos países, desde aquel momento Inglaterra y Gales no vivieron una nueva situación revolucionaria grave, es decir, una división real del control del Estado en la que los dos bandos poseyeran un apoyo armado.

Ciertamente, está poco justificado presentar la trayectoria histórica de Irlanda, Escocia, Inglaterra y Gales por separado, como se ha hecho en estas páginas. El análisis de las situaciones revolucionarias entre 1603 y 1716 resalta plenamente su interdependencia. Pero esa es precisamente la cuestión: las guerras internacionales, las rebeliones coloniales, las guerras civiles y las revoluciones coincidían y se reforzaban mutuamente en todo momento. Singularizar las revoluciones inglesas de 1642-1651 y 1687-1689 y sacarlas fuera del contexto del flujo continuo de conflictos supone distorsionar gravemente su naturaleza.

¿Por qué ocurrieron tales acontecimientos revolucionarios? Aunque esta idea choca un tanto a los historiadores, en la explicación histórica es tan importante lo que no ocurrió como lo que ocurrió. Se trata de analizar qué otras posibilidades existían en un tiempo y en un momento determinados, para luego explicitar por qué las cosas no ocurrieron así. El «porqué» tiene que ver con las causas y efectos, con alternativas y consecuencias, con procesos que hicieron que una de esas alternativas fuera más probable que otra. Explicar la multiplicidad de situaciones y resultados revolucionarios de las islas Británicas en el siglo XVII —cuyos límites se han situado en estas páginas, de forma no convencional pero útil, entre 1603 y 1716— entraña necesariamente varias tareas distintas: especificar qué acontecimientos se han de explicar; exponer el curso diferente que podían haber seguido los acontecimientos; explicar por qué los acontecimientos no siguieron ese otro curso alternativo, y determinar las repercusiones más importantes de los acontecimientos que tuvieron lugar. La misma sistemáti-

ca se ha de aplicar incluso en la visión de la historia que reduce los cambios sociales a las decisiones de un puñado de individuos poderosos: identificar las decisiones cruciales; enumerar otras decisiones que podían haber tomado los protagonistas; mencionar las razones por las que no se toman esas decisiones y hacer patentes las consecuencias de las decisiones adoptadas.

En el caso de los procesos revolucionarios británicos del siglo XVII, los historiadores adoptan actitudes distintas según las cuestiones: qué se ha de explicar, qué otra cosa podía haber ocurrido, por qué no ocurrió, qué consecuencias se derivaron de los acontecimientos (véanse, por ejemplo, Braddick, 1991; Clark, 1986; Hirst, 1986; Richardson, 1977; Russell, 1982, 1990, 1991; Stone, 1972; Underdown, 1985). Desde nuestro punto de vista, la primera tarea no es difícil: es necesario explicar la extraordinaria serie de situaciones revolucionarias que se iniciaron y concluyeron en las islas Británicas entre 1603 y 1716.

Revoluciones hipotéticas

Más difícil, aunque no imposible, es explicitar qué otro curso podían haber seguido los acontecimientos. En 1640, después de once años de gobernar sin el Parlamento y de varios intentos de imponer las formas religiosas episcopalistas a los escoceses, el conde de Strafford, ministro de Carlos I, se dirigió a Escocia al frente de un ejército, pero su intervención supuso la pérdida de Newcastle-upon-Tyne y permitió la ocupación escocesa de territorio inglés. Entretanto, Carlos intentaba conseguir que el Parlamento, al que acababa de reunir, le concediera subsidios para organizar una expedición más amplia contra Escocia. He aquí las especulaciones de G. E. Aylmer al referirse a esta crisis:

> Strafford podía haber hecho lo que algunos de sus enemigos temían o pensaban que podía hacer: ordenar el arresto de algunos de los principales dirigentes del país en las dos cámaras y acusarles de traición por haber incitado a los escoceses a la rebelión, incluso por haberles animado a invadir Inglaterra y por establecer relaciones sediciosas con el gobierno francés ... Asimismo, como alternativa a esta iniciativa de carácter preventivo, decidido y, tal vez implacable, el mo-

> narca podía haberse apresurado a hacer concesiones generosas, haber intentado conseguir el apoyo de los Lores, y —como en 1629— dejar que los Comunes hubieran labrado su propia ruina (Aylmer, 1986, p. 16).

Para especular como lo hace Aylmer es necesario poseer un conocimiento profundo de la política de la época. Sin embargo, la cuestión no es reflexionar una y otra vez sobre las alternativas posibles en cada situación revolucionaria, sino consignar de manera más genérica la trayectoria que podían haber seguido los estados y las revoluciones en ese decisivo siglo XVII. Considerando la andadura histórica de otros estados europeos en el mismo período, podrían resumirse en cuatro los modelos que se podían haber adoptado en las islas Británicas: el holandés, el balcánico, el de la península ibérica y el francés. Los modelos holandés y balcánico no son plausibles, por razones obvias. Los modelos de la península ibérica y de Francia son al menos concebibles. Analizar por qué no se adoptaron ayuda a explicar el curso que siguieron los acontecimientos en las islas Británicas.

El modelo holandés habría supuesto la disolución de la monarquía centralizada en una federación de municipios y de jurisdicciones de otro tipo con autonomía en sus propios territorios, pero con la capacidad de actuar conjuntamente en los asuntos internacionales. La trayectoria balcánica habría supuesto la división del territorio en núcleos aristocráticos basados en la relación patrono-cliente, cada uno de ellos con su propio ejército. Algunos de dichos núcleos habrían sido reconocidos como estados independientes, pero todos ellos habrían sufrido una y otra vez invasiones y exacciones tributarias por parte de imperios vecinos o autóctonos. Si todo el territorio de las islas Británicas hubiera sido como Londres y las zonas adyacentes, habría predominado el modelo holandés. Pero la idiosincrasia de Irlanda y Escocia y de los sectores de Inglaterra y Gales que habían alcanzado un menor desarrollo comercial, hacía inconcebible esa senda. Por otra parte, la influencia decisiva de Londres y de otras importantes ciudades comerciales de las islas Británicas excluyó la posibilidad de que en los movimientos revolucionarios y la formación del Estado predominara el modelo balcánico. La aristocracia británica ya había establecido alianzas y concertado matrimonios con los grandes comerciantes del país. Dada la configuración del sistema de coerción

y el capital en las islas Británicas durante el siglo XVII, sólo hay que considerar seriamente las posibilidades en el ámbito de los modelos de la península ibérica y Francia, no repeticiones exactas de uno u otro modelo, sino reestructuraciones del Estado y de la revolución en una correspondencia aproximada con la remodelación del sistema de coerción y del capital.

El modelo de la península ibérica habría producido una división del territorio británico en tres estados distintos, cada uno de ellos con un sistema diferente de relaciones exteriores y de continuidad dinástica. Irlanda, Escocia e Inglaterra-Gales habrían conservado la individualidad que poseían España y Portugal, tal vez con unas zonas levantiscas equivalentes al País Vasco y Cataluña. El siglo XVII habría contemplado cómo los aristócratas irlandeses y escoceses triunfaban en una de las numerosas rebeliones y establecían una monarquía unificada en su territorio, muy probablemente con el apoyo exterior de Francia o España. (Suecia, que era todavía una gran potencia militar, habría sido otro posible aliado.) Por lo demás, hay que pensar que el Parlamento inglés habría tenido una mayor capacidad para imponer su voluntad sobre los reyes Estuardo y que se habría mostrado dispuesto a permitir que Irlanda y Escocia siguieran una trayectoria independiente. Oliver Cromwell no mostró esa misma disposición, pues en nombre del Parlamento encabezó expediciones de conquista en ambos países.

El modelo francés habría supuesto seguir una dirección muy diferente. En el siglo XVII, las guerras francesas (tanto nacionales como internacionales) habían permitido la formación de una poderosa monarquía en el centro, que ejercía un importante control militar, judicial y financiero sobre un territorio y una población extensos y diversos, control que imponía a través de los aristócratas, las asambleas regionales, las instituciones eclesiásticas y los concejos municipales de las grandes ciudades, que disponían de una gran autonomía en sus propios dominios. En la Francia del siglo XVII predominaba el gobierno indirecto, pero las guerras de la centuria permitieron progresar hacia el control directo.

En la Fronda de 1648-1653, una alianza del patriciado urbano y de los grandes aristócratas se opuso a las pretensiones de la monarquía de conseguir una mayor subordinación y un creciente apoyo financiero para hacer frente a los enormes gastos que suponían las guerras contra los Habsburgo: el Sacro Imperio Romano y España. Tras la reducción sangrienta de la rebelión, el cardenal Mazarino actuó con toda energía en beneficio del monarca Luis XIV (que contaba catorce años) y de su madre. La paz con el emperador (aunque no con España) permitió reducir las peticiones de la corona de importantes tributos de guerra, y además ideó una serie de expedientes fiscales como la venta de cargos públicos, la asimilación de una serie de grandes nobles al servicio del monarca y la creación de representantes permanentes de la monarquía en las provincias, en lugar de los comisarios extraordinarios, o intendentes, que enviaba su predecesor Richelieu en las ocasiones de emergencia y cuya supresión había sido una de las más firmes exigencias de los *parlements* al estallar la Fronda.

La transformación de los intendentes en funcionarios permanentes fue de importancia crucial, pues estos representantes provinciales de la corona disfrutaban de una gran autonomía en sus jurisdicciones, pero en último extremo dependían del favor real. Aunque trabajaban en estrecho contacto con los parlamentos, tribunales, obispos, municipios y gobernadores militares, cuando les era posible contenían y reducían la enorme autonomía que poseían esos cargos e instituciones. La consecuencia fue que tanto los concejos municipales como los señores locales, los titulares de las parroquias y los comerciantes comenzaron a ver en la administración real, y no en los poderes regionales, el gobierno efectivo de la nación.

¿Qué forma podría haber tomado una versión británica de la experiencia francesa? El modelo francés habría exigido continuar la sumisión del Parlamento, los grandes aristócratas y las regiones más alejadas de las islas Británicas, incluidas Escocia e Irlanda, al dominio de la monarquía, como había ocurrido durante la dinastía Tudor. De alguna forma, habría significado ignorar y/o subordinar a los antiguos magnates regionales para incorporar a los dignatarios locales a la estructura de la monarquía. Hay que imaginar que Carlos I habría vencido la resistencia de los grandes comerciantes y aristócratas ante la expansión de su poder militar autónomo, que habría utilizado ese mayor poder para reducir o subordinar al sector más fuerte de la aristocracia de Inglaterra, Escocia e Irlanda, y que habría pactado con el Parlamento y con los poderes regionales, que habrían mantenido (o incluso aumentado) sus honores y privilegios de esta manera, pero que habrían visto reducido su poder para bloquear la acción militar

de la monarquía, las relaciones internacionales y la política dinástica.

Esa hipótesis no era totalmente impensable. De hecho, muchos de los elementos del modelo francés se manifestaron episódicamente en las islas Británicas durante los siglos XVII y XVIII: por ejemplo, Carlos I consiguió gobernar y financiar su acción de gobierno sin el Parlamento entre 1629 y 1640, estableció alianzas con los presbiterianos del Parlamento durante sus últimos y desesperados años en el trono y concitó el apoyo de numerosos aristócratas en Inglaterra, Gales y Escocia. Todavía a finales de noviembre de 1648 —dos meses antes de ser ejecutado— Carlos negociaba con éxito (aunque no necesariamente de buena fe) con el Parlamento para mantener su cargo a cambio de conceder amplias garantías respecto a las libertades individuales. Sólo la célebre depuración realizada por el coronel Pride el 6 de diciembre impidió un voto favorable del Parlamento a tales efectos.

Obviamente, las islas Británicas no imitaron a Francia. Consideremos, por ejemplo, la convocatoria por el monarca de lo que se convertiría en el Parlamento Largo, en 1640. En ese momento, un ejército escocés ocupó una parte considerable del norte de Inglaterra y, al igual que los mongoles en Moscovia, negociaron un tributo de 50.000 libras como precio para no proseguir su avance hacia el interior de Inglaterra. Un sector considerable de la población inglesa, y casi la mitad del Parlamento, veían con simpatía la oposición escocesa al intento del monarca de imponer la supremacía episcopaliana (Russell, 1991, pp. 164-170). El rey se encontró entonces precisamente en la tesitura que había intentado evitar durante quince años: sin dinero, endeudado con una parte sustancial de la nobleza, totalmente dependiente del poder tributario del Parlamento para pagar sus deudas y para proseguir la guerra e incapaz de disolver el Parlamento si éste decidía oponerse a sus designios.

Ciertamente, eso fue lo que hizo el Parlamento. Más aún, muchos de los más acérrimos enemigos del monarca definieron la cuestión como un conflicto de identidades: la religión verdadera (su calvinismo) contra el papismo (la defensa que hacía el monarca de la jerarquía eclesiástica y de la pompa de que ésta se rodeaba). El conflicto de identidades tenía un aspecto material, pues la restauración de una Iglesia episcopal conllevaba la amenaza de que quienes se habían apoderado de propiedades de la Iglesia durante una centuria de expropiaciones verían perjudicados sus intereses. Aunque en Francia esta-

llaron varias guerras civiles durante los siglos XVI y XVII, ningún monarca francés se vio nunca en una posición tan vulnerable como la de Carlos I frente a la nobleza y el poder financiero.

¿Cuál fue, pues, el modelo británico? Los últimos monarcas de la dinastía Tudor y los primeros Estuardo abandonaron el sistema de reclutamiento directo para la organización de sus ejércitos y lo sustituyeron por el de la obtención de préstamos contra los impuestos, para poder contratar de esta forma sus efectivos militares. Sin embargo, nunca consiguieron un control suficiente sobre los ingresos que les garantizara que al año siguiente iban a poder mantener sus ejércitos. Durante las campañas escocesas de 1639-1640, Carlos I se encontró con la situación habitual de la desintegración o amotinamiento del ejército que no había recibido su soldada y luego (cuando las fuerzas escocesas ocuparon el norte de Inglaterra) de dos ejércitos en la misma situación. Mientras tanto, los rebeldes reclutaban directamente sus tropas, a las que tenían que pagar.

Carlos I se enfrentaba a un temible enemigo. Los comerciantes y financieros de Londres no estaban dispuestos a tolerar sus pretensiones de extender a sus dominios las prerrogativas reales, por considerar que se trataba de una transgresión imperdonable de los derechos fundamentales. Como señala Linda Popovsky,

> el conflicto extraordinario que enfrentó a la corona con un importante sector de la comunidad mercantil de Londres durante el reinado de Carlos, impulsó en último extremo a los Comunes a adoptar en 1629 lo que sus dirigentes consideraron una medida ajustada a derecho, rechazando la petición del monarca de que se aprobara la *tonnage and poundage bill* y denunciando a cuantos pagaran ese tributo, que no había sido sancionado, como «enemigos declarados del reino y de las libertades de los súbditos» (Popovsky, 1990, pp. 45-46).

Ante la resistencia parlamentaria a sus peticiones de apoyo financiero, Carlos I disolvió el Parlamento en 1629, y firmó la paz con España y Francia en 1630. Sin embargo, continuó incrementando su flota, prosiguió las maniobras navales en el Mediterráneo e intentó financiar sus operaciones militares aplicando a todo el reino, y en tiempo de paz, derechos de guerra en los puertos, *Ship Money*. Al mismo tiempo, insistió en sus intentos de establecer la autoridad episcopal en Escocia.

En 1642 el monarca se encontraba con una oposición armada tanto en Inglaterra como en Escocia e Irlanda. Además, para resolver su vulnerabilidad planteó nuevas exigencias que suscitaron resistencia (quedando aún más patente la debilidad real), una oposición más encarnizada, y finalmente una abierta guerra civil. A partir de entonces, se entremezclaron cuatro situaciones revolucionarias: Escocia contra Inglaterra, Irlanda contra Inglaterra, las fuerzas realistas contra las parlamentarias y los presbiterianos contra los independientes. En Inglaterra, el abismo mayor era el que separaba al núcleo de comerciantes londinenses del resto de la población. La lucha armada o la amenaza de utilizar los efectivos militares decidieron el resultado de cada una de las situaciones revolucionarias. La creación de un ejército de nuevo cuño (*New Model Army*) en 1645 no sólo se convirtió en el principal instrumento del poder de Oliver Cromwell, sino que transformó rápidamente la situación de parálisis de las fuerzas realistas en victorias decisivas en Inglaterra, Escocia e incluso Irlanda.

La posición de Gran Bretaña, a caballo entre la coerción y el capital, subyacía en dichos enfrentamientos, pero también condicionó sus resultados. En el siglo XVII, no era posible ejercer la autoridad en las islas Británicas sin contar con el apoyo de los comerciantes de Londres y sin controlar a los grandes señores de la guerra en todas las zonas de las islas. Pues bien, ni siquiera el poderoso Cromwell lo consiguió completamente. El régimen revolucionario de Cromwell perduró durante un decenio para sucumbir después (a su muerte) a sus propias divisiones internas. La necesidad de sofocar la rebelión en Escocia e Irlanda, mientras proseguía la guerra contra los holandeses y luego contra los españoles, supuso una gran presión para el régimen de Cromwell. Aunque aumentaron los ingresos procedentes de los derechos de aduana y de los impuestos indirectos, las ambiciosas operaciones militares situaron al régimen frente a algunos de los problemas fiscales que había afrontado Carlos I. En 1651 fue necesario vender de nuevo tierras de la corona y de la Iglesia. Cuando los Estuardo recuperaron el trono, contaban con menos recursos propios que los que poseían sus desafortunados antecesores, para enfrentarse al Parlamento y a los comerciantes londinenses.

Entre las causas próximas de las situaciones revolucionarias figuran la existencia de facciones enfrentadas con aspiraciones, incompatibles entre sí, al poder estatal, el apoyo de la población a dichas aspiraciones enfrentadas y la incapacidad —o falta de voluntad— de quienes controlan el poder para sofocar esa rivalidad. De acuerdo con estas premisas, varias zonas de las islas Británicas vivieron casi permanentemente situaciones revolucionarias o cuasirrevolucionarias entre 1639 y 1692. ¿Cuál es la causa de este fenómeno? En general, tres circunstancias favorecen las situaciones revolucionarias: 1) la discrepancia cada vez más acentuada entre lo que exigen los gobernantes a sus súbditos mejor organizados y su capacidad para imponer esas exigencias; 2) el ataque contra aspectos fundamentales de la identidad de la población; 3) la pérdida de poder por parte del gobernante frente a unas fuerzas rivales bien organizadas. En el siglo XVII, esas tres circunstancias se conjugaron en las islas Británicas para producir situaciones revolucionarias.

Cada vez que los gobernantes ingleses se preparaban para la guerra —ya fuera contra potencias continentales o contra oponentes escoceses o irlandeses— pedían al Parlamento más de lo que estaban en posición de exigir. Muchas veces, redoblaban el peligro al imponer la conformidad religiosa, que suponía un ataque contra la identidad y los privilegios de sectores importantes de poder en Inglaterra, Escocia o Irlanda. Además, cada vez que se equivocaban al plantear sus exigencias fiscales o religiosas, sus oponentes veían reforzada la posibilidad de rechazarlas y sus partidarios acumulaban motivos para hacer defección de la causa real.

Los resultados revolucionarios se producen cuando se da la coincidencia de una situación revolucionaria con un debilitamiento patente del poder del gobernante. Durante el siglo XVII, los resultados revolucionarios se produjeron según dicha premisa en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. En Inglaterra y Gales, el fracaso de los monarcas en su intento de establecer un control fiscal y religioso reforzó el poder del Parlamento. Aumentaba la fuerza del Estado, pero se debilitaba la posición de la corona en el seno del mismo. En Escocia, los resultados revolucionarios afectaron principalmente a la posición relativa de presbiterianos y episcopalianos o, lo que es lo mismo, de los autonomistas y de los anglófilos. Cuando fracasaban, los monarcas salían reforzados. En cambio, la autonomía de Irlanda se debilitó de forma drástica durante la centuria revolucionaria como consecuencia directa del fracaso de los levantamientos y de la virulenta represión inglesa que seguía. Es necesario comprender que el debilitamiento de

la aristocracia irlandesa abría la puerta a lo que eran, fundamentalmente, revoluciones desde arriba... o desde fuera. El vigor comercial inglés contenía el celo militar irlandés.

Con la revolución gloriosa y la sucesión hannoveriana, entró en funciones una monarquía que podía disponer de un extraordinario poder en el exterior y de una importante cuota de poder también en el interior en la medida —y sólo en esa medida— en que consiguiera un fuerte apoyo parlamentario. A partir de 1716, los monarcas hannoverianos supieron atraerse a la aristocracia, el clero y la *gentry* para conseguir, así, apoyo para empresas tan costosas como la guerra de los Siete Años. Al mismo tiempo, un sector significativo de la aristocracia y de los comerciantes (la distinción entre ambos grupos era cada vez menos nítida) comenzó a sentirse interesado en la expansión imperial británica. Las ambiciones imperiales de las compañías privilegiadas, de los comerciantes de las ciudades portuarias, de los armadores y de la marina real presionaron en la dirección de conseguir un Estado central eficaz. A finales del siglo XVIII, Gran Bretaña recaudaba en forma de impuestos una suma equivalente al 25 por 100, aproximadamente, de su producción nacional. El porcentaje en Francia era del 15 por 100 (P. K. O'Brien, 1988, 1989).

El extraordinario reforzamiento de la fuerza del Estado excluyó del poder, a nivel nacional, al pueblo llano, tanto en Inglaterra como en Gales y Escocia (y en Irlanda a casi la totalidad de la población). Sólo la expansión ulterior del Estado durante las guerras revolucionarias y napoleónicas modificó esa situación, cuando la ingente presión fiscal y militar del Estado sobre los ciudadanos hizo surgir una oposición popular concertada. Algunos dirigentes como Pitt se enfrentaron a esa oposición mediante una represión brutal de los elementos radicales y de los trabajadores, al tiempo que hacían importantes concesiones a iniciativas lideradas por la burguesía, como los movimientos antiesclavistas. Sin embargo, tanto la represión como las concesiones comprometieron al Estado a crear las condiciones que (siempre que se utilizaran procedimientos aceptables) permitieran a los ciudadanos ordinarios expresar su posición sobre cuestiones de importancia para la política nacional. A partir de 1820, la nueva situación hacía posible que se produjeran importantes movilizaciones populares, que a veces veían cumplidos sus objetivos, sobre cuestiones tales como los derechos de las minorías religiosas, la representación parlamentaria, la legalización de las sociedades obreras de ayuda mutua y la organización del trabajo.

Los modelos ibérico, francés y británico compartían una serie de características. En todos ellos, los gastos de la guerra —en primer lugar, de la guerra de los Treinta Años, de proporciones tan colosales— consumieron las reservas financieras que poseían los monarcas y les llevaron a enfrentarse con las instituciones capitalistas, que eran las únicas que podían facilitar los créditos y los ingresos fiscales necesarios para financiar los ejércitos en el siglo XVII. En todos los casos, el rápido crecimiento demográfico hizo subir los precios, haciendo aún más onerosos los costes de la actividad del Estado. Y en todos esos países la corona hubo de hacer frente a una doble oposición: la de la burguesía, que rechazaba la interferencia monárquica en el comercio internacional, pero insistía en su derecho de veto con respecto a las transacciones financieras, y la de los grandes aristócratas que trataban de proteger su inmunidad, su autonomía y sus privilegios contra la expansión del poder central. En la península ibérica, en Francia y en Gran Bretaña, la política de enfrentar a esos dos sectores de la oposición reportó a la monarquía buenos dividendos. Sin embargo, eso no siempre era posible, especialmente cuando esos dos sectores se reunían y, en ocasiones, se aliaban en una asamblea nacional.

¿Por qué, pues, el modelo británico se impuso sobre el ibérico, el francés y cualquier otro existente en los países del entorno? En su obra *Behemoth*, que terminó de escribir hacia 1668, Thomas Hobbes ofrece algunas claves de importancia a este respecto:

> *B.*: ¿Pero cómo podía el rey encontrar el dinero necesario para pagar al ejército que necesitaba para enfrentarse al Parlamento?
>
> *A.*: Ni el rey ni el Parlamento tenían mucho dinero en esa época, y recurrían a la benevolencia de quienes les apoyaban. Confieso que ello suponía una gran ventaja para el Parlamento. Quienes apoyaban al rey en esta faceta eran sólo los lores y caballeros, que, dado que desaprobaban el funcionamiento del Parlamento, estaban dispuestos a financiar, cada uno de ellos, el pago de un número determinado de caballos; no puede considerarse que eso fuera de gran ayuda, pues el número de los que pagaban era muy reducido. Respecto a otros ingresos del monarca, sólo ha llegado a mis oídos lo que obtenían como préstamo por las joyas en los Países Bajos. En cambio, el Parlamento recibía contribuciones cuantiosas, no sólo

> de Londres, sino en general de todas partes de Inglaterra, según determinadas proposiciones (publicadas por los Lores y los Comunes en junio de 1642, año en que habían votado que el rey pretendía luchar contra ellos) a fin de obtener dinero o plata para mantener caballos y caballeros y comprar armas para preservar la paz pública y defender al rey y a las dos casas del Parlamento; y para la devolución del dinero y de la plata, tendrían la confianza pública (Hobbes, 1990, pp. 112-113).

En resumen, el acceso a la red comercial interna y externa de Londres supuso para el Parlamento una posición sustancial de ventaja en un momento en que la fuerza militar comenzaba a depender de la solidez financiera. En ese sentido limitado, los levantamientos del siglo XVII merecieron correctamente el calificativo de revoluciones burguesas.

La revolución acallada

Con la excepción de los desembarcos protagonizados por los pretendientes Estuardo en 1715 y 1745, en Escocia, Inglaterra y Gales no se registraron situaciones revolucionarias de importancia a partir de 1691. El Estado, renovado por la revolución, hubo de afrontar numerosos problemas desde entonces, entre los cuales no es el menor el impacto de la guerra con una intensidad mucho mayor de lo que nunca pudieron haber pensado los estatalistas del siglo XVII. Pero la creación de ingentes máquinas militares e imperiales, el sistema de gobierno indirecto que permitió el predominio de la *gentry* y el clero en el siglo XIX, la fuerza cada vez mayor de un Parlamento basado en la fusión del poder agrario y comercial, y la incorporación de la clase dirigente escocesa en la estructura capitalista de Inglaterra, contribuyeron a hacer menos probable la formación de una alternativa viable al gobierno existente. Desde entonces hubo escoceses, galeses e ingleses que se opusieron, frecuentemente, al poder y a la política del Estado, pero a lo que aspiraban era principalmente a conseguir la protección o el establecimiento de determinados derechos dentro del sistema vigente. De ahí la extraordinaria importancia que alcanzaron en el siglo XVIII los «derechos de los ingleses nacidos libres». Incluso el tumultuoso movimiento de apoyo a la revolución francesa de 1789, encabezado por

personajes tales como Thomas Paine, Richard Price y Joseph Priestley, defendía básicamente la soberanía popular en forma de concesión de unos derechos que ya existían en el sistema británico pero que lamentablemente habían sido sofocados por la corrupción reinante en el siglo XVIII. Desde 1691, los desafíos revolucionarios no se plantearon en Inglaterra, Gales o Escocia, sino en Irlanda.

La más grave amenaza para la continuidad del Estado procedió, de hecho, de Irlanda. Irlanda, pacificada, continuó siendo una colonia, dividido su gobierno entre un Parlamento al que sólo podían acceder los protestantes y una administración impuesta por Westminster. Aunque los gobernadores británicos accedieron con el tiempo a tolerar la observancia de la religión católica, a partir de la revolución gloriosa la legislación británica excluyó a los católicos de los cargos públicos. En 1782-1783, el Parlamento irlandés adquirió un mayor poder y autonomía, como consecuencia indirecta de las derrotas británicas en América del Norte. Pero luego, en 1800-1801, los británicos decidieron incorporar a los protestantes irlandeses al Parlamento británico y esta iniciativa agudizó todavía más la desigualdad política entre los sectores católico y protestante de Irlanda. Los aristócratas protestantes eran titulares de la mayor parte de la tierra, mientras que, con la excepción del Ulster, los trabajadores eran en su gran mayoría católicos. Entretanto, los irlandeses seguían siendo soldados, abasteciendo con gran número de mercenarios los ejércitos continentales, en especial los ejércitos franceses, contra los cuales lucharon una y otra vez los británicos entre 1688 y 1815.

Bajo la presión de las guerras norteamericanas, el gobierno británico superó su rechazo a armar a los irlandeses católicos en el decenio de 1770. Como compensación, la Catholic Relief Act de 1778 realizó algunas concesiones a los católicos, entre ellas el derecho de los soldados católicos a jurar lealtad a la corona sin abjurar de su fe. Las propuestas de extender dichas concesiones a Escocia e Inglaterra provocaron graves enfrentamientos en Gran Bretaña, como los Gordon Riots de 1780. Al mismo tiempo, los grupos armados de voluntarios protestantes que se constituyeron para proteger el frente interno mientras los soldados irlandeses luchaban en América del Norte, adquirieron una notable importancia en la política nacional irlandesa.

Dos tipos de conflictos internos interactuaron. Por una parte, los arrendatarios se enfrentaron con los señores y sus representantes en

la que fue una de las luchas agrarias más prolongadas de Europa. Católicos y protestantes se agruparon para oponerse a las rentas desorbitadas y a la desposesión de la tierra. Adoptaron diversos nombres como *Whiteboys* y *Hearts of Oak*. Por otra parte, grupos armados católicos (casi siempre procedentes de las ciudades y de las capas medias agrarias) atacaban una y otra vez los símbolos e instrumentos del gobierno británico, y también a sus representantes. Durante la década de 1790 se formó en Belfast, Dublín y otras zonas del país una fuerza mucho más centralizada, los United Irishmen. Al principio luchaban por conseguir la reforma parlamentaria y su agitación contribuyó a la ampliación de los derechos de los católicos en 1792. Los católicos irlandeses obtuvieron finalmente el derecho de voto que se les negaba desde hacía un siglo. Pero bajo la inspiración de Wolfe Tone derivaron en la insurrección abierta y en la colaboración con Francia, enemiga de Inglaterra.

En 1796 una fuerza invasora francesa fracasó en su intento de llegar a Irlanda y entrar en contacto con los United Irishmen. Advertidos a tiempo, los británicos enviaron nuevos efectivos militares que realizaron una violenta represión. En mayo de 1798, los United Irishmen protagonizaron una serie de rebeliones regionales desesperadas pero muy mal coordinadas: treinta mil personas, entre soldados y población civil, murieron como consecuencia directa de la acción militar. Las rebeliones habían sido sofocadas cuando llegaron a Irlanda sendas expediciones francesas en agosto y septiembre. Las fuerzas británicas capturaron el barco francés en el que se había enrolado Wolfe Tone, le juzgaron y le condenaron, pero no les dio la oportunidad de organizar una ejecución ejemplar porque se quitó la vida en noviembre de 1798. En 1803 Robert Emmet intentó organizar una nueva rebelión pero todo lo que consiguió fue llevar a cabo una manifestación callejera en Dublín y ser ejecutado. La insurrección de los United Irishmen de 1798, aunque no quebrantó en modo alguno el poder británico en Irlanda ni en Gran Bretaña, fue la amenaza revolucionaria más grave a la que hubo de hacer frente el Estado en los siglos XVIII y XIX. Su repercusión más clara fue el intento de Pitt, coronado por el éxito, de constituir un Reino Unido en 1800-1801.

En Irlanda se impuso de nuevo una doble línea política: grandes campañas, a nivel nacional e internacional, en pro de la emancipación de la población católica y, luego, de la consecución de diversos grados de independencia, y guerra de guerrillas contra la aristocracia y los representantes del Estado a nivel local y regional. Aunque los dos tipos de movimiento suscitaron un amplio apoyo, ninguno de ellos adquirió tintes revolucionarios durante el siglo XIX. En 1848, el intento de insurrección protagonizado por activistas de la Joven Irlanda se saldó en un total fracaso, pero dejó como herencia una red de elementos revolucionarios que diez años más tarde organizaron el movimiento feniano, tanto en Irlanda como en los Estados Unidos. La insurrección feniana de 1867 tampoco planteó una grave amenaza a la autoridad establecida. Ocasionalmente, esos dos movimientos antes aludidos coincidían, como en la guerra agraria de 1879-1882, período en el que hubo manifestaciones, boicots y acciones defensivas contra los deshaucios y la subida de las rentas, al tiempo que grupos armados atacaban las propiedades de los señores. Por otra parte, ambos tipos de movimiento tuvieron sus repercusiones, el primero induciendo al Parlamento a debilitar la posición del núcleo protestante y a realizar una redistribución de la propiedad, y el segundo al definir Irlanda como un país ingobernable desde la distancia.

Hacia 1914, tanto los unionistas del Ulster como los militantes antibritánicos del sur de Irlanda estaban convirtiéndose en grupos armados que se amenazaban mutuamente. Durante la primera guerra mundial, los nacionalistas irlandeses supieron aprovechar el hecho de que la atención británica estaba centrada en otros objetivos y, asimismo, la oposición de la población irlandesa ante la perspectiva del reclutamiento militar forzoso, para levantarse en armas y proclamar la república, aunque sufrieron una durísima represión. Sin embargo, la represión trazó la línea de separación entre Inglaterra e Irlanda con más claridad que nunca, facilitando en el período de posguerra la movilización del Sinn Féin —que durante mucho tiempo había sido una minoría crítica— como el partido nacional irlandés. El Sinn Féin adoptó abiertamente una posición independentista. En 1919 Gran Bretaña e Irlanda estaban de nuevo en guerra, en esta ocasión en el juego sangriento de la guerra de guerrillas y las represalias. En 1921 negociaron un tratado del que nació el Estado Libre de Irlanda, que los votantes del norte de Irlanda se apresuraron a rechazar.

En Irlanda del Norte se reanudó la actividad de la guerrilla, que ha continuado de forma intermitente hasta la actualidad. En el sur, los defensores del tratado con Gran Bretaña se enfrentaron en una

guerra civil con los partidarios de proclamar una república y la lucha no terminó hasta 1923. Entre 1937 y 1949, el Estado Libre de Irlanda ocupó una posición ambigua en los límites del imperio británico, permaneciendo neutral durante la segunda guerra mundial. En 1949 el Parlamento irlandés (Dáil) proclamó la república y cortó los lazos con la *Commonwealth*. La separación se produjo entre grandes tensiones, pero sin que estallara una situación revolucionaria abierta.

Sin embargo, el Reino Unido todavía controlaba seis condados en el norte de Irlanda. En 1968 comenzaron una serie de manifestaciones en pro de los derechos civiles de la minoría católica, que desembocaron en violentos enfrentamientos con la policía y con otros manifestantes protestantes, hasta que el gobierno británico se decidió, al año siguiente, a enviar al ejército. Aunque la lucha pasa por momentos de mayor y menor intensidad, todos los años desde entonces existe una guerra de guerrillas entre las tropas británicas, los activistas protestantes, algunos sectores del ejército republicano irlandés y otros grupos armados. Las autoridades británicas han intentado aplicar diversas combinaciones de represión, conciliación y subvención, que en ningún caso han permitido poner fin a la situación de guerra civil. Dado que en todo momento han existido pueblos y barrios en los que no se ejerce la autoridad británica, se puede considerar, plausiblemente, que el período transcurrido entre 1969 y 1992 ha sido una situación revolucionaria continua en Irlanda del Norte.

Cuando se considera retrospectivamente, la historia de las relaciones entre Irlanda e Inglaterra aparece como una larga revolución nacionalista. Es indudable que una parte del pueblo irlandés ha estado siempre en lucha contra el control inglés entre 1492 y 1992. No obstante, es necesario señalar la profunda transformación que se ha registrado en la organización de las revoluciones irlandesas durante ese período de quinientos años. En los siglos XVI y XVII, las unidades efectivas de acción colectiva en Irlanda eran grupos organizados según el esquema patrono-cliente y controlados por jefes militares. Ninguno de esos grupos conseguía predominar sobre los demás. Por consiguiente, la independencia total con respecto a Inglaterra habría planteado un interrogante de difícil respuesta: ¿quién gobierna aquí? Las luchas y rebeliones irlandesas pertenecen claramente a la categoría de situaciones revolucionarias dinásticas.

Cuando los ingleses consiguieron el control de Irlanda y desplazaron sistemáticamente a la nobleza católica, las situaciones revolucionarias dinásticas se unieron a otras situaciones revolucionarias comunales en las que la población local defendía su identidad católica frente a los extranjeros. Sólo durante el siglo XIX, cuando en el resto de Europa predominaban las revoluciones nacionales y de coalición de clases, se produce una popularización de la causa irlandesa a nivel nacional. Fueron organizadores de asociaciones de masas como Daniel O'Connell quienes propiciaron esa popularización cuando la incorporación formal de Irlanda al Reino Unido agudizó los problemas. En la medida en que favoreció la alianza de los católicos de diversas clases sociales contra los dominadores protestantes, la coalición de clases fue también un factor que estuvo presente en la movilización revolucionaria. Pero, en conjunto, prevaleció la solidaridad nacional, la reivindicación de que un pueblo homogéneo y oprimido tenía derecho a poseer un Estado independiente. Las modificaciones que se registraron en la naturaleza de los estados irlandés y británico determinaron el paso de las revoluciones dinásticas y comunales a la revolución nacional.

¿Qué decir acerca de las islas Británicas en su conjunto? Podríamos esquematizar la historia política de los tres estados británicos principales en diversas fases, como se muestra en el cuadro 4.3. Aunque ese esquema constituye una clara simplificación, permite contrastar la fusión parcial de Inglaterra, Gales y Escocia con la singularidad permanente de Irlanda; los débiles movimientos nacionalistas de los años sesenta y posteriores en Escocia y Gales apenas modifican ese contraste.

Estas transformaciones de los estados británicos y de su poder militar alteraron profundamente el carácter de las situaciones y resultados revolucionarios entre 1492 y 1992. Excepto en Irlanda, el extraordinario reforzamiento de la fuerza militar del Estado con respecto a los ciudadanos a partir de 1689 impidió que se formara una coalición revolucionaria. Las luchas continuaron, pero por los conductos establecidos gracias al relativo consenso alcanzado entre las clases dirigentes. De igual forma, el predominio creciente del Parlamento canalizó la política popular hacia el intento de influir en la legislación nacional, que sustituyó a los ataques contra la autoridad. Los compromisos contraídos con la población en el curso de la expansión militar del Estado entre 1750 y 1900 —derechos de asociación, amplia-

CUADRO 4.3. Historia política de los tres estados británicos, 1492-1992.

Años	Inglaterra y Gales	Escocia	Irlanda
1492-1603	Expansión agresiva y turbulenta del Estado	Luchas con Inglaterra, modesta expansión del Estado	Territorio de conquista fragmentado
1603-1714	Luchas revolucionarias y consolidación	Consolidación, luchas, incorporación a Gran Bretaña	Colonia resistente, pero cada vez más colonizada y controlada
1714-1815	Estado en expansión, beligerante y conquistador	Debilitamiento de la resistencia, incorporación creciente	Negociación, guerrilla, incorporación parcial a Gran Bretaña
1815-1914	Consolidación del Estado capitalista e imperialista	Expansión del Estado, conflictos contenidos	Guerrilla, desorden económico, situación semicolonial
1914-1945	Imperio capitalista dominado por la guerra	Centralización y extensión del Estado	Guerrilla hasta las guerras de la Independencia, consolidación del Estado, enfrentamientos limitados
1945-1992	Desintegración del imperio, Estado asistencial capitalista, estancamiento político	Relativa autonomía, decadencia económica, conflictos moderados	Expansión del Estado en el sur, guerra de guerrillas en el norte

ción del derecho de voto, primeras medidas legislativas asistenciales— fueron otros tantos elementos democráticos y aumentaron el interés de la población en el sistema. La consecuencia fue que en Inglaterra, Gales y Escocia no se produjeron ya situaciones revolucionarias graves, mientras seguían existiendo, y todavía existen, en Irlanda.

CAPÍTULO CINCO

Francia y otras Francias

Bretones contra franceses

En julio de 1488, en el ejército que reunió el duque Francisco II de Bretaña para defender su Estado soberano del ataque francés había 6.400 bretones, pero también 3.500 españoles, 800 alemanes y 400 ingleses. Se enfrentaron a una fuerza francesa bien armada de 15.000 hombres, constituida por efectivos franceses, suizos y napolitanos. No era la primera vez que los ejércitos «bretones» y «franceses» se enfrentaban en el campo de batalla, pero sí fue una de las últimas. En las filas bretonas murieron 6.000 hombres y en las de los franceses 1.500. Tras esa batalla y después de la muerte de Francisco II, acaecida poco después, la corona francesa adquirió el control casi definitivo de su pequeño vecino de vocación marinera, después de varios siglos de enfrentamiento.

Desde luego, para el monarca de Francia, Carlos VIII, la batalla de 1488 no era un enfrentamiento entre estados soberanos. Durante los siglos XIII y XIV, los duques bretones habían reconocido sistemáticamente su subordinación feudal a Francia. Desde hacía un siglo o más, los litigantes en los tribunales bretones habían apelado distintas sentencias ante el Parlamento de París, hecho que daba aún más fuerza a la pretensión del rey de Francia de afirmar su soberanía sobre Bretaña. Cuando el duque de Bretaña proclamó la soberanía de su Parlamento en 1485, la corona francesa inició un proceso que concluyó con la condena de Francisco II *in absentia* por la Cámara de los Pares, como reo de alta traición (1488). Esa condena justificaba el ataque francés contra Bretaña. El rigor en la venganza es un destacable atributo de los reyes conquistadores.

Era ese un período de reforzamiento interior para Francia. Du-

rante cuarenta años, los monarcas franceses Carlos VII, Luis XI y Carlos VIII habían dedicado sus esfuerzos a reconstruir el reino, fuertemente debilitado por la guerra de los Cien Años. Recientemente, Anjou, Bar, Maine y Provenza habían quedado bajo el control directo de la corona, que en el decenio de 1490 intentaba incorporar también, además de Bretaña, Borgoña, Nápoles y Milán. Los Reyes Católicos, Fernando e Isabel, Maximiliano de Habsburgo (que muy pronto sería elegido emperador del Sacro Imperio Romano) y Enrique VII de Inglaterra trataban de contener la expansión francesa. Todos habían apoyado la causa bretona, pero no habían podido impedir el triunfo del ejército francés en esa operación realizada en un territorio tan cercano. Una de las cláusulas del tratado de Sablé, firmado en 1488 entre Bretaña y Francia, contemplaba la expulsión de Bretaña de todas las tropas extranjeras, y otra daba al monarca francés el derecho de veto sobre los futuros pretendientes de la heredera, Ana de Bretaña, que sólo tenía entonces doce años.

Poco después de la coronación de Ana en 1489, Bretaña se desgarró en una guerra triangular en la que participaron sus partidarios, fuerzas francesas y una coalición de grandes nobles bretones que trataban también de controlar la boda y la sucesión de Ana. Nuevamente intervinieron ejércitos de los Habsburgo y los Tudor, defendiendo abiertamente la causa de Ana. Pero los franceses resultaron triunfadores una vez más, y en esta ocasión de forma definitiva. Tras una sucesión vertiginosa de cambios de alianza, negociaciones e intimidaciones, Ana contrajo matrimonio con el rey de Francia, Carlos VIII, en 1491. (A la muerte de Carlos, en 1498, su tío y sucesor Luis XII también contrajo matrimonio con Ana de Bretaña, para lo cual tuvo que conseguir una escandalosa anulación de su matrimonio anterior con Juana, hija de Luis XI.) Carlos VIII se aseguró la no intervención de España mediante la cesión del Rosellón y la Cerdaña y compró la paz con el imperio y con Inglaterra. Inmediatamente, aprovechó su sólida posición para lanzar una gran invasión de Italia. La monarquía francesa estaría constantemente ocupada, durante los cuarenta años siguientes, en sus intentos de conquista de Italia, que finalmente no tendrían éxito.

Si se pregunta si los conflictos de Bretaña de 1488-1491 fueron revolucionarios, la respuesta habría de ser que, como siempre, depende del sentido que se dé al término revolución. En este caso, la cuestión

esencial es si se considera que Bretaña formaba parte de Francia, precisamente el motivo del enfrentamiento. Si se piensa que en 1488 Francia era un Estado unitario del que formaba parte Bretaña y que los partidarios del duque de Bretaña, Francisco II, eran súbditos desleales de la corona francesa, hay que definir la situación bretona como revolucionaria. La sujeción *de facto* de Bretaña al trono de Francia (que se convirtió en sujeción *de jure* en el tratado de unión de 1532) permitiría incluso calificar de resultado revolucionario la solución del conflicto de 1491. Pero si se considera que Bretaña y Francia eran dos estados soberanos, habrá que pensar en los acontecimientos de 1488-1491 como una serie de guerras internacionales a las que se añadió la guerra civil en Bretaña y cuyo resultado fue la conquista de un Estado por otro.

Estas cuestiones de definición, arbitrarias en último extremo, importan menos que las circunstancias políticas que ponen de relieve. La Francia de finales del siglo XV no era un territorio claramente delimitado, gobernado por una administración central bien asentada, sino un mosaico de tierras vinculadas de diversa forma, y a veces precariamente, al monarca francés y a sus aliados. Por ejemplo, Bretaña conservó la condición de ducado hasta 1536, mientras que sus estados semiindependientes pervivieron hasta la revolución de 1789 y su Parlamento no estableció una relación ordinaria con otros tribunales franceses hasta 1553.

Como todos los grandes estados europeos de la época, el Estado francés gobernaba a través de intermediarios que disfrutaban de gran autonomía, mantenía una gran variedad de relaciones con las distintas clases y regiones y era poco, aparte del tributo, lo que exigía a sus súbditos nominales. En ese período, las situaciones revolucionarias se producían principalmente cuando la corona intentaba conseguir un aumento sustancial de su poder o de sus ingresos, cuando pretendía imponer una identidad extraña a la población o cuando pretendientes rivales a la soberanía intentaban hacer valer sus derechos. Como lo ilustra el enfrentamiento entre Francia y Bretaña, las tres circunstancias coincidían muchas veces.

En el conjunto del período, en Francia se produjo un número mucho más reducido de situaciones revolucionarias que en la península ibérica y en los Balcanes y también menos que en las islas Británicas. Los reyes franceses consiguieron finalmente convertir un amplio territorio en un único Estado centralizado, lo cual nunca se consiguió en la península ibérica, en los Balcanes y en las islas Británicas. Llevados del deseo de aumentar su capacidad bélica, la corona francesa y sus agentes presionaron a la población en busca de dinero, suministros y recursos humanos. Mediante un intenso esfuerzo y frecuentes enfrentamientos, el Estado francés acabó con las autonomías y los particularismos regionales. Ello dio como resultado que en los últimos quinientos años, en la zona que se convertiría en la Francia de nuestra época, hubiera un número menor de estados susceptibles de sufrir una revolución —solamente uno, durante la mayor parte del tiempo— y, en consecuencia, menos posibilidades de que se registraran situaciones revolucionarias que en otras zonas comparables de Europa.

A pesar de ello, lo cierto es que, durante los siglos XVI y XVII, Francia conoció numerosas situaciones revolucionarias, entre las que destacan diversas rebeliones regionales por motivos fiscales, frecuentes guerras de religión entre católicos y protestantes y la Fronda. En cambio, en los siglos XVIII y XIX Francia se vio menos frecuentemente al borde de la revolución, pero cuando atravesó esa frontera lo hizo de manera espectacular: los acontecimientos de 1789-1799, 1830, 1848-1851 y 1870-1871 figuran entre las crisis revolucionarias más importantes de Europa. Después de esa última fecha, las clases y los partidos se enfrentaron con dureza, pero en la Francia metropolitana no volvió a plantearse una situación plenamente revolucionaria hasta los últimos meses de la segunda guerra mundial. Además, para concluir hasta qué punto fueron revolucionarios los acontecimientos de aquellos meses, es necesario resolver una cuestión espinosa: la amplitud del apoyo popular de que gozaron las autoridades nazis y de Vichy en 1944. Parece que en 1944 se olvidaron rápidamente las cuestiones de la lealtad fundamental y que, en consecuencia, la balanza se decantó rápidamente, por lo cual sólo de forma pasajera hubo distintos focos de poder, esencia de la situación revolucionaria.

Si se trasladaran los enfrentamientos armados en las colonias y en los territorios ultramarinos de Francia del inventario de guerras exteriores al catálogo de situaciones revolucionarias, la situación cambiaría drásticamente: el golpe de 1958 fue consecuencia de la conquista *pied noir* del poder en Argelia y todavía ahora las tropas francesas intervienen activamente en antiguas colonias, como el Chad, donde

persisten situaciones conflictivas. Sin embargo, en el territorio patrio el Estado francés no ha tenido que hacer frente a una situación abiertamente revolucionaria desde el siglo XIX. Incluso enfrentamientos tan duros como los que se produjeron a raíz de la separación de la Iglesia y el Estado (en 1905), y de las huelgas de 1936, no entrañaron una división del Estado en dos bloques. El golpe de estado que llevó a De Gaulle al poder en 1958 se realizó sin que se planteara una división abierta por lo que respecta al control del Estado metropolitano. Bajo la grave amenaza de que se produjera una insurrección, la Asamblea Nacional otorgó a regañadientes a De Gaulle los poderes extraordinarios que pedía. En 1880, un Estado en otro tiempo revolucionario había consolidado su poder en un grado que muy pocos otros estados europeos podían igualar.

Este proceso de disminución de las situaciones revolucionarias se produjo en un Estado que durante la mayor parte del período fue una gran potencia mundial, que desempeñó un papel protagonista en las guerras europeas, que construyó un imperio formidable y que comerciaba e intervenía en casi todos los rincones del planeta. El catálogo de guerras exteriores (véase el cuadro 5.1) ofrece la misma conclusión, ya que comienza con una serie de conflictos generales europeos para extenderse a toda América y África y luego a China, Indochina y el Próximo Oriente. El hecho de que Francia no tuviera una flota destacable, como la de los holandeses y los británicos, sino un importante ejército de tierra, determinó que se constituyera una notable y perdurable democracia y que en el país hubiera siempre una temible presencia militar.

Por otra parte, Francia adquirió una posición relevante en el mundo del capitalismo. Su propia dimensión y diversidad (desde las explotaciones agrícolas comerciales de la cuenca de París hasta la manufactura polivalente de los Alpes y la vocación marinera de Marsella, Burdeos y Saint Malo) prestaban importancia a la economía francesa. Aunque Gran Bretaña y Alemania acabaron por superar a Francia en términos de producción industrial, lo cierto es que, durante tres o cuatro siglos, la economía francesa marcó la pauta en Europa. Todavía en los siglos XIX y XX, el volumen de producción de Francia alcanzó cotas extraordinarias. Consideremos, por ejemplo, las estimaciones del producto nacional bruto que figuran en el cuadro 5.2 (Bairoch, 1976, p. 281; las cifras se dan en dólares estadounidenses de 1960). Según este indicador, solamente Rusia, con una población muchísimo más elevada (en 1830, 62 millones de habitantes frente a los 32 millones de franceses) tenía una economía más rica que Francia en 1830, y en 1913 tan sólo Rusia, Alemania y el Reino Unido superaban a Francia. En definitiva, la economía francesa, aunque perdía terreno frente a las de Alemania y el Reino Unido, seguía creciendo.

En 1830 Francia representaba aproximadamente el 15 por 100 del producto bruto europeo y el 11 por 100 en 1913. El muy lento crecimiento demográfico del siglo XIX hizo disminuir el peso relativo de la economía francesa. Sin embargo, en valores per cápita (cuadro 5.3, cifras también en dólares estadounidenses de 1960), Francia continuaba ocupando una posición destacada, pues su producto nacional bruto per cápita en 1830, 1860 y 1913 era un 10 por 100, un 40 por 100 y un 30 por 100 superior a la media, respectivamente (Bairoch, 1976, p. 286).

Los datos que se desprenden de la distribución de las ciudades apuntan en la misma dirección. En 1492 Francia era una región mucho más urbanizada y comercializada que las islas Británicas, la península ibérica y los Balcanes, aunque sólo su porción nororiental compartía la intensa vida urbana y comercial de los Países Bajos. En esa época, París (con unos 100.000 habitantes) y Lyon (50.000) se disputaban el predominio comercial en la región, a pesar del mayor tamaño de París, ya que las relaciones de Lyon con las finanzas y el comercio italianos daban a esta ciudad un especial relieve. Otras ciudades francesas con 10.000 habitantes o más eran Arras, Burdeos, Dijon, Marsella, Nantes, Rennes, Ruán y Toulouse. En la vecina Lorena (a la sazón independiente de Francia), Metz y Estrasburgo también sobrepasaban el umbral de los 10.000 habitantes.

En 1800 París dominaba la jerarquía urbana de Francia con mucha mayor claridad y una serie de ciudades (Burdeos, Caen, Lyon, Marsella, Metz, Montpellier, Nantes, Nimes, Orleans, Reims, Ruán, Estrasburgo, Toulon y Toulouse, lista muy similar a la de 1492) superaban las 30.000 almas. Cabría considerar el elenco de 1492 como la intersección de tres redes urbanas, la primera como representación de la actividad comercial del Mediterráneo, una segunda vinculada al comercio de Flandes, la zona suroriental de Inglaterra y el norte de Alemania, y la tercera como expresión de los lazos administrativos con la corona francesa. Desde las postrimerías del siglo XV hasta la revo-

CUADRO 5.1. Guerras exteriores de Francia, 1492-1992.

1489-1492	Guerra con Inglaterra, España y el imperio	1792-1802	Guerras revolucionarias en Francia
1495-1496	Expedición a Italia	1803-1815	Guerras napoleónicas
1499-1504	Guerra de la Liga Santa	1821-1829	Intervención en la revuelta griega
1508-1510	Guerra de la Liga de Cambrai	1830	Conquista en Argelia
1511-1513	Guerra de la Liga Santa	1830-1833	Intervención en la revolución belga
1515-1516	Guerras de Italia	1833	Guerra contra Annam
1521-1525	Guerras de Italia	1838-1839	Intervención en México
1528-1529	Guerra contra el imperio	1839-1847	Conquista en Argelia
1542-1544	Guerra europea	1839-1852	Intervención en la guerra argentino-uruguaya
1542-1543	Intervención en la guerra civil sueca		
1549-1550	Guerra con Inglaterra	1844	Guerra contra Marruecos
1552-1555	Guerra con el imperio	1854-1856	Guerra de Crimea
1555	Guerra con Portugal en Brasil	1856-1860	Guerra en China
1556-1559	Guerra europea	1857-1861	Conquista en Senegal
1559-1560	Intervención en la guerra civil escocesa	1859	Guerra lombarda
1565	Guerra con España en Florida	1860	Intervención en la guerra siria
1566-1567	Guerra con Portugal en Brasil	1861-1867	Expedición a México
1566-1568	Intervención en la guerra hispano-holandesa	1870-1871	Guerra franco-prusiana
1572-1609	Intervención en la guerra hispano-holandesa	1873-1874	Guerra de Tonkin
1582-1583	Guerra con España en las Azores	1881-1882	Conquista en Túnez
1588	Guerra con Saboya	1881-1885	Conquista en Senegal
1590-1598	Guerra con Saboya	1882-1885	Guerra de Tonkin
1594-1598	Guerra con España	1883-1885	Conquista en Madagascar
1600-1601	Guerra con Saboya	1890-1892	Conquista en Senegal
1609	Guerra contra Túnez	1890-1894	Guerra contra Sudán
1619	Guerra contra Argelia	1892-1894	Conquista en Dahomey
1624-1626	Guerra de la Valtelina	1893	Guerra contra Siam
1628-1631	Guerra con el imperio, España	1893-1895	Guerra tuareg
1629	Guerra con Marruecos	1894-1895	Conquista en Madagascar
1635-1648	Guerra de los Treinta Años	1896-1897	Conquista en el Alto Volta, Níger
1635-1659	Guerra con España	1900-1901	Conquista en el Chad
1644-1669	Intervención en la guerra turco-veneciana	1900-1901	Intervención en la rebelión de los bóxer en China
1647-1648	Intervención en la revuelta antiespañola de Nápoles	1900-1911	Conquista en África central
1663-1664	Intervención en la guerra turco-austríaca	1907-1911	Conquista en Marruecos
1665-1667	Guerra con Inglaterra	1912-1917	Guerra contra Marruecos
1666	Guerra contra Túnez	1914-1918	Primera guerra mundial
1667-1668	Guerra de Devolución	1917-1921	Intervención en la revolución rusa
1670-1672	Guerra contra Túnez	1919-1920	Intervención en la guerra ruso-polaca
1672-1679	Guerra con Holanda	1919-1926	Guerra del Rif
1682-1683	Guerra con Argel	1920	Guerra en Siria
1683	Guerra iroquesa	1920-1922	Intervención en la guerra greco-turca
1683-1684	Guerra con España	1925-1926	Guerra en Siria
1687-1689	Guerra iroquesa	1930-1931	Guerra en Vietnam
1688-1689	Guerra con Argel	1939-1945	Segunda guerra mundial
1688-1697	Guerra de la Liga de Augsburgo	1940-1941	Guerra en Tailandia
1689-1691	Intervención en Irlanda	1945	Guerra en Siria
1701-1714	Guerra de Sucesión española	1946-1954	Guerra en Indochina
1710-1711	Guerra con Portugal en Brasil	1947	Guerra en Madagascar
1718-1720	Guerra con España	1952-1954	Guerra en Túnez
1733-1735	Guerra de Sucesión de Polonia	1953-1956	Guerra en Marruecos
1740-1748	Guerra de Sucesión austríaca	1954-1962	Guerra en Argelia
1741	Guerra con Túnez	1955-1960	Guerra en Camerún
1754-1756	Guerra en América del Norte	1956	Guerra contra Egipto
1756-1763	Guerra de los Siete Años	1957-1958	Guerra del Sahara occidental
1778-1783	Guerra de Independencia norteamericana	1962-1992	Intervención en el Chad

CUADRO 5.2. Estimaciones del PNB en Europa, 1830-1913.

País	1830	1860	1913	Tasa media anual de crecimiento (%)
Alemania	7.235	16.697	49.760	2,4
Austria-Hungría	7.210	11.380	26.050	1,6
Bélgica	1.098	2.882	6.794	2,2
Bulgaria	?	616	1.260	1,4*
España	3.600	5.300	7.450	0,9
Francia	8.582	16.800	27.401	1,4
Grecia	?	365	1.540	2,8*
Países Bajos	913	1.823	4.660	2.0
Portugal	860	1.175	1.800	0,9
Reino Unido	8.245	19.628	44.074	2,0
Rumania	?	950	2.450	1,8*
Rusia	10.550	22.920	52.420	2,0
Serbia	?	345	725	1,4*
Europa	58.152	114.966	256.845	1,8

* 1860-1913.

CUADRO 5.3. Estimaciones del PNB per cápita en Europa, 1830-1913.

País	1830	1860	1913
Alemania	245	354	743
Francia	264	437	689
Reino Unido	346	558	965
Rusia	170	178	326
Europa	240	310	534

lución de 1789, la monarquía progresó de forma decidida en el sentido de la nacionalización de dichas redes, que quedaron reducidas a dos: una red de centros administrativos y otra de carácter comercial, esta última orientada hacia el noreste pero con ramificaciones en todo el reino.

La monarquía francesa acabó por imponer un dominio uniforme sobre la mayor parte del territorio. En el siglo XVIII, la distinción política más clara era la que existía entre las provincias que conservaban sus Estados con el poder de negociar el pago de los impuestos indirectos (*pays d'États* como Languedoc, Borgoña y Bretaña) y los *pays d'Élections*, cuyos gobiernos autónomos habían sido sustituidos por tribunales reales. Esa distinción se agudizó durante el gobierno cen-

tralizador de Luis XIV. Entre los años 1490 y 1650, la corona hubo de hacer frente a múltiples desafíos, desafíos tan graves que en el siglo XVII Francia podía haber evolucionado hacia un imperio fraccionado, con múltiples lenguas, dividido desde el punto de vista religioso y con una serie de jefes militares con capacidad impositiva, en lugar de convertirse en el Estado relativamente unitario que se consolidó.

Prevalecieron entonces las situaciones revolucionarias dinásticas, las situaciones revolucionarias comunales y otras formas que tenían aspectos de las dos anteriores. Durante los siglos XVI y XVII, en Francia las situaciones revolucionarias más graves se produjeron principalmente cuando las rebeliones populares convergían con las maniobras de la alta nobleza contra la preeminencia real. Finalmente, una vez terminada la Fronda, Luis XIV aplastó o asimiló el poder de la nobleza autónoma, incluida su capacidad para poner en pie de guerra ejércitos privados. Pero antes de los días gloriosos de Mazarino y Colbert hubo de afrontar una y otra vez una resistencia armada. La resistencia adoptó dos formas interrelacionadas: el rechazo protestante de la autoridad de la Iglesia católica romana y la reacción del conjunto de la población ante la imposición derivada de la guerra. Aunque se formaron repetidas veces coaliciones de clase a escala local, las situaciones revolucionarias regionales y nacionales conjugaban rasgos dinásticos y comunales.

Protestantes contra católicos

En los siglos XVI y XVII, los protestantes organizados fueron la amenaza más importante que hacía peligrar la consolidación de una monarquía fuerte y centralizada. La Reforma protestante quebrantó la autoridad establecida en todas las regiones de Europa en las que se impuso, si no por otra razón porque para las dinastías gobernantes la Iglesia católica romana había sido durante mucho tiempo un aliado en el gobierno, el origen de sinecuras para los miembros de la realeza que no abrazaban la carrera militar y fuente de ingresos para la guerra y la administración real. Al trazar el mapa de la Reforma, es necesario distinguir entre la geografía de la respuesta popular inicial y la geografía de la resolución religiosa final; después de todo, el mapa del protestantismo se modificó entre 1525 y 1650. Francia acogió ca-

CUADRO 5.4. Situaciones revolucionarias en los estados franceses, 1492-1992.

1548	Insurrección de Pitaud en Guyena	1648-1653	La Fronda
1562-1563	Primera guerra de religión	1655-1657	Rebelión de Tardanizat (Guyena)
1567-1568	Segunda guerra de religión	1658	Rebelión de los *sabotiers* (Sologne)
1568-1569	Tercera guerra de religión	1661-1662	Rebelión de Bénauge (Guyena)
1572-1573	Cuarta guerra de religión	1662	Rebelión de Lustucru (Boulonnais)
1574-1576	Quinta guerra de religión	1663	Rebelión de Audijos (Gascuña)
1577	Sexta guerra de religión	1663-1672	Guerra de guerrillas de los *angelets* (Rosellón)
1578-1579	Séptima guerra de religión	1675	Rebeliones del Papier Timbré, *bonnets rouges* (o Torrében) (Bretaña)
1579-1580	Octava guerra de religión	1702-1706	Rebeliones de los *camisards* de Cévennes, Languedoc
1585-1598	Novena guerra de religión	1768-1769	Rebelión en Córcega
1594-1595	Rebeliones de los *croquants* en el suroeste	1789-1799	Revolución francesa y contrarrevoluciones
1614-1615	Guerra civil en Bretaña	1815	Los Cien Días
1617	«Guerra de la madre y el hijo»	1830	Revolución de julio
1619-1620	«Guerra de la madre y el hijo»	1848	Revolución en Francia
1621-1622	Guerras de los hugonotes	1851	Golpe de estado de Luis Napoleón, insurrección
1625	Guerras de los hugonotes	1870	Hundimiento del Estado, ocupación, revoluciones republicanas
1627-1630	Guerras de los hugonotes (intervención inglesa)	1870-1871	Comunas múltiples
1629-1630	Levantamiento de los *croquants*	1944-1945	Resistencia y liberación
1635-1636	Levantamiento de los *croquants*		
1637-1641	Levantamiento de los *croquants*		
1639	Rebelión en Normandía		
1643-1644	Revuelta del suroeste		

lurosamente la segunda oleada de la Reforma, especialmente la que se identificaba con Calvino, pero acabó por retornar en su casi totalidad al catolicismo. La trayectoria francesa contrasta fuertemente con la de Alemania, donde extensas regiones abrazaron masivamente la versión estatista luterana de la organización protestante y no la abandonaron.

Si los protestantes alcanzaron su más sólida posición en Alemania ello se debió a tres causas interrelacionadas. En primer lugar, en el panorama de soberanía fragmentada de Alemania, el papa había conservado un mayor poder autónomo que en ninguna otra parte de Europa, excepto en sus dominios de Italia, y ello le convertía en un blanco evidente sin otorgarle el poder secular para defenderse. En segundo lugar, los príncipes regionales alemanes carecían, en muchos casos, de la fuerza suficiente para imponer la uniformidad religiosa frente a determinadas coaliciones que se constituían entre comerciantes y artesanos reformadores. En tercer lugar, muchas municipalidades y pequeños príncipes se sumaron al protestantismo como medio de marcar distancias con el Sacro Imperio Romano, de credo católico, y, desde luego, porque les pareció la ocasión propicia para apoderarse de propiedades y rentas eclesiásticas. Fue eso lo que indujo a los electores de Sajonia a proteger a Martín Lutero (a quien el papa y muchos católicos desearían haber quemado en la hoguera) de la persecución papal e imperial durante toda su vida.

No puede afirmarse que los conversos al luteranismo, calvinismo o zwinglianismo se comportaran como meros oportunistas políticos. La Reforma protestante articuló una insatisfacción popular profundamente enraizada con respecto al clero corrupto, al tiempo que introducía un nuevo rigor en las creencias y las prácticas populares. En la guerra campesina alemana de 1524-1525, millares de personas del pueblo llano (en una acción que provocó la aflicción y la condena de Lutero) dieron su vida en nombre de las doctrinas milenaristas de Thomas Müntzer. Sin embargo, las enormes diferencias que se manifestaron entre unas y otras regiones de Europa con respecto al éxito final del protestantismo institucional no radican tanto en el atractivo popular de las creencias protestantes como en las opciones de las autoridades locales, regionales y nacionales entre aplastar, tolerar o fomentar uno u otro credo protestante.

En la era de los estados fragmentados, revestía gran importancia

el hecho de que las autoridades intermedias pertenecieran o no a la misma religión que sus gobernantes nominales. Aquellos patronos que eran disidentes religiosos tenían razones de más peso para defender sus comunidades frente a la interferencia real, más posibilidades de obtener la lealtad de sus súbditos y muchas más oportunidades de recurrir, en busca de ayuda, a otros correligionarios de fuera de sus dominios. En Francia, los comerciantes y artesanos fueron la base del calvinismo y, en algunos lugares, los conversos al protestantismo se enfrentaron enérgicamente, muchas veces, con el clero y las oligarquías municipales. En aquellos lugares donde los protestantes resultaban victoriosos, confiscaban las propiedades de la Iglesia para venderlas o dedicarlas a usos de carácter público, pagando además las deudas públicas en el proceso. Pero, a escala nacional, los conflictos entre protestantes y católicos se producían casi siempre por el intento de la corona católica de suprimir la autonomía de la nobleza y los municipios protestantes. Durante la centuria que comienza en 1560, fueron, junto con las exacciones de impuestos para hacer frente a los gastos militares, la causa principal de las situaciones revolucionarias en Francia.

Lutero tenía relativamente pocos seguidores en Francia, pues su doctrina de la salvación por la fe en una Iglesia autoritaria, respetuosa de los poderes civiles vigentes, tenía menos atractivo que los programas de Zwinglio y Calvino, de corte más separatista y populista, con amplia participación laica y disciplina colectiva. También contribuyó a ello que Calvino fuera un exiliado francés y que la mayor parte de sus primeros discípulos hablaran francés. En el interior de Francia, el protestantismo se difundió sobre todo en las ciudades en las que los gobernadores aristocráticos toleraron o incluso fomentaron la causa protestante (Knecht, 1989, p. 8). Conoció su mayor desarrollo hacia 1560; un censo realizado en 1561 para el almirante Coligny, un gran dirigente protestante, enumeraba 2.150 congregaciones protestantes en el conjunto de Francia. Luego comenzaron los conflictos armados y empezó a declinar el número de protestantes a medida que disminuía su fuerza política.

Una típica crisis de sucesión dinástica precipitó las guerras de religión que desgarraron Francia entre 1562 y 1598, y fue la resolución de esa larga crisis dinástica la que puso fin a los enfrentamientos. Cuando el rey Enrique II sufrió, en un torneo celebrado en 1559, diversas

heridas que acabaron con su vida, ocupó el poder Catalina de Médicis como mentora de su hijo Francisco II, que tenía entonces quince años. Siguiendo las directrices marcadas por la familia Guisa, Catalina intensificó la persecución de los protestantes, que habían confiado en obtener un mejor trato con el nuevo régimen. Entonces, diversas facciones protestantes conspiraron una y otra vez para intentar situar en el trono a uno de los príncipes protestantes, Antonio o Luis, de la familia de los Borbones. A la muerte de Francisco II, en 1560, le sucedió su hijo Carlos IX, que tenía entonces diez años, y Catalina de Médicis ocupó de manera oficial la regencia en lugar de Antonio, a la sazón demasiado ocupado en sus tentativas de recuperar el reino de Navarra, que había perdido a manos de España. Este acontecimiento dio a los Borbones protestantes un nuevo motivo de agravio contra la dinastía católica reinante de los Valois.

En ese momento, Catalina de Médicis empezó a mostrar una actitud más tolerante hacia los protestantes, que sin embargo exigían más de lo que ella estaba dispuesta a ofrecer. Durante los dos años siguientes, las luchas entre grupos locales de católicos y protestantes fueron cada vez más cruentas a medida que se intensificaban las maniobras de los Borbones y los Guisa en su intento por conseguir el poder. En esa situación de interregno, estalló la guerra abierta. En la primera guerra de religión francesa (1562-1563) se enfrentaron fuerzas realistas con diversas ciudades —especialmente Ruán y Lyon—, dominadas por activistas protestantes. El conflicto concluyó con el edicto de Amboise, que hacía importantes concesiones a los protestantes en materia de derechos políticos y religiosos. Ese primer enfrentamiento marcó la pauta para los subsiguientes: campañas militares durante un año o dos; maniobras de los nobles protestantes y católicos en torno al resultado de la guerra y la posibilidad de acceder al poder real; una tregua, un tratado y un edicto que muy pocos consideraban duradero.

La segunda guerra de religión (1567-1568) ilustró la interacción de las divisiones religiosas internas, el conflicto dinástico y la política internacional. En 1564 y 1565, Catalina de Médicis realizó un largo viaje con la corte que incluyó (en abril de 1565) conversaciones en Bayona con el aristócrata español duque de Alba. Catalina no consiguió concertar matrimonios entre miembros de la familia real francesa y los de España y el Sacro Imperio Romano, mientras que, por su parte, el duque de Alba intentó en vano conseguir que Catalina de Médi-

cis adoptara una actitud antiprotestante mucho más enérgica, sobre todo contra los rebeldes calvinistas de los Países Bajos. Ese mismo año, las fuerzas españolas destruyeron una expedición francesa que se dirigía a Florida. Mientras la corte efectuaba su largo viaje, algunos miembros de las familias Guisa, Montmorency y Borbón (los tres grandes rivales de los Valois por el poder monárquico en Francia) realizaron movimientos de tropas en París en el intento de controlar la capital.

En 1567 el duque de Alba avanzó con sus tropas por el llamado camino español, en la frontera oriental de Francia, para dirigirse a los Países Bajos a luchar contra los rebeldes, maniobra militar que fue considerada como una amenaza por los franceses. Aunque por un momento pareció que los nobles protestantes y católicos franceses podrían unirse para luchar contra los españoles, poco después los hugonotes preparaban el asalto contra la corte e incitaban la ocupación armada de las principales ciudades. El príncipe de Condé encabezó un ataque militar contra los ejércitos reales que permitió incrementar considerablemente el territorio controlado por los protestantes. Sin embargo, Condé, cuyas tropas eran cada vez menos numerosas, se vio obligado a aceptar el retorno a las condiciones en las que había concluido la guerra anterior.

Nuevas guerras entre protestantes y católicos se produjeron en 1568-1569, 1572-1573, 1574-1576, 1577, 1578-1579, 1579-1580 y 1585-1598, jalonadas por tratados, asesinatos, rebeliones, conspiraciones y matanzas. La más notable de estas últimas fue la serie de ataques contra los protestantes que comenzaron el día de San Bartolomé de 1572 y en el curso de los cuales murieron unos 13.000 protestantes, entre ellos el almirante Coligny, en un terrible baño de sangre que se extendió a todo lo largo y ancho del país. En las guerras posteriores intervino un número cada vez mayor de miembros de la alta nobleza que trataban de conseguir una parte, o incluso el monopolio, del poder real. Al mismo tiempo, los protestantes complicaron el problema al prestar ayuda a los rebeldes protestantes de los Países Bajos, que luchaban contra la católica España. En 1576 culminaron las gestiones para constituir en Francia una temible liga militar católica, bajo la dirección de los Guisa, para luchar contra las fuerzas protestantes, mucho peor organizadas. Las guerras civiles sólo cesaron cuando el protestante Enrique de Navarra heredó el trono —después de convertirse al catolicismo— y consiguió atraerse, gradualmente, el apoyo de las principales facciones y parlamentos, al tiempo que daba garantías a los protestantes en el seno del Estado francés. Los protestantes obtuvieron el control de diversas plazas fuertes y ciudades amuralladas. El edicto de Nantes (1598) sentó las bases del nuevo *modus vivendi*.

Sin embargo, esa situación no se prolongó por mucho tiempo. Enrique IV actuó con cautela frente a sus antiguos correligionarios, hasta que fue asesinado en 1610, pero sus sucesores Luis XIII y Luis XIV invirtieron una gran parte de su real energía en el intento de cercenar las ventajas conseguidas por los protestantes. Luis XIII tuvo primero que oponerse, con éxito, a las maniobras de su madre (María de Médicis) y de Richelieu y sus aliados, entre los que se contaba un cierto número de nobles protestantes, para hacerse con el poder. A continuación, el monarca (ahora bajo la dirección de Richelieu) atacó una y otra vez los bastiones protestantes. Luis XIII llegó incluso a sitiar La Rochela, que con el apoyo inglés consiguió rechazar a los ejércitos reales en 1627 y 1628. Durante veinte años siguieron produciéndose enfrentamientos menos virulentos con nobles y ciudades protestantes.

Una vez superada la gran conmoción que provocó la Fronda, Luis XIV comenzó a estrangular paulatinamente el poder protestante. Una decisión trascendental en esa política fue la revocación del edicto de Nantes (1685). Para entonces ya había conseguido debilitar a las ciudades protestantes autónomas y desmantelar los ejércitos privados de los grandes nobles protestantes y de todos los aristócratas en general. Pero incluso el poderoso Luis XIV hubo de hacer frente a una grave rebelión, el levantamiento de los *camisards*, protestantes de las zonas rurales y de las pequeñas ciudades de Cévennes y Vivarais (1702-1706). Sólo la más violenta represión, seguida de una negociación razonable, que llevaron a cabo los representantes del monarca, permitió sofocar la rebelión. Aunque en la década de 1790 volvieron a producirse violentos enfrentamientos entre católicos y protestantes en el sur de Francia, la represión y la asimilación de los *camisards* alejó para siempre de Francia la amenaza de rebelión protestante.

La guerra, la fiscalidad y las situaciones revolucionarias

En Francia, el siglo XVI fue un período de rápido crecimiento demográfico, alza de precios, descenso de los salarios reales e incremento de las rentas, lo que benefició a los terratenientes y causó dificultades

a todo aquel que vivía de un salario, unos ingresos fijos o unos medios de producción de los que no era propietario. En esas condiciones, los rentistas, la Iglesia y la nobleza, prosperaron, el campesinado y la clase trabajadora vieron empeorar su situación y los ingresos del Estado —que dependían cada vez más de unos impuestos fijos que de unas rentas fluctuantes— eran cada vez más insuficientes para las empresas bélicas de la monarquía. Ello indujo a la corona a solicitar cuantiosos préstamos y a intentar decretar nuevos impuestos y mejorar la recaudación de los ya existentes. La población oponía resistencia cuando era sometida a una fiscalidad injusta o que desbordaba su capacidad. En el período comprendido entre 1514 y 1551 se produjeron diversas rebeliones por motivos fiscales en las ciudades de Agen, Burdeos, La Rochela, Saint Maixent, Salart, Niort, Saintes, Périgueux y Saint Foy y en las regiones de Comminges, Guyena, Delfinado, Auvernia, Velay y Agenais (Heller, 1991, pp. 42-44). Sólo la insurrección de Pitaud en la Guyena, en 1548, figura en nuestro catálogo de situaciones revolucionarias porque únicamente en ese caso estuvieron bajo control de los rebeldes durante más de un mes instrumentos importantes del poder del Estado (incluida la ciudad de Burdeos) (Le Roy Ladurie y Morineau, 1977, pp. 825-835). Pero también las otras rebeliones se cobraron millares de vidas. Sus causas eran las mismas, en esencia, que las de las situaciones más profundamente revolucionarias.

De entre las numerosas revueltas campesinas y urbanas del decenio de 1590, por ejemplo, la de los *croquants* se extendió por una gran parte del suroeste de Francia en 1594 y al año siguiente se manifestó nuevamente en el Périgord. Durante treinta años, los campesinos de esa región habían sufrido, además de las consecuencias habituales de la guerra —violaciones, pillaje, incendios y devastación de sus granjas—, el pago de tributos y rentas sumamente elevadas tanto a los protestantes como a los católicos. Durante aquellas guerras habían conseguido armas. Según la costumbre tradicional, se reunieron por parroquias, expusieron por escrito sus agravios, eligieron sus jefes militares y comenzaron a atacar a sus opresores. Se organizaron en cuerpos de ejército formados por millares de hombres que empezaron a ocupar ciudades y a atacar las propiedades de los nobles explotadores. El comisario real Boissize consiguió poner fin a la rebelión de 1594 cuando se unió con sus tropas a los grupos de *croquants* locales para sitiar con éxito el castillo de uno de los aristócratas. Luego convenció a los *croquants* para que regresaran a sus casas. También la rebelión del Périgord de 1595 concluyó con un acuerdo negociado y el abandono de las armas por parte de los campesinos.

Más claramente aún que las campañas militares que llevaban a cabo los ejércitos de los grandes aristócratas, las revueltas campesinas del siglo XVI adquirieron un ritmo estacional, pues las labores de la siembra y la cosecha impedían que hubiera recursos humanos disponibles para la lucha. Ello obligaba a los cabecillas de las bandas de campesinos a actuar con rapidez y obtener resultados. Así ocurría muchas veces: las rebeliones de 1594 y 1595 pusieron fin al cobro de tributos por parte de los agentes de los ejércitos locales y forzaron a la monarquía a abandonar la esperanza de volver a cobrar impuestos (Bercé, 1974, pp. 290-291).

Las rebeliones campesinas y urbanas no habían, ni mucho menos, terminado. La monarquía francesa redujo sus empresas militares en el exterior durante los tres primeros decenios del siglo XVII: algunos enfrentamientos de poca envergadura con Saboya por el marquesado de Saluzzo, intentos de poner fin a la actividad de los piratas del norte de África, maniobras para impedir el acceso de los españoles a Alemania y a los Países Bajos a través de los pasos montañosos que separan Italia y Suiza, y nuevas invasiones de las posesiones españolas en Italia, que condujeron a Luis XIII y Richelieu hacia la guerra de los Treinta Años. En 1634 ocuparon Lorena. Todo ello ocurría mientras las guerras civiles asolaban el país. Por ejemplo, en 1627 las fuerzas inglesas invadieron la isla de Ré y enviaron una flota en ayuda de los protestantes que defendían La Rochela contra el ataque de las tropas realistas.

La actividad bélica se aceleró realmente a partir de 1635, cuando Francia pasó a ser una de las grandes potencias beligerantes en la guerra de los Treinta Años. Esa mayor participación en los asuntos internacionales provocó un rápido incremento de los impuestos: según una estimación aproximada, el equivalente del salario de dos días per cápita y año hacia 1620, el salario de cuatro días en 1630, y de ocho a doce días en 1640 (Tilly, 1986, pp. 134-135). Aunque el aumento de los impuestos, por sí solo, no solía generar rebeliones, sin duda alentaba la evasión fiscal. La resistencia colectiva se manifestaba principalmente cuando las autoridades decretaban nuevos impuestos vul-

nerando acuerdos anteriores y cuando era evidente que algún personaje local se beneficiaba del nuevo impuesto. Desde luego, el hecho de que la carga impositiva per cápita se multiplicara por seis entre 1620 y el decenio de 1640 provocaba que ambas cosas sucedieran frecuentemente. Los representantes del rey imponían la venta forzosa de la sal (la *gabelle*), producto muy valorado, en regiones que ya habían pagado anteriormente por ello, suprimía exenciones municipales del impuesto de capitación, decretaba impuestos sobre nuevos productos, confiscaba bienes valiosos o encarcelaba a funcionarios locales por impago, mientras que el impuesto servía para devolver los préstamos que un arrendador de impuestos o un alto cargo habían hecho a la corona.

En esas circunstancias, la población local se agrupaba muchas veces para resistirse a pagar y atacar a los recaudadores. Cuando se aliaban muchas localidades o entraban en contacto a través de sus cabecillas comunes, se producían rebeliones regionales. Y cuando unían sus fuerzas con los enemigos más importantes de la corona, se llegaba al borde de la guerra civil. Las nuevas rebeliones de los *croquants* en 1629-1630, 1635-1636 y 1637-1641 en el suroeste de Francia ilustran perfectamente el proceso de agregación geográfica, pues en las ciudades y aldeas las asambleas locales, presa de la indignación, denunciaron la gabela de la sal, los rebeldes comenzaron a atacar a los recaudadores, sus casas y sus oficinas, y grupos de hombres procedentes de diversos lugares se unieron para formar ejércitos que atacaron los centros de recaudación de impuestos. En mayo de 1637, un ejército de 60 compañías campesinas bien organizadas, encabezado por aristócratas y por algunos representantes del pueblo llano, se reunió en las afueras de Bergerac y ocupó la ciudad durante veinte días en nombre de las comunas del Périgord. Aunque las bandas de campesinos controlaron la región durante todo ese tiempo, las tropas reales consiguieron dispersarlas en junio, no sin que se produjeran 2.000 muertos de ambos bandos (Bercé, 1974, pp. 426-430).

Desde los primeros años del decenio de 1620 hasta el comienzo de la década de 1650, prácticamente todos los años estallaba una insurrección armada —o varias— en alguna parte de Francia. En casi todos los casos, dichas rebeliones se ajustaban al modelo de la de los *croquants*, al de las rebeliones urbanas de protestantes presionados por la corona, o al de ambas a un tiempo. Las amenazas o exigencias de la monarquía alentaban la resistencia colectiva, las asambleas formulaban sus agravios, la población local atacaba a los representantes o beneficiarios de la política real, los intermediarios o patronos coordinaban las rebeliones locales, se formaban ejércitos de voluntarios locales (en ocasiones renuentes), esos ejércitos controlaban centros estratégicos, la corona enviaba tropas y plenipotenciarios, y a continuación se producía una combinación de enfrentamientos, negociación, huida y pacificación. La pacificación se producía por medios realmente brutales cuando la corona estaba en posición de clara ventaja y el número de nobles comprometidos en la revuelta no era excesivo, pero adoptaba la forma de una negociación sobre los impuestos cuando el control de la corona era incierto.

Guerra civil y represión

La Fronda (1648-1653) se produjo durante otra crisis de sucesión. Luis XIII murió en 1643, cuando su heredero Luis XIV tenía cinco años de edad. La viuda de Luis XIII, Ana de Austria, y el cardenal Mazarino se hicieron con el control del gobierno y continuaron la guerra con España, al tiempo que afrontaban otra serie de insurrecciones en el suroeste. Asimismo, exigieron al país nuevos impuestos para financiar la intensa actividad militar. En la Fronda la rebelión regional tradicional del siglo XVII se unió a un enfrentamiento titánico entre la nobleza y la corona por el poder dinástico. Los acontecimientos fueron realmente complicados:

1648 Después de que una reunión nacional de altos órganos judiciales intente imponer restricciones a la política fiscal de la monarquía, exigiendo la supresión de los intendentes provinciales, los campesinos confluyen en París para exigir reducciones de impuestos y estalla una insurrección en Pau. Mazarino encarcela a los cabecillas de los parlamentos pero luego los libera y concede las peticiones cuando se produce un levantamiento en París.

1649 Tras ordenar el exilio de los altos tribunales, Mazarino y la familia real huyen de París, pero el Parlamento de París asume el control de la ciudad. En París y en otros lugares se producen amplios movimientos de apoyo a los parlamentos, pero el

bloqueo de la capital por parte de Condé obliga a realizar concesiones, entre ellas el retorno de la familia real.

1650 Condé y sus aliados intentan forzar la salida de Mazarino, pero la reina ordena su encarcelamiento. Los seguidores de Condé en las provincias organizan, entonces, un amplio movimiento de resistencia, al que se suma la resistencia popular en Burdeos y en otros lugares, pero las fuerzas realistas los sofocan. Los rentistas de París comienzan a exigir tumultuosamente el pago de sus rentas.

1651 Los príncipes y los parlamentos consiguen forzar la marcha de Mazarino, lo cual permite la liberación de Condé. A pesar de las defecciones en las filas de los oponentes de la corona, continúan los enfrentamientos de la población con tropas de la monarquía y Condé se dedica a organizar las fuerzas de las provincias. A finales del año, Mazarino retorna con sus propias tropas.

1652 Condé marcha sobre París y ocupa la ciudad, mientras una insurrección popular (*Ormée*) controla Burdeos. Sin embargo, París se divide entre partidarios y enemigos de Mazarino, que fuerzan nuevamente su marcha. Condé comienza a encontrar cada vez más resistencia y finalmente abandona Francia, lo cual permite la liberación del rey y de la reina madre, que regresan e inician la represión de los frondistas.

1653 Mazarino regresa a París, la *Ormée* pierde el control de Burdeos y continúa la represión de los insurgentes.

Durante cinco años, y de forma casi permanente, el control del Estado francés estuvo en manos de al menos dos bloques. La Fronda fue una situación profundamente revolucionaria. Sin embargo, la salida de la crisis en 1653 fue un resultado escasamente revolucionario: un sector importante de la alta aristocracia y de la oligarquía municipal, que antes disponía de extraordinarias cuotas de poder y autonomía, se vieron sometidos a un control mucho más férreo por parte del Estado. La Fronda compartió algunos rasgos con las revoluciones contemporáneas de los Países Bajos y de los Balcanes, pues en los tres casos una serie de protagonistas activos de la estructura vigente del Estado convirtieron sus maniobras habituales para conseguir poder y privilegios en un desafío abierto a la corona, siempre, por supuesto, afirmando defender al monarca frente a unos consejeros ineptos o maliciosos. La principal diferencia radica en que en Francia el poder central salió extraordinariamente reforzado de la crisis.

La represión de los frondistas y la restauración subsiguiente de la autoridad real tuvo profundas repercusiones por lo que respecta a las oportunidades revolucionarias posteriores. En el período comprendido entre el final de la rebelión de la Fronda en 1653 y los conflictos inmediatamente anteriores a la revolución de 1789, las únicas situaciones revolucionarias que se produjeron en Francia fueron los conflictos religiosos, que ya se han examinado, y una serie de rebeliones regionales contra nuevos impuestos o contra la abolición de privilegios fiscales: las rebeliones de los *tardanizats*, *sabotiers*, Bénauge, Lustucru, Audijos, *angelets*, Papier Timbré, *bonnets rouges* o Torrében (véase el cuadro 5.4 para las fechas y lugares, Tilly, 1986, pp. 145-159 para un resumen de esos acontecimientos). Aunque en dichas rebeliones varió el grado de antagonismo con respecto a la nobleza y burguesía locales, en general recuerdan a las insurrecciones anteriores de los *croquants*, en la medida en que comunidades enteras se levantaron contra las exigencias de la monarquía de nuevos impuestos, derivadas de la guerra. Sin embargo, se distinguieron de esas rebeliones anteriores porque no suscitaron el apoyo de los grandes señores y tuvieron incluso enormes dificultades para encontrar pequeños nobles que pudieran dirigir sus ejércitos. La nobleza ya no apoyaba la revolución popular. No volvieron a producirse revoluciones dinásticas una vez derrotada la Fronda, última gran conmoción de este tipo.

¿Cómo ocurrió eso? En esencia, la corona subyugó a sus enemigos potenciales más poderosos y asimiló al resto. La destrucción de los castillos fortificados, la disolución de los ejércitos privados, la abolición de las milicias urbanas, la persecución del duelo, la construcción de Versalles, donde los grandes nobles se sentían obligados a reunirse fuera de París, y la creación de un ejército permanente más profesionalizado sirvieron para subordinar a la administración real a cuantos podían alzarse en armas contra la corona. La generalización de la figura de los intendentes en todas las grandes provincias (tanto en los *pays d'État* como en los *pays d'Élection*) cercenó la autonomía de los gobernadores militares que tan frecuentemente habían actuado como patronos y conspiradores antes de la Fronda. De hecho, el fortalecimiento de la administración regional con Mazarino y Colbert hizo progresar a Francia por el camino del gobierno directo. En el período comprendido entre finales del siglo XVII y el estalli-

do de la revolución, incluso las élites rurales se entendían regularmente con los funcionarios reales, tales como los subdelegados, que extendieron la vigilancia del intendente a todo el país.

Un Estado consolidado

Ante la presencia espectral de la revolución a finales del siglo XVIII, resulta difícil escapar a la teleología al considerar el período transcurrido desde la Fronda hasta 1780. El hundimiento espectacular del Estado en 1789 induce a todo historiador a examinar sus cimientos para encontrar en ellos algunas grietas en 1700 o 1750. Sin embargo, cuando se dirige la mirada hacia adelante a partir de esas fechas, hasta el decenio de 1780 sólo se aprecia una expansión continuada de la economía y del Estado. En el siglo XVIII, Francia contaba con una población importante, relativamente acomodada, y una economía muy comercializada. Incluso después de haber sufrido pérdidas coloniales importantes —de las que Quebec fue una de las más notables— en la guerra de los Siete Años, continuó teniendo una presencia importante en el comercio de esclavos y beneficiándose del comercio del azúcar que obtenía de sus posesiones en el Caribe. Los productos textiles de Francia llegaban a todas partes del mundo y al mismo tiempo sus ejércitos y sus flotas proseguían sus conquistas en Europa y en ultramar.

Francia vivió en guerra durante 86 de los 134 años transcurridos desde el final de la Fronda hasta los conflictos de 1787, es decir, dos de cada tres años. Durante esos trece decenios estuvo inmersa en una serie de guerras bilaterales con España, Inglaterra, la República de Holanda y Portugal, y participó también en otras conflagraciones bélicas más generales, como la guerra de Devolución, la guerra de la Liga de Augsburgo, la guerra de Sucesión española, la guerra de Sucesión polaca, la guerra de los Siete Años y la guerra de Independencia norteamericana. En conjunto, el Estado salió fortalecido de esos conflictos bélicos, tanto en la esfera del poder fiscal como del poder administrativo.

Si tratáramos de encontrar, en 1750, las cuestiones susceptibles de provocar tumultos revolucionarios, habría que centrar la atención en la forma en que el Estado recaudaba sus ingresos. Una y otra vez, la corona obtenía nuevos ingresos para sus actividades bélicas forzando a un individuo o a un grupo acomodados a entregar fuertes sumas al Estado a cambio de un privilegio, para luego comprometerse a hacer respetar dicho privilegio. Frecuentemente, se trataba de un privilegio en vigor desde hacía mucho tiempo que la corona revocaba o amenazaba deliberadamente con revocar. Por ejemplo, los nobles pagaban por ver confirmada su nobleza y los municipios entregaban diversas sumas para impedir la creación de nuevos cargos cuya jurisdicción rivalizaba con la de las magistraturas municipales.

El arrendamiento de los impuestos encajaba perfectamente en el sistema, pues las arcas reales recibían adelantos sustanciales de aquellos a quienes la monarquía contrataba para recaudar un nuevo impuesto, pero en muchos casos los ejércitos monárquicos tenían que defender al arrendatario de los indignados ciudadanos. Otro procedimiento habitual era la venta de cargos, que permitía obtener grandes sumas en efectivo con gran rapidez y que inducía a los hombres acomodados a sentirse interesados en el fortalecimiento del Estado, pero también exigía que éste asegurara el pago de los magistrados y les garantizara el monopolio de las actividades judiciales o administrativas más remuneradoras. Otro expediente al que recurría la corona era la concesión, a cambio de dinero, de privilegios gremiales o municipales, pues el gremio o el municipio recurría a un empréstito para pagar la suma exigida por el Estado y luego intensificaba su monopolio para poder hacer frente a la deuda contraída y recurría a los ejércitos monárquicos para que defendieran ese monopolio. Además, cada vez que el Estado obtenía fondos mediante alguno de esos procedimientos, creaba un nuevo círculo de privilegiados a los que luego sería más difícil extraer nuevas sumas. Esos expedientes suponían también que los principales acreedores del Estado ocupaban importantes cargos semiautónomos, tenían acceso a una completa información sobre las finanzas del Estado y, en consecuencia, estaban en condiciones de obstaculizar seriamente las reformas de la política estatal.

Como esta forma de recaudación de ingresos ponía incluso los derechos de aduana y los impuestos sobre el consumo en manos de poderosos clientes del Estado, ponía límites estrictos a la capacidad de este último para obtener nuevos ingresos, entre ellos los que necesitaba para satisfacer las deudas en las que incurría durante las grandes contiendas bélicas. Los esfuerzos realizados por la monarquía para

liquidar las cuantiosas deudas adquiridas durante la guerra de los Siete Años y, especialmente, durante la guerra de Independencia norteamericana, suscitaron graves enfrentamientos con las más importantes instituciones francesas, en particular con los parlamentos, que sólo parecían dispuestos a colaborar en la reorganización fiscal si veían ampliada su influencia en la política financiera. Esos enfrentamientos indujeron una y otra vez a los monarcas a intentar prescindir de los grandes tribunales, exiliando a los parlamentos, intentando gobernar por decreto, luego mediante la creación de asambleas regionales, en 1787, y finalmente convocando los Estados Generales de 1789. De los Estados Generales nació la Asamblea Nacional, cuya misma creación constituyó un reto revolucionario para la corona.

A raíz de la guerra de los Siete Años (1756-1763), el Parlamento de París acentuó su oposición a la exacción de impuestos por la monarquía, valiéndose del derecho de aceptar o rechazar los decretos. Luis XV y Luis XVI reaccionaron suspendiendo o (más frecuentemente) exiliando al Parlamento de la capital y a sus homónimos provinciales de su sede habitual. Las espectaculares pérdidas coloniales de Francia en la guerra —pérdida no sólo de Quebec sino también de Senegal, San Vicente, Dominica, Granada y Tobago— desacreditaron al Estado. Como corolario de la guerra, los parlamentos consiguieron expulsar de Francia a sus inveterados enemigos, los jesuitas. Sin embargo, los enfrentamientos continuaron. En 1771, por ejemplo, el ministro de la monarquía Maupeou y el inspector general Terray intentaron reorganizar las finanzas mediante una serie de iniciativas, entre ellas el exilio de diversos *parlementaires*, la abolición de sus cargos venales y la suplantación del Parlamento de París por una serie de nuevas jurisdicciones que estarían bajo el control directo del monarca. Durante cuatro años, fueron cumpliéndose los planes de los colaboradores del rey, pero la muerte de Luis XV dio a los parlamentos la posibilidad de recuperarse. En el período comprendido entre 1776 y 1789 fueron un importante bastión de la oposición a la política monárquica. La participación de Francia en el triunfo de los rebeldes norteamericanos sobre Gran Bretaña en 1776-1783, que permitió a los franceses recuperar Saint Pierre, Miquelon, Senegal, Tobago y Santa Lucía, no sirvió en modo alguno para atemperar la oposición. Bien al contrario, la crisis financiera que provocó significó el derrumbamiento del régimen.

La coalición nacional no dejaba de tener ciertos rasgos irónicos. Los parlamentos, que eran un reducto de privilegios aristocráticos y que compraban cargos a la monarquía, se aliaron con el campesinado y la burguesía que luchaban contra los gastos, la arbitrariedad y la corrupción del gobierno. Lo que es más, tan extraña alianza contó con un importante apoyo de la aristocracia y del alto clero, cuyos numerosos privilegios comenzaban a verse amenazados como consecuencia de la presión fiscal del Estado. Entre 1787 y 1789, esa coalición colocó a Francia al borde de una situación revolucionaria. Que se considere o no como una situación plenamente revolucionaria depende de si se cree que ese bloqueo del poder del Estado para imponer nuevos impuestos constituyó una soberanía dual. Probablemente no fue así.

Aunque los parlamentos no consiguieron en ningún momento establecer una administración alternativa, desafiaron constantemente al poder real, obteniendo un importante apoyo popular. La corona respondió creando asambleas provinciales y administraciones relacionadas (*commissions intermédiaires*) en los *pays d'Élection*, pero esas nuevas instituciones nunca consiguieron implantarse entre las elites y el pueblo llano como para poder ser vehículos eficaces que permitieran a la monarquía obtener ingresos suficientes ya fuera mediante la imposición o los empréstitos. El propio partido monárquico se dividió en dos facciones, entre los partidarios y los enemigos del protestante suizo Necker, el supuesto genio financiero cuya política provocó el aumento de la deuda durante las guerras norteamericanas mientras hacía pensar a la opinión pública que era un auténtico maestro en el arte de la buena administración. De hecho, la principal contribución de Necker fue que comenzó la difícil lucha contra la gran autonomía de los financieros de Francia y en favor de la creación de una serie de funcionarios financieros controlados por la corona. Fueron los financieros y sus aliados los que forzaron la marcha de Necker. En la década de 1780, una serie ininterrumpida de ministros intentó organizar las finanzas reales y mantener la actividad del gobierno, mientras eran cada vez más los que pedían el regreso de Necker. Entretanto, los parlamentos se oponían a todos los intentos de la monarquía de establecer un sistema fiscal más eficaz.

En mayo de 1788, el gobierno intentó un nuevo asalto contra los parlamentos: ordenó la detención de dos cabecillas de la resistencia, suspendió todos los parlamentos y creó de nuevo varios tribunales que

los sustituyeran. Una asamblea general del clero (al que también se habían solicitado subsidios para la corona) manifestó su solidaridad con los parlamentos y también la aristocracia (consciente de que peligraban sus propios privilegios fiscales) se opuso en general a la política real. El Parlamento de Toulouse ordenó el encarcelamiento del intendente y estallaron insurrecciones populares contra los funcionarios reales en Bretaña y el Delfinado. En el Delfinado, la nobleza y los representantes de las ciudades llegaron incluso a reunir los estados provinciales sin que hubieran sido convocados por el rey y grupos de montañeses descendieron hacia Grenoble para proteger al Parlamento frente a la monarquía. Durante el otoño, se produjeron numerosas confiscaciones de trigo, por primera vez en varios años.

Mientras cundía la agitación en una gran parte de Francia, se formó una poderosa coalición que pedía insistentemente la convocatoria de los Estados Generales para solucionar los problemas del reino. En agosto de 1788, el rey capituló ante esa exigencia, destituyó a dos primeros ministros, uno tras otro, y llamó de nuevo al poder a Necker, el hombre capaz de obrar milagros. Los parlamentos volvieron de nuevo a las sedes de sus ciudades y todas las entidades políticas de Francia comenzaron a preparar las elecciones para los Estados Generales. La aceptación por parte de Necker de la petición del Tercer Estado de que se doblara su representación en los Estados Generales, en los que se reunían los tres estamentos, aseguró una representación importante a la burguesía regional de Francia e inició la división entre el pueblo llano y la aristocracia que indujo a una gran parte de esta última, incluidos los parlamentos, a apoyar de nuevo al monarca.

Procesos revolucionarios

Cabe preguntarse si cuando se produjo la situación revolucionaria se formó una coalición alternativa que ejercía los poderes del Estado. Se podría situar el inicio de la revolución en el momento de la reunión de los Estados Generales (5 de mayo de 1789), pero eso sólo es posible por nuestro conocimiento retrospectivo de la trayectoria que seguirían los Estados Generales. El acuerdo del Tercer Estado de erigirse en Asamblea Nacional (17 de junio) sería tal vez una fecha más exacta, así como el momento de la decisión de los otros estamentos

de unirse al Tercer Estado (27 de junio). Cuando el rey destituyó de nuevo a Necker (11 de julio) no sólo se produjeron múltiples manifestaciones populares contra el régimen sino también el paso de una parte de las tropas reales a la oposición. En el momento de la toma de la Bastilla (14 de julio), Francia estaba, sin ninguna duda, dividida en dos. En algún momento, entre el 5 de mayo y el 14 de julio de 1789, se inició una de las situaciones revolucionarias más profundas de la historia.

Pero ¿cuándo llegó a su fin? No es esta una pregunta de fácil respuesta, pues exige decidir si la importante emigración que se inició en la primavera de 1789 situó a un sector significativo de la nación francesa fuera del territorio nacional y, asimismo, dar validez a una serie de gobiernos revolucionarios. Si se toma como punto de referencia la división evidente entre bloques opuestos, cada uno de los cuales habría ejercido el poder del Estado, al menos a nivel provincial, durante un período mínimo de un mes, el calendario de situaciones revolucionarias podría ser el siguiente:

Mayo de 1789-julio de 1789	La corona contra el Tercer Estado
Junio de 1792-enero de 1793	La corona contra el régimen revolucionario
Marzo de 1793-diciembre de 1793	Rebelión de la Vendée; la Montaña contra la Gironda, federalistas
Agosto de 1799-noviembre de 1799	El Directorio contra los realistas y contra Bonaparte

En cada uno de dichos períodos, Francia no conoció una sola situación revolucionaria, sino una sucesión de ellas, a medida que cambiaba quien ejercía el control del aparato central, se modificaban las coaliciones entre sus oponentes, variaban los segmentos del poder del Estado controlados por la oposición y fluctuaba el apoyo popular a las diferentes facciones enfrentadas. En los períodos de tiempo intermedios entre esas fechas, asistimos a la formación de coaliciones inseguras de gobierno y al estallido de frecuentes rebeliones, pero sin que se forme una coalición alternativa viable y, por tanto, una situación revolucionaria. Como en cada uno de los períodos mencionados

se produjo una transferencia sustancial de poder, aplicando de forma estricta las definiciones que hemos establecido, habría que concluir que Francia conoció cuatro revoluciones entre 1789 y 1799. Sin embargo, según un criterio menos estricto, se podría considerar todo el período de tiempo transcurrido entre el recrudecimiento de la oposición parlamentaria en 1787 y el derrocamiento del Directorio a manos de Napoleón en 1799 como una única y prolongada situación revolucionaria. En la cronología se ha seguido un criterio intermedio, aceptando el intervalo convencional de 1789 a 1799.

Todos estos enfrentamientos produjeron numerosas conmociones revolucionarias. Recordemos la situación de Francia al inicio de los procesos revolucionarios: como otros estados europeos, el Estado francés del siglo XVIII sólo ejercía un control directo a nivel de la región, el nivel de la *subdélegation*, *élection*, *sénéchaussée*, *grenier à sel* y unidades administrativas similares. En ese y en los niveles inferiores, el Estado del Antiguo Régimen gobernaba de manera indirecta, especialmente por mediación del clero, la nobleza y las oligarquías urbanas. Durante el siglo XVIII, los funcionarios del Estado, en el intento de obtener fondos con que hacer frente a la actividad militar del pasado, el presente y el futuro, comenzaron a intentar ampliar el control directo de la monarquía para cercenar los privilegios y la resistencia de los intermediarios recalcitrantes.

Durante la revolución, los nuevos dirigentes del Estado, en su enfrentamiento con los viejos intermediarios para hacerse con el control de los ingresos, de la lealtad y del poder militar en los niveles local y regional, improvisaron diferentes sistemas de gobierno directo en el que a los capitalistas, definidos en un sentido amplio, les correspondió el papel fundamental. La creación de una jerarquía administrativa alteró profundamente la relación entre coerción y capital, desencadenando una nueva serie de enfrentamientos por el poder en casi todas las regiones de Francia. Los intentos revolucionarios de instaurar el gobierno directo y desplazar a los antiguos intermediarios suscitó un movimiento de resistencia generalizada, que adoptó la forma de una contrarrevolución abierta allí donde los intermediarios contaban con un apoyo importante y donde la red nacional de capitalistas sólo se había implantado débilmente.

La transformación del sistema de gobierno

¿Qué decir acerca del sistema de gobierno de Francia durante los años revolucionarios? Hasta 1789, el Estado francés, como la mayor parte de los estados, gobernaba de manera indirecta en la esfera local, recayendo la labor de mediación en el clero y la aristocracia. Desde que terminara la guerra norteamericana, los intentos del gobierno de recaudar fondos para hacer frente a las deudas de guerra hicieron cristalizar una coalición antigubernamental, que en un principio estaba integrada por los parlamentos y otras magistraturas, pero que adquirió un tono más popular a medida que fue agudizándose el enfrentamiento entre el régimen y sus oponentes. La vulnerabilidad evidente del Estado en 1788-1789 indujo a todos los grupos animados de alguna reivindicación o algún agravio contra el Estado, sus representantes o sus aliados, a articular sus exigencias y unirse a otros grupos para pedir un cambio. Las insurrecciones rurales —la *Grande Peur*, las confiscaciones de cereales, las rebeliones fiscales, los asaltos contra la nobleza, etc.— de la primavera y el verano de 1789 se produjeron en su gran mayoría en regiones donde existían grandes ciudades, una agricultura comercializada, vías fluviales navegables y una buena red de caminos (Markoff, 1985). La geografía de la rebelión refleja que era la burguesía la que llevaba la voz cantante en ese ajuste de cuentas.

Al mismo tiempo, aquellos grupos cuya supervivencia en la escala social dependía más directamente del Estado del Antiguo Régimen —la nobleza, los magistrados y el alto clero son los ejemplos más obvios— se alinearon por lo general al lado del monarca (Dawson, 1972, cap. 8). Comenzó a tomar forma, pues, una situación revolucionaria: dos bloques distintos reclamaban el poder y ambos contaban con el apoyo de una parte importante de la población. Gracias a que una parte del ejército abandonó a la corona y a que se formaron milicias afectas a la causa popular, la oposición consiguió su propia fuerza armada. El bloque popular, consolidado y, a menudo, dirigido por miembros de la burguesía, comenzó a adquirir el control de algunos sectores del aparato del Estado.

Los juristas, funcionarios y otros miembros de la burguesía que se apoderaron del aparato del Estado en 1789-1790 desplazaron sin tardanza a los antiguos intermediarios: aristócratas, funcionarios señoriales, magistrados venales, el clero y, en ocasiones, también las oli-

garquías municipales. En el plano local, la llamada revolución municipal promovió una amplia transferencia de poder a los enemigos de los viejos poderes. Las coaliciones de patriotas que encontraban expresión en las milicias, los clubes y comités revolucionarios y que estaban vinculadas a los activistas parisienses desplazaron al viejo poder municipal. Incluso cuando los magistrados consiguieron sobrevivir a los primeros tumultos revolucionarios, las relaciones entre cada localidad y la capital nacional sufrieron una profunda alteración. Por ejemplo, las «repúblicas» aldeanas de los Alpes vieron desaparecer sus antiguas libertades —especialmente la libre aceptación de los impuestos— cuando fueron obligadas a integrarse en la nueva maquinaria administrativa (Rosenberg, 1988, pp. 72-89). Los revolucionarios de París afrontaron entonces el problema de gobernar sin intermediarios. Intentaron hacerlo con los comités y las milicias que se habían formado en el curso de la movilización de 1789, pero les resultó difícil controlarlas desde el centro. Más o menos en el mismo momento remodelaron el mapa francés, instaurando un sistema de departamentos, distritos, cantones y comunas, mientras enviaban *représentants en mission* para profundizar la reorganización revolucionaria. Así establecieron el sistema de gobierno directo.

Además, dada la desigual distribución espacial de las ciudades, los comerciantes y el capital, la imposición de un marco geográfico uniforme alteró las relaciones entre el poder económico y político de las ciudades, situando, por ejemplo, a los insignificantes centros urbanos de Mende y Niort en el mismo plano administrativo que las poderosas Lyon y Burdeos. En la Francia del Antiguo Régimen, entre las ciudades cuyo rango comercial excedía a su importancia administrativa figuraban, por ejemplo, Nimes, Saint-Étienne, Roubaix y Castres; entre las que detentaban una posición administrativa muy superior a su importancia comercial, hay que mencionar Tulle, Saint-Amand-en-Berry, Saint-Flour y Soissons (Lepetit, 1988, pp. 167-168).

La revolución reordenó esa relación. De entre las capitales de los ochenta y seis *départements* originales, cincuenta y cuatro eran, sin ninguna duda, las ciudades dominantes en sus nuevas jurisdicciones, tres se situaron, gracias a su tamaño, por encima de otras que durante el Antiguo Régimen ocupaban un lugar más elevado en la jerarquía administrativa y fiscal, seis mantuvieron su prioridad administrativa a pesar de su tamaño más reducido, doce alcanzaron el rango de capitales pese a no ser las ciudades más grandes ni las de mayor importancia de sus regiones y diez estaban demasiado cerca para contar (Lepetit, 1988, pp. 203-204). Las ciudades de mayor tamaño a las que no se dio la categoría de capitales de departamento se agrupaban de forma desproporcionada en el norte de Francia, mientras que las ciudades portuarias del Atlántico y el Mediterráneo también ocuparon un lugar más alto del que les correspondía (Lepetit, 1988, p. 208). Sin embargo, las grandes discrepancias no aparecieron a nivel local, sino en forma de desigualdades entre las ochenta y seis capitales, ahora todas ellas, al menos nominalmente, en una relación administrativa idéntica con respecto a la capital de la nación.

La consecuencia fue una profunda modificación del equilibrio de fuerzas en las capitales regionales. En los grandes centros comerciales, donde ya eran numerosos los comerciantes, abogados y profesionales, los funcionarios de los departamentos (que frecuentemente procedían del mismo medio) no tenían más remedio que negociar con los funcionarios locales. En aquellas regiones rurales poco desarrolladas desde el punto de vista comercial en las que la Asamblea Nacional creó departamentos, los revolucionarios eclipsaron a otros sectores de las nuevas capitales y amenazaron con utilizar la fuerza si se mostraban recalcitrantes. Pero en esas regiones no contaban con la alianza de la burguesía que en otros lugares ayudaba a sus correligionarios a imponer los designios revolucionarios y tenían que hacer frente a los antiguos intermediarios, que todavía gozaban de apoyos importantes. El movimiento federalista, que se oponía al centralismo jacobino y exigía autonomía regional, arraigó especialmente en las capitales de aquellos departamentos cuya importancia comercial era muy superior al rango que ocupaban en la jerarquía administrativa. Burdeos, Marsella y Lyon son los ejemplos más destacados en este sentido. Para afrontar esos obstáculos al ejercicio directo de la autoridad, los revolucionarios parisienses improvisaron tres sistemas de gobierno paralelos y, en ocasiones, antagónicos: 1) los comités y las milicias; 2) una jerarquía definida según criterios geográficos de funcionarios y representantes elegidos; 3) comisarios itinerantes del gobierno central. En los tres casos, para hacer acopio de información y conseguir apoyo, era necesario recurrir a la estructura existente que formaban los abogados, profesionales y comerciantes.

El contraste entre las experiencias revolucionarias de Caen (un cen-

tro mercantil bajo el Antiguo Régimen) y Limoges (centro administrativo de la monarquía) ilustra perfectamente el problema:

> En Limoges, el conflicto social fundamental se produjo en el ámbito político, perturbando y dividiendo la administración municipal de 1791-1792. El violento enfrentamiento entre los Amis de la Paix y el club jacobino afectó al gobierno municipal. Los jacobinos no sólo consiguieron que su club ocupara una posición predominante en Limoges, sino que en 1792 se hicieron con el control del poder municipal. En Caen, el conflicto fundamental enfrentó a la burguesía mercantil acomodada con la nobleza, un sector que estaba en trance de ser excluido de la vida política. Las más de las veces, este conflicto se suscitó fuera del ámbito de la política organizada y apenas influyó en ella. La *haute-bourgeoisie* continuó desempeñando los cargos políticos hasta después de la insurrección federalista (Hanson, 1989, p. 69).

Cuando el sistema comenzó a funcionar, los dirigentes revolucionarios se preocuparon de implantar su control y de impedir la actuación incontrolada de elementos locales enfervorizados, que a menudo se resistían. Gradualmente, e intentando en unos casos la asimilación y en otros la represión, prescindieron de los comités y las milicias. La movilización para la guerra significó una mayor presión sobre el sistema, suscitó nuevas resistencias y avivó el interés de los líderes nacionales en imponer un estricto sistema de control. Desde 1792, la administración central (que continuaba prácticamente en la misma situación que durante el Antiguo Régimen) experimentó su propia revolución: aumentó extraordinariamente el personal que la componía y tomó forma una verdadera burocracia jerárquica. Los revolucionarios establecieron, así, uno de los primeros sistemas de gobierno directo que veía la luz en un Estado de grandes dimensiones.

Esta transformación exigió una serie de cambios en los sistemas tributario, de administración de justicia, de obras públicas, etc. Analicemos, por ejemplo, el caso de la organización policial. El Estado del Antiguo Régimen no contaba apenas, fuera de París, con una fuerza de policía especializada. Enviaba a la *maréchaussée* para perseguir a los evasores fiscales, los vagabundos y otros elementos que violaban la voluntad real, y ocasionalmente autorizaba al ejército a ejercer una acción represora sobre algunos súbditos rebeldes. Por lo demás, delegaba en las autoridades locales y regionales cualquier actuación represora contra la población civil. Pues bien, los revolucionarios modificaron esta situación. Con respecto a la población común, sustituyeron la acción represora por una política de prevención y acopio de información: en lugar de esperar a que se produjera una rebelión o una violación colectiva de la ley, para luego responder con contundencia pero de forma selectiva, comenzaron a destacar agentes policiales cuya responsabilidad consistía en prevenir toda acción popular colectiva potencialmente peligrosa. Durante los primeros años de la revolución, las fuerzas de policía del Antiguo Régimen se disolvieron y fueron los comités populares, la guardia nacional y los tribunales revolucionarios los que se responsabilizaron de las acciones policiales cotidianas. Pero tras la proclamación del Directorio, el Estado concentró las tareas de vigilancia y detención en una única organización centralizada. En el año VII (1799), Fouché, que procedía de Nantes, fue nombrado ministro de Policía, lo que le otorgó la responsabilidad de un ministerio cuyo poder se extendía por toda Francia y sus territorios conquistados. En la época de Fouché, Francia era uno de los países con un aparato policial más perfeccionado del mundo.

El estallido de la guerra aceleró el paso del sistema indirecto al sistema directo de gobierno. Prácticamente todos los estados que entran en guerra se ven en la imposibilidad de financiarla con las reservas acumuladas y los ingresos corrientes, y han de solicitar cuantiosos préstamos, elevar los impuestos y obtener los medios necesarios para la lucha —incluidos los hombres— recurriendo a unos ciudadanos poco entusiastas que prefieren dedicar sus recursos a otros fines. La Francia prerrevolucionaria se ajustó a estas pautas, hasta el punto de acumular deudas que finalmente forzaron la convocatoria de los Estados Generales. Pero tampoco la revolución se apartó de ese esquema: una vez que Francia declaró la guerra a Austria en 1792, las exigencias del Estado en forma de fondos y recursos humanos provocaron una resistencia tan enérgica como en el Antiguo Régimen. Para superar esa resistencia, los revolucionarios crearon nuevos controles centralizados.

Resistencia, contrarrevolución y terror

La resistencia y la contrarrevolución fueron consecuencia directa del proceso por el que el nuevo Estado estableció el gobierno directo. No puede olvidarse que los revolucionarios introdujeron un gran número

de cambios en un período de tiempo muy corto. Eliminaron todas las jurisdicciones territoriales anteriores, consolidaron numerosas antiguas parroquias en comunas más extensas, abolieron el diezmo y los derechos feudales, disolvieron corporaciones y eliminaron sus privilegios, construyeron un sistema administrativo y electoral de arriba abajo, decretaron impuestos más cuantiosos y regulares mediante ese sistema, confiscaron las propiedades de los nobles emigrados y de la Iglesia, disolvieron órdenes monásticas, sometieron al clero al control del Estado, obligándole además a prestar juramento de fidelidad a la nueva Iglesia estatal, incrementaron enormemente el reclutamiento obligatorio y desplazaron tanto a los nobles como a los eclesiásticos del ejercicio automático del liderazgo en la vida local. Todo ello ocurrió entre 1789 y 1793.

Los regímenes subsiguientes añadieron otros cambios efímeros, como el calendario revolucionario y el culto al Ser Supremo, pero la transformación del Estado que se llevó a cabo en las primeras etapas de la revolución perduró en el siglo XIX y sirvió de modelo para muchos otros estados europeos. Los principales retrocesos fueron la disolución de las milicias y comités revolucionarios locales, la restauración o compensación de algunas propiedades confiscadas y el concordato firmado por Napoleón con la Iglesia católica. Pero en conjunto, todos estos cambios significaron la sustitución drástica y acelerada de un sistema de gobierno en el que los notables locales y regionales actuaban de intermediarios por el gobierno directo, uniforme y centralizado. Por otra parte, la jerarquía del nuevo Estado estaba integrada, en su mayor parte, por abogados, médicos, notarios, comerciantes y otros representantes de la burguesía.

Estas transformaciones fundamentales se produjeron en detrimento de muchos grupos de intereses pero, al mismo tiempo, ofrecieron nuevas oportunidades a determinados grupos que hasta entonces apenas habían tenido acceso al poder sancionado por el Estado, especialmente a la burguesía de los pueblos y de las pequeñas ciudades. Por ello, suscitaron movimientos de resistencia y conflictos por el poder. Artois (el departamento del Pas-de-Calais) vivió una versión moderada de la transición (Jessenne, 1987). En esa región, la política local estaba dominada por grandes arrendatarios, aunque dentro de los límites establecidos por sus señores nobles y eclesiásticos. La revolución, al acabar con los privilegios de esos patronos, amenazó el poder de los

arrendatarios. Sin embargo, superaron el desafío, si no como clase como un conjunto particular de individuos: muchos magistrados perdieron sus puestos durante las luchas de las primeras etapas de la revolución, especialmente cuando la comunidad estaba ya enfrentada con su señor. Sin embargo, sus sustitutos pertenecían en casi todos los casos a la misma clase de arrendatarios acomodados. La lucha de los trabajadores asalariados y de los pequeños propietarios contra los *coqs de village*, de los que habla Georges Lefebvre al referirse a la zona contigua del norte, fue menos intensa, o menos eficaz, en el Pas-de-Calais. Aunque los grandes terratenientes, que inspiraban a las autoridades una cierta desconfianza, perdieron en parte su control sobre los cargos públicos durante el Terror y durante el Directorio, lo recuperaron posteriormente y continuaron aupados en una posición dominante hasta mediados del siglo XIX. Para entonces, la nobleza y el clero habían perdido una gran parte de su capacidad de controlar a los magistrados locales, pero los industriales, comerciantes y otros capitalistas habían ocupado su lugar. El desplazamiento de los viejos intermediarios abrió el camino a una nueva alianza entre los grandes terratenientes y la burguesía.

Bajo el impulso de París, la transición hacia el gobierno directo se deslizó con cierta tranquilidad en Artois. En otros lugares, el cambio estuvo acompañado de intensos enfrentamientos. La trayectoria de Claude Javogues, agente de la revolución en su departamento natal del Loira, pone de relieve ese enfrentamiento y el proceso político que lo suscitó (Lucas, 1973). Javogues era un individuo robusto, virulento y bebedor, emparentado con abogados, notarios y comerciantes de Forez, una región situada al oeste de Lyon. La familia siguió una trayectoria ascendente en el siglo XVIII y en 1789 Claude, que tenía entonces treinta años, era *avocat* en Montbrison y estaba bien relacionado. La Convención envió al Loira a este furibundo burgués en julio de 1793 y lo reclamó en febrero de 1794. Durante esos seis meses, Javogues se apoyó plenamente en sus relaciones, se centró en la represión de los enemigos de la revolución, actuó en gran medida siguiendo el principio de que los sacerdotes, los nobles y los ricos terratenientes eran sus enemigos, descuidó completamente cuestiones administrativas tales como la organización del suministro de alimentos y dejó tras de sí una reputación de arbitrariedad y crueldad.

Sin embargo, Javogues y sus colaboradores reorganizaron la vida local. Cuando estudiamos su trayectoria en el Loira, encontramos clubes, comités de vigilancia, ejércitos revolucionarios, comisarios, tribunales y *représentants en mission*. Contemplamos un intento casi increíble de ampliar el control administrativo directo del gobierno central a la vida cotidiana individual. Reconocemos la importancia de la movilización popular contra los enemigos de la revolución —reales o imaginarios—, como una fuerza que desplazó a los antiguos intermediarios. Ello nos permite advertir el conflicto entre dos objetivos del Terror: la extirpación de los enemigos de la revolución y la forja de nuevos instrumentos para llevar adelante la obra revolucionaria. Descubrimos nuevamente la gran importancia del control sobre los alimentos como un desafío administrativo, como un punto de enfrentamiento político y como un incentivo para la acción popular.

Frente a la imagen tradicional de un pueblo unido que acogió enfervorizado la tan esperada reforma, la trayectoria histórica local de la revolución permite apreciar con claridad que los revolucionarios franceses tuvieron que luchar para establecer su poder, frecuentemente para superar una tenaz resistencia popular. Es cierto que en gran parte esta resistencia se manifestó en forma de evasión, trampa y sabotaje, y no como una rebelión abierta. Pero la población de la mayor parte de Francia se opuso a uno u otro aspecto del gobierno directo revolucionario. En el bullicioso puerto mediterráneo de Collioure, cerca de la frontera española, la acción colectiva popular durante la revolución «persiguió —conscientemente o no— el objetivo de preservar una cierta independencia cultural, económica e institucional. En otras palabras, la acción popular intentó oponerse a las pretensiones del Estado francés de intervenir en la vida local para reclutar tropas para las guerras internacionales, para modificar la organización religiosa o para controlar el comercio a través de los Pirineos» (McPhee, 1988, p. 247).

Los problemas diferían de una región a otra en función de la trayectoria histórica anterior y, entre otras cosas, de las relaciones existentes entre capital y coerción. Cuando las líneas de ruptura eran profundas, la resistencia dio paso a la contrarrevolución: la aparición de autoridades alternativas a las que había establecido la revolución. La contrarrevolución se produjo no allí donde todo el mundo se oponía a la revolución, sino donde la existencia de diferencias irreconciliables determinaban la aparición de bloques bien definidos de partidarios y oponentes, en una zona geográfica extensa.

Fue en el sur y en el oeste de Francia donde, a través de procesos similares, surgieron los movimientos contrarrevolucionarios más consistentes (Lebrun y Dupuy, 1985; Lewis y Lucas, 1983). La geografía de las ejecuciones oficiales durante la época del Terror ofrece un perfil borroso pero reconocible de la actividad revolucionaria. Entre los departamentos en que se produjeron más de doscientas ejecuciones figuran, en orden descendente: Loira Inferior, Sena, Maine y Loira, Ródano, Vendée, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Vaucluse, Bocas del Ródano, Pas-de-Calais, Var, Gironda y Sarthe (Greer, 1935, p. 147). En dichos departamentos tuvieron lugar el 99 por 100 de las ejecuciones oficiales durante la época del Terror. Aparte del Sena y del Pas-de-Calais, se concentraron en el sur, en el suroeste y, especialmente, el oeste. En el sur y el suroeste, en el Languedoc, Provenza, Gascuña y el Lyonnais se produjeron insurrecciones armadas contra la revolución, insurrecciones cuya geografía se corresponde estrechamente con el apoyo al federalismo (Forrest, 1975; Hood, 1971, 1979; Lewis, 1978; Lyons, 1980; Scott, 1973).

Los movimientos federalistas comenzaron en la primavera de 1793, cuando la intensificación, por parte de los jacobinos, de la guerra en el exterior —incluida la declaración de guerra a España— suscitó un movimiento de resistencia contra los impuestos y el reclutamiento obligatorio, que a su vez provocó el recrudecimiento de la vigilancia y disciplina revolucionarias. El movimiento autonomista alcanzó su máxima expresión en las ciudades comerciales que durante el Antiguo Régimen habían disfrutado de una amplia libertad, destacando entre ellas Marsella, Burdeos, Lyon y Caen. En cambio, los conatos contrarrevolucionarios de carácter rural se produjeron principalmente en aquellas regiones en las que las capitales instauradas por la revolución habían tenido una importancia menor en la jerarquía administrativa, fiscal y demográfica del Antiguo Régimen y donde, por tanto, la burguesía ejercía escasa influencia en las regiones circundantes (Lepetit, 1988, p. 222). Francia vivió una sangrienta guerra civil en esos dos tipos de ciudades y en sus zonas de influencia.

En la parte occidental del país, las actividades guerrilleras contra los bastiones y el personal republicanos perturbaron Bretaña, Maine y Normandía entre 1791 y 1799. Al mismo tiempo, al sur del Loira

se produjo una rebelión armada abierta que afectó a zonas de Bretaña, Anjou y Poitou. Se inició en el otoño de 1792 y continuó de forma intermitente hasta que Napoleón pacificó la región en 1799 (Bois, 1981; Le Goff y Sutherland, 1984; Martin, 1987). El movimiento contrarrevolucionario de la zona occidental de Francia alcanzó su cenit en la primavera de 1793, cuando la demanda de nuevas tropas por parte de la República precipitó la resistencia armada en gran parte de esa región. En ese período se produjeron matanzas de «patriotas» y de «aristócratas» (nombres que se aplicaban a los partidarios y oponentes de la revolución, respectivamente), la invasión y ocupación temporal de ciudades importantes como Angers y batallas en toda regla entre ejércitos de azules y blancos (como se denominaban a los elementos armados de los dos bandos).

El movimiento contrarrevolucionario de la zona occidental de Francia fue una consecuencia directa del intento de los elementos revolucionarios de establecer un tipo concreto de gobierno directo en la región. Una forma de gobierno que suponía la desaparición de la nobleza y el clero como intermediarios semiautónomos, que hacía que las exigencias del Estado en forma de impuestos, recursos humanos y obediencia se dejaran sentir en el nivel de las comunidades locales y los hogares individuales, y que daba a la burguesía de la región un poder político que hasta ese momento no había poseído. La burguesía consolidó su poder por medio de la lucha armada. El 12 de octubre de 1790, se presentó en la Chapelle de Belle-Croix, en la Vendée, un grupo de personas armadas con palos. Procedían de las parroquias de las proximidades y habían llegado allí para asistir a la misa y a las vísperas.

> Cuando vieron a los soldados de la guardia nacional local con sus uniformes y sus armas, los recién llegados se aproximaron a ellos y les dijeron que no tenían derecho a vestirse con el uniforme nacional, que se lo iban a quitar, que apoyaban la causa del clero y de la nobleza y que estaban dispuestos a acabar con los burgueses que, según creían, estaban robando el pan a los sacerdotes y a los nobles.

A continuación atacaron a los guardias y a la *maréchaussée* de Palluau, que consiguieron rechazarlos no sin grandes dificultades (Chassin, 1892, II, p. 220).

Sin duda, el término *bourgeois* tenía una doble connotación para los habitantes de la Vendée: indicaba una clase social determinada y, asimismo, la condición de residencia en un núcleo urbano, pero comprendían perfectamente que ambos conceptos estaban íntimamente ligados. Los revolucionarios franceses que pretendían que la autoridad del Estado se dejara sentir en todas partes y que estaban dispuestos a eliminar a todos los enemigos de esa autoridad, iniciaron un proceso que había de prolongarse durante 25 años y que en cierto sentido todavía no ha concluido.

El nuevo sistema acabó imponiéndose en la región occidental de Francia, a pesar de la virulencia con que se manifestó la reacción contrarrevolucionaria. En el siglo XVIII, la burguesía —constituida en su mayor parte por comerciantes, abogados, notarios y otros grupos que obtenían sus ingresos gracias al movimiento de su capital, más que por su condición de propietarios de grandes empresas industriales— vieron aumentar su fuerza en toda Francia. El hecho de que adquiriera tierras y colaborara con la aristocracia terrateniente y de que sus representantes más acomodados compraran títulos de nobleza por los privilegios, el prestigio y las exenciones tributarias que confería no desmiente en absoluto la fuerza creciente de esa clase cuyo activo principal era el capital.

Los acontecimientos de 1789 conllevaron la incorporación a la actividad política de un gran número de burgueses. El desplazamiento de la nobleza y del clero de su posición fundamental en el sistema de gobierno indirecto hizo necesario recurrir a la burguesía para asegurar la conexión entre el Estado y los millares de comunidades dispersas por todo el país. Durante un tiempo, esa labor se realizó por medio de los clubes, milicias y comités, pero poco a poco los dirigentes revolucionarios frenaron la actividad de esos núcleos turbulentos e incluso los suprimieron. No sin titubeos y enfrentamientos, la burguesía dirigente estableció un sistema de gobierno cuyas decisiones se dejaban sentir directamente en las comunidades locales y que funcionaba por medio de una serie de administradores que estaban sometidos a la supervisión y el control económico de sus superiores.

Este proceso de expansión del Estado encontró tres grandes obstáculos. En primer lugar, y como suele ocurrir en las primeras fases de las situaciones revolucionarias, fueron muchos los que creyeron llegada la oportunidad de hacer valer sus propios intereses y de ajustar

viejas cuentas pendientes desde la crisis de 1789. Algunos de esos grupos pudieron aprovechar la oportunidad que se les brindaba y otros no pudieron ver cumplidos sus anhelos como consecuencia de la competencia de otros protagonistas. En ambos casos, no tenían incentivos para apoyar nuevos cambios revolucionarios. En segundo lugar, el desorbitado esfuerzo de guerra que entrañó el conflicto con la mayor parte de las potencias europeas constituyó una sangría de los recursos del Estado tan grave como la que producían las guerras del Antiguo Régimen. En tercer lugar, la base del nuevo poder político de la burguesía era demasiado frágil en algunas regiones para poder sostener la polifacética labor de halagar, contener, inspirar, amenazar, extraer recursos y movilizar que realizaban los agentes revolucionarios en todas partes. Muchas zonas de Francia se resistieron a las demandas de impuestos y de nuevos reclutamientos, y a la exigencia de aceptar una legislación moralizadora, y allí donde las rivalidades anteriores situaron a un bloque bien consolidado en oposición a la burguesía revolucionaria estalló la guerra civil. En este sentido, la transición revolucionaria del gobierno indirecto a un sistema de gobierno directo representó una revolución burguesa y generó una serie de contrarrevoluciones antiburguesas.

Otras opciones posibles

¿Qué curso alternativo podrían haber seguido las luchas que se produjeron entre 1787 y 1799? La trayectoria de los acontecimientos podría haber sido distinta al menos en 1787 (la corona podría haber derrotado a la oposición), en 1789 (podrían haberse formado otras coaliciones reformistas de signo distinto), en 1791 (si hubieran fracasado los ataques contra la Iglesia o los preparativos para la guerra), en 1793 (cuando estuvieron a punto de triunfar numerosos estallidos contrarrevolucionarios) y en cada uno de los golpes de estado subsiguientes: 1794 (Thermidor), 1795 (Vendimiario y establecimiento del Directorio), 1797 (Fructidor), 1798 (Floreal) y 1799 (Pradial y, luego, Brumario). De haber conquistado el poder los federalistas en 1793, aunque ciertamente habrían tenido que afrontar una dura guerra exterior, las acciones vindicativas de los emigrados, las actividades de una Iglesia clandestina, la gran rebelión de la Vendée y la crisis eco-

nómica, podrían haber llegado a un compromiso con algunos de esos enemigos mientras combatían al resto y habrían establecido un régimen mucho menos centralizado. Sin duda, sería posible especular sobre las alternativas posibles de cada uno de los momentos revolucionarios.

Sin embargo, parece más adecuado adoptar un enfoque más general y referirse a los procesos históricos ya analizados para considerar la posibilidad de que los acontecimientos se hubieran ajustado a los modelos holandés, ibérico, balcánico o británico. En este caso, no hay que tomar como punto de partida el año 1600, que sirvió como punto de referencia en las especulaciones anteriores sobre las alternativas a las revoluciones británicas del siglo XVII, sino los años en torno a 1750, en los que se agudizó en Francia el enfrentamiento entre los parlamentos y la corona. Inmediatamente puede excluirse el modelo balcánico, que hacia 1750 no era en modo alguno viable en Francia. En los estados balcánicos, sometidos a un imperio que exigía el pago de un tributo, no existía el más mínimo desarrollo comercial, la soberanía estaba fragmentada y existía una aristocracia terrateniente poderosa. En cuanto a los modelos holandés, ibérico y británico, cabe al menos la posibilidad de plantearse su viabilidad.

El modelo holandés era poco plausible, por cuanto desde hacía un siglo la corona francesa había comenzado a socavar el poder militar autónomo de los grandes magnates y de los municipios en favor de una administración centralizada, al tiempo que delegaba su poder en materia tributaria en los cargos importantes del Estado, en las instituciones judiciales y en los municipios. Si Francia se hubiera fragmentado en unidades semiautónomas (como pudo haber ocurrido en 1789 y 1793), es muy probable que una coalición de terratenientes, funcionarios, eclesiásticos y campesinos hubiera impedido que los burgueses de Burdeos, Lyon y Marsella hubieran alcanzado la posición preeminente de que gozaron sus homónimos en Amsterdam o Deventer. Sin embargo, una vez que los grandes señores y los eclesiásticos perdieron totalmente su poder en las primeras fases de la revolución, en 1793 estaba abierto el camino a la instauración de unos mecanismos políticos más similares a los de los Países Bajos que lo que hubiera sido concebible un decenio antes. Los revolucionarios, al permitir el paso hacia el capitalismo comercial con esas medidas, hicieron factible también la implantación del gobierno descentralizado que este

sistema implicaba. La paradoja reside en el hecho de que la conquista francesa de los Países Bajos suprimió el modelo holandés al imponer la monarquía centralizada en sustitución del viejo federalismo centrífugo.

En cuanto al modelo ibérico, hay que decir que en 1750 la situación que presentaban España y Portugal era la de unos estados que habían obtenido importantes beneficios de sus colonias, habían reforzado su poder frente a la Iglesia católica gracias a la expulsión de los jesuitas y al fortalecimiento de su control sobre los asuntos eclesiásticos nacionales, habían implantado un sistema fiscal más eficaz y, en consecuencia, habían progresado notablemente en la vía hacia la centralización. España continuaba siendo una potencia militar y económica, a pesar de que su posición se había debilitado con respecto a Francia e Inglaterra, y Portugal había establecido fuertes lazos comerciales con Inglaterra, aunque no en pie de igualdad. Pero en los dos países, la alta nobleza, la aristocracia terrateniente y el patriciado urbano gozaban de una autonomía mucho más amplia que en Francia. Asimismo, los ingresos procedentes de las colonias eran una parte más importante de las finanzas del Estado que en Francia. El modelo ibérico habría hecho retroceder a Francia hacia la fragmentación de la soberanía de siglos anteriores, pero el grado más intenso de comercialización de la economía francesa y el mayor poder de que disfrutaban las instituciones del gobierno central habrían impedido que prevaleciera el particularismo belicoso que existía en la península ibérica. También en este caso se da la paradoja de que la conquista francesa, unida a la pérdida de las colonias americanas, favoreció la centralización del Estado en la península ibérica, reforzó la autonomía del estamento militar profesional y, en consecuencia, excluyó por completo el modelo ibérico.

En cuanto al modelo británico, hay que distinguir muy claramente entre Gran Bretaña e Irlanda. La Irlanda fragmentada e insurrecta del siglo XVIII no podía constituir un modelo para Francia, pero sí podía serlo Gran Bretaña (es decir, Inglaterra, Gales y Escocia). Hacia 1750, Gran Bretaña era una floreciente potencia comercial y militar con una economía agraria e industrial fuertemente capitalizada. La coalición concertada entre la nobleza y la burguesía ejercía, a través del Parlamento, una gran influencia sobre el Estado, en oposición —y en connivencia— con una estructura patrono-cliente que

se sustentaba en el poder del Estado y en el desempeño de los cargos oficiales. La cada vez mayor comercialización, proletarización e industrialización de Gran Bretaña, que exigía unos gastos militares constantemente en aumento, reforzó el poder del Parlamento y generó una actividad política popular de extraordinario vigor tanto a escala local como nacional.

En muchos aspectos, Francia se desarrolló según el modelo británico, de manera que hacia 1850 contaba con un Parlamento nacional relativamente fuerte, una autoridad central limitada, una poderosa coalición aristocrático-burguesa, que contrarrestaba las coaliciones entre la burguesía y la clase trabajadora, una economía capitalista en proceso de rápida industrialización y una política popular muy activa. Pero fueron las sucesivas revoluciones que vivió la sociedad francesa las que permitieron ese proceso. Si no hubieran tenido lugar esas revoluciones —aquí entran en juego las alternativas supuestas— la Francia del siglo XVIII sólo podría haber alcanzado su destino decimonónico a través de un proceso que arrojara un resultado similar a la revolución, una transformación impulsada por el Estado que hubiera servido para poner fin a los privilegios que la propia política del Estado había favorecido durante los 150 años transcurridos a partir de 1600. Desde la perspectiva de 1850, habría parecido indispensable algún tipo de fenómeno similar a las revoluciones del decenio de 1790.

Sucesión de regímenes con una duración de quince a veinte años

El primer régimen revolucionario sólo duró un decenio, pero dejó paso a otros regímenes que se prolongaron entre quince y veinte años cada uno: el Consulado y el imperio de Napoleón (1799-1814, con una breve prolongación en 1815), la Restauración (1815-1830), la Monarquía de Julio (1830-1848) y el Segundo Imperio (1852-1870). Sólo la revolución de 1848 (que terminó con el golpe de estado de Napoleón III en 1851) alteró ese ritmo hasta que la Tercera República (1870-1940) modificó completamente la situación. El Concordato que firmó Napoleón I con el papado (1801), su coronación como emperador (1804), la acelerada centralización del Estado que llevó a cabo y su instauración de una nueva nobleza produjeron la transformación del Estado, pero

todos esos fenómenos tuvieron lugar sin que se produjera una división profunda en el país. En torno a Napoleón estaban en curso diversos procesos revolucionarios, en los Balcanes, en España y en América Latina, incluida Haití, pero Francia quedó al margen de ellos hasta 1814-1815, cuando los ejércitos aliados penetraron en Francia, se abrieron paso hasta París y forzaron la abdicación y el exilio de Napoleón, que sin embargo regresó desde Elba (marzo-junio de 1815) para enfrentarse a las fuerzas aliadas de ocupación, siendo luego definitivamente derrotado por Wellington en Waterloo. La ocupación aliada se perpetuó hasta que los franceses hubieron pagado las reparaciones de guerra, en 1818.

La revolución de julio de 1830 tuvo como causa principal la represión orquestada por Carlos X de la movilización republicana de las fuerzas burguesas y trabajadores que vio la luz en los momentos finales del decenio de 1820. Sus reaccionarias ordenanzas de julio de 1830, que disolvían la Cámara de Diputados, modificaban el sistema electoral e instauraban un férreo control sobre la prensa, equivalían a un golpe de estado. Estalló la rebelión en París y los insurrectos se hicieron dueños de la ciudad, ocuparon el Hôtel de Ville e instauraron un gobierno provisional. Para impedir la proclamación de una nueva república, los diputados liberales recurrieron a Luis Felipe, duque de Orleans, que aceptó ser entronizado por la revolución. Aunque los trabajadores protagonizaron insurrecciones prorrepublicanas en París y en Lyon, el régimen se prolongó hasta 1848.

La Monarquía de Julio cayó víctima de una revolución que recordaba a la que la había instaurado en el poder, pero la coalición republicana que formaron la burguesía y la clase trabajadora en 1848 era mucho más amplia y más profunda que la que se había constituido dieciocho años antes. Una vez más, el levantamiento que se produjo en París fue decisivo para acabar con el régimen, pues tres días de luchas callejeras en febrero bastaron para forzar la abdicación de Luis Felipe. El nuevo gobierno no satisfizo las exigencias del sector más desfavorecido de la coalición revolucionaria nacional —en especial los trabajadores cualificados de París y de otras grandes ciudades— y no pudo hacer frente con eficacia a la depresión agraria e industrial, que ya antes de la insurrección de febrero había provocado numerosos conflictos locales. Continuaron entonces las rebeliones y en los sangrientos días de junio de 1848 los trabajadores desempleados de los talleres nacionales se enfrentaron con el Estado y contra otros trabajadores sin empleo que habían sido reclutados para la guardia móvil de París. Tras el fracaso de la insurrección, la represión se acentuó dramáticamente. En el período transcurrido desde la elección de Luis Napoleón como presidente en diciembre de 1848 y el golpe de estado que perpetró en diciembre de 1851, el gobierno desmanteló gradualmente el gobierno republicano nacional, pero no pudo impedir otra insurrección de grandes proporciones (en esta ocasión no sólo en París, sino también en muchas regiones rurales de Francia) contra el golpe de 1851.

En un intento de emular a su tío, Luis Napoleón no tardó en hacerse coronar emperador (1852) y se decidió a participar en las guerras europeas que sus predecesores recientes habían evitado: la guerra de Crimea con Rusia (1854-1856), la guerra con Austria en Italia (1859), que le permitió anexionarse Saboya y Niza, facilitó la unificación de Italia bajo la dirección del Piamonte y enajenó a Luis Napoleón el apoyo de los católicos cuando se enfrentó con el papa, y la guerra con Prusia (1870-1871), de profundas consecuencias. Esta última guerra, en la que los franceses participaron llenos de confianza porque el estado mayor del ejército había realizado con anticipación las tareas de planificación y movilización, terminó en una derrota rápida y decisiva para Francia. Cuando empezaron a llegar del frente las noticias que indicaban que las bajas habían sido cuantiosísimas, los republicanos radicales organizaron comunas autónomas, sin éxito en Marsella y con mejor fortuna en Lyon.

Cuando el propio emperador se rindió con sus tropas en Sedán, los radicales de Lyon y Marsella proclamaron la república e instauraron incluso comités de salud pública. Las turbas parisienses invadieron la Asamblea Nacional, avanzaron hacia el Hôtel de Ville y proclamaron también un gobierno revolucionario. Éste, dominado por Léon Gambetta, hubo de hacer frente al asedio de París al que la sometieron las tropas alemanas. París capituló en enero de 1871, pero Gambetta y su gobierno organizaron la resistencia en Tours. Todo terminó cuando el gobierno provisional aceptó un tratado de paz con Alemania, por el que Francia cedió Alsacia y una parte de Lorena.

Los alemanes que ocuparon París en enero desarmaron al ejército regular pero no a la guardia nacional, formada en su mayor parte por trabajadores y negociantes de los barrios parisienses. En marzo, la

guardia nacional se había movilizado de nuevo, había creado un comité central y estaba preparada para resistir tanto a los ocupantes alemanes como al nuevo gobierno, a cuyo frente estaba ahora Adolphe Thiers y que tenía su sede en Versalles. Los parisienses rechazaron los intentos de Thiers de recuperar los cañones que habían requisado en las guarniciones y a continuación, siguiendo el ejemplo de Lyon y Marsella, organizaron una comuna para gobernar la ciudad y exigir la descentralización de Francia para constituir municipios independientes. Otras comunas efímeras se instauraron en Toulouse, Saint Étienne, Narbona y Le Creusot, y los radicales intentaron también, sin éxito, hacerse con el poder en Nimes, Limoges, Ruán y otras ciudades de menor tamaño. Los *communards* parisienses conservaron el control de la ciudad hasta la semana del 21 de mayo, en que las tropas del gobierno de Versalles los masacraron finalmente en las calles de la ciudad mientras se retiraban de las barricadas. El movimiento de reacción subsiguiente permitió a los monárquicos conseguir apoyo en el conjunto del país, pero toleraron a Thiers como presidente republicano hasta que las fuerzas ocupantes alemanas abandonaron Francia en 1873, y luego eligieron al mariscal MacMahon como presidente, para un período de siete años, como primer paso hacia la preparación de la restauración borbónica.

Pero la restauración monárquica fracasó. En el agitado período político que siguió a la evacuación alemana, los republicanos vieron aumentar sus apoyos en la Cámara de los Diputados y en todo el país, mientras los monárquicos perdían su posición de predominio. La improvisada Tercera República duró más tiempo —setenta años— que ningún otro régimen desde 1789. Superó el desafío populista del general Boulanger (1886-1889), los violentos enfrentamientos con los sindicalistas y anarquistas, el problema del «Affair Dreyfus» (1894-1906), un sinfín de huelgas, los conflictos en torno a la cuestión de la separación de la Iglesia y el Estado (1901-1905), la primera guerra mundial (1914-1918) y la gran movilización obrera que supuso el Frente Popular (1936-1939), para sucumbir únicamente ante una nueva invasión alemana en 1940.

Durante los cinco primeros años de ocupación alemana, Francia fue dividida en dos zonas, una en el noreste bajo el control directo alemán y el resto del país gobernado por el régimen colaboracionista de Vichy. El pequeño movimiento de resistencia que se organizó durante esos primeros años no adoptó, en modo alguno, la forma de un Estado alternativo, ni siquiera clandestino. Con excepción de la liberación de Córcega en 1943, hasta que las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía, en junio de 1944, no se generalizó en el país una situación cuasirrevolucionaria. Esa situación alcanzó el clímax en agosto de 1944, con huelgas insurreccionales y ocupaciones de ayuntamientos que anticiparon la llegada de las fuerzas aliadas y de las fuerzas de liberación francesas mientras los alemanes se retiraban.

Dada la herencia napoleónica, el papel preponderante que desempeñó MacMahon en la salvación del Estado tras las revoluciones de 1870-1871, la presidencia de Pétain en Vichy y la aparición de Charles de Gaulle como dirigente principal al terminar la segunda guerra mundial, es sorprendente que el ejército haya tenido tan escasa importancia en la política francesa como poder autónomo, desde el siglo XVIII: algunas conspiraciones de escaso relieve contra Napoleón y la amenaza del general Boulanger en el decenio de 1880 es todo lo que se puede reseñar. Esta situación contrasta enormemente con lo ocurrido en España y Portugal. Todo ello hace que resulte extraordinariamente sorprendente la preparación de un golpe militar por quienes se oponían a la descolonización de Argelia en 1958. En Argelia y Ajaccio (Córcega) se constituyeron comités de salud pública que ocuparon el poder en mayo, mientras los conspiradores se preparaban en Francia para hacerse con el gobierno en París, contando para ello con el apoyo del ejército. El presidente Coty abortó el movimiento, invitando a De Gaulle a formar un nuevo gobierno con poderes excepcionales.

Apoyándose en un referéndum nacional, De Gaulle procedió a establecer la Quinta República, de carácter más acusadamente presidencial, para hacer frente al movimiento en pro de la *Algérie française*, para descolonizar la zona francesa del norte de África y para proseguir una política internacional animada por el espíritu de *Grandeur*. Se mantuvo en el poder durante diez años, oponiéndose al vasto movimiento que protagonizaron los estudiantes y los trabajadores en mayo-junio de 1968, para obtener un apoyo masivo en el referéndum y en las elecciones del mes de junio, aunque luego, en abril de 1969, dimitió al ser derrotado en otro referéndum organizado para reestructurar la administración regional. De esta forma, el general-político más importante de Francia durante el siglo XX dejó su puesto sin que hubiera el más mínimo indicio de ocupación militar del poder.

Balance de la revolución a largo plazo

Como ocurrió en muchas otras zonas de Europa, Francia vivió repetidas situaciones revolucionarias de carácter comunal, patrono-cliente y dinástico durante los siglos XVI y XVII, y en los siglos XVIII y XIX fue escenario de insurrecciones revolucionarias menos frecuentes, pero más profundas, protagonizadas por diversas coaliciones de clases. Posteriormente, a medida que mejoraba la organización de la lucha política a nivel nacional, disminuyó cada vez más la incidencia de situaciones plenamente revolucionarias. En Francia, el número de revoluciones protagonizadas por el ejército fue mucho menor que en la península ibérica, los Balcanes y (como veremos) Rusia. Las situaciones revolucionarias comunales —en las que se enfrentaban principalmente los protestantes y los católicos— desgarraron Francia durante los siglos XVI y XVII, pero desaparecieron tras los compromisos religiosos alcanzados en el siglo XVIII. En los siglos XIX y XX, los conflictos entre católicos y protestantes no ocuparon un lugar preeminente en la política nacional francesa y el problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado generó frecuentes enfrentamientos que nunca se aproximaron al umbral de la revolución.

Entre 1548 y 1793, el empeño del Estado por conseguir los medios necesarios para organizar sus ejércitos, especialmente dinero y hombres, que debían ser aportados por una población poco dispuesta a ello, suscitó importantes rebeliones recurrentes. Luego, la regularización del sistema impositivo, la fijación de los impuestos por asambleas legislativas elegidas y su incorporación en los programas de los principales partidos políticos redujeron su potencial revolucionario, al tiempo que aumentaba su importancia como tema de debate público. Ni las movilizaciones de los viticultores ni los movimientos poujadistas pueden servir para que los ciudadanos franceses del siglo XX se hagan una idea de la ferocidad de las rebeliones que se produjeron en el siglo XVII contra los recaudadores de impuestos y sus beneficiarios, rebeliones cuyo objetivo era la defensa de los derechos y privilegios establecidos. Todavía más difícil les sería comprender las amenazas que se cernían sobre el Estado en los siglos XVI o XVII cuando los grandes magnates participaban con sus ejércitos privados en las rebeliones populares. En efecto, desde aquellos días se había producido la mutilación del poder militar autónomo.

En la Francia metropolitana apenas se produjeron situaciones revolucionarias nacionales a partir de 1492, si se exceptúan las zonas incorporadas tardíamente como Bretaña y Córcega. A diferencia de lo ocurrido en los Balcanes, en las islas Británicas e incluso en Bélgica, el espíritu centralizador de los monarcas franceses les indujo rápidamente a no reconocer derechos políticos singulares a aquellas zonas del país con una personalidad cultural propia. Con la supresión de los protestantes y, en mayor medida aún, con la imposición revolucionaria en todo el país de las normas emanadas desde París, el Estado llevó a cabo una amplia homogeneización cultural de la ciudadanía. Pese a que al terminar la segunda guerra mundial determinados grupos regionales —como los bretones, occitanos y catalanes— se organizaron como grupos de presión, el Estado francés había erradicado prácticamente las pretensiones de obtener el poder del Estado.

En cuanto a las revoluciones nacionales, tuvieron lugar en las colonias de Francia y, en consecuencia, en su mayor parte en los siglos XIX y XX. La consolidación del poder del Estado en la metrópoli subordinó las fuerzas militares a la autoridad civil, limitó el alcance de las reivindicaciones dinásticas y redujo las posibilidades de que se produjeran insurrecciones comunales de cualquier tipo, pero al mismo tiempo hizo a los diferentes regímenes más vulnerables a las crisis financieras, a las derrotas de tipo militar y a las movilizaciones populares a escala nacional. Los cambios de carácter organizativo que se registraron en el Estado en el curso de las principales revoluciones y en el período inmediatamente posterior —en particular 1585-1598, 1648-1653, 1789-1799 y 1848-1851— alteraron profundamente el panorama del enfrentamiento político. En este sentido, el paso de un Estado fragmentado a un Estado consolidado, del gobierno indirecto al gobierno directo, de la política local a la política nacional y de la inhibición relativa del Estado a su participación decidida en la economía nacional, modificaron de forma decisiva la incidencia, el proceso y el impacto de las revoluciones en Francia.

Recordemos las condiciones inmediatas de las situaciones y resultados revolucionarios:

Situación revolucionaria	*Resultado revolucionario*
1 La aparición de contendientes o coaliciones de contendientes, con aspiraciones exclusivas, incompatibles entre sí, al control del Estado o de una parte del mismo.	1 Defecciones de miembros de la comunidad política.
2 Apoyo de esas aspiraciones por un sector importante de los ciudadanos.	2 Adquisición de un ejército por parte de las coaliciones revolucionarias.
3 Incapacidad —o falta de voluntad— de los gobernantes para suprimir la coalición alternativa y/o el apoyo de sus aspiraciones.	3 Neutralización o defección del ejército del régimen
	4 Control del aparato del Estado por miembros de una coalición revolucionaria.

La lista de las revoluciones sigue siendo correcta desde el punto de vista tautológico, una simple extensión de las definiciones de las situaciones y resultados revolucionarios. No obstante, contribuye considerablemente a concretar en qué medida los cambios registrados en el Estado francés y en su posición en el sistema europeo de estados alteraron las perspectivas de la revolución.

Por lo que respecta a las situaciones revolucionarias, es obvio que la nómina de grupos que podrían aspirar a detentar el poder del Estado y conseguir el apoyo de la población cambió totalmente desde comienzos del siglo XVI, cuando muchos magnates estaban en condiciones de reivindicar una parte del poder real o determinados privilegios de índole estatal en sus propios dominios y cuando proclamar el protestantismo en una comunidad suponía, necesariamente, profundizar la autonomía con respecto a las autoridades seculares y eclesiásticas. Además, en esos momentos en que existían ejércitos privados y milicias municipales, la corona carecía muchas veces de los medios militares necesarios para derrotar a quienes desafiaban su hegemonía por la fuerza de las armas. La consolidación del Estado francés después de la Fronda y durante la revolución de 1789-1799 modificó de forma decisiva el equilibrio de poder entre el Estado y la población civil y eliminó casi completamente los competidores dinásticos por el poder del Estado. En efecto, Luis Felipe y Napoleón III no recordaban en absoluto a los príncipes de Condé que poseían sus propias mesnadas. Las coaliciones de clase en que se fundamentaba la política representativa y electoral pasaron a ser el elemento indispensable en la constitución y caída de los regímenes políticos. Paradójicamente, en estas condiciones, los invasores extranjeros vieron aumentar incluso su capacidad de influir en las decisiones sobre quién había de gobernar Francia.

Esto nos lleva a los resultados revolucionarios. Las defecciones de miembros de la comunidad política continuaron siendo un elemento importante en la transferencia de poder, pero entre 1492 y 1992 se modificó totalmente la relación de esos miembros: desde el rey, su clientela, eclesiásticos poderosos, aristócratas terratenientes y algunas ricas oligarquías urbanas a los representantes organizados de una multiplicidad de clases e intereses. Al producirse el desarme de la población civil disminuyeron las oportunidades de los insurrectos revolucionarios de conseguir un ejército propio y neutralizar a las fuerzas armadas del Estado, pero la diversificación de funciones entre la policía y el ejército y el renacimiento de las milicias en forma de guardias nacionales representó una ventaja, desde el punto de vista militar, para la población civil armada cuando se producía una grave perturbación del funcionamiento del Estado, como la que provocó la invasión alemana de 1870. Además, la concentración de las instituciones de gobierno en París hizo posible controlar todo el país con sólo conquistar la capital.

Otras transformaciones sociales contribuyeron a modificar la naturaleza de la revolución: la comercialización de la agricultura en el siglo XVIII, el desarrollo de una industria con gran concentración de capital, la intensa actividad urbanizadora del siglo XIX, la movilización política de los trabajadores agrarios e industriales, etc. Todas esas transformaciones influyeron en la identidad, los intereses y la organización de los posibles aspirantes al poder del Estado y en el funcionamiento cotidiano del mismo. Sin embargo, la transformación incesante del Estado francés fue también un elemento de primer orden respecto al cuándo, dónde, cómo y con qué consecuencias podían comenzar y concluir las situaciones revolucionarias.

CAPÍTULO SEIS

Rusia y sus vecinos

La creación de Rusia

La parte de Europa ocupada por la Unión Soviética hasta finales de 1991 corresponde aproximadamente a los territorios europeos del imperio ruso al término de las guerras napoleónicas. Sólo la guerra de Crimea, la guerra civil de 1917-1921 y las invasiones alemanas de 1941-1944 alteraron de forma significativa dichas fronteras. Pero si nos remontamos a 1492, aquellos territorios no correspondían a Rusia sino a los caballeros teutónicos, la república de Pskov, el principado de Moscú, el principado de Riazán, el janato de la Horda de Oro, el janato de Crimea, el janato de Kazán y el reino de Polonia, y en una zona más imprecisa al este del mar Negro se hallaban los circasianos.

En esa región de Europa, el gran poder imperial era la dinastía de los Jagellones, en cuyo poder estaban Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Bohemia, Moravia y Hungría, pero no Moscovia. Es cierto que durante los reinados de Iván el Grande e Iván el Terrible comenzó a formarse un formidable Estado ruso, pero en el período comprendido entre 1492 y el siglo XVIII no sólo un agresivo imperio lituano-polaco, sino también la poderosa monarquía sueca y el potente imperio turco controlaron durante un tiempo una parte del espacio que el mundo conocería finalmente como Rusia. Hasta el último reparto de Polonia en 1795, en el mapa del territorio «ruso» hay que incluir, además de un imperio ruso, al imperio turco y al reino de Polonia. En un principio, el Estado ruso era mucho más reducido que los estados de las islas Británicas, los Países Bajos, los Balcanes o la península ibérica, peró acabó convirtiéndose en un verdadero gigante tras absorber a los estados vecinos.

No es posible dejar de tener en cuenta la tentación de adoptar un enfoque teleológico y los peligros que ello entraña: nuestra narración se vería simplificada enormemente si se pudiera presentar la transformación de esta zona europea como un impulso continuo e inevitable de Rusia para ocupar un espacio vacío. Pero esa actitud no sólo simplificaría las cosas, sino que las distorsionaría. Ante la ventajosa posición económica y geopolítica de que gozaban las potencias que dominaban en el siglo XV el límite occidental del espacio geográfico que estamos considerando, cabría haber esperado que si la economía europea prosperaba y los estados próximos se consolidaban, una o dos de dichas potencias (sin duda, Polonia, Suecia o los Habsburgo) habrían progresado hacia el este y el sur. Sin embargo, en esa previsión no se podía dejar de tener en cuenta los imperios que procedentes de la estepa se habían desplazado durante tanto tiempo hacia el oeste. ¿Cabía esperar la llegada de una nueva oleada de mongoles o turcos desde el este? Además, en el sur, un imperio expansionista, el imperio turco, no cejaba en sus intentos de ampliar sus posesiones eurasiáticas. Rusia luchó sin tregua contra los turcos por el control de los territorios situados por encima del mar Negro hasta bien entrado el siglo XIX. Rusia tenía que hacer frente a unos competidores de talla formidable para conseguir el espacio que ambicionaba.

No fue hasta finales del reinado de Iván IV (1533-1584) cuando los moscovitas comenzaron a incorporar decididamente Siberia y otros territorios que se extienden entre Rusia y Japón. Aunque las fronteras se modificaban constantemente en función de los resultados de la guerra, Lituania (que se unió con Polonia en 1569) y Suecia continuaron en posesión de extensas zonas de Ucrania, la Rusia blanca y la región del Báltico, hasta que los repartos de Polonia, en el siglo XVIII, determinaron, de forma estable, el límite noroccidental del imperio ruso. No podía asegurarse que una sola potencia ocuparía el espacio existente entre Finlandia y el Pacífico, ni que Moscovia, que era una potencia secundaria en 1492, sería el principal protagonista en la expansión hacia el este y el sur. Más aún que en las islas Británicas y en la península ibérica, la formación de un imperio ruso en torno a un núcleo moscovita era sólo una de las formas en que podían agruparse los territorios europeos situados entre el Vístula y los Urales.

Pues bien, eso fue lo que ocurrió. Todos los gobernantes rusos desde Iván el Grande a Iván el Terrible centraron su actividad militar en el

empeño de rechazar a los mongoles y eliminar a otros pueblos eslavos. Rusia se distinguió por poseer unos monarcas despiadados y longevos. Iván III (el Grande) reinó desde 1462 hasta 1505. En ese período de la historia europea, la esperanza de vida era baja, los conflictos sucesorios eran frecuentes y no era raro ver subir al trono a un rey menor de edad. En tales circunstancias, el hecho de que un monarca reinara durante 43 años le daba una ventaja extraordinaria sobre sus rivales. Pero, además, los sucesores de Iván el Grande, Basilio III e Iván IV (el Terrible), reinaron durante veintiocho y treinta y siete años, respectivamente. (La importancia de la longevidad queda ilustrada por la violenta lucha de facciones nobiliarias durante la minoridad de Iván IV, entre 1533 y 1547, por los conflictos ocurridos a la sucesión del inepto hijo de Iván, Fedor I, en 1584 y por los sucesos acaecidos en otros interregnos posteriores.) Iván III rechazó a los mongoles, sometió al gran Estado comercial de Novgorod y estableció el control moscovita sobre otros estados eslavos de la zona. Cincuenta años después se había formado ya un auténtico imperio ruso que ejercía una fuerte presión sobre los caballeros livonios, el imperio polaco-lituano y el janato de Crimea. La expansión rusa no se interrumpiría hasta dos siglos y medio después.

Esta trayectoria histórica de expansión imperial agresiva tiene repercusiones inmediatas en el análisis de la revolución. Las potencias vecinas lucharon con uñas y dientes para evitar la conquista rusa, pero ¿en qué momento puede decirse que su resistencia tiene un carácter revolucionario? Por ejemplo, cuando las fuerzas de Moscovia y sus sucesores rusos intentaron una y otra vez someter a los tártaros de Crimea entre 1520 y 1750, ¿en qué momento la resistencia de los tártaros se convirtió en situación revolucionaria? La respuesta sería: cuando el imperio consiguió establecer un control eficaz durante algún tiempo. Pero ¿cómo juzgar que el control era efectivo? El momento exacto ha de ser necesariamente arbitrario, dado que el imperio ruso impuso un gobierno indirecto en sus territorios periféricos.

Puede parecer que la conclusión —respecto a si la resistencia ante el imperio ruso es revolucionaria se reduce a una cuestión de definición— despoja a la revolución de su gloria, o de sus horrores, pero desde luego recoge perfectamente la tesis principal expuesta en este libro: el carácter, el lugar y el resultado de las situaciones revolucionarias varían sistemáticamente en función de la organización de los

estados y de los sistemas de estados. En presencia de un imperio en continua expansión, serán muy frecuentes los casos en los que un pueblo capitule provisionalmente ante la potencia imperial, para rebelarse de nuevo cuando el imperio parezca vulnerable, cuando los agentes o colaboradores del imperio impongan medidas ultrajantes o cuando el pueblo sometido consiga nuevos medios de acción o nuevos aliados. Ese tipo de rebeliones tienen características revolucionarias y de guerra anticolonial.

Las diversas entidades que en 1492 ocupaban el que acabaría siendo el espacio «ruso», eran restos de imperios, fragmentos de la penetración conquistadora de los escandinavos desde el Báltico al mar Negro y de las correrías de los mongoles desde el sureste. Diferentes grupos mongoles dominaron ese espacio desde 1230 hasta las postrimerías del siglo XV, momento en que Iván el Grande consiguió sacudirse su dominio. El método de conquista preferido de los mongoles era el de controlar estados constituidos que obtenían ingresos regulares de una población agraria. Los guerreros mongoles imponían el pago de un tributo a esos estados o los asimilaban sin apenas modificar su organización interna. En ambos casos, los mongoles ejercían un control indirecto e imperial, exigiendo una sujeción simbólica, el pago regular de un tributo, un apoyo armado ocasional, la obligatoriedad de someter a su aprobación a las autoridades eslavas, lealtad al jan frente a los enemigos de los mongoles y, alguna vez, la entrega de rehenes aristócratas, todo ello a cambio de una gran autonomía en los territorios de aquellos príncipes que se prestaban a colaborar.

De hecho, Moscovia se impuso en parte a sus rivales regionales al prestarse astutamente a colaborar con la Horda de Oro. Ni siquiera el saqueo de Moscú a manos de los tártaros en 1571 puso fin a las relaciones moscovitas con el pueblo de las estepas, pues aun después de liberarse del yugo de la Horda de Oro entablaron frecuentes relaciones de cooperación con los grupos mongoles supervivientes: se aliaron con los tártaros de Crimea para luchar contra Lituania en el siglo XVI, hicieron participar a los mongoles zunghar en la conquista de Siberia en el siglo XVII y siguieron pagando tributo a la rama de Crimea hasta 1700. Las relaciones entre rusos y tártaros durante los siglos XVI y XVII eran similares a las que mantenían los colonos europeos y los indios norteamericanos en el mismo período. No se puede olvidar, después de todo, que a mediados del siglo XVIII la partida más

importante en el presupuesto de la colonia de Carolina del Sur era la de «regalos» a los indios. Eran hombres duros y despiadados los que luchaban a ambos lados de las fronteras norteamericana y rusa. Un observador inglés del siglo XVI, George Turberville, comparaba a los rusos con los irlandeses:

> Los salvajes irlandeses son tan civilizados como los rusos. Es difícil decir cuál de los dos pueblos es mejor, dada la rudeza y la ceguera de ambos.

Sin embargo, la diferencia entre ambos pueblos era notable. Mientras los jefes de los clanes irlandeses se resistían a la invasión de un imperio extranjero y luchaban incesantemente entre sí, los príncipes rusos se enfrentaron contra todos en el inmenso espacio que ocupaban, hasta construir su propio imperio.

La analogía con Irlanda es inexacta también en otro aspecto importante. Hasta época reciente, Irlanda ha ocupado una posición periférica por lo que respecta a las corrientes comerciales y a las comunicaciones europeas. En cambio, durante todo el período en que prosperaron las relaciones de Europa con el Asia oriental, las ciudades de Rusia fueron importantes puntos de contacto. Los rusos, que consiguieron muy tarde el acceso al mar, levantaron casi todas sus ciudades en los ríos que unían los espacios interiores de la Europa oriental, en especial el Dniéper, el Volga, el Don, el Dvina y el Volkhov, con sus afluentes. Desde el año 1000 aproximadamente, el tejido urbano y comercial de Rusia tenía como eje central a Kiev, que debía alcanzar los 50.000 habitantes. Destacaba también otra ciudad mercantil, Novgorod, con unas 20.000 almas (Rozman, 1976, pp. 45-46). Posteriormente, cuando adquirió importancia la presencia de los mongoles, Moscú pasó a ocupar una posición central que conservaría hasta el momento en que se impulsó el desarrollo de San Petersburgo a partir de 1703. Hacia el año 1500, cuando el control de los mongoles había comenzado a debilitarse, Moscú, Vilna, Pskov, Novgorod, Esmolensko y Bakhchiseraj (esta última en la Crimea tártara) contaban todas ellas con 10.000 habitantes o más (Chandler y Fox, 1974, p. 27).

Los guerreros mongoles, aun cuando fundaron ciudades como Bakhchiseraj, continuaron viviendo en tiendas que disponían en sus campamentos, siempre dispuestos a desplazarse para cazar o luchar

en otro sitio. A diferencia de los mongoles, los rusos adoptaron una estrategia de conquista de carácter urbano, instalando sus fuerzas militares, agentes imperiales, comerciantes e incluso terratenientes en las ciudades a medida que ampliaban el territorio bajo su control. Ese tipo de política tenía tres consecuencias. En primer lugar, los representantes del Estado ocupaban puestos privilegiados en la mayor parte de las ciudades. En segundo lugar, un porcentaje elevado del personal nominal del Estado, como los soldados, trabajaban también, por su cuenta, en la agricultura, la industria o los servicios. Finalmente, la actividad predominante en las ciudades experimentaba una transformación a medida que se modificaba la frontera del imperio. La expansión moscovita fue acompañada de la creación de una cadena de plazas fuertes en las zonas fronterizas del noroeste y, más aún, del sureste, que se convertían en centros mercantiles y administrativos a medida que se expandía la zona de conquista. Entre 1636 y 1648, por ejemplo, el régimen de Miguel Romanov estableció la mayor parte de las nuevas ciudades de la *Belgorodskaia cherta*, que llegó a contar con veintinueve plazas fuertes que cubrían las principales rutas de las invasiones anteriores de los mongoles. A no tardar, esas ciudades quedaron notablemente alejadas de la frontera.

A partir de 1703, Pedro el Grande desplazó el centro del imperio a San Petersburgo, forzando el asentamiento de comerciantes, artesanos, oficiales imperiales y el personal a su servicio en las tierras pantanosas de la desembocadura del Neva, que acababan de ser arrebatadas a los suecos. El zar, que durante un breve período había trabajado de incógnito en unos astilleros mientras recorría Holanda e Inglaterra, concibió San Petersburgo como una ciudad holandesa donde habría de construir astilleros y que sería el centro del comercio báltico. En efecto, no dio a la ciudad un nombre ruso, sino holandés: Sankt Petersburg. En 1782, la nueva sede del imperio contaba con 297.000 habitantes, frente a los 213.000 de Moscú (Rozman, 1976, pp. 162, 183). El zar estableció una división de funciones que hizo de San Petersburgo la capital y el principal puerto de entrada del comercio procedente de Europa noroccidental, mientras que Moscú pasaba a ser el núcleo fundamental del comercio interno. Rusia formó, así, un importante tejido urbano periférico, centrado en la zona noroccidental del imperio, pero que penetraba también profundamente en Asia.

Los estados ruso, polaco-lituano y tártaro

Durante los tres siglos transcurridos a partir del año 1500, Moscovia, luego Rusia, se ganó la reputación de ser uno de los estados más beligerantes de Europa. Moscovia comenzó conquistando a sus vecinos eslavos y liberándose del yugo tártaro. Luego, Rusia, todavía en proceso de formación como entidad política, no sólo se enfrentó con los pueblos nómadas del este y del sureste, sino que por el norte, el oeste y el sur combatió a los imperios sueco, polaco y otomano. Rusia luchó encarnizadamente con esas potencias durante varios siglos y esos conflictos dejaron cicatrices. A largo plazo, la tarea de abastecer, financiar y administrar una gran organización militar tiene efectos sociales más profundos que su mera existencia como fuerza política. Como ocurrió en otros lugares de Europa, pero en situaciones muy diferentes, la formación de grandes ejércitos y la actividad bélica incesante hicieron surgir estructuras civiles de poder que acabaron por imponerse sobre las estructuras militares y que transformaron la organización del Estado.

Sin embargo, también la geopolítica influyó decisivamente en los cambios ocurridos en los estados rusos. La «ley de las fronteras opuestas» respondía al sagrado principio de que «el enemigo de mi enemigo es mi amigo». Olvidando cualquier otro tipo de incompatibilidades, aquellas potencias situadas en zonas opuestas a la que ocupaba un enemigo común formaban frecuentemente una alianza. Durante las primeras centurias de expansión imperial, el juego de las alianzas expuso a Moscovia a una serie de influencias poco plausibles: las de los tártaros y los alemanes protestantes que lucharon al lado de Moscú contra la católica Polonia.

Por ejemplo, en la guerra que libró Iván el Grande contra el Estado polaco-lituano y los caballeros livonios en 1500-1503, los rusos pudieron contar con el apoyo de los tártaros. Durante el proceso de liberalización del territorio ruso del yugo mongol, Iván el Grande y sus sucesores recurrieron a un buen número de mecanismos propios de la administración mongol. El propio Iván adoptó uno de esos mecanismos, típico del gobierno indirecto de los mongoles: creó lo que dio en llamar «príncipes de servicio» en Novgorod y en otros lugares, que sólo conservaban sus cargos y las tierras que comportaban en tanto en cuanto sirvieran al zar. Paralelamente, creó también los *pomeshchiki*, que detentaban sus cargos y el poder, las propiedades y los privilegios que comportaban de forma vitalicia y a condición de que sirvieran al imperio de forma satisfactoria.

En los servicios que debían prestar los príncipes y *pomeshchiki* se incluía la aportación de una fuerza armada. En un período en que los estados de Europa occidental contrataban en el mercado internacional los mercenarios que eran la base de sus ejércitos, Iván el Grande fomentó con espíritu pionero la creación de ejércitos masivos poniendo en práctica un sistema patrimonial que reforzaba la jerarquía y la administración civil. Iván el Grande transformó un sistema basado en la multiplicidad de caciques, ciudadelas y clientelas (que no facilitaba hombres armados a los monarcas europeos con la regularidad que éstos los necesitaban) en un sistema jerárquico, y ordenado geográficamente, de regimientos y administraciones regionales fuertemente dependientes del gobernante y de los agentes a su servicio.

Ahora bien, si la nobleza vio aumentar su sujeción al zar, también reforzó enormemente el dominio sobre sus campesinos. La legislación imperial se aplicó también a muchas comunidades agrarias hasta entonces autónomas, restringió la movilidad, permitió a los señores imponer nuevas prestaciones personales a los campesinos y acabó por hacer desaparecer las líneas de demarcación entre los campesinos libres, los siervos y los esclavos. Naturalmente, ese proceso sólo sirvió para empeorar su situación.

Sin embargo, el campesinado no aceptó el curso de los acontecimientos con resignación y luchó constantemente para modificarlo. Los campesinos por sí solos nunca crearon una situación revolucionaria en Rusia a escala nacional, pero las insurrecciones campesinas contra la opresión de los señores y de los recaudadores de impuestos estallaban con regularidad año tras año. Sólo en las propiedades de los *pomeshchiki*, P. K. Alefirenko ha registrado treinta y siete levantamientos importantes (*vosstanie*) durante el período 1730-1760 (Alefirenko, 1958, pp. 136-153). Además, cuando los campesinos se aliaban con los cosacos o con sectores disidentes de la nobleza, constituían la fuerza de choque de las rebeliones nacionales, del mismo modo que formaban el grueso de los ejércitos nacionales. Afrontaban, sin embargo, un grave problema: durante tres siglos, el Estado se alió sistemáticamente con los señores para aplastarlos, con mayor contundencia en cada una de las insurrecciones hasta el siglo XIX.

También la Iglesia ortodoxa se vio sometida a un control cada vez más estricto por parte del zar, que la utilizó para sus intereses desde el establecimiento de un patriarcado en Moscú en 1589, pero todo ello a cambio de concederles una gran autonomía en el ejercicio de las funciones que le eran propias. Los zares organizaron el control sobre la nobleza, los oficiales del ejército y el clero no sólo mediante el patronazgo personal, sino también a través de una serie de consejos (*prikazy*), cuyas figuras visibles eran responsables directamente ante el zar. Dos eran los peligros que acechaban al conjunto del sistema —civil, militar y religioso—, la malversación y la rebelión. Como muchas otras formas de gobierno indirecto, este sistema otorgaba un enorme poder discrecional a los funcionarios del Estado en las zonas sometidas a su jurisdicción, pero permitió crear un aparato de gobierno sustancial, barato y relativamente centralizado.

Iván IV fue el primer gobernante de entre una larga serie de príncipes moscovitas que adoptó formalmente el título de zar cuando fue coronado y además obtuvo el apoyo de la Iglesia ortodoxa para conseguir ese título, que le situaba en pie de igualdad con el emperador del Sacro Imperio Romano. Las ambiciones de Iván no eran desde luego modestas. En 1565 avanzó un paso más en el proceso hacia el gobierno directo creando la *oprichnina*, que era una especie de guardia imperial financiada con las tierras expropiadas de los grandes señores autónomos a los que el zar exilió a lugares distantes. Como la misión de los *oprichniki* era desenmascarar «traidores», se convirtieron en un instrumento de terror para el conjunto de la nobleza.

Obviamente, en un Estado de esas características la intensidad del control central variaba en función de la capacidad y determinación del gobernante de turno, así como de la presión de la guerra exterior, lo cual suponía que el poder y la autonomía de los nobles de servicio fluctuaban drásticamente. En el siglo XVII, los nobles de servicio consideraban sus tenencias como propiedades que podían enajenar y dejar en herencia. En 1714 el zar reconoció formalmente este hecho consumado suprimiendo la distinción entre las tenencias de servicio y las tierras privadas. A mayor abundamiento, en las postrimerías del siglo XVII, los soberanos rusos llenaron de mercenarios sus ejércitos, cada vez más numerosos. Sin embargo, muy pronto lamentaron la amenaza que supuso esta estrategia para el sistema cerrado que habían creado y, a comienzos del siglo XVIII, volvieron al sistema de reclutamiento obligatorio de los campesinos y a imponer gravosas obligaciones militares a la nobleza de servicio. El ejército de Pedro el Grande estaba formado por 370.000 hombres, el de Catalina II por un millón de soldados y el de Alejandro I (1801-1825) por dos millones (LeDonne, 1991, p. 273). En 1897, en un período de paz relativa, las fuerzas armadas rusas contaban con 1.100.000 hombres (Shanin, 1986, I, p. 39). Las líneas maestras de la administración establecidas por Iván III e Iván IV sobrevivieron incluso a las reformas de Pedro el Grande y de Catalina II. La labor de obtener los medios necesarios para la guerra y la conquista en una economía agraria no comercializada dio lugar a la aparición de una ingente superestructura patrimonial.

Pedro el Grande y Catalina II, además de intervenir en los conflictos generales europeos, impulsaron una gran expansión del imperio hacia el sureste, lo cual aumentó enormemente las necesidades de dinero y tropas. Por consiguiente, sus innovaciones consistieron principalmente en regularizar la estructura administrativa que habían heredado, para lo cual redujeron el número de administraciones, convirtieron la nobleza de servicio en una jerarquía establecida de acuerdo con unos principios más claros, dotaron al Estado de un aparato más perfeccionado de represión interna y europeizaron la burocracia. Posiblemente, la transformación más trascendente se produjo en las finanzas del Estado: los gastos de guerra aumentaron de 6,9 millones de rublos en 1725 a 173,8 en 1825, lo que supone un fuerte incremento, del 3,3 por 100 anual, para el conjunto de la centuria (en el mismo período de tiempo, los precios del centeno tan sólo se duplicaron o triplicaron, con un índice de incremento del 0,1 por 100; véase Mironov, 1985). Al mismo tiempo, el porcentaje de ingresos que obtenía el Estado de los impuestos fijos (capitación y rentas perpetuas) disminuyó del 54 al 32 por 100, mientras que los impuestos indirectos aumentaron del 46 al 48 por 100 del total. Sólo los ingresos procedentes de la venta de vodka —monopolio de la nobleza— aumentó de un millón a 128,4 millones de rublos, lo que equivale a una subida media anual del 5 por 100 (LeDonne, 1991, pp. 277-283).

Pedro el Grande y Catalina II extendieron la administración de tipo ruso a sus nuevas posesiones. En el siglo XVIII, el imperio impuso una estructura relativamente uniforme en un vasto territorio. Como la estructura social variaba enormemente de una a otra región del imperio, también el funcionamiento de la administración era muy dis-

tinto según las zonas: en el noroeste los comerciantes aportaban una parte importante de los ingresos del Estado y gozaban de un considerable poder en los asuntos locales, y en el sureste los gobernadores militares, que ejercían su poder en unas zonas remotas y a las que no había llegado la comercialización, gobernaban por la fuerza bruta, pactaban con los jefes locales o practicaban una combinación de esos dos procedimientos.

Muy distinta era la estructura del Estado polaco, que desembocó en un auténtico suicidio. Los terratenientes, tanto de Rusia como de Polonia, cultivaban cereales en sus grandes propiedades, actividad que en el siglo XVI les permitió obtener pingües beneficios gracias al crecimiento demográfico y a las subidas de precios. Pero los terratenientes polaco-lituanos podían acceder más fácilmente a los mercados europeos a través de diversos puertos, como Danzig. Se constituyó así una economía señorial que menoscabó la situación de una serie de ciudades que gozaban de una próspera situación como centros del comercio interior y que constituían una fuerza política independiente. Los grandes magnates excluyeron al campesinado y a los comerciantes polacos del comercio de cereales y establecieron relaciones directas con los comerciantes extranjeros. Prosperaron gracias a los ingresos obtenidos de sus exportaciones, comenzaron a importar productos de Occidente y se creyeron dueños del Estado.

La «república de aristócratas» que se constituyó en Polonia era la representación de ese 10 por 100 privilegiado de la población que encontró los medios para reforzar su control sobre el campesinado y (a partir de 1572) para convertir al monarca en instrumento de la nobleza, que lo elegía. Los nobles generalizaron e intensificaron la servidumbre en el país, y sus ejércitos privados, que formaban con sus propios siervos, sin tener que hacer grandes desembolsos, superaban notablemente en número a las tropas de la corona. Aunque la presencia de tres fuerzas distintas en la vida política de Polonia —la monarquía, los grandes magnates y la pequeña nobleza— ofreció al rey la posibilidad de aliarse con la pequeña nobleza a partir del siglo XVI, esa misma fragmentación impidió totalmente al poder real establecer un sistema fiscal y militar centralizado y eficaz.

Por otra parte, la necesidad de hacer frente a los ataques de los jinetes tártaros, cosacos y turcos indujo a privilegiar el desarrollo de la caballería en el ejército polaco, en un momento en que en los ejércitos rusos y de los países de Europa occidental predominaban la infantería y la artillería. Esa situación acentuó la autonomía de los ejércitos privados y facilitó su autofinanciación, y al mismo tiempo dificultó los intentos de la monarquía de formar sus propios ejércitos para sustituir a los de la nobleza. La debilidad de una monarquía cuestionada y la inexistencia de un ejército nacional fuerte convirtieron al territorio polaco en fruta madura para el saqueo de los agresivos ejércitos de sus vecinos suecos, rusos, austríacos y prusianos. Se produjo primero la contracción del imperio polaco-lituano y luego, en el siglo XVIII, Polonia sufrió diversas amputaciones hasta perder la condición de Estado independiente.

En el siglo XVI, los cereales que producían los terratenientes rusos no tenían acceso a los mercados de Europa occidental. Eran los comerciantes ingleses los que controlaban el puerto de Arkángel, en el Ártico, establecido en 1584, y desde el cual se exportaban las pieles y la madera procedentes de los países del norte, pero no los cereales de las llanuras meridionales. Ello obligaba a los aristócratas a enviar sus productos a las ciudades rusas, que era precisamente donde residía la fuerza de los zares. Los soberanos rusos intervinieron brutalmente para hacerse con el control de los mercados y de la propiedad de la tierra y ello les permitió acumular, para su provecho personal y para sus empresas bélicas, los beneficios del crecimiento demográfico y de los aumentos de precios registrados en el siglo XVI. Para cuando sobrevino la contracción en el siglo XVII y la participación en el comercio europeo, en el XVIII, habían conseguido subyugar completamente a la nobleza y, de hecho, habían creado una nueva nobleza obligada a prestar innumerables servicios al Estado. La recaudación de los impuestos en especie en lugar de en efectivo les permitió reducir la participación de la nobleza y los campesinos en el comercio y garantizar el abastecimiento de alimentos a sus ciudades, ejércitos y funcionarios.

Sin embargo, el proceso se invirtió en el siglo XIX cuando, a partir del reinado de Pablo I (1796-1801), los zares dirigieron sus esfuerzos a dar forma a una burocracia y a una organización militar autónomas, cada vez menos vinculadas a la aristocracia. Se formó así una poderosa clase administrativa (cuyos miembros no procedían de las filas de la nobleza y en la que sólo los funcionarios de mayor rango podían aspirar al título nobiliario) a la que correspondía la responsa-

bilidad de las actividades rutinarias del gobierno. Pero este proceso no dio los frutos que cabía esperar. En efecto, la nobleza se separó del Estado y dejó de desempeñar una función en la administración regional, para dedicarse únicamente a administrar sus tierras y disfrutar de sus ingresos, pero eso suponía que los zares habían echado por la borda los esfuerzos, realizados con gran eficacia a lo largo de tres siglos, para conseguir la asimilación de la aristocracia. La instauración del nuevo sistema significó para los monarcas rusos la pérdida de una clientela de importancia crucial, pero no les permitió neutralizar su poder y su descontento.

Los estados tártaros que circundaban Rusia por el sureste tenían una organización muy diferente, muy flexible y en la que los elementos fundamentales eran la identidad tribal y las relaciones de tipo clientelar. En realidad, los estados tártaros no eran otra cosa que la fuerza de su formidable caballería. Además, sus ejércitos se formaban, simplemente, mediante la agregación de clanes y grupos que se regían según el sistema de patronos-clientes. Los mongoles (los tártaros fueron primero una subdivisión de los mismos y luego un grupo residual) financiaban sus ejércitos siempre en movimiento con los tributos que recibían de las poblaciones agrarias del entorno, con los impuestos con que gravaban el tráfico comercial y con los ingresos que les reportaba la protección de los comerciantes que se dedicaban al comercio a larga distancia. Los tártaros de Crimea prosperaron gracias al comercio de esclavos (en su mayoría eslavos) que vendían en los mercados turco e italiano. Dispuestos siempre a golpear en caso de insubordinación, pero renuentes a crear su propia administración, generalmente confiaban en los gobernantes de los pueblos sometidos para la recaudación de sus impuestos. Carecían de una estructura central fuerte, y ello, aunque les permitía una gran flexibilidad, también favorecía la secesión y las luchas sucesorias. En su condición de auténticos parásitos, su prosperidad se basaba en la intensificación del comercio caravanero y en la estabilidad, productividad y docilidad de los estados vecinos, cuya principal fuente de riqueza era la producción de cereales. Los rusos consiguieron librarse de ellos y asimilaron los grupúsculos que pervivieron gracias a su superior fuerza militar, su administración más centralizada y a su política de establecer alianzas con los potentados locales.

Hacia 1250, los mongoles habían conseguido establecer su soberanía sobre Moscovia con la ayuda de Alejandro Nevsky. La Horda de Oro, que así era como les llamaban los rusos, mantuvo su supremacía durante dos centurias, y en todo momento recaudó sus tributos. En 1438-1441, la Horda se escindió en los janatos de Sarai (la capital), Kazán, Astracán y Crimea, pasando rápidamente este último a formar parte del imperio turco. Como consecuencia de la expansión rusa y de los enfrentamientos entre los diversos grupos, en el reinado de Iván el Terrible sólo los tártaros de Crimea seguían constituyendo una entidad política independiente. Catalina II incorporó finalmente sus territorios en 1783. Las incorporaciones posteriores de territorios europeos al imperio se produjeron a expensas de Polonia y del imperio turco.

Guerra y rebelión, rebelión y guerra

Si en todas las regiones de Europa la transformación de los estados fue principalmente consecuencia de la guerra y de la preparación para la guerra, en ningún caso es más evidente esa relación que en la expansión imperial rusa. Hasta bien entrado el siglo XIX, el Estado ruso invertía la mayor parte de sus ingresos en la financiación de su fuerza militar. Iván el Grande, Iván el Terrible, Pedro el Grande, Catalina II, Alejandro I y todos los demás zares utilizaron esa fuerza armada para derrotar a los enemigos de Rusia, conquistar a los pueblos vecinos y rechazar a los rivales de Europa y del Próximo Oriente. Por ejemplo, en el período de un siglo a partir de 1492, sólo durante 29 años no estuvo en guerra el Estado moscovita con un enemigo externo.

En comparación con las empresas bélicas posteriores, las guerras del siglo XVI eran poco costosas, pero precipitaron la gran transformación del Estado ruso que tuvo lugar durante los reinados de Iván el Grande e Iván el Terrible. En su empeño de realizar nuevas conquistas y de conservarlas, los zares del siglo XVI dieron forma a un sistema en el que predominaba el sentido patrimonial en el vértice, el sistema indirecto de gobierno en el medio y en los escalones inferiores una clase cada vez más numerosa de siervos controlados por una aristocracia que contaba con el apoyo del Estado. Las guerras subsiguientes dieron mayor solidez a esa estructura.

A pesar de la magnitud de los conflictos entre Suecia, Polonia y

Moscovia, las guerras que se libraron en la región durante el siglo XVI apenas tuvieron relación con los conflictos que tenían lugar en Europa occidental. Antes bien, se enmarcaban en un ámbito distinto, cuyos ejes principales corrían hacia el sur y el este desde Varsovia. Aunque las potencias mediterráneas estaban ya en guerra con el poder expansionista de los turcos, los estados de Europa oriental no intervinieron en las principales guerras europeas de 1495 a 1560, cuyo eje fue el enfrentamiento entre España y Francia por el territorio italiano. En ese mismo período, los moscovitas no sólo se enfrentaban a sus vecinos occidentales, sino también a los tártaros y a los cosacos, que se oponían a su expansión por el sureste, mientras que por otra parte las fuerzas polacas se enfrentaban también con sus vecinos del sur: moldavos, turcos y tártaros.

Sin embargo, a finales del siglo XVII, los imperios ruso y otomano comenzaron a intervenir mucho más activamente en las guerras europeas. Rusia participó por primera vez en una alianza europea en 1680. En 1682 se alió con Austria, Polonia, Venecia y los estados alemanes para enfrentarse a su inveterado enemigo, los turcos. La célebre occidentalización de Rusia que llevó a cabo Pedro el Grande incluyó una mayor participación del imperio en la diplomacia y la actividad bélica europeas y, asimismo, una política de enlaces matrimoniales. En efecto, hasta el reinado de Pedro el Grande, las familias reales de Rusia sólo contraían matrimonio con otras familias rusas, polacas o bizantinas, pero desde su reinado los zares emparentaron con numerosas familias occidentales, especialmente de los estados alemanes.

Hacia 1730, Rusia participaba regularmente en las guerras generales europeas, lo cual dio inmediatamente un carácter más general a esas guerras. El crecimiento y la occidentalización de sus ejércitos hizo de Rusia un valioso aliado y un temible enemigo. Como consecuencia de ese mismo proceso, también Polonia, Suecia y el imperio turco (aunque no los tártaros supervivientes) comenzaron a participar más intensamente en los conflictos bélicos occidentales, o fueron obligados a intervenir en ellos, muy a su pesar. Ello entrañó la desaparición de Polonia cuando Suecia perdió su influencia en los territorios eslavos.

La guerra y las situaciones revolucionarias se superpusieron. Las continuas rebeliones de los cosacos contra Polonia entre 1590 y 1734 tenían motivaciones muy similares a las de la resistencia tártara ante la expansión rusa algo más hacia el este, con la diferencia fundamental de que los cosacos habían visto prosperar su suerte bajo la hegemonía polaca gracias a su condición de mercenarios y a sus ataques contra turcos o tártaros, pero se rebelaron cuando los polacos intentaron cercenar su autonomía y subordinar su actividad bélica a los ejércitos polacos. Los cosacos planteaban a los estados polaco y ruso un problema fronterizo clásico. Eran un pueblo variopinto que aglutinaba a diversos grupos nómadas, siervos que habían conseguido liberarse y soldados mercenarios, y adquirieron una gran pericia como guerreros en sus luchas contra los temibles turcos y tártaros, lo que les hizo aparecer de gran utilidad a los ojos de los rusos y polacos. Pero en aquellas zonas donde ejercían una soberanía disputada, o aunque no ejercieran soberanía alguna, los cosacos más prósperos reivindicaban el derecho a cazar, pescar, poseer tierras, verse libres del pago de tributos externos, llevar armas y hacer la guerra por su cuenta. En Rusia y en Polonia, atribuirse ese tipo de derechos suponía autoproclamarse noble. Ello explica la actitud ambivalente de rusos y polacos frente a los cosacos: primero les alentaron a combatir a sus enemigos, luego intentaron subordinarlos a la autoridad nacional y una vez lo hubieron conseguido les negaron el reconocimiento de su singularidad. La colonización de las fértiles tierras ucranianas, que llevó a cabo Polonia en el siglo XVI para constituir explotaciones agrarias de titularidad aristocrática, generó una sucesión incesante de guerras e insurrecciones.

El gran levantamiento de los cosacos de 1648-1654 contra Polonia desembocó en la formación de una Ucrania nominalmente independiente gobernada por los cosacos y luego (cuando las fuerzas polacas comenzaron a ganar terreno) en un acuerdo entre rusos y cosacos por el cual Ucrania quedaba sometida a la soberanía rusa. En 1667, y después de nuevos enfrentamientos entre rusos, polacos y cosacos, ocurrió lo predecible: el reparto de Ucrania —y, por tanto, también de los cosacos— entre Rusia y Polonia, que a partir de entonces tendrían que hacer frente a la resistencia de los cosacos. Por ejemplo, la decisión de la asamblea nacional polaca (*Sejm*) de disolver el ejército cosaco autónomo en 1699 provocó una violenta rebelión en 1704. Todos estos conflictos armados se situaban en la frontera entre la guerra y la revolución.

La participación habitual de los cosacos en esos movimientos re-

CUADRO 6.1. Guerras internacionales en Rusia y regiones vecinas, 1492-1992.

1491-1502	Los tártaros de Crimea contra los tártaros de Kazán
1492-1494	Moscovia contra Lituania
1495-1496	Moscovia contra Suecia
1497-1499	Polonia-Lituania contra Moldavia y los turcos y tártaros
1500-1503	Moscovia y los tártaros contra Polonia-Lituania y Orden de Livonia
1506-1507	Moscovia contra los tártaros de Kazán
1507-1508	Polonia-Lituania y los tártaros contra Moldavia y Moscovia
1510	Moscovia contra Pskov
1512-1522	Guerra de la Rusia Blanca
1521-1524	Los tártaros de Crimea y Kazán y los cosacos contra Moscovia
1527-1531	Polonia contra Moldavia
1532-1533	El Sacro Imperio Romano contra Polonia-Lituania y Moldavia
1534-1537	Moscovia contra Polonia-Lituania y los tártaros
1547-1552	Moscovia contra Kazán
1552-1556	Conquista rusa de Kazán y Astracán
1554-1557	Moscovia contra Suecia
1557-1582	Guerra de Livonia
1563-1570	Dinamarca, Polonia y Lübeck contra Suecia
1569	Turquía contra Rusia en Astracán
1570	Moscovia contra Novgorod
1571-1572	Los tártaros de Crimea contra Moscovia
1578-1584	Moscovia contra los tártaros de Siberia
1583-1590	Guerra turco-polaca
1586-1587	Moscovia contra los tártaros de Siberia
1587-1588	Guerra austro-polaca
1591-1598	Los tártaros de Crimea contra Moscovia
1600	Polonia contra Moldavia y Valaquia
1600-1614	Polonia contra Suecia
1605-1606	Los tártaros de Crimea contra Moscovia
1611-1618	Polonia contra Rusia
1613-1617	Suecia contra Rusia
1616-1617	Polonia contra Turquía
1617-1618	Polonia contra Suecia
1618-1621	Guerra polaco-turca
1621-1622	Polonia contra Suecia
1625-1627	Turquía y los tártaros contra Polonia y Hungría
1625-1629	Polonia contra Suecia
1631-1634	Turquía y Tartaria contra Polonia y Hungría
1632-1634	Rusia contra Polonia
1632-1641	Crimea tártara contra Rusia
1637-1638	Los cosacos contra los tártaros de Crimea
1638	Dinamarca contra Polonia
1654-1656	Rusia y los cosacos contra Polonia
1658-1661	Transilvania contra Polonia, Tartaria y Turquía
1658-1668	Rusia y los cosacos contra Polonia
1672-1676	Turquía, Tartaria y los cosacos contra Polonia
1677-1681	Turquía y los cosacos contra Rusia
1682-1699	Turquía contra Austria, estados alemanes, Polonia, Venecia y Rusia
1687-1689	Rusia contra los tártaros de Crimea
1700-1721	Gran Guerra del Norte
1710-1711	Guerra ruso-turca
1716-1717	Rusia contra Khiva
1722-1724	Rusia contra Persia
1733-1735	Guerra de Sucesión polaca
1734-1739	Rusia y Austria contra Turquía
1740-1748	Guerra de Sucesión austríaca
1741-1743	Guerra ruso-sueca
1756-1763	Guerra de los Siete Años
1768-1772	Guerra de la Confederación de Bar
1768-1774	Guerra ruso-turca
1781-1782	Rusia contra Crimea
1787-1792	Guerra turca
1788-1790	Guerra ruso-sueca
1792-1793	Rusia y Prusia contra Polonia
1796-1797	Rusia contra Persia
1799-1801	Guerra de la Segunda Coalición
1803-1815	Guerras napoleónicas
1804-1813	Rusia contra Persia
1806-1812	Guerra ruso-turca
1808-1809	Guerra ruso-sueca
1821-1824	Intervención rusa en Moldavia, guerra de Valaquia contra el imperio turco
1821-1829	Intervención rusa en la guerra griega contra el imperio turco
1826-1828	Rusia contra Persia
1827	Batalla de la bahía de Navarino
1828-1829	Guerra ruso-turca
1832-1839	Rusia contra los circasianos
1839-1840	Rusia contra Khiva
1847-1853	Rusia contra los kazajos
1848	Intervención rusa en la guerra de Moldavia, Valaquia contra el imperio turco
1853-1856	Guerra de Crimea
1855-1859	Rusia contra los circasianos
1857-1858	Rusia contra Georgia
1864	Rusia contra Georgia
1865-1868	Rusia contra Bujara
1865-1869	Rusia contra Khokand
1873	Rusia contra Khiva
1873-1876	Rusia contra Khokand
1875-1878	Intervención rusa en Bosnia, rebelión búlgara contra el imperio turco
1877-1878	Guerra ruso-turca
1877-1881	Rusia contra los turcomanos
1904-1905	Guerra ruso-japonesa
1914-1918	Primera guerra mundial
1918	Guerra soviético-finlandesa
1918-1920	Guerra soviético-polaca
1919	Letonia, Estonia contra Alemania y Rusia
1919-1927	Guerra polaco-lituana
1938-1939	Guerra ruso-japonesa
1939-1940	Guerra soviético-finlandesa
1939-1945	Segunda guerra mundial
1956	Intervención soviética en Hungría
1979-1985	Intervención soviética en Afganistán

cuerda a los conflictos contemporáneos en las fronteras de América del Norte y del Sur, donde las potencias europeas tuvieron que hacer frente no sólo a la resistencia de las poblaciones indígenas, sino también a otras potencias que aspiraban a controlar el territorio y a grupos de disidentes de sus propias filas que aspiraban a establecer un poder autónomo. Los rusos recurrieron frecuentemente a los cosacos, que eran grandes guerreros, en el curso de su expansión hacia Siberia y hacia el sureste. Los cosacos se opusieron enérgicamente a que los rusos colonizaran los territorios que ellos les habían ayudado a conquistar, estableciendo en ellos a terratenientes y campesinos. Por otra parte, los sectores más pobres de la población cosaca, en los que se integraron elementos que huían de la situación de servidumbre imperante en otras zonas, intentaron asentarse y organizar explotaciones agrícolas, pero a ello se opusieron los cosacos más adinerados, cuya fuente de riqueza era la pesca y el pillaje y que temían que la expansión de la agricultura pudiera atraer a la aristocracia rusa, que impondría la servidumbre. Stenka Razin se convirtió en el cabecilla de un grupo de cosacos pobres a los que se apodaban «desnudos». La rebelión de Razin en 1670 estalló después de haber realizado varias expediciones de pillaje en Persia, adonde había llegado desde su base del Don atravesando el mar Caspio. Las tropas de Razin ocuparon Astracán, Saratov y Samara y se prepararon para avanzar sobre Moscú. En ese momento el zar envió un ejército hacia el Volga que derrotó a las fuerzas de Razin, el cual se vio obligado a huir. Finalmente, los jefes cosacos entregaron a Razin a los funcionarios moscovitas, que lo ejecutaron en Moscú.

Los enfrentamientos entre los cosacos y el expansionista imperio ruso continuaron durante un siglo más. En 1707-1708 Kondrat Bulavin se decidió a emular a Stenka Razin, se puso al frente de aquellos cosacos que se sentían exasperados por la miseria y se enfrentó a sus vecinos más acomodados y a las tropas que Pedro el Grande había enviado al Don. Los calmucos ayudaron a las fuerzas imperiales para derrotarle. En 1773-1775, el cosaco Emelian Pugachev se hizo reconocer como el zar Pedro III, defensor de los oprimidos, incluidos los viejos creyentes, afirmando que había sobrevivido milagrosamente pese a que todos le creían muerto. Pugachev provocó una gran sublevación en la que participaron cosacos, bashkir, viejos creyentes, pequeños campesinos y siervos que trabajaban en las fábricas y en las gran-

CUADRO 6.2. Situaciones revolucionarias en los estados rusos, 1492-1992.

1537	Rebelión de la nobleza en Polonia
1577	Polonia contra Danzig
1591-1593	Rebelión cosaca contra Polonia
1597-1599	Rebelión cosaca contra Polonia
1598-1599	Rebelión polaca, intervención sueca
1598-1613	Época de revueltas: rebelión moscovita, intervención de Polonia, Suecia y los cosacos
1606-1608	Rebelión de la nobleza en Polonia
1630	Rebelión cosaca contra Polonia
1637-1638	Rebelión cosaca contra Polonia
1648-1654	Rebelión cosaca contra Polonia, intervención tártara
1650	Novgorod y Pskov contra Rusia
1664-1666	Revuelta Lubomirski contra Polonia
1667-1671	Los cosacos (Stenka Razin) contra Rusia
1668	Rebelión cosaca contra Polonia e intervención tártara
1674-1681	Rebelión bashkir contra Rusia
1682	Rebelión de Streltsy en Moscú
1699	Los campesinos lituanos contra Polonia
1705-1711	Rebelión bashkir contra Rusia
1707-1708	Rebelión de Bulavin (cosaco) contra Rusia
1734	Rebelión cosaca contra Polonia
1735	Rebelión bashkir contra Polonia
1751-1753	Revuelta campesina en Rusia
1754-1755	Rebelión bashkir contra Rusia
1768-1769	Insurrección haidamak contra Polonia en Ucrania
1768-1771	Guerra civil polaca (intervención rusa, francesa y austríaca)
1773-1775	Revuelta de Pugachev contra Rusia
1794-1795	Rebelión polaca
1830-1831	Rebelión polaca
1863-1864	Rebelión polaca
1905	Revolución rusa
1916	Kirghiz contra Rusia
1917	Revolución rusa
1917-1921	Guerra civil rusa, amplia intervención internacional
1990-1991	Separación de repúblicas de la Unión Soviética

des propiedades que se estaban formando en el sureste. El programa de Pugachev, que propugnaba la liberación del campesinado, atribuyó rasgos de excepcionalidad a su revuelta, pero reforzó también la determinación de Catalina la Grande de exterminarlo. Al fracasar la sublevación, los cosacos trataron de salvarse entregando a su jefe a las tropas imperiales. Finalmente, Pugachev fue ejecutado en Moscú en 1775. Al mismo tiempo, los bashkir se resistieron una y otra vez frente a los intentos de los rusos por sojuzgarlos. Durante el siglo XVIII, Polonia también afrontó movimientos de resistencia parecidos, protagonizados por los cosacos y los haïdamak.

En definitiva, tanto Rusia como Polonia hubieron de sofocar constantes sublevaciones en sus fronteras hasta bien entrado el siglo XVIII, pero por otra parte también se vieron afectadas por violentas rebeliones en zonas más próximas al centro del Estado. Por ejemplo, en 1537, la pequeña nobleza polaca, que gozaba de una situación cada vez más próspera, se levantó en armas contra la pretensión del monarca Segismundo I el Viejo de mantener ejércitos controlados directamente por la monarquía en el conflicto contra Moscovia y le obligó a confirmar la constitución *Nihil novi*, que garantizaba que el gobierno polaco no emprendería reforma alguna que no estuviera totalmente respaldada por la Cámara de Diputados de la nobleza, que era el elemento cada vez más decisivo del *Sejm*. Como la Cámara de Diputados había adoptado el *liberum veto*, que exigía el consentimiento unánime para cualquier medida propuesta por el monarca, el decreto antes aludido paralizaba cualquier posible reforma. La rebelión victoriosa de la nobleza debilitó aún más a la corona, lo cual acentuó las diferencias entre la centralización de Rusia y la descentralización de Polonia.

El proceso de centralización de Rusia entrañó no pocos conflictos. La gran crisis del siglo XVI culminó en la célebre época de las perturbaciones (1598-1613). Las exacciones tributarias y el reclutamiento obligatorio, necesarios para la larga guerra contra Livonia (1557-1582), habían desangrado a las pequeñas aldeas campesinas, muchos de cuyos habitantes habían escapado para intentar encontrar nuevas tierras en el sureste. A su vez, la huida del campesinado hizo disminuir los ingresos de la gran nobleza (boyardos), que se agitaron exigiendo compensaciones y una política de represión. Durante el régimen del inepto Fedor I (1584-1598) los regentes sucesivos, Nikitin Romanov y Boris Godunov, hubieron de rechazar los asaltos al poder de las grandes

familias de los Belsky, Shuisky y Mstislavsky, a muchos de cuyos miembros Godunov hizo ejecutar o exiliar. Cuando Fedor murió sin dejar heredero, se produjo la abdicación de la zarina Irene, lo cual desencadenó una aguda crisis sucesoria. Después de intensas negociaciones y gracias al apoyo del Zemsky Sobor (que equivalía aproximadamente a los Estados Generales de los países europeos, aunque no tenían la larga tradición de estos últimos) Godunov fue elevado al trono. Los boyardos pasaron a la oposición cuando Godunov organizó una persecución preventiva y punitiva sin conseguir eliminar su influencia política.

En el mismo período, la sucesión de cosechas desastrosas provocó la formación de bandas campesinas, desencadenó luchas en las ciudades por el aprovisionamiento de alimentos y permitió que apareciera un nuevo pretendiente al trono (el falso Dimitry, que se presentó como el hijo de Iván IV cuyo asesinato había sido instigado probablemente por Godunov en 1591) con el apoyo militar de los boyardos y la nobleza polaca. Dimitry fue el primero en una larga serie de pretendientes al trono durante el siglo XVII. Muchos súbditos descontentos con la actuación del zar, entre otros los cosacos del Donetz, se unieron al ejército de los aspirantes al trono en su avance hacia Moscú. Cuando murió en 1605, Boris Godunov se enfrentaba a la desintegración de su propio ejército y a los ataques de sus enemigos. El pretendiente consiguió ser nombrado zar pese a que eran muchos los que estaban convencidos de la falsedad de sus credenciales.

Pero el reinado del zar Dimitry fue verdaderamente efímero, pues los boyardos se sublevaron en 1606, le dieron muerte, quemaron su cadáver y, para mayor seguridad, introdujeron sus restos en un cañón y lo dispararon. Aunque Basil Shuisky reclamó el trono, sus pretensiones encontraron una gran resistencia y se produjeron violentas sublevaciones por todo el imperio. En un momento determinado, un ejército rebelde acaudillado por un antiguo siervo, Iván Bolotnikov, amenazó Moscú pero luego hubo de replegarse a Tula, donde fue derrotado por Shuisky. Un segundo falso Dimitry avanzó también hacia Moscú al frente de un ejército, pero con menos éxito que el primero.

La intervención de Shuisky para restablecer el control precipitó la guerra, la intervención polaca y el advenimiento de la dinastía de los Romanov, de larga vida. Shuisky consiguió el apoyo militar de Carlos IX de Suecia a cambio de renunciar a las reivindicaciones sobre

Livonia y esto, a su vez, provocó el enfrentamiento con Polonia. Los ejércitos polacos tomaron Moscú, donde un consejo de boyardos reconoció como zar al rey polaco Segismundo, y varios sectores del imperio fueron a parar a manos de los suecos, los cosacos y los polacos. Sin embargo, los cosacos y algunos sectores de la población urbana, encabezados por el clero, organizaron un ejército para hacer frente a los conquistadores polacos de Moscú y consiguieron sus propósitos. En 1613 el Zemsky Sobor eligió un nuevo zar en la persona de Miguel Romanov. El zar Miguel heredó la tarea de apaciguar a los boyardos (diezmados después de quince años de guerra civil), expulsar a los suecos y polacos y restablecer el poder imperial. A grandes rasgos, el eje de su política y de la de sus sucesores fue la de hacer a la nobleza nuevas concesiones de poder sobre el campesinado a cambio de su cooperación militar y administrativa con la corona.

Cada sucesión difícil era una nueva oportunidad de que se produjeran situaciones revolucionarias. Los *streltsy* (o «mosqueteros») constituían una infantería de elite acantonada en Moscú y otras grandes ciudades y complementaban sus escasos ingresos desempeñando otros empleos en la vida civil. A la muerte del zar Fedor en 1682, cuando sólo contaba veintidós años de edad, la nobleza y el patriarca ortodoxo ignoraron los derechos de su hermana Sofía y de su hermano Iván en favor de su hermanastro Pedro, que a la sazón tenía diez años de edad. Sin embargo, Sofía se alió con los *streltsy*, en cuyas filas reinaba un gran descontento, y atacó el palacio imperial imponiendo el nombramiento de Iván como zar y su presencia como regente. A continuación, los *streltsy* no sólo insistieron en que el gobierno atendiera las quejas de los disidentes religiosos, los viejos creyentes, sino que comenzaron a prepararse para utilizar la fuerza en la conquista del poder. Ello llevó a Sofía a romper la alianza y a recurrir al ejército y a las tropas imperiales para prevenir el posible golpe de estado. Sofía gobernó en nombre de su hermano durante siete años.

Mientras tanto, su joven y brillante hermano Pedro se aproximaba a la mayoría de edad y se dispuso a perpetrar su propio golpe de estado. Los colaboradores de Sofía conspiraron para darle muerte antes de que pudiera cumplir sus designios, pero Pedro consiguió abortar la conspiración. En 1689 sus seguidores (entre los cuales figuraban, naturalmente, miembros de las grandes familias nobiliarias) encarcelaron a Sofía y elevaron al trono a su candidato. El nuevo monarca habría de ser uno de los zares más influyentes de la historia rusa: Pedro el Grande. Gobernó hasta 1725, y aunque se vio obligado a sofocar virulentas rebeliones de los cosacos y los bashkir en las fronteras del imperio no tuvo que hacer frente a sublevaciones internas, si se exceptúa un nuevo intento de los *streltsy* en 1698. Por otra parte, todo su reinado fue una continua sucesión de guerras exteriores, con los turcos, los suecos y los persas, por no hablar de los guerreros de Khiva y Bujara en Asia central. La expansión de la capacidad militar del Estado en tiempos de Pedro el Grande fue un incentivo para que se produjeran rebeliones internas, pero redujo sus perspectivas de éxito.

En muchos sentidos, las insurrecciones de los siglos XVII y XVIII fortalecieron a la monarquía rusa y debilitaron a la corona polaca. Para explicar ese fenómeno hay que tener en cuenta dos factores esenciales: en primer lugar, durante esos dos siglos, los zares rusos siempre sofocaron con éxito las rebeliones y aprovecharon la ocasión para diezmar a sus potenciales oponentes, mientras que en Polonia los insurrectos fueron ganando terreno en todo momento mediante alianzas con sectores de la nobleza y gracias a las concesiones de la corona. En segundo lugar, la suerte de la nobleza rusa estaba indisolublemente ligada a la del zar, mientras que en Polonia la aristocracia no cejaba en su esfuerzo de incrementar sus privilegios y limitar el poder central. No puede afirmarse que los aristócratas rusos poseyeran una altura de espíritu de la que carecían sus homónimos polacos; antes bien, el control del comercio cerealístico de que disfrutaban los nobles polacos ponía en sus manos un poder que sin duda habría suscitado la envidia de sus iguales rusos. En ambos casos, la mayor parte de las rebeliones se produjeron en territorios disputados, situados en la periferia del imperio. Como fruto de procesos tan dispares, el Estado ruso se expandió en el siglo XVIII y el Estado polaco desapareció.

Con todo, el imperio ruso, sustentado en el principio de la aristocracia zarista, fue siempre vulnerable a posibles golpes de estado de los miembros del círculo dirigente cuando surgían problemas sucesorios. No sólo se multiplicaban los aspirantes al trono a la muerte del zar o de la zarina, sino que la gran nobleza y algunas unidades militares de elite como la guardia imperial (cuyos oficiales, *noblesse oblige*, procedían de las filas de las grandes familias) conspiraban constantemente para situar a sus candidatos en el trono imperial. A la muerte de Pedro el Grande, la guardia imperial entregó el poder a una

junta formada por nobles de nuevo cuño creados por el zar, que gobernó en nombre de la viuda de Pedro, Catalina, y luego de su heredero, Pedro II. La guardia y los magnates de la nobleza intervinieron también cuando murió Pedro II antes de ser coronado, en 1730, aupando al trono a la sobrina de Pedro I, Ana.

Nuevamente en 1742, una coalición entre la guardia imperial y la alta nobleza otorgó la corona a la hija de Pedro I, Isabel, y a la muerte de ésta en 1762, los oficiales se rebelaron contra el sucesor designado, Pedro III, y situaron en el trono a la zarina Catalina II. Ésta reinó hasta 1796, mereciendo el apodo de Catalina la Grande por su energía, inteligencia y longevidad. Luego, tras cinco años de lucha con la gran nobleza, su hijo y sucesor Pablo perdió la vida durante un golpe de estado que contó con el consentimiento de su sucesor, Alejandro I. En definitiva, durante el siglo XVIII se dio en el imperio una sorprendente combinación de factores: la expansión militar, la consolidación administrativa, la intervención del Estado, la existencia de soberanos de gran altura y una gran vulnerabilidad en cada sucesión al trono.

En el siglo XVIII, este problema fue aún más grave en Polonia, donde eran siempre los magnates y los potentados extranjeros, naturalmente también el monarca ruso, quienes intervenían para elegir al nuevo rey. Los monarcas polacos del siglo XVIII fueron Augusto, elector de Sajonia, que derrotó al príncipe francés de Conti en la lucha por el trono, el adinerado aristócrata polaco Estanislao Lesczynski, perteneciente a una rancia familia nobiliaria, Augusto III, hijo del antiguo elector, y Estanislao Poniatowski, candidato de Catalina la Grande, que prevaleció sobre la familia Czartoryski, cuya oposición hubo de soportar durante todo su reinado. Por otra parte, Rusia desempeñó el papel de protectora de los polacos de religión ortodoxa, de la misma forma que Prusia manifestó un interés especial hacia los protestantes de Polonia. Como la corona polaca defendía los derechos de su propia Iglesia Uniata (de ritual ortodoxo pero ligada a Roma) los dos protectores tenían razones para alarmarse. En cualquier caso, la guerra civil de 1768-1771, durante la cual una confederación nobiliaria formada en la ciudad de Bar se levantó contra el rey, que aspiraba a fortalecer la corona, desencadenó (o al menos justificó) una ulterior intervención de Prusia, Rusia y Austria. En ese proceso, Polonia perdió importantes territorios en el norte, el este y el sur, territorios

que incluían una gran parte de Pomerania, la Pequeña Polonia, Rutenia, Bielorrusia, Livonia y Vitebsk. En ese momento, Rusia dominaba la Europa oriental.

Polonia experimentaría nuevas pérdidas como consecuencia de la intervención rusa. En 1791, y ante la insistencia del monarca, el Sejm de Polonia aprobó una constitución centralizadora que inmediatamente fue rechazada por una parte de la nobleza. Los líderes de la aristocracia, organizados en la confederación de Targowica, invitaron a Catalina de Rusia a acudir con sus tropas. Esta no se hizo de rogar, ocupó Varsovia y derrotó a los débiles ejércitos de la corona. El rey Estanislao dio su apoyo a la confederación conservadora. Esa breve guerra civil desembocó en el segundo reparto de Polonia entre Rusia, Prusia y Austria, en 1793. Poco después, Thaddeus Kosciuszko (un veterano de la guerra revolucionaria norteamericana) se puso al frente de un ejército reorganizado para defender la frustrada constitución, que acababa de ser abolida por los atemorizados miembros del Sejm. En nombre de la nación, las fuerzas rebeldes declararon valientemente (pero en vano) la guerra a Prusia y Rusia. Los ejércitos de estos dos países no tardaron en responder derrotando a los polacos y sitiando a Kosciuszko. Esta vez, el tercer reparto de Polonia entre Austria, Prusia y Rusia puso fin a la existencia del país como territorio independiente. Polonia perduró únicamente como un recuerdo, un programa nacionalista y un conjunto de subdivisiones administrativas pertenecientes a los imperios vecinos.

La consolidación del siglo XIX

En el curso del proceso que se ha descrito, Rusia se implicó mucho más intensamente en los avatares políticos de Europa occidental. Las guerras napoleónicas llevaron a Rusia a participar intensamente en los asuntos de Europa occidental y a los europeos occidentales a intervenir en la política rusa. Por ejemplo, el duque de Richelieu fue primero un oficial del ejército ruso y gobernador general de la Rusia meridional para luego ser nombrado primer ministro de Luis XVIII durante la Restauración, cuando los rusos ocupaban Francia. Además, durante la ocupación, una serie de oficiales rusos francófonos establecieron lazos duraderos con el mundo de los salones parisienses,

además de introducir en el vocabulario de la lengua francesa el término ruso *bistro*, «rápidamente». Con la excepción importante de la guerra de Crimea, que enfrentó de nuevo a Rusia con Francia, los ejércitos rusos no lucharon contra los de Europa occidental en el siglo XIX, siendo en cambio el ariete que golpeó en las provincias septentrionales del imperio turco. Mientras las potencias de Europa occidental conseguían colonias en ultramar, Rusia concentró toda su actividad bélica en la extensión de sus fronteras hacia el sur y el este.

No se podría afirmar que la trayectoria histórica de Rusia y de la fantasmal Polonia estuvieran impregnadas de serenidad durante el siglo XIX, pero lo cierto es que las situaciones claramente revolucionarias fueron escasas a partir de 1775. De hecho, desde esa fecha y hasta 1905, las únicas situaciones revolucionarias importantes fueron las insurrecciones polacas contra la autoridad rusa en 1794-1795, 1830-1831 y 1863-1864. El intento de golpe de estado que llevaron a cabo los oficiales rusos en diciembre de 1825 ha sido objeto de atención, porque en él participó una sociedad secreta de aristócratas reformistas, pero en realidad la revuelta se redujo a algunos breves enfrentamientos en San Petersburgo y Kiev. Como había ocurrido a lo largo del siglo XVIII, la revuelta decembrista se produjo durante un interregno. Tras la súbita muerte de Alejandro I, su hermano y sucesor designado Nicolás dudó en asumir el trono debido a su manifiesta impopularidad entre los oficiales del ejército, quienes antes de la entronización de Nicolás se levantaron en armas en favor de su hermano Constantino, que recibió con poco entusiasmo esa iniciativa. Este fue el último intento serio de la nobleza y del cuerpo de oficiales por hacerse con el poder con ocasión de una sucesión contestada. Como muchos de sus antepasados, Alejandro II moriría asesinado en 1881, pero las bombas que acabaron con su vida no fueron lanzadas por aristócratas, sino por unos activistas populistas.

Por su parte, los patriotas polacos buscaban ansiosamente signos de debilidad en el gobierno ruso. La primera gran rebelión de Polonia en el siglo XIX se produjo en 1830, cuando el reaccionario Nicolás I proyectó enviar un ejército polaco para sofocar revoluciones que habían estallado en Bélgica y Francia. Desde el final de las guerras napoleónicas existían en Polonia sociedades liberales que conspiraban activamente. Cuando Nicolás I ordenó la movilización, los miembros de las mencionadas sociedades ya estaban planeando una insurrección, que habría de comenzar con el levantamiento de la infantería de Varsovia. Tuvieron, pues, que atacar antes de haber completado los preparativos. La infantería atacó el palacio del gran duque (el hermano de Nicolás, Constantino) y consiguió un importante apoyo popular. Los rebeldes lograron establecer un consejo administrativo y luego un gobierno provisional, que decretó el destronamiento de los Romanov. Sin embargo, el régimen revolucionario se derrumbó tras seis meses de lucha con las tropas rusas y después de que hubiera habido una presión diplomática internacional en favor de los polacos e incesantes maniobras entre las diversas facciones polacas. Rusia restableció el control e integró a Polonia mucho más estrechamente en su propio sistema administrativo.

Pese a que se formaron comités nacionales y estallaron revueltas esporádicas en los sectores austríaco y prusiano del antiguo territorio polaco, durante las revoluciones de 1848 no hubo una acción colectiva popular importante en la Polonia rusa. Alejandro II de Rusia (1855-1881), que accedió al trono cuando se estaba librando la desastrosa guerra de Crimea, llevó a cabo una intensa actividad liberalizadora, en el curso de la cual decretó la abolición de la servidumbre en Rusia, en 1861, y restableció algunas de las libertades polacas, en 1862. Mientras los moderados polacos colaboraban con el programa del zar, los nacionalistas activos (los rojos) planteaban nuevas exigencias, especialmente reformas agrarias. El gobierno de Alejandro II decidió reclutar activistas —en su gran mayoría estudiantes— para el ejército ruso. La nueva orden de movilización desencadenó la rebelión de enero de 1863, con escasa participación de la nobleza. La insurrección tenía una amplia base popular y también participaron en ella algunos miembros de la *intelligentsia*, pero carecía de un mando militar central. Ello permitió a los ejércitos rusos sofocar las protestas tras quince meses de guerra de guerrillas. Rusia llevó a cabo una represión aún más dura que en 1831.

En cuanto a la propia Rusia, en el siglo XIX, fue un hervidero de ideas y conspiraciones revolucionarias, pero ninguna de ellas dividió al país como había ocurrido durante las crisis sucesorias anteriores. La represión y la censura permitieron durante algún tiempo neutralizar a la nobleza con aspiraciones de poder, contener a los cosacos y a las numerosas minorías que se incorporaban al imperio, fragmentar al campesinado y reducir a la *intelligentsia* al silencio o a la mera actividad conspiratoria. Como en otros escenarios donde los agravios

son profundos, la represión intensa y la organización disidente débil, la oposición al régimen de las zonas urbanas comenzó a perpetrar asesinatos y actos terroristas contra la propiedad. Esos actos terroristas ponían de relieve la vulnerabilidad del régimen y permitían evitar el enfrentamiento directo con las autoridades.

Es cierto que los ataques del campesinado contra los señores y los funcionarios se hicieron cada vez más frecuentes, especialmente tras la emancipación de 1861, pero ni siquiera los más decididos rebeldes campesinos convergieron en grandes rebeliones regionales, ni se aliaron con otros grupos de disidentes que contaban ya con una estructura nacional de comunicación ni consiguieron hacerse con arsenales de armas importantes. Las esperanzas de los conspiradores se vieron frustradas cuando el asesinato de Alejandro II en marzo de 1881 no consiguió hacer estallar una revolución popular. Al contrario, desencadenó una actividad represiva sin precedentes con medidas tales como leyes de asentamiento y pogroms impulsados por el gobierno, que eliminaron los derechos, y muchas veces la vida, de los judíos rusos.

Las reformas de Alejandro II no consiguieron los objetivos previstos por los asesores del zar, pero tuvieron profundas repercusiones sobre la política rusa a partir de 1860. Hicieron avanzar a Rusia por la senda del gobierno directo al eliminar el poder administrativo de la nobleza y crear instituciones alternativas en contacto directo con los funcionarios del Estado de mayor rango. La abolición de la servidumbre significó la liberación de trabajadores de las unidades familiares (cuyos dueños los alquilaban muchas veces como mano de obra a las fábricas y talleres) carentes de tierra. A los campesinos se les dio la oportunidad de comprar la mitad de la tierra que cultivaban, no en su propio nombre, sino en el de una comuna, que, bajo la supervisión de representantes del Estado, controlaba el uso de la tierra y la redistribuía periódicamente según el tamaño de cada unidad familiar. Con la creación de las asambleas regionales, *zemstvo*, se puso en marcha un sistema semirrepresentativo y la reorganización de los tribunales permitió reforzar y completar el sistema judicial, tanto a nivel local como nacional. La creación de las comunas, de las asambleas regionales y de nuevos tribunales supuso la existencia de una nueva base para la intervención directa en los asuntos de la vida local de arriba abajo y para la movilización política de abajo arriba. Pero el hecho de que los terratenientes conservaran intacto su poder, siendo propietarios en muchos casos de hasta la mitad de las tierras de las comunas (tierras que trabajaban antiguos siervos a cambio de míseros salarios), alimentó frecuentes conflictos locales.

El período de cinco lustros posterior al asesinato de Alejandro II, que corresponde a los reinados de Alejandro III y Nicolás II, estuvo presidido por grandes contradicciones: por una parte, una rápida industrialización, un veloz crecimiento demográfico, una vigorosa urbanización, una amplia proletarización de la población rural y la movilización política a través de los *zemstvo* y las universidades; por otra, la acentuación de la represión y la censura, la limitación del poder de los *zemstvo*, la asimilación forzosa de las minorías étnicas y religiosas y la concesión de nuevos privilegios a la nobleza. Esas dos corrientes confluyeron para hacer surgir un torrente embravecido.

En los últimos años del decenio de 1890, los estudiantes, el campesinado y luego los trabajadores desafiaron repetidamente al Estado. Entre 1899 y 1901, los enfrentamientos entre los estudiantes y las autoridades del gobierno en las universidades de San Petersburgo y Kiev provocaron huelgas y manifestaciones estudiantiles a nivel nacional que culminaron con el asesinato del ministro de Educación. En 1902 grupos de campesinos atacaron diversas propiedades aristocráticas en 175 comunas de Ucrania y las autoridades zaristas respondieron encarcelando a 837 campesinos e imponiendo a las aldeas responsables una multa colectiva de 800.000 rublos (Shanin, 1986, II, p. 11). En 1903 se produjo en el sur de Rusia una oleada de huelgas industriales con participación masiva de trabajadores, que concluyó con la ocupación de los campos petrolíferos por el ejército. Estas huelgas sirvieron para incrementar el número de trabajadores acusados de «crímenes contra el Estado», número que se duplicó entre 1884-1890 y 1901-1903, y el porcentaje de acusados que no eran trabajadores agrícolas pasó del 17,2 al 50,3 por 100 (Shanin, 1986, II, pp. 25-26). No sólo la *intelligentsia*, sino también el campesinado y la clase obrera estaban adoptando una postura de oposición frontal al régimen.

Las perspectivas revolucionarias

En 1872, once años después de la abolición de la servidumbre y ocho años después de la creación de los *zemstvo* y de la implantación de las reformas judiciales, el intelectual francés de tendencia liberal Ana-

tole Leroy-Beaulieu realizó el primero de sus múltiples viajes a Rusia para llevar a cabo un estudio de la vida política y social rusa, que publicaría primero en diversos números de la *Revue des Deux Mondes* y luego en forma de libro, que tituló *L'Empire des tsars et les Russes* (tres volúmenes que aparecieron entre 1881 y 1889). Durante sus estancias en Rusia, el visitante francés fue testigo de una terrible guerra ruso-turca, de la implantación del servicio militar obligatorio, del desarrollo de los sindicatos, huelgas, y asociaciones revolucionarias, de constantes ataques contra los funcionarios del Estado e incluso del asesinatos del zar Alejandro; en definitiva, continuos conflictos internos y un terreno abonado para que siguieran produciéndose. Además, mientras se estaban publicando los libros que contenían sus impresiones, contempló también la masiva represión que fortalecería aún más la oposición al régimen de los elementos revolucionarios y reformistas. Ahora bien, si su análisis incorporaba una teleología, no era esta la teleología de la revolución, sino la del individualismo liberal.

Al igual que muchos observadores de la actualidad, Leroy-Beaulieu destacaba como elemento esencial para el presente y el futuro de Rusia los obstáculos a la liberalización que suponían la existencia de una burocracia recalcitrante, un sistema de comunas rurales (*mir*) que impedía al campesinado el uso racional de la tierra, la discriminación religiosa y las deficiencias en materia de libertades civiles. Anticipándose a los observadores de la década de 1990, para quienes la desaparición del partido comunista fue el comienzo de un largo y peligroso proceso de reajuste, Leroy-Beaulieu consideraba que la abolición de la servidumbre había sido un primer paso necesario hacia la consecución de una sociedad más progresista, pero que hacía más urgente la reorganización de las instituciones económicas y políticas. Reflejó, además, el rápido desarrollo del individualismo y la industrialización en Rusia, que aproximaban aceleradamente al país al modelo de Europa occidental. Leroy-Beaulieu murió en 1912, tras haber conocido la revolución de 1905 (de hecho, estuvo presente en la *Duma* de 1906) pero no vivió para ser testigo de la primera guerra mundial y de las revoluciones de 1917.

De cualquier forma, Leroy-Beaulieu captó perfectamente la fuerza del radicalismo ruso y la posibilidad de que se produjeran estallidos revolucionarios: «El factor que más ha fomentado el radicalismo es la represión moral y la pobreza intelectual inherentes al régimen político» (Leroy-Beaulieu, 1990, p. 827). Sin embargo, como creía posible que la *intelligentsia* se aliara con los trabajadores y los campesinos, vaticinaba que la revolución popular adoptaría un aspecto totalmente distinto. Dada la influencia del *mir*, se produciría en forma de una brutal venganza:

> En ese socialismo agrario, las provincias vivirían de nuevo la sangrienta *jacquerie* de Pugachev. Probablemente, si la revolución estallara en ese pueblo, que es el más ignorante y crédulo de Europa, la barbarie superaría todos nuestros Terrores y Comunas (p. 841).

Basándose en el modelo revolucionario francés, Leroy-Beaulieu apuntaba las razones por las que creía que no se produciría una revolución popular: el imperio era demasiado extenso, la población estaba demasiado dispersa, la burocracia era demasiado fuerte, el número de grandes ciudades era demasiado escaso y en la capital no existía un populacho levantisco (p. 843). Más sorprendentemente, sustentaba la teoría de que una serie de revoluciones nacionalistas pudieran agrupar a los elementos heterogéneos del imperio ruso en una federación, tal vez incluso dependiente de los Estados Unidos (pp. 865-868). Finalmente, contemplaba la posibilidad de que se produjera una revolución liberal desde arriba que impidiera el estallido de una revolución reaccionaria desde abajo, mucho más peligrosa:

> Occidente conoció su revolución, que fue la revolución francesa, y todos los pueblos germánicos y latinos experimentaron su influencia en mayor o menor grado, adoptaron sus doctrinas y experimentaron los efectos de sus aspectos positivos y negativos. Nuestra revolución fue la redención de la vieja Europa feudal. Pero puede afirmarse que la Europa oriental patriarcal, el mundo eslavo ortodoxo espera todavía su revolución o lo que ocupe su lugar. ¿Dónde se producirá, si no es en Rusia? Considerada desde ese punto de vista, la revolución rusa podría ser el acontecimiento histórico más importante desde la revolución francesa, y el complemento de la misma en el otro extremo de Europa (p. 890).

Leroy-Beaulieu escribía estas palabras hacia 1880, dos decenios antes de que estallara la revolución rusa en 1905.

¿Qué razones había en la Rusia de 1880 para esperar una posible revolución, del tipo que fuera? Eran las mismas a las que se había referido Tocqueville con respecto a la Francia del Antiguo Régimen: que el imperio se había enajenado en gran medida el apoyo de su principal sostén, la nobleza, sin crear una base alternativa de apoyo político; que la abolición de la servidumbre había estimulado a la nobleza a disolver los vínculos de obligación y control, si no de explotación, con un campesinado en rápido proceso de proletarización; que el campesinado, el sector más numeroso de la población rusa, experimentaba cada vez más fuertes agravios contra la aristocracia y el gobierno; que en San Petersburgo y en Moscú se estaban constituyendo un proletariado industrial y una burguesía que veía con malos ojos la restricción de las libertades civiles por parte de la autoridad; que una vasta, aunque mal organizada, red de asociaciones revolucionarias estaba integrando a una gran parte de la *intelligentsia* y a algunos representantes de las antiguas clases dirigentes. En definitiva, estaban tomando forma las condiciones inmediatas para el estallido de situaciones revolucionarias: 1) la formación de facciones enfrentadas con aspiraciones, incompatibles entre sí, al poder del Estado; 2) el apoyo de dichas aspiraciones por un sector significativo de la población; 3) la incapacidad —o falta de voluntad— de quienes controlan el poder para suprimir la coalición alternativa y/o quienes apoyan sus pretensiones. En ese conjunto de condiciones faltaba especialmente un acontecimiento de tal naturaleza que debilitara y desacreditara al Estado, haciendo que la alternativa revolucionaria no sólo se considerara deseable sino factible.

En general, tres factores adicionales favorecen las condiciones inmediatas de las situaciones revolucionarias: una discrepancia creciente entre las exigencias de los gobernantes con respecto a sus súbditos mejor organizados y su capacidad de hacer cumplir dichas exigencias; el ataque contra determinadas identidades y sus privilegios en el seno de la población; y la pérdida de poder por parte de los gobernantes ante la existencia de una oposición bien organizada. Esos tres factores estaban presentes en la Rusia de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. La guerra de Crimea y los conflictos con los turcos y japoneses llevaron al Estado a intensificar las exacciones tributarias y el reclutamiento obligatorio, y tras el asesinato de Alejandro II se acentuó la represión, pero al enajenarse el apoyo de la nobleza el Estado perdió parte de su capacidad de control. Por otro lado, se efectuaron ataques concretos contra determinadas identidades tanto en las regiones no rusas del imperio como en la propia Rusia (en forma de persecución de los judíos). Además, la transformación más evidente fue la pérdida de capacidad por parte del Estado.

El factor que arrojó a Rusia al precipicio fue su espectacular derrota en dos guerras, la primera con Japón y la segunda con una coalición formada en torno al imperio alemán. No fue el estallido de dichas guerras, sino su resultado final el que produjo el hundimiento del Estado zarista.

La revolución de 1905

Es fácil dejarse llevar por la tentación de considerar la revolución rusa de 1905 como un mero preludio de las revoluciones de 1917, pero si éstas no hubieran ocurrido es muy posible que en los manuales de historia de Rusia 1905 fuera considerada como una fecha trascendente. La guerra y la revolución de 1904-1906 señalaron los límites de la expansión imperial rusa, pusieron en evidencia la vulnerabilidad del Estado zarista, consagraron el protagonismo de la clase trabajadora, instituyeron el soviet como forma de gobierno revolucionario, consagraron la huelga general como un medio eficaz de lucha contra el Estado, identificaron a los bolcheviques, mencheviques y social-revolucionarios como fuerzas capaces de desafiar la estructura vigente de poder, crearon una especie de asamblea nacional en sustitución del Zemsky Sobor, que sólo se había reunido de forma ocasional y estimularon el proceso hacia el establecimiento del capitalismo pleno.

El origen inmediato de la revolución de 1905 hay que buscarlo en la expansión imperial y en la derrota bélica. En las postrimerías del siglo XIX, las fuerzas imperiales rusas estaban empeñadas en diversos frentes: profundizaban su avance en Asia, construían el ferrocarril transiberiano, luchaban en Afganistán, ocupaban posiciones en la frontera septentrional con China, penetraban en Manchuria y amenazaban Corea. En definitiva, trataban de ocupar un espacio cuyo control se disputaban también un Japón expansionista y una China debilitada. Rusia, aplicando el principio clásico de divide y vencerás, estableció una alianza poco firme con China contra Japón, al tiempo que

cooperaba con Alemania y Gran Bretaña para penetrar en China. El impulso de Rusia hacia el Pacífico chocó frontalmente con los esfuerzos de Japón de conseguir un imperio asiático y el resultado fue la guerra entre las dos potencias. Ante la sorpresa no sólo de Rusia sino también de otros países europeos, la flota japonesa derrotó a la marina rusa. Esto desacreditó al gobierno de Moscú y, al mismo tiempo, se produjo el asesinato de ministro del Interior Plehve a manos de elementos revolucionarios, se reunió un congreso nacional de *zemstvo* para pedir una asamblea nacional y reclamar una serie de libertades civiles y todas las regiones del país exigieron al gobierno medidas liberalizadoras.

El 22 de enero de 1905 —un domingo sangriento— tropas zaristas dispararon contra una multitud de trabajadores, encabezada por el sacerdote ortodoxo Gapon, que se dirigía a presentar una serie de peticiones al zar. El movimiento de protesta se generalizó, acompañado de numerosas huelgas. En el ejército y en la flota se produjeron sendos motines, las provincias no rusas exigieron con más fuerza su autonomía y los campesinos volvieron a atacar a sus señores, hasta que en octubre de 1905 una gran huelga general paralizó gran parte de la Rusia europea. En San Petersburgo se formó un soviet de trabajadores para coordinar la huelga. Las concesiones realizadas por el zar, que decretó primero el establecimiento de una asamblea consultiva (Duma) y concedió más tarde otras instituciones representativas y libertades civiles, sofocó en parte este movimiento de oposición. Al mismo tiempo, se hizo evidente que los socialdemócratas (tanto los mencheviques como los bolcheviques) eran los enemigos más acérrimos del Estado. A la medida del primer ministro Witte de arrestar al soviet de San Petersburgo respondieron los trabajadores de Moscú enfrentándose a las tropas imperiales en una lucha callejera, pero no consiguieron hacerse con el poder.

La recuperación del poder por las fuerzas zaristas relegó los acontecimientos de 1905-1906 a la condición de insurrecciones fallidas. Sin embargo, los observadores contemporáneos consideraron que habían constituido una crisis revolucionaria importante. En enero de 1905, un observador tan cualificado como V. I. Lenin escribió desde su exilio en Ginebra:

> La clase obrera ha aprendido una decisiva lección por lo que respecta a la guerra civil; la educación revolucionaria del proletariado progresó más en un día de lo que podría haberlo hecho en muchos meses de existencia gris, rutinaria e intrascendente. El lema del heroico proletariado de San Petersburgo, «¡muerte o libertad!», resuena en toda Rusia. Los acontecimientos se están desarrollando con asombrosa rapidez. La huelga general de San Petersburgo está cobrando impulso. Todas las actividades industriales, públicas y políticas están paralizadas (Lenin, 1967, I, p. 450).

A continuación, Lenin realizaba una descripción pormenorizada de la actividad revolucionaria en Moscú, Lodz, Varsovia, Helsinki, Baku, Odesa, Kiev, Kharkov, Kovno, Vilna, Sebastopol, Revel, Saratov y Random. Cuando Lenin extrajo las «enseñanzas de la insurrección de Moscú» en agosto de 1906, concluyó:

> La acción de diciembre en Moscú demostró de forma patente que la huelga general, como forma de lucha independiente y predominante, está desfasada, que el movimiento está superando esos estrechos límites con fuerza elemental e irresistible para dar paso a la forma de lucha más decisiva: el levantamiento (I, p. 577).

Lenin terminaba afirmando que el proletariado debía armarse a fin de estar preparado para la siguiente oportunidad revolucionaria. En aquel momento, afirmó, los trabajadores (es decir, los bolcheviques) no estaban preparados y la ocasión ya había pasado.

Inmediatamente antes de la reunión de la primera Duma, en mayo de 1906, el zar se había apropiado en gran medida del espacio político que le estaba reservado al promulgar leyes fundamentales que equivalían a un gobierno constitucional limitado. La Duma, aunque su composición era relativamente conservadora, porque los partidos radicales habían boicoteado las elecciones, criticó duramente al gobierno y se disolvió sin haber obtenido grandes logros. Mientras tanto, el gobierno, actuando al amparo de la ley marcial y apoyado por gran número de tropas que habían regresado del Lejano Oriente, comenzó a perseguir y ejecutar a los rebeldes de 1905, siendo más de un millar las personas que murieron en ese proceso. Entonces, el nuevo primer ministro, Stolypin, promulgó una ley agraria que instituía la propiedad privada, impidió la reunión de una segunda Duma en la que ha-

bía un número mayor de representantes radicales, restringió el electorado para la elección de la tercera Duma y acentuó la represión de los grupos revolucionarios, pero al mismo tiempo inició también una serie de reformas liberales a medida que la economía comenzaba a recuperarse después de un período de larga represión.

La represión y las conspiraciones violentas continuaron. En 1908, año de paz relativa, los atentados de carácter político arrojaron un balance de 1.800 funcionarios muertos y 2.083 heridos (Fitzpatrick, 1982, p. 29). Pero ni siquiera el asesinato de Stolypin en 1911 y la participación de Rusia en la guerra de los Balcanes (1912-1913) modificó profundamente el equilibrio de poder. Ahora bien, la matanza de huelguistas en las minas de oro de Lena a manos del ejército (abril de 1912), con la muerte de 170 trabajadores, desencadenó una nueva oleada de huelgas, el inicio de un proceso ininterrumpido que no terminaría hasta la toma del poder por los bolcheviques en 1917.

Dos nuevas revoluciones

Un nuevo asesinato sumergió indirectamente a Rusia en una gran guerra. Al producirse el debilitamiento del imperio turco, Austria-Hungría comenzó a ocupar sus territorios balcánicos. Austria se anexionó Bosnia y Herzegovina en 1908 y ello despertó sentimientos antiaustríacos en las regiones vecinas de Serbia y Montenegro. Rusia se apresuró a organizar alianzas en los Balcanes y en otras partes para impedir ulteriores avances de los austríacos. Por su parte, Austria intentó con el mismo ímpetu impedir que Serbia extendiera su territorio hasta el Adriático, siendo este uno de los varios posibles resultados de las guerras que estallaron en los Balcanes en 1912 y 1913. Un mes después de que Gavrilo Princip, agente bosnio de la organización de la Mano Negra serbia, asesinara al archiduque Francisco Fernando (28 de junio de 1914), Austria declaró la guerra a Serbia. Rusia decretó la movilización de sus tropas casi inmediatamente y esta decisión impulsó a Alemania a declararle la guerra. Comenzaba así la primera guerra mundial.

La Gran Guerra tuvo algunos efectos revolucionarios similares a los de la guerra ruso-japonesa en Rusia y en otras partes de Europa. El conflicto produjo la devastación de una gran parte del continente

europeo: 9 millones de combatientes muertos y 20 millones heridos, varios millones de muertos y heridos entre la población civil y más de 300.000 millones de dólares (de 1918) en pérdidas materiales. No sólo desencadenó las revoluciones rusas de 1917, sino también la desintegración de los imperios ruso, alemán, austrohúngaro y turco, el establecimiento de diversos estados independientes (Polonia, Finlandia, Letonia, Estonia y Lituania) y muchos otros cambios de fronteras y gobernantes. Aunque Escandinavia y la península ibérica no participaron directamente en las acciones militares, el viento abrasador de la guerra afectó a todas las zonas de Europa. La ingente movilización que exigió la guerra determinó una gran ampliación de la burocracia y el poder del Estado, incluido el poder de confiscación, reclutamiento y exacción de impuestos. Todos los estados contrajeron pesadas deudas, por no mencionar los abrumadores compromisos contraídos con los veteranos de guerra, y todos los estados dejaron de cumplir algunos de esos compromisos, lo que les hizo objeto de las iras de los ciudadanos.

Como consecuencia del reparto de Polonia ocurrido 120 años antes, el imperio ruso compartía extensas fronteras con Alemania y el imperio austrohúngaro. Durante los cuatro años siguientes, las potencias se enfrentaron a lo largo de dichas fronteras, y la mayor parte de esos enfrentamientos se produjeron en antiguo territorio polaco, en especial en la zona que se había anexionado Rusia en el siglo XVIII. Antes de la firma del armisticio, en diciembre de 1917, ni los ejércitos alemanes ni los austríacos habían penetrado en tierra rusa. Sin embargo, combatieron a las fuerzas rusas en Polonia y en el Báltico. Las derrotas de 1915 en Galitzia y Bukovina fueron el primer indicio de la vulnerabilidad militar de Rusia. En 1916 las fuerzas ocupantes alemanas anunciaron la formación de un Estado polaco independiente, y en marzo de 1917 el nuevo gobierno provisional de Rusia reconoció la independencia de Polonia. El ejército sufría una derrota tras otra y el imperio estaba empezando a desintegrarse.

Los conflictos que se produjeron en el sector industrial reflejaron la insatisfacción de los trabajadores rusos con respecto a la guerra y el régimen. En 1914 el número de trabajadores rusos que se declararon en huelga fue casi treinta veces superior al de 1910; descendió en 1915 casi a la mitad y volvió a incrementarse en 1916. A juzgar por los datos recogidos por Diane Koenker y William Rosenberg (1989),

en 1917 la situación fue aún peor que en 1914. El incremento de huelguistas en Rusia fue muy superior al de cualquier otro país europeo, incluida Alemania, donde en 1919 el número de quienes decidieron ir a la huelga fue casi catorce veces superior al de 1910.

La acción obrera cumplió una función crucial en la lucha de 1917. En Petrogrado (nombre que se dio a San Petersburgo al comienzo de la guerra), los trabajadores siguieron la huelga de forma masiva y luego estalló un amotinamiento general de las tropas de la capital. La Duma reaccionó a la orden de disolución dictada por el emperador proclamando un gobierno provisional. El zar Nicolás abdicó en favor de su hermano Miguel, que también abdicó de forma inmediata, y en ese momento un gobierno provisional formado por elementos conservadores y liberales se encontró de pronto al frente de un Estado amenazado. El soviet de los obreros y soldados de Petrogrado desafió la autoridad del gobierno, utilizando su gran influencia en las fábricas y en el ejército para impedir el control por la administración central e instalar un contrapoder en forma de comités elegidos. En los meses de abril y mayo regresaron del exilio una serie de líderes políticos radicales, entre los que se contaban Lenin y Trotsky.

El fracaso del primer intento de los bolcheviques de adueñarse del poder en Petrogrado (julio de 1917) significó el retorno de Lenin al exilio, aunque, en esta ocasión, no se dirigió a la lejana Suiza sino a la vecina Finlandia. El gobierno provisional se dividió respecto a la dureza que se debía utilizar contra los bolcheviques, y Alexander Kerensky (primer ministro) destituyó al general Lavr Kornilov (comandante en jefe). Kornilov ordenó sin éxito a sus tropas que tomaran Petrogrado. A partir de ese momento, los bolcheviques consiguieron una cuota cada vez mayor del apoyo que gozaba el desacreditado gobierno provisional. El 6 de noviembre (24 de octubre en el antiguo calendario ruso), los bolcheviques consiguieron derribar al gobierno provisional. Al día siguiente, el congreso de los soviets de todas las Rusias ratificó el golpe de estado de los bolcheviques, que se hicieron con el control del Estado en alianza con los revolucionarios de los soviets.

Su camino estuvo erizado de dificultades. La guerra continuó, los elementos contrarrevolucionarios trataban de reunir armas y el nuevo gobierno intentaba llevar a cabo aceleradamente la colectivización de la tierra, el capital y la industria, comenzando con la división inmediata de las grandes propiedades. En muchas regiones, los campesinos se adelantaron al gobierno ocupando la tierra por propia iniciativa. Las elecciones celebradas a finales de noviembre para formar una asamblea constituyente otorgaron una mayoría importante a los social-revolucionarios, pero cuando la asamblea se reunió en enero de 1918, el ejército rojo la disolvió por la fuerza. Si alguien ejercía el poder en Rusia, estos eran los bolcheviques, que muy pronto adoptaron el nombre de Partido Comunista.

Mientras los bolcheviques mantenían conversaciones de paz en Brest-Litovsk, importantes segmentos del imperio proclamaron su independencia: Ucrania, Estonia, Finlandia, Moldavia y Letonia. Además, la firma del tratado supuso para Rusia la pérdida de Lituania y Transcaucasia. A finales del año, los cosacos se aliaron con el ejército blanco contrarrevolucionario para hacer frente al Estado bolchevique. Dado que la guerra continuaba entre los aliados y la Entente, diversas potencias penetraron en otras partes del imperio: fuerzas norteamericanas, francesas y británicas en Murmansk, Arkángel y Vladivostok, los japoneses en el Lejano Oriente, los turcos en el sur y los alemanes por todas partes. Tal vez la incursión más singular fue la que realizó un cuerpo del ejército sueco formado por cien mil hombres. Ante la imposibilidad de traspasar las líneas austríacas desde el este, avanzaron en la dirección contraria a través de Siberia, en el intento de regresar a Europa a través de Vladivostok. Pero, antes de ello, ocuparon una serie de ciudades situadas en la línea férrea transiberiana y luego declararon la guerra a Alemania desde el interior de Rusia. (Dicha declaración de guerra les valió el reconocimiento de los gobiernos británico y norteamericano, y fue un factor positivo que incidió favorablemente en sus pretensiones de conseguir un Estado independiente después de la guerra.) En el curso del año 1918, también Georgia, Azerbaiján y Armenia se declararon independientes. El imperio había quedado reducido casi únicamente a Rusia, pero varias zonas de ella también se habían rebelado.

Durante los cuatro años siguientes, el ejército rojo comandado por Trotsky intentó recuperar el control del territorio imperial. Aunque no consiguió recuperar Finlandia, los estados del Báltico y Polonia, resultó victorioso en la mayor parte de los restantes territorios que formaban parte del imperio en 1914. El enfrentamiento con Polonia a propósito de Ucrania (abril-octubre de 1920) y la insurrección de

la marinería de Kronstadt (febrero-marzo de 1921) fueron los últimos grandes desafíos militares en el interior del país. La guerra con Polonia costó a Rusia la pérdida de la porción occidental de Bielorrusia y de Ucrania. Los comunistas rusos reconstruyeron el Estado por medio de la lucha armada y de una reorganización fundamental de la economía. En este sentido, disfrutaban de una ventaja que se convirtió en un problema: con la revolución y la guerra civil, erigieron una estructura gubernamental que consistía esencialmente en un ingente ejército —formado por más de cinco millones de hombres en 1920— controlado por un partido muy centralizado. Debido a ello, la desmovilización constituyó una grave amenaza para el sistema comunista de gobierno. Los comunistas resolvieron el problema —en la medida en que lo resolvieron— sustituyendo la burocracia civil, formada por un gran número de funcionarios prerrevolucionarios, por el ejército, e implantaron el Partido Comunista, muy disciplinado pero de una gran agilidad táctica, en el centro de dicha burocracia.

La guerra civil y el bloqueo decretado por los aliados se conjugaron para producir la dislocación total de la producción agrícola e industrial. El número de obreros industriales disminuyó de 3,6 millones en 1907 a 1,5 millones en 1920 (Fitzpatrick, 1982, pp. 85-86). En 1921 Lenin y sus colaboradores se plantearon como objetivo fundamental acordar un nuevo sistema con el campesinado; la Nueva Política Económica (NEP) impuso una exacción tributaria sobre los cereales pero consagró la libertad de los cultivadores para vender el resto de sus excedentes y adquirir en propiedad sus explotaciones. Al mismo tiempo, el Estado intentó estabilizar la moneda. Cuando se considera de forma retrospectiva, la NEP presenta muchas similitudes con el «socialismo de mercado» que muchos europeos orientales defendían en 1992, con la única diferencia de que los comunistas conservaron un férreo control sobre la producción industrial, la distribución y, especialmente, sobre las finanzas.

El contraste con la crisis económica que estaba produciéndose contemporáneamente en Alemania clarifica lo que estaba ocurriendo. Mientras que la crisis de la Unión Soviética era la de una economía en proceso de socialización, la de Alemania era la de una economía en proceso de capitalización. «Las economías capitalistas —ha escrito Edward Nell— operan con un margen de exceso de capacidad, mientras que las economías socialistas sufren la presión de una demanda excesiva» (Nell, 1991, p. 1). Katherine Verdery, sintetizando los numerosos trabajos realizados en y acerca de Europa oriental, ayuda a explicar la distinción establecida por Nell cuando afirma que «el imperativo central del socialismo es incrementar la *capacidad* de la burocracia para asignar, lo cual no es ciertamente lo mismo que incrementar las cantidades a asignar» (Verdery, 1991, p. 421).

De las premisas del sistema se sigue que el acceso a la vivienda, los alimentos, los bienes de consumo y los privilegios dependen de la pertenencia a organizaciones administrativas y productivas, principio que entraña una diferencia fundamental con la idea capitalista de que los propietarios individuales de la riqueza tienen derecho a disponer de ella como deseen. Aunque ni Nell ni Verdery lo afirman, esa diferencia surge directamente de las condiciones históricas en las que se formaron el capitalismo y el socialismo: el primero mediante la apropiación o creación por parte de los comerciantes de los medios de producción en competencia con otros comerciantes, y el segundo en el contexto de la apropiación por el Estado de los medios de producción de los capitalistas. Desde esta perspectiva, puede considerarse que tanto la NEP como la liberalización relativa de la economía alemana tras la gran movilización de la primera guerra mundial eran medidas contrarias al control central sobre la capacidad burocrática para asignar.

Durante los seis años de vigencia de la NEP se produjo una importante revolución económica. Terminó cuando en 1927 subió al poder Stalin, el cual decretó la expulsión de Trotsky y promovió la industrialización forzosa, que conllevó la formación de una administración civil mucho más voluminosa. Stalin comenzó así una especie de revolución desde arriba, sin que hubiera más que un leve atisbo de una situación revolucionaria, es decir, una auténtica división en la comunidad soviética. El control que ejercían Stalin y sus colaboradores sobre el aparato del partido era tan estricto que entre 1929 y 1938 pudieron realizar constantes purgas sin que estallara una rebelión abierta. El control del Estado central se acentuó con la rápida formación de una fuerza de policía, en especial una policía política, secreta y sanguinaria.

También en los estados que se habían separado del imperio se prolongaron las luchas revolucionarias de 1917 durante el período 1918-1921. Alemania había ocupado Letonia, Lituania y Estonia durante

una gran parte de la guerra, Polonia fue uno de los principales teatros de las operaciones bélicas y Finlandia se mantuvo en gran medida al margen del conflicto. Poco después de la toma del poder por los bolcheviques, esos cinco estados proclamaron en diferentes momentos su independencia con respecto a Rusia. Desde el momento de la firma del tratado de Brest-Litovsk y hasta la rendición de Alemania, Letonia, Lituania y Estonia tuvieron una existencia precaria bajo la «protección» alemana. Una vez consumada la derrota de Alemania, los ejércitos rusos intentaron reconquistar esas tres posesiones perdidas, pero renunciaron en 1920. Sin embargo, el reconocimiento de Rusia y de la comunidad internacional no fueron suficientes para Lituania, que muy pronto se vio envuelta en un conflicto armado con Polonia por la posesión de Vilna, conflicto que perduró hasta 1927. Por otra parte, en los tres países, después de algunos experimentos iniciales de redistribución de tierras y democratización, se produjeron sendos golpes de estado de derecha, aunque en Estonia el régimen dictatorial se implantó más tarde (1934-1936) y no duró mucho tiempo.

En cuanto al Estado polaco, después de permanecer bajo control alemán durante gran parte de la guerra, consiguió la independencia plena tras la rendición de Alemania en 1918 y bajo la dirección de Pilsudski se embarcó inmediatamente en la empresa de recuperar una serie de territorios vecinos que en otro tiempo habían estado bajo la férula polaca: Galitzia, Posen, Lituania, Silesia y otros. Ese afán irredentista llevó a los nuevos dirigentes polacos a entrar en guerra con Lituania (1919-1927) y con la Unión Soviética (1920). En 1926, Pilsudski encabezó un golpe de estado derechista, estableciendo un gobierno que permaneció en el poder, con no pocos altibajos, hasta la invasión alemana de 1939.

Finalmente, en Finlandia tuvo lugar una virulenta guerra civil entre blancos y rojos, que dividió al país en 1918. Los alemanes enviaron una fuerza invasora que ayudó a los blancos a imponerse sobre el ejército rojo. En 1919, Finlandia y la Unión Soviética se enfrentaron en una breve guerra por la posesión de Carelia. Al igual que sus vecinos del Báltico, Finlandia inició un proceso de redistribución de la tierra y de democratización durante el decenio de 1920, que desencadenó una enérgica reacción de las fuerzas de la derecha. Aunque en Finlandia fracasaron los intentos de golpe militar (1930, 1932), la presión que ejercieron los movimientos autoritarios-nacionalistas dividió el escenario político finlandés hasta bien entrada la década de 1930. El contraste político entre la Unión Soviética y los nuevos estados independientes del otro lado de sus fronteras nororientales era cada vez mayor. Finalmente, la ocupación de la mitad del territorio polaco por la Unión Soviética (1939), la derrota de Finlandia en la guerra con la Unión Soviética (1939-1940) con el subsiguiente tratado fineso-ruso, y las alianzas militares seguidas de la anexión de Letonia, Lituania y Estonia por la Unión Soviética (1939-1940) provocaron una brutal transformación de la naturaleza de dichos estados.

Consolidación y hundimiento

La Unión Soviética de la época de Stalin era un mosaico realmente complejo. En algunos aspectos se imitó la estructura del imperio ruso: un fuerte control directo en Rusia, más agresivo aún ahora y que se dejaba sentir incluso sobre las comunas campesinas, y continuación del sistema de gobierno indirecto en la mayor parte de las repúblicas no rusas, en el que el elemento de mediación eran los funcionarios del Partido Comunista, que fue modificándose gradualmente al aumentar el número de rusos que ocupaban posiciones de dirección en la burocracia y en los sectores profesional e industrial. Fuera de Rusia, la gran mayoría de la población sólo hablaba el ruso como segunda lengua o lo desconocía por completo (Laitin, Petersen y Slocum, 1992, p. 141).

La colectivización agrícola, la implantación de la industria pesada y la reorganización del sistema de distribución, implicaron la creación de vastas organizaciones, controladas también por el aparato del Partido Comunista. El sistema se consolidó en los años treinta, durante los cuales los funcionarios del partido adquirieron privilegios, poderes y formas de comportamiento que les separaron del resto de la población. Sin embargo, las purgas feroces de 1937 y 1938 evidenciaron cuál era el impulso que estimulaba la consolidación. Stalin continuaba eliminando elementos potencialmente peligrosos para su control personal. Por otra parte, la remilitarización alemana indujo a la Unión Soviética a dedicar una mayor parte de su esfuerzo industrial a la producción de armamento.

La segunda guerra mundial tuvo sobre la Unión Soviética repercusiones importantes, pero de signo diverso. Por una parte, la pérdida de siete millones de vidas, la destrucción del 60 por 100 de la capacidad industrial del país y la profunda penetración de tropas alemanas en territorio soviético produjeron el dislocamiento de la maquinaria política. Por otra parte, la ingente movilización para la guerra, la victoria sobre el poder nazi y la extensión de la influencia soviética en la Europa central reforzaron aún más el prestigio y la fuerza del Estado. Los acuerdos que impuso después de la guerra a los antiguos aliados (Hungría, Bulgaria y Rumania) y víctimas (Checoslovaquia y Polonia) del Eje permitieron a la Unión Soviética ampliar su poder hacia el oeste en mayor medida de lo que habían conseguido hacerlo los zares. La constitución del Pacto de Varsovia en 1925 como contrapoder de la OTAN simplemente consolidó la presencia militar soviética en la Europa central.

También se acentuó la presencia del ejército en la política soviética. Las experiencias de la guerra civil y el comunismo de guerra (1917-1921) ya habían sentado un precedente para la presencia militar masiva en la vida civil, pero los esfuerzos desplegados posteriormente para conseguir la movilización económica habían incrementado el poder y la independencia de los cuadros del partido. Sin embargo, las campañas de la segunda guerra mundial reforzaron la colaboración entre los comisarios del partido y los oficiales del ejército, modificándose el clima de desconfianza mutua entre el partido y el ejército que había prevalecido en el decenio de 1930. El ejército, reorganizado bajo la dirección de un Ministerio de las Fuerzas Armadas y con un porcentaje mayor del presupuesto nacional, salió de la guerra más fuerte que nunca.

Sin embargo, la revitalización militar se apoyaba en un ingente esfuerzo por crear una infraestructura económica soviética. La reconstrucción que se operó en la Unión Soviética durante la posguerra, casi sin ayuda exterior, constituye una de las máximas hazañas que haya conseguido nunca el poder del Estado. En el transcurso de unos pocos años, los soviéticos construyeron sobre las ruinas de una economía destruida un sistema eficaz de producción militar capaz de lanzar satélites al espacio y equipararse con los norteamericanos en cuanto al armamento. El hecho de que ese esfuerzo fortaleciera el poder del ejército y estrangulara al sector civil no debe impedirnos reconocer la ingente tarea de reconstrucción que ha sido realizada.

La situación de guerra fría con los Estados Unidos y sus aliados fue el elemento decisivo por lo que respecta a las posibilidades de que se produjeran estallidos revolucionarios en la Unión Soviética de la posguerra. Durante muchos años, la Unión Soviética tuvo contacto con las situaciones revolucionarias en sus intervenciones en el exterior, ya fuera en sus satélites de la Europa oriental o en diversos estados situados fuera de Europa. Las intervenciones más importantes en Europa oriental fueron las que realizaron tropas soviéticas para aplastar a los disidentes de Hungría, Checoslovaquia y Polonia. En cuanto a las intervenciones fuera de Europa, la más espectacular y devastadora fue el enfrentamiento indirecto con los Estados Unidos en Afganistán, que comenzó con la ayuda soviética al golpe militar izquierdista de 1979 y que continuó con la provisión de ayuda militar por parte de los norteamericanos a una serie de grupos rebeldes afganos que luchaban contra el gobierno militar. Aunque los rebeldes no podían obtener la victoria, tampoco podían ser derrotados y el ejército soviético se vio inmerso en una costosa situación sin salida, similar a la que habían vivido sus enemigos norteamericanos en Vietnam. Antes de la firma de los acuerdos de paz en Ginebra en 1988, la Unión Soviética tenía entre 100.000 y 120.000 hombres en Afganistán, sin conseguir derrotar a los enemigos del que no era más que un gobierno títere, cuyos hilos eran manejados por el régimen soviético.

Tras la muerte de Brezhnev, representante de la línea dura, en 1979, y la corta estancia en el poder de Yuri Andropov y Constantin Chernenko durante los seis años siguientes, en 1985 ascendió al frente del Partido Comunista y, por tanto, a la jefatura *de facto* del Estado, Mijaíl Gorbachov. Éste no tardó en anunciar un programa de *glasnost*, o liberalización de la vida pública, que se plasmó entre otras cosas en la liberación de notables disidentes (por ejemplo, Anatoli Sccharansky y Andrei Sajárov) en 1986 y en la concesión de visados de salida del país para la población judía (prácticamente ninguno en 1985, 1.000 en 1986, 20.000 en 1988 y 60.000 en 1989). En 1987 Gorbachov completó la liberalización política con un programa de *perestroika*, o reestructuración de la economía para reorientarla de la producción militar a la producción civil e incrementar notablemente su productividad.

Gorbachov impulsó también, aunque con mayor cautela, la reduc-

ción del aparato militar, limitando sus intervenciones fuera de la URSS e interrumpiendo la represión violenta de las reivindicaciones organizadas de autonomía —religiosa, étnica y política— en la Unión Soviética. Gorbachov realizó diversos intentos para conseguir el apoyo de la población a su programa, intentos que culminaron en 1989 con la creación de un gran Congreso de Diputados del Pueblo. El Congreso elegiría, dentro de los límites que garantizaban todavía la prioridad del Partido Comunista, un nuevo soviet supremo. El líder soviético solicitó ayuda y apoyo a la comunidad internacional dando a conocer sus iniciativas de liberalización política y económica, ofreciendo la posibilidad de establecer empresas conjuntas en el país y (en 1990 y 1991) colaborando con la alianza contra Iraq dirigida por los norteamericanos.

El propósito de liberar el potencial de la economía reduciendo el control central sobre la producción y la distribución promovió la creación de numerosas pequeñas empresas, intentos desenfrenados de conseguir la colaboración de capitalistas extranjeros y la aparición a plena luz del día de circuitos informales de intercambio —mercados negros, redes personales y mecanismos de trueque— que hasta entonces eran objeto de persecución. Sin embargo, también engendró una enérgica resistencia por parte de los productores a entregar sus productos a lo que quedaba del sistema oficial de distribución y, asimismo, la desviación masiva de existencias e instalaciones del gobierno hacia redes monopolísticas privadas de distribución, en beneficio de los cuadros dirigentes, de empresarios decididos y de miembros de organizaciones que tenían acceso preferente a una serie de productos codiciados, así como a servicios y a divisas extranjeras. La práctica del trueque entre las empresas, los sistemas de racionamiento que garantizaban a los miembros de las organizaciones privilegiadas el acceso a bienes y servicios y el recurso a amigos, familiares y compañeros de trabajo para adquirir unos productos escasos contribuyeron a particularizar la distribución cuando el gobierno afirmaba estar generalizándola mediante la creación de un mercado nacional. Esto redundó en una pérdida de capacidad por parte del Estado central para recompensar a sus más fieles partidarios.

En el escenario político se produjo un hundimiento similar de la autoridad central, al que no fue ajeno la situación económica. A medida que las consecuencias de la política económica de Gorbachov enajenaban no sólo el apoyo de los productores a quienes había beneficiado la intensa actividad militar, sino también de los consumidores, que no tenían facilidad de acceso a las nuevas redes de distribución, y de los funcionarios, que veían amenazados sus antiguos poderes, el programa político del líder soviético comenzó a ser objeto de críticas y dio pie a la aparición de personajes rivales, como Boris Yeltsin, quien desde su base de Moscú consiguió hacerse con el control de la federación rusa. Por otra parte, la actitud de Gorbachov de poner coto al poder del ejército y de los servicios de inteligencia, amenazados pero todavía intactos, mediante la conciliación, la prudencia y la ambigüedad, favoreció la defección de elementos reformadores sin permitirle conseguir un sólido apoyo entre los conservadores. Además, intentó al mismo tiempo acumular poderes extraordinarios que le permitieran acelerar la transformación económica y ello suscitó la oposición de los reformadores rivales, de los libertarios políticos y de los defensores del viejo régimen. Aunque la exigencia de garantías de las libertades religiosas y políticas se plantearon casi inmediatamente en 1986 y 1987, fue el movimiento de las nacionalidades para asegurarse su posición en el nuevo sistema naciente el que destruyó el viejo régimen.

No puede olvidarse la diversidad étnica existente en la URSS. El Estado comunista practicó, como lo había hecho su antecesor zarista, una política ambivalente respecto a las minorías étnicas movilizadas: al tiempo que trataba de asegurar la prioridad de la lengua y la población rusa y de los elementos partidarios de la «rusianización» en el seno de las minorías, dio también reconocimiento oficial a las minorías lingüísticas y culturales, asignándoles a muchas de ellas circunscripciones políticas distintas e incluso gobernándolas mediante líderes de las minorías decididos a unir su suerte a la de los comunistas. En el decenio de 1980, la nómina oficial soviética de nacionalidades incluía 102 categorías distintas. Sin embargo, dicha nómina no incluía todas las lenguas y tradiciones culturales singulares que existían en el conjunto del territorio. En el censo de 1989, poco más de la mitad de la población de la URSS era de nacionalidad rusa, prácticamente el mismo porcentaje que vivía en la república rusa.

La complejidad comenzaba con los 5 millones de rusos que vivían fuera de su república «patria», generalmente ocupando posiciones de poder y privilegio, y los 5 millones de no rusos que residían en la república rusa. Prácticamente en cada una de las subdivisiones

nacionales se daba esa heterogeneidad, con situaciones extremas en repúblicas como Letonia, donde sólo el 52 por 100 de la población era considerada letona y donde el censo había registrado al 34 por 100 como población rusa. En el otro extremo, la región autónoma judía de Birobidzhan, en la frontera con China, a unos 800 kilómetros de Sakhalin, albergaba sólo a 20.000 de los aproximadamente 1,8 millones de judíos de la URSS.

Sin duda, las estadísticas oficiales simplificaban una situación compleja y fluida. Aunque en los pasaportes figuraba una de las 102 categorías, como consecuencia de los matrimonios y las migraciones millones de ciudadanos soviéticos se identificaban personalmente con más de una nacionalidad oficial o no se identificaban con ninguna de ellas, y fuera de Rusia la mayor parte de la población vivía múltiples vidas, sólo en algunas de las cuales prevalecía una identidad étnica (véase Comaroff, 1991). Sin embargo, el sistema garantizaba importantes recompensas a aquellos líderes regionales que eran capaces de obtener credibilidad como representantes de los kirguises, uzbecos, estonios u otra nacionalidad reconocida. La cuestión era más problemática como hecho político que como experiencia cotidiana.

Los comunistas de Rusia habían aplicado en las regiones no rusas la política habitual del gobierno indirecto, de captar a los líderes regionales leales a su causa e integrarlos en el Partido Comunista, reclutar a sus sucesores entre los miembros más destacados de las nacionalidades, aunque preparándolos en Rusia, enviar gran número de rusos para ocupar las nuevas industrias, profesiones y administraciones, promover la lengua y la cultura rusas como vehículo de comunicación interregional y en la administración, conceder a las autoridades regionales autonomía y apoyo militar a cambio de que garantizaran al Estado ingresos y soldados para el ejército, y de acallar inmediatamente a cualquier individuo o grupo que reclamara libertades fuera de este sistema. El sistema podía funcionar con eficacia en tanto en cuanto los líderes regionales recibieran un fuerte apoyo desde el centro y sus rivales en la vida local no tuvieran procedimientos ni posibilidades de apelar al apoyo popular.

Esa piedra angular del sistema fue la que provocó su destrucción. Gorbachov y los demás *glasnost'chiki* favorecieron el debate político, redujeron la influencia militar en el control político, toleraron alternativas a la estructura comunista, adoptaron iniciativas dirigidas a la celebración de auténticas elecciones y reconocieron que había disminuido su capacidad para recompensar a sus colaboradores más fieles. Todo ello constituyó un fuerte incentivo para que las esferas regionales del poder y sus rivales se distanciaran del centro, trataran de conseguir apoyo popular, establecieran sus credenciales como representantes auténticos de la población local, afirmaran la prioridad de sus nacionalidades en las circunscripciones territoriales de la URSS y presionaran para obtener nuevas formas de autonomía. Además, en el caso de las repúblicas del Báltico y de las zonas orientales y meridionales de la URSS, la posibilidad de establecer relaciones especiales con otros estados fuera de la Unión Soviética —Suecia, Finlandia, Turquía, Irán e incluso la Comunidad Europea— redobló su fuerza política y les dio unas oportunidades económicas que la Unión Soviética cada vez era menos capaz de ofrecer.

En las circunscripciones políticas en las que existía más de una población nacional bien organizada, comenzó a verse rápidamente amenazada la situación de aquellos que perdían la pugna por obtener la certificación de ciudadanos regionales auténticos. Eran quienes actuaban con más celeridad los que podían obtener mayores ventajas. Comenzó así una escalada, en el curso de la cual cada una de las concesiones realizadas por el gobierno central era un incentivo nuevo para plantear nuevas exigencias por parte de otras nacionalidades y todo ello supuso una amenaza cada vez mayor para los grupos de población que no se movilizaran con la debida eficacia. Ya en 1986, hubo peticiones de autonomía y protección no sólo por parte de los estonios, letonios, lituanos y ucranios, sino también de los kazacos, tártaros de Crimea, armenios, moldavos, uzbecos y rusos. En regiones tan heterogéneas como Nagorno-Karabaj, un enclave armenio en Azerbaiján, los militantes de etnias vecinas se enfrentaron en el intento de prevalecer y no mostraron escrúpulos a la hora de matar. No sólo en Azerbaiján, sino también en Moldavia, Georgia y Tadjikistán se plantearon conflictos interétnicos. Entre enero de 1988 y agosto de 1989, los enfrentamientos entre distintos grupos étnicos causaron 292 muertos y 5.520 heridos y dejaron a 360.000 personas sin hogar (Nahaylo y Swoboda, 1990, p. 336). Esa situación recordaba al desmembramiento del imperio en 1918.

La propuesta que adelantó Gorbachov en 1990, de establecer un nuevo tratado de la Unión, con un mayor reconocimiento de las 15

repúblicas, pero que preservara las atribuciones militares, diplomáticas y económicas de un gobierno federal, sólo sirvió para acelerar los intentos de cada posible protagonista nacional de asegurar su posición en el nuevo sistema, o incluso fuera de él. Cuando Gorbachov intentó hacer realidad sus planes por medio de un referéndum en marzo de 1991, los dirigentes de seis repúblicas (Letonia, Lituania, Estonia, Moldavia, Armenia y Georgia, todas las cuales habían iniciado el proceso de declaración de independencia) boicotearon el proceso y, por otra parte, los resultados confirmaron la división entre Rusia y las porciones no rusas de la vacilante federación.

Ante el desmembramiento étnico, el hundimiento económico y la dislocación de los poderes del viejo régimen, muchos observadores y muchos participantes en el proceso comenzaron a temer que se produjera una intervención de diversos sectores del ejército, los servicios secretos y el partido, para cambiar el curso de los acontecimientos. Eso fue precisamente lo que ocurrió. La crisis se produjo en agosto de 1991, cuando la junta apoyada por esos elementos secuestró a Gorbachov en su residencia de verano de Crimea, en la víspera de la firma de otro tratado de la Unión entre las nueve repúblicas que todavía colaboraban con el Estado central. Los conspiradores, que pertenecían en su mayor parte al ejército, los servicios secretos y la policía, proclamaron la ocupación del poder por un oscuro comité de emergencia, pero dicho comité sólo conservó durante tres días el control del Estado.

Durante el golpe de estado frustrado, Boris Yeltsin, presidente de la Federación Rusa, desafió a los tanques del ejército y habló a las multitudes de Moscú convocándolas a una huelga general contra el comité de emergencia. Varias unidades militares hicieron defección y se unieron al bando de Yeltsin, estableciendo una línea defensiva en torno a la sede central de la República rusa en Moscú. La defección y la defensa quebrantaron la decisión de la junta y el intento de golpe terminó sin que se hubieran producido enfrentamientos armados. Gorbachov fue inmediatamente liberado por sus captores.

A su regreso, Gorbachov hubo de afrontar una oleada de peticiones para que acelerara las reformas, nuevos intentos de las nacionalidades organizadas para separarse de la Unión, una rivalidad cada vez mayor por parte de Yeltsin y sus homónimos en otras repúblicas y el hundimiento total de la autoridad del Kremlin. Gorbachov dimitió como secretario del partido y suspendió las actividades del mismo en toda la URSS. Durante los cuatro meses siguientes, Yeltsin intentó suceder a Gorbachov no en la secretaría del partido sino como jefe de una federación que conservaría una cierta autoridad en los ámbitos económico, militar y diplomático. Pero incluso ese intento terminó con la disolución de la Unión Soviética, que dejó paso a una Comunidad, mal definida y aquejada por continuas rivalidades internas, en la que no se integraron los estados del Báltico y que otros intentaban abandonar.

Entre 1986 y 1992, Rusia y los países vecinos vivieron una de las más peculiares revoluciones que haya conocido Europa: el quebrantamiento de un imperio, el desmantelamiento de su estructura central sin el impacto directo de la guerra. Anteriormente se había producido la desintegración de los imperios borgoñón, español, turco, austro-húngaro e incluso ruso, pero siempre bajo la presión inmediata de la lucha armada, desde fuera y desde dentro. La costosa parálisis a la que se había visto constreñida la Unión Soviética en Afganistán, producto a su vez de una guerra fría terriblemente cara con los Estados Unidos, es el equivalente más próximo de las guerras que anteriormente habían puesto fin a esos imperios. El espectáculo que suponía comprobar que en los Estados Unidos existían cañones, riqueza y debate político, mientras bombardeaba Iraq en 1991, acentuaba el sentimiento generalizado de la incapacidad del Estado soviético y, al mismo tiempo, la expansión de la próspera Comunidad Europea servía como estímulo para apartarse de la Unión Soviética a aquellos segmentos de la misma que pensaban poseer algo con lo que poder comerciar en Occidente. La peculiar forma de las revoluciones rusas de 1986-1992, como las de todas las revoluciones que hemos examinado en Europa a partir de 1492, se debió directamente a la peculiar organización del Estado soviético.

A diferencia de las situaciones revolucionarias dinásticas, patrono-cliente y comunales que se produjeron de forma recurrente en Rusia y en los países vecinos a intervalos aproximados de una década entre 1550 y las guerras napoleónicas, y a diferencia de las revoluciones de coalición de clases que sacudieron el imperio ruso en 1905 y 1917-1921, las situaciones revolucionarias de la era de Gorbachov estuvieron más cerca de las revoluciones nacionales. Las revoluciones nacionales —tanto las situaciones como los resultados revolucionarios— fueron las for-

mas revolucionarias predominantes en Europa a partir de 1815 y todavía siguen produciéndose. Para un político, la afirmación de que representa a un pueblo coherente y dotado de su propia personalidad histórica, que ha recibido un trato injusto por parte de un Estado existente y que, en consecuencia, merece poseer su propio Estado, es el argumento más sólido para obtener reconocimiento y ayuda del exterior. No sólo los dirigentes de los estados no rusos, sino también el propio Boris Yeltsin en Rusia, han realizado dicha afirmación en contra del Partido Comunista y del aparato coercitivo que había construido.

La diferencia entre la experiencia de Rusia y las restantes revoluciones nacionales reside en dos factores: en primer lugar, en la Unión Soviética se produjo una situación revolucionaria como consecuencia de los intentos del poder central de proceder a su autorreforma y de modificar su posición en el escenario internacional; en segundo lugar, la oposición de los ciudadanos comunes a la *nomenklatura* adoptó determinados rasgos de lucha de clases. Sin embargo, en la medida en que las revoluciones rusas de 1986-1992 constituyeron una lucha de clases de los trabajadores contra los funcionarios privilegiados, es necesario concluir que hasta 1992 la contrarrevolución había salido victoriosa. En efecto, en todos los territorios que habían constituido la Unión Soviética, los funcionarios que durante el viejo régimen habían ejercido el poder gracias al Partido Comunista, continuaban ejerciéndolo, pero ahora en nombre de la soberanía nacional, o utilizaban sus habilidades, sus relaciones y la posibilidad de acceso a bienes de diverso tipo para labrarse una nueva carrera como empresarios. Las revoluciones de Rusia todavía no habían concluido.

CAPÍTULO SIETE

Las revoluciones hoy, ayer y mañana

De nuevo en Europa oriental

La cuestión de si las luchas y transformaciones ocurridas en Europa oriental entre 1989 y 1992 constituyeron auténticas revoluciones ha suscitado numerosísimos debates. Según afirma S. N. Eisenstadt:

> El hundimiento de los regímenes comunistas de Europa oriental ha constituido uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia de la humanidad, y desde luego el más dramático desde el final de la segunda guerra mundial. ¿Cuál es su significado? ¿Son revoluciones al igual que «las grandes revoluciones» —como la guerra civil inglesa, las revoluciones americanas, francesa, rusa y china—, que en muchos aspectos desembocaron en la modernidad, creando el orden político moderno? ¿Conducirán, previsiblemente —después de un período de transición posiblemente turbulento— a un mundo de modernidad relativamente estable, en el que el constitucionalismo liberal anunciará una especie de «final de la historia»? ¿O acaso son expresión de las vicisitudes y fragilidades de la modernidad, incluso de los regímenes democrático-constitucionales? (Eisenstadt, 1992, p. 21).

Eisenstadt responde a sus inquietantes preguntas con un enérgico «quizás»: la caída de los regímenes de Europa oriental se asemeja a las revoluciones clásicas en cuanto que generó una serie de cambios sociales acelerados e importantes, porque en ella concurrieron levantamientos populares con intentos ineficaces de reforma por parte del poder central, en el hecho de que los intelectuales fueron sus protagonistas principales y porque hubo momentos de quiebra general del orden social. Sin embargo, faltaron numerosos rasgos de las grandes

revoluciones del pasado: la violencia vengativa, el factor de clase, la visión carismática, la fe en la política como instrumento de cambio constructivo y la resistencia de los antiguos detentadores del poder a prescindir de él.

En último extremo, afirma Eisenstadt, las nuevas revoluciones representaron «rebeliones contra determinados tipos de modernidad que negaban en la práctica otros elementos más pluralistas de modernidad, mientras que oficialmente instituían determinados componentes centrales de sus premisas» (p. 33). La traducción de estas palabras sería la siguiente: los ciudadanos de Europa oriental no poseían el concepto de industrialización, pero rechazaban el método comunista de realizarla, especialmente sus restricciones políticas. Eisenstadt no dice por qué los ciudadanos soviéticos tardaron setenta años en dar rienda suelta a su insatisfacción.

Desde la perspectiva de quinientos años de procesos revolucionarios, el hundimiento de los regímenes de Europa oriental pierde una parte de la magnitud que le da su cercanía; durante ese medio milenio se produjeron en Europa numerosos hundimientos e insurrecciones. Europa oriental sola fue testigo de la desaparición de los grandes imperios polaco-lituano, mongol y turco, por no mencionar las remodelaciones profundas de Suecia, Hungría y Rusia, que en determinados momentos se comportaron como potencias imperiales. Sin embargo, Eisenstadt tiene toda la razón al rechazar una analogía simple entre los acontecimientos de 1989 y las grandes revoluciones ocurridas en Inglaterra, Francia o incluso anteriormente en Rusia, pues las condiciones sociales, los estados y el sistema internacional se habían transformado demasiado como para que puedan repetirse antiguos esquemas. Hayan o no enseñado algo más las trayectorias históricas reflejadas en este libro, esa lección es absolutamente clara.

¿Pueden calificarse de revoluciones a los acontecimientos de 1989 en Europa oriental de acuerdo con los criterios establecidos en el presente libro? Cuatro aspectos deben haber quedado claros. En primer lugar, la cuestión no es tan apremiante como antes parecía, pues en cada país los acontecimientos de 1989-1992 tenían algo de revolucionarios, aunque habría que dilucidar hasta qué punto. En segundo lugar, es totalmente necesario establecer la distinción entre situaciones revolucionarias y resultados revolucionarios, pues sin esa distinción las transiciones ocurridas recientemente en Europa oriental nos confundirán inevitablemente. En tercer lugar, en la mayor parte de la Europa oriental *los resultados* de 1989 fueron claramente revolucionarios, pues casi en todas partes se produjeron transferencias del poder del Estado a nuevas coaliciones gobernantes; la cuestión es determinar la profundidad de las situaciones revolucionarias. En cuarto lugar, algunos de esos procesos pueden considerarse como revoluciones y otros no. Si se plantea la cuestión, con respecto a cada uno de los estados de Europa oriental, de si se produjo una transferencia por la fuerza del poder del Estado en el curso de la cual existieron al menos dos facciones enfrentadas con aspiraciones incompatibles entre sí al poder del Estado, y si un sector significativo de la población sometido a la jurisdicción del Estado apoyó las aspiraciones de cada uno de los bloques, obtendríamos el cuadro siguiente:

País	¿Situación revolucionaria?	¿Resultado revolucionario?	¿Revolución?
Albania	marginal	sí	marginal
Alemania oriental	sí	sí	sí
Bulgaria	marginal	marginal	marginal
Checoslovaquia	sí	sí	sí
Hungría	sí	incierto	incierto
Polonia	marginal	sí	marginal
Rumania	sí	dudoso	dudoso
Unión Soviética	sí	sí	sí
Yugoslavia	sí	sí	sí

Las decisiones son más difíciles de lo que podría parecer. Por ejemplo, para Bulgaria se utiliza en todo momento el calificativo de «marginal» porque el país se aproximó en la mayor medida a una situación revolucionaria en las huelgas de hambre de mayo de 1989 y el éxodo masivo de musulmanes entre los meses de mayo y agosto de dicho año; estuvo cerca de un resultado revolucionario con el establecimiento de grupos reconocidos de oposición y estuvo a un paso de la lucha armada en los enfrentamientos entre las tropas y los manifestantes, y todo ello ocurrió al borde de la revolución. Además, Yugoslavia, Hungría y Alemania oriental vivieron situaciones muy diferentes. La primera se dividió (a pesar de la resistencia serbia) en varias repúblicas, en la segunda se produjo la disolución del viejo sistema

de gobierno y la incierta constitución del nuevo sistema, y la tercera se fusionó de forma incompleta con su rico y poderoso vecino, la República Federal Alemana. Todas estas transformaciones se produjeron dentro del ámbito revolucionario, pero en distintos puntos de dicho ámbito. Por otra parte, ni los observadores ni los participantes consideraron que todos esos procesos tuvieran el mismo carácter revolucionario.

La Unión Soviética no fue el único Estado europeo que se fracturó en el decenio de 1990. Yugoslavia, el Estado que se había formado aglutinando los restos de los imperios turco y austrohúngaro después de la primera guerra mundial, en un intento deliberado de contener el expansionismo serbio, contempló cómo los segmentos no serbios de ese Estado se separaban uno tras otro. Era este un proceso realmente paradójico, pues cada nueva secesión de una república no serbia suponía para las restantes repúblicas la amenaza de sufrir una dominación cada vez mayor por parte de los serbios. Así, después de que Eslovenia y Croacia consiguieran su independencia tras enfrentarse al ejército yugoslavo (en el que predominaba el elemento serbio) y a las milicias étnicas autónomas serbias, y gracias a la intervención de los estados de Europa occidental y de las Naciones Unidas, Bosnia y Herzegovina comenzaron a buscar activamente el reconocimiento exterior, mientras los militantes serbios y croatas empezaron a intentar conseguir su propio territorio autónomo en ese pequeño país que estaba formándose. La experiencia yugoslava y la disolución de Checoslovaquia han demostrado que las revoluciones nacionales siguen siendo posibles en Europa.

Tras el desmembramiento de la otrora poderosa Unión Soviética quedó por una parte Rusia, debilitada, pero con posibilidades de recuperación, y, por otra, catorce repúblicas. Tres de ellas (Letonia, Lituania y Estonia) buscaron inmediatamente apoyo en sus vecinos de la Europa del norte, y en cuanto a las demás la situación era de una gran diversidad tanto en su viabilidad como estados independientes como en su deseo de separarse de esa comunidad de repúblicas. En 1992, los antiguos componentes de la Unión Soviética tuvieron que plantearse una serie de interrogantes cruciales e interrelacionados: ¿qué actitud adoptar frente a las insistentes demandas de sus propias minorías étnicas —que en muchos casos incluían minorías rusas que antes habían gozado de gran poder— para proteger su propia autonomía?

¿Cómo reorientarían sus economías comunistas desintegradas, tan fuertemente vinculadas a los mercados rusos? ¿Cómo harían entidades tales como Georgia, Tadjikistán, Uzbekistán y Azerbaiján para sobrevivir en un mundo de estados armados y rapaces?

El estudio comparativo de las situaciones revolucionarias europeas no ofrece respuestas claras a estas cuestiones sobre el futuro, pero las sitúa en el contexto adecuado, al evidenciar que ese tipo de revoluciones nacionales han sido muy frecuentes durante los dos últimos siglos, al relacionarlas con la consolidación de estados que se produjo de forma generalizada en Europa a partir de 1750, al indicar que la forma en que esos nuevos estados se doten (o dejen de hacerlo) de una cierta capacidad militar determinará su naturaleza en la misma medida que la orientación que adopten para solucionar sus problemas económicos y al señalar que la multiplicación de soberanías en Europa oriental es contraria a las tendencias más recientes, que apuntan a la formación de grupos internacionales más amplios, a la independencia entre capital y soberanía y a la internacionalización de la actividad económica tanto en Europa occidental como en otras regiones.

¿Pautas para la revolución?

El estudio de 500 años de experiencia revolucionaria que se ha realizado en este libro no permite establecer muchos principios generales respecto a las condiciones en que se produce la revolución. La historia de los procesos revolucionarios durante esos cinco siglos permite extraer numerosas conclusiones sobre los mecanismos del cambio político, pero no formula pautas y condiciones recurrentes a las que se ajustan las transferencias por la fuerza del poder del Estado. La información que hemos obtenido se refiere principalmente a la forma en que las condiciones para la revolución se modificaron entre 1492 y 1992. Sin embargo, es posible arriesgarse a formular algunos principios generales sobre las situaciones y los resultados revolucionarios.

Según las cronologías que he recopilado, las situaciones revolucionarias se han producido las más de las veces cuando se han dado una o más de las tres circunstancias siguientes: 1) cuando se agudizaban de forma notoria y visible las discrepancias entre las exigencias que planteaba el Estado a sus ciudadanos mejor organizados y sus

posibilidades de hacerles cumplir esas exigencias; 2) cuando el Estado planteaba a los ciudadanos exigencias que amenazaban fuertes identidades colectivas o violaban derechos incorporados a esas identidades; y 3) cuando el poder del Estado disminuía de forma ostensible en presencia de fuertes competidores.

Una situación revolucionaria en la que concurrían las dos primeras condiciones se produjo, por ejemplo, en el norte de Inglaterra en 1536, cuando la decisión de Enrique VIII de suprimir los monasterios, confiscar sus propiedades e integrar las parroquias locales en la nueva Iglesia estatal hizo estallar una gran rebelión católica a la que se dio el nombre de *Pilgrimage of Grace*. La tercera circunstancia, la pérdida visible de poder por parte del gobernante, se dio en Europa oriental en 1989, y también en las diversas crisis sucesorias de los siglos XVI y XVII, cuando la existencia de un heredero al trono que era menor de edad o manifiestamente incompetente incitaba a familias rivales a tratar de conquistar el poder real.

¿Cuándo desembocaron las situaciones revolucionarias en resultados revolucionarios? Especialmente en el tercer caso, cuando el Estado había perdido en buena parte el poder coercitivo. Un ejemplo en este sentido es la rebelión triunfante de Portugal en 1640, que se produjo cuando la revuelta en Cataluña y la guerra con Francia habían debilitado el poder de Castilla. El monarca de Castilla consiguió recuperar el control de Cataluña, pero Portugal (gracias a los ingresos que le reportaban las colonias y al apoyo inglés) conservó su independencia. La derrota en la guerra, la defección de las fuerzas armadas o el hundimiento de la economía pueden disminuir también drásticamente el poder coercitivo del Estado.

En términos generales, el proceso revolucionario consistía en la división de la comunidad política, de manera que un número importante de ciudadanos se veían obligados a elegir entre opciones enfrentadas que solicitaban su lealtad y obediencia, de tal forma que muchos grupos de interés se veían en peligro. Ahora bien, el desarrollo de ese proceso revolucionario dependía de la naturaleza del Estado, del poder coercitivo, de los principios predominantes, de la organización política fuera de los límites del Estado y del sistema internacional. Como hemos visto, en 1514 el cardenal primado de Hungría Tamás Bakócz obtuvo autorización del papa para organizar una cruzada con el fin de detener el avance de los turcos. Los grandes magnates no respondieron a su llamamiento, pero sí lo hizo un gran número de campesinos. A la sazón, el cardenal entregó el mando de la fuerza a un soldado profesional, György Dózsa. Dózsa enfrentó a los campesinos con los señores cuando los cruzados no recibieron suministros ni apoyo económico para su empresa. Se produjo, así, una rebelión campesina en el curso de la cual regiones enteras rechazaron la autoridad de la nobleza. El hecho de que esos campesinos desarmados fueran derrotados por el ejército de la nobleza y acabaran siendo objeto de una opresión aún más profunda no desmiente la naturaleza revolucionaria de su acción.

Esta forma de insurrección general del pueblo llano constituye un proceso de división de la comunidad política (superada por la fuerza) totalmente distinto de la insurrección frustrada, pero sangrientamente reprimida, que protagonizaron los Irlandeses Unidos en 1758, insurrección que a su vez no guarda similitud alguna con las ocupaciones masivas y revolucionarias de las fábricas metalúrgicas rusas por los trabajadores en la primavera de 1917. En los tres casos se produjo la movilización de una sólida oposición a la acción del gobierno, la ocupación por la fuerza de territorios e instalaciones sometidos a la jurisdicción del Estado, la afirmación (aunque fuera de forma temporal, débil o localizada) de una autoridad alternativa y el enfrentamiento con las autoridades constituidas para mantener esa base alternativa de poder.

Por último, ¿qué factores determinaron la naturaleza y profundidad de los cambios en las vidas de los ciudadanos como consecuencia de la revolución? Hay que mencionar, en este contexto, tres factores fundamentales. En primer lugar, las diferencias sociales entre quienes ocupaban el poder antes de que estallara la revolución y después de que concluyera; cuanto mayores eran esas diferencias, más profundas eran las transformaciones registradas en la vida cotidiana. El alejamiento de la nobleza y el clero de la esfera del poder que conllevó la revolución francesa de 1789-1799, entrañó consecuencias mucho más profundas que los escasos cambios que produjo, en cuanto a la nómina de autoridades, la revolución de julio de 1830. En segundo lugar, el alcance de las transformaciones dependía de la profundidad del abismo abierto en la comunidad política. En general, en una comunidad política totalmente dividida los cambios solían ser mayores. Por ejemplo, la profunda división causada por el movimiento de

la Fronda en Francia (1648-1653) afectó profundamente a la vida posterior, aunque finalmente la monarquía reconquistara el poder, porque la facción perdedora tuvo que renunciar a una gran parte de su poder autónomo. En tercer lugar, una circunstancia que influía notablemente en la trayectoria posterior era el grado en que las luchas ocurridas durante la situación revolucionaria modificaran la vida social. En particular, la creación de instituciones políticas en el curso de las revoluciones afectaba de forma duradera al proceso posterior. Durante la revolución inglesa de 1640, pese a la dictadura de Cromwell y a la restauración de la monarquía en 1660, la posición central que ocupó el Parlamento durante los conflictos determinó que la posición de esta institución frente al soberano fuera mucho más influyente que durante la monarquía de los Tudor y los Estuardo.

Es preciso recordar que a lo largo del tiempo se produjo una importante modificación de las pautas revolucionarias. Del examen de las trayectorias que hemos realizado se desprende que los procesos de modificación de las condiciones y consecuencias de las situaciones revolucionarias (divisiones profundas respecto al control sobre el poder del Estado) y de los resultados revolucionarios (transferencia efectiva del poder del Estado) fueron, en parte, independientes entre sí. En ocasiones, las situaciones revolucionarias fueron frecuentes en momentos y lugares en los que apenas se producían resultados revolucionarios; y, por otra parte, hubo importantes transferencias del poder del Estado (como veremos no siempre revolucionarias) con relativa frecuencia en lugares y momentos en que las situaciones revolucionarias eran raras. Por ejemplo, en la Europa del siglo XVII estallaron frecuentes situaciones revolucionarias, pero en casi todas las ocasiones el poder establecido consiguió recuperar el control después de un período cruento de soberanía múltiple. En este sentido, las insurrecciones triunfantes de portugueses y holandeses constituyen una notable excepción en un período de revoluciones frustradas.

Dos ejemplos pertinentes son los de la Fronda en Francia y la revuelta catalana en los años 1640-1650. Durante la Fronda, se formaron coaliciones populares que ocuparon el poder y decretaron cambios importantes en Burdeos y otras ciudades, pero, finalmente, la madre de Luis XIV, Ana de Austria, su ministro Mazarino y los magnates que habían hecho defección de la corona, superaron sus diferencias y acabaron con la resistencia popular. En Cataluña, las autoridades regionales consiguieron, con la ayuda de Francia, establecer la soberanía durante doce años, pero finalmente tuvieron que reconocer la hegemonía castellana y el precio que pagaron fue la cesión del Rosellón y la Cerdaña a Francia, y el debilitamiento de sus privilegios provinciales. Incluso en Portugal, que acabó obteniendo la independencia, la revolución de 1640 fue un proceso muy similar a una crisis sucesoria entre familias rivales que aspiraban al trono.

Menos frecuente es la incidencia de resultados revolucionarios sin que se produjeran situaciones revolucionarias. Es cierto que se registraron importantes transferencias de poder en ausencia de situaciones revolucionarias, pero tuvieron lugar a través de decenios de cambios sociales y de enfrentamientos (como en el caso de la conquista del poder por los capitalistas británicos) o no se produjeron a escala nacional, sino regional, mientras las autoridades nacionales estaban inmersas en una actividad bélica que las debilitaba (como cuando los campesinos y artesanos portugueses ocuparon la tierra y constituyeron cooperativas autónomas mientras diversas facciones constituidas por elementos militares y civiles se enfrentaban por el control del Estado durante el decenio de 1970). Dichas transferencias de poder no pueden calificarse de revolucionarias, ya sea porque no se produjeron con rapidez o porque no se realizaron en el conjunto del país.

Pueden mencionarse, sin embargo, cinco situaciones no revolucionarias que en ocasiones derivaban en resultados revolucionarios: 1) la conquista de un Estado por otro muy diferente, por ejemplo, cuando los mongoles conquistaron Moscovia; 2) un tratado que ponía fin a una guerra general, como cuando en 1815 el Congreso de Viena restauró en Francia la monarquía borbónica y la aristocracia; 3) intervención de poderosas fuerzas externas en la política nacional, tal como ocurrió en Bulgaria en 1919, cuando Alexander Stamboliski y su Unión Agraria Nacional accedieron al poder tras unas elecciones celebradas bajo la protección de los aliados victoriosos en la primera guerra mundial, y luego atacaron el poder de la nobleza; 4) un proceso súbito, deliberado y total de reorganización del poder, como cuando Mustafá Kemal emprendió la secularización y occidentalización de Turquía en el decenio de 1920; 5) retirada del apoyo al Estado por parte de una coalición de clase dominante, como cuando la burguesía de Italia y Alemania toleró la conquista fascista del poder por medios más o menos legales. En esos cinco casos, una imposición de la fuerza desde

arriba otorgó el poder a una nueva coalición gobernante. El caso de Turquía es, en realidad, una combinación de los cinco, si incluimos el desmembramiento de Turquía durante la primera guerra mundial y después de la misma, así como el apoyo crucial que prestó la Unión Soviética a las reformas turcas del decenio de 1920. De forma similar, la revolución pacífica de Bulgaria en 1919 fue consecuencia directa de los enfrentamientos ocasionados por el hecho de que el país concluyera la primera guerra mundial integrado en el bando perdedor. Mucho mejor fue la suerte de Rumania, que se integró oportunamente en las filas de los vencedores. En todas esas circunstancias, tuvieron enorme importancia la guerra y el poder militar.

La historia demuestra que la fuerza militar marcaba la diferencia entre las situaciones y los resultados revolucionarios. En efecto, en no pocas ocasiones, diversos elementos enfrentados a las autoridades que ocupaban el poder consiguieron plantear situaciones revolucionarias cuando los gobernantes se extralimitaban y aunque, de hecho, no tuvieran capacidad para conquistar el poder, pero nunca fue posible conquistar el poder del Estado sin antes haber controlado la fuerza militar. En Europa estallaron repetidas veces revueltas campesinas, que casi nunca pudieron triunfar a menos que se aliaran con magnates o municipios que poseían sus propias fuerzas armadas. Puesto que la organización de la fuerza militar tiene su propia historia, una historia íntimamente vinculada a la organización cambiante de los estados en general, la probabilidad y la naturaleza de la revolución se modificó a medida que tenía lugar la transformación de los estados europeos.

Estas generalizaciones son frágiles y efímeras, porque presentan excepciones, porque están distantes de las realidades que pretenden representar y porque son intemporales, cuando en esencia los procesos revolucionarios son cursos de acción en el tiempo. Las auténticas pautas no residen en esta lista de condiciones universales de las situaciones o resultados revolucionarios, sino en los mecanismos que hacen que un Estado sea o no vulnerable y que una comunidad política se divida o permanezca unida. La mayoría de los mecanismos pertinentes forman parte del proceso por el que los estados se transforman, tanto si eso significa que se aproximen o no a la revolución: mecanismos de sucesión, mecanismos de cooptación, mecanismos de lucha y mecanismos de resolución de los conflictos. Recordemos las condiciones inmediatas, aún ciertas por definición, de las situaciones y de los resultados revolucionarios:

Situación revolucionaria	*Resultado revolucionario*
1 La aparición de contendientes o coaliciones de contendientes, con aspiraciones exclusivas, incompatibles entre sí, al control del Estado o de una parte del mismo.	1 Defecciones de miembros de la comunidad política.
	2 Adquisición de un ejército por parte de las coaliciones revolucionarias.
2 Apoyo de esas aspiraciones por un sector importante de los ciudadanos.	3 Neutralización o defección del ejército del régimen
3 Incapacidad —o falta de voluntad— de los gobernantes para suprimir la coalición alternativa y/o el apoyo de sus aspiraciones.	4 Control del aparato del Estado por miembros de una coalición revolucionaria.

Una y otra vez hemos visto cómo los mecanismos de cambio en los estados influían en la probabilidad y el proceso hacia estas condiciones inmediatas, de la misma manera que influían en la naturaleza de la política cotidiana y en la sustitución a largo plazo de las situaciones revolucionarias comunales, patrono-cliente y dinásticas por situaciones revolucionarias basadas en el nacionalismo y en las coaliciones de clase.

Cinco siglos de revolución

Dirijamos la mirada atrás por última vez. Como indicación de los ritmos revolucionarios durante el medio milenio que hemos examinado, el cuadro 7.1 presenta para cada región importante y en períodos de medio siglo el número de años durante los cuales se vivió al menos una situación revolucionaria. Estas cifras resumen simplemente los datos procedentes de los cuadros cronológicos presentados anteriormente. En principio, una «situación revolucionaria» se daba cuando algún oponente del poder vigente controlaba al menos una región o

CUADRO 7.1. Número de años en los que se produjeron situaciones revolucionarias, por regiones y períodos, 1492-1991.

Período	Países Bajos	Península ibérica	Balcanes y Hungría	Islas Británicas	Francia	Rusia	Total
1492-1541	23	9	9	19	0	1	61
1542-1591	26	6	6	28	22	2	90
1592-1641	19	3	12	13	26	22	95
1642-1691	2	27	23	20	25	24	121
1692-1741	1	14	19	3	5	10	52
1742-1791	9	2	3	2	5	12	33
1792-1841	8	36	34	6	10	4	98
1842-1891	0	22	21	0	4	2	49
1892-1941	0	36	16	6	0	7	65
1942-1991	0	2	16	23	2	2	45
Total	88	157	159	120	99	86	709

circunscripción importante del Estado durante un mes o más. Las cifras sólo registran ese dato mínimo y no tienen en cuenta la magnitud de los conflictos, el número de muertos y las consecuencias a largo plazo. Por consiguiente, la revuelta irlandesa de sir Cahir O'Doherty (1608) cuenta lo mismo que un año de la revolución francesa.

No hay que dar a estas cifras más valor del que tienen. Habría sido posible incrementar las cifras totales, especialmente por lo que respecta a los primeros siglos, incluyendo todos los conflictos entre estados en los que uno de los beligerantes afirmaba que otro ya estaba sometido a su jurisdicción y que, por tanto, la guerra equivalía a sofocar una rebelión. Como hemos visto, hasta 1700 aproximadamente, los límites entre las guerras entre estados, las guerras civiles y las situaciones revolucionarias son bastante vagos, por dos razones: muchas jurisdicciones compartían una parte del territorio y casi siempre alguien luchaba por conseguir las jurisdicciones más pretendidas. Sin duda, si se incluyeran las guerras de conquista en los territorios en disputa entre las situaciones revolucionarias la cifra total aumentaría más en la península ibérica que en los Países Bajos, Francia o Gran Bretaña, en los Balcanes más que en la península ibérica y en Rusia aún más que en los Balcanes. Teniendo en cuenta estos extremos importantes, esas cifras ilustran varios aspectos substanciales: la desigualdad entre las diversas regiones por lo que respecta a las situaciones revolucionarias y una gran concentración de las situaciones revolucionarias en determinados períodos en los que el poder del Estado hubo de hacer frente a frecuentes desafíos.

No hay que considerar el cuadro como un indicador de los conflictos políticos en general. Por ejemplo, Francia no vivió situaciones revolucionarias entre 1492 y 1541, pero en el decenio de 1490 el monarca francés sometió por la fuerza a Bretaña so pretexto de que el duque era su vasallo y se había rebelado. En el mismo período tropas francesas intentaban conquistar territorios italianos para su rey. Durante los primeros años del siglo XVI se produjeron también rebeliones urbanas, como el levantamiento de Agen de 1514 contra los impuestos municipales, que desembocaron en la proclamación popular de una comuna, o la gran Rebeine que sacudió Lyon en 1529, cuando «unos 2.000 habitantes, en su mayor parte trabajadores no cualificados, mujeres y adolescentes saquearon el granero municipal, el monasterio franciscano de las proximidades y los hogares de varios hom-

bres adinerados, entre los que se contaba el primer humanista de Lyon, el físico y antiguo cónsul Symphorien Champier» (Davis, 1975, pp. 27-28). La frecuencia de situaciones revolucionarias en una de las regiones que figuran en el cuadro no representa el nivel global de conflictos, armados o de otro tipo, sino que indica en qué medida los desafíos concertados al poder del Estado llegaron a ser alternativas viables y atractivas a la sumisión y la resistencia pasiva.

Por estrecho margen, los Balcanes acumulan el mayor número de años revolucionarios: 159, frente a 157 en la península ibérica. En esas dos zonas, se vivieron situaciones revolucionarias durante casi una tercera parte de los años transcurridos en el período 1492-1991. Por lo que respecta a los Países Bajos, se registraron revoluciones un año de cada seis. Sin embargo, en los Balcanes y en la península ibérica, las situaciones revolucionarias seguían siendo frecuentes en el decenio de 1930; en los Países Bajos habían casi desaparecido cuando otros países reconocieron formalmente la independencia de la República de Holanda por el Tratado de Westfalia (1648).

En los Países Bajos, la gran mayoría de las situaciones revolucionarias que ocurrieron durante todo el período fueron consecuencia de enfrentamientos entre la burguesía, que defendía celosamente sus libertades, y el poder real o aristocrático que intentaba imponer un control monárquico. Prácticamente ninguna de esas situaciones revolucionarias se ajustó a la imagen clásica de la revolución como intento de las clases inferiores de arrebatar a sus opresores el control del Estado. Además, la conquista del poder por las armas no desempeñó un papel importante en la historia revolucionaria de los Países Bajos, excepto en algunos conflictos dinásticos de los siglos XVI y XVII. Los Países Bajos pasaron decididamente de las situaciones revolucionarias de signo comunal, patrono-cliente y dinásticas anteriores a 1648 —muy numerosas— a un número muy reducido de revoluciones de coalición de clases y nacionales.

En cambio, en la península ibérica apenas se produjeron situaciones revolucionarias entre 1492 y 1640, para ocurrir luego de forma profusa hacia finales de la guerra de los Treinta Años. Pese a que hubo ciertas fluctuaciones, siguieron siendo frecuentes en el siglo XX. En este sentido, el panorama es similar en la península ibérica y en los Balcanes, que se ajustaron a un modelo totalmente distinto al de los Países Bajos, Francia y (con la importante excepción de las insurrecciones de Irlanda) las islas Británicas. En estas tres últimas regiones, la formación del Estado moderno generó situaciones revolucionarias al inicio de la Edad Moderna, prácticamente un año de cada cuatro, pero posteriormente dichas situaciones fueron mucho menos frecuentes, aunque a veces adquirieron mayor virulencia. El caso extremo es el de los Países Bajos, donde con posterioridad a 1640 se produjeron muy pocas divisiones en los principales estados. Francia ocupa una posición intermedia, con una gran concentración de años revolucionarios durante los siglos XVI y XVII y con revoluciones trascendentes durante los siglos XVIII y XIX. En cuanto a Gran Bretaña, el modelo temporal sería muy similar al de los Países Bajos, de no ser por el conflicto secular entre Inglaterra e Irlanda, un conflicto que todavía persiste.

El proceso fue singular en Rusia, con una frecuencia creciente de las situaciones revolucionarias en el siglo XVII, su persistencia en el siglo XVIII y estallidos menos frecuentes, pero agudos posteriormente. El aparente pacifismo de Rusia durante el siglo XVI es, en parte, ilusorio, pues Moscovia y sus vecinos libraron durante ese período incesantes guerras de conquista y defensa. A medida que Iván el Grande y sus sucesores creaban el imperio ruso, aumentó de forma significativa el porcentaje de conflictos armados que les enfrentaban con súbditos otrora sumisos en lugar de con unos vecinos vulnerables. Sin embargo, como siempre, es importante señalar que los cambios registrados en los estados y en el sistema de estados europeos afectaron profundamente la forma y la incidencia de la revolución.

Un aspecto de estos procesos históricos es sorprendente. Recordemos que la clasificación de situaciones revolucionarias como comunales, patrono-cliente, dinásticas, etc., muestra las conexiones con sus bases sociales en dos dimensiones: relaciones sociales directas frente a las indirectas y territorio compartido frente a interés compartido. Dado el incremento de la importancia de los estados, no es sorprendente que adquirieran mayor importancia las conexiones indirectas entre los protagonistas revolucionarios. Sin embargo, habría sido lógico también que la especialización de la estructura del Estado y el desarrollo de la política basada en la existencia de grupos de intereses a escala nacional redujera la importancia del territorio compartido como base de la solidaridad revolucionaria.

Pero ocurrió precisamente lo contrario. Pese a que distintos gru-

pos comunales, como las comunidades locales de disidentes religiosos que tantos estados incitaron a rebelarse en los siglos XVI y XVII, desaparecieron finalmente de la escena revolucionaria, ocuparon su lugar otros grupos que aspiraban a obtener el poder nacional basándose en la herencia compartida y en la concentración geográfica. Hasta 1992, los supuestos grupos nacionales, más que las coaliciones de clases u otras concatenaciones de intereses, eran los que desafiaban más frecuentemente a los gobernantes europeos.

¿Cuál es la razón de ello? El mismo proceso que impulsó la transformación de los estados europeos durante los siglos XVIII y XIX explica la renovada importancia del territorio a escala nacional. A partir del momento en que crearon ejércitos nacionales permanentes con la población masculina nacional, los gobernantes europeos delimitaron de manera estricta sus territorios y los recursos que contenían y luego emprendieron la tarea de homogeneizar, disciplinar y gobernar directamente a sus súbditos. Las negociaciones relativas al suministro de los recursos necesarios para la organización militar sirvieron para fijar el concepto de ciudadanía y las reivindicaciones de los ciudadanos con respecto al Estado, fomentaron la formación de grupos de intereses dedicados al ejercicio del poder del Estado y, por consiguiente, incorporaron de mejor o peor grado a esos grupos de intereses a las actividades cotidianas de la política nacional. Por otra parte, los principios de la administración territorial centralizada, el gobierno directo y la nacionalización cultural excluyeron de la política nacional a aquellos grupos que afirmaban poseer un origen común distinto del que había sido consagrado por la política cultural del Estado.

En ese terreno fructificó la paradoja: el mismo proceso dio mayor valor a la condición de Estado, lo hizo depender del principio del origen común y lo negó a la gran mayoría de sus poseedores potenciales. Además, aunque los defensores de esas identidades «particularistas» resultaran derrotados en el intento de conseguir un Estado, algunos lo intentaron. La desintegración de imperios y la reestructuración de fronteras atendiendo a los criterios de nacionalidad al final de las guerras convirtió a aquéllos en modelos para los demás, especialmente para los intelectuales que tanto habían invertido en su biculturalismo, dividida su existencia entre las nuevas identidades nacionales y las nuevas identidades particularistas. Las elites regionales que pudieron integrarse en la elite nacional en plano de igualdad lo hicieron, abandonando a sus compañeros de viaje particularistas, pero quienes se encontraron relegados a posiciones inferiores en la escena nacional se convirtieron en devotos nacionalistas.

Sin embargo, a pesar de que el nacionalismo en busca de Estado ha cobrado nuevo vigor en época reciente, una serie de factores parecen indicar que a más largo plazo se producirá el declive del nacionalismo. El más importante de ellos es la creciente incapacidad de los estados europeos para continuar ejerciendo el férreo control sobre el capital, la mano de obra, los bienes y servicios, el dinero y la cultura que iniciaron hace doscientos años. Después de que durante dos siglos consiguieron con notable éxito captar y almacenar recursos en el interior de unas fronteras bien definidas, los estados europeos encuentran cada vez mayores dificultades para seguir controlando el trasiego de trabajadores, capital, drogas, tecnologías y dinero. Todos esos elementos se están internacionalizando y son objeto de una movilidad cada vez mayor.

La Comunidad Europea no hace sino aumentar esas dificultades entre sus miembros al fomentar el libre movimiento de capital, productos y mano de obra, al establecer una moneda común y al instarles a practicar políticas uniformes. A largo plazo, esas presiones socavarán la autonomía de los diferentes estados, dificultarán en grado extremo que cualquier Estado pueda adoptar una política fiscal, asistencial o militar diferente, y reducirá las ventajas inherentes al control del aparato de un Estado nacional. Es muy posible que las numerosas actividades que los estados vincularon en la época de la revolución francesa y después de la misma vuelvan a separarse y, por ejemplo, los movimientos de capital se realizarán sin tener en cuenta los intereses de un Estado determinado. Si tal cosa ocurre, perderán rápidamente impulso tanto el nacionalismo dirigido por el Estado como el nacionalismo en busca de un Estado.

Paradójicamente, ello podría dar lugar a una proliferación de particularismos culturales, liberados de la carga de desafiar la autoridad del Estado y de tratar de alcanzar la autonomía política. En el futuro, el pluralismo cultural podría ser compatible con la delegación del poder económico y político en entidades muy amplias, que no serían ya los estados consolidados que han existido durante doscientos años. Lo que para algunos es una era de renovado nacionalismo revolucionario bien pueden ser los prolegómenos de su total decadencia.

Bibliografía

En este repertorio bibliográfico sólo figuran los títulos citados en el texto. Para una bibliografía más general, véase Charles Tilly, «A Bibliography of European Revolutions, 1492-1992», *Working Paper*, n.º 149, Center for Studies of Social Change, New School for Social Research, septiembre de 1992.

Alefirenko, P. K. (1958), *Krest'ianskoie dvizhenie i krest'ianskii vopros v Rossii v 30-50-x godax xviii veka*, Nauk, Moscú.

Amann, Peter (1962), «Revolution: A Redefinition», *Political Science Quarterly*, 77, pp. 36-53.

Arendt, Hannah (1963), *On Revolution*, Viking, Nueva York (hay trad. cast.: *Sobre la revolución*, Alianza, Madrid, 1988).

Aya, Rod (1990), *Rethinking Revolutions and Collective Violence. Studies on Concept, Theory, and Method*, Het Spinhuis, Amsterdam.

Aylmer, G. E. (1986), *Rebellion or Revolution? England 1640-1660*, Oxford University Press, Oxford.

Baechler, Jean (1970), *Les phénomènes révolutionnaires*, Presses Universitaires de France, París.

Bairoch, Paul (1976), «Europe's Gross National Product: 1800-1975», *Journal of European Economic History*, 5, pp. 273-340.

Bercé, Yves-Marie (1974), *Histoire des Croquants. Étude des soulèvements populaires au xvii^e siècle dans le sud-ouest de la France*, Droz, París, 2 vols.

— (1980), *Révoltes et Révolutions dans l'Europe moderne*, Presses Universitaires de France, París.

Berend, Iván, y György Ránki (1977), *East Central Europe in the 19th and 20th Centuries*, Akademiai Kiado, Budapest.

Blickle, Peter (1981), *The Revolution of 1525. The German Peasants' War from a New Perspective*, Johns Hopkins University Press, Baltimore. La primera edición alemana se publicó en 1977.

— (1987), «Communal Reformation and Peasant Piety: The Peasant Reformation and its Late Medieval Origins», *Central European History*, 20, pp. 216-228.

— (1988), *Unruhen in der ständischen Gesellschaft, 1300-1800*, Enzyklopädie Deutscher Geschichte, vol. I, Oldenbourg, Munich.

Bois, Paul (1981), «Aperçu sur les causes des insurrections de l'Ouest à l'époque révolutionnaire», en J.-C. Martin, ed., *Vendée-Chouannerie*, Reflets du Passé, Nantes, pp. 121-126.

Braddick, Michael (1991), «State Formation and Social Change in Early Modern England: A Problem Stated and Approaches Suggested», *Social History*, 16, pp. 1-18.

Brady, Thomas A., Jr. (1985), *Turning Swiss. Cities and Empire, 1450-1550*, Cambridge University Press, Cambridge.

Brinton, Crane (1938), *The Anatomy of Revolution*, Norton, Nueva York.

Broeker, Galen (1970), *Rural Disorder and Police Reform in Ireland, 1812-36*, Routledge & Kegan Paul, Londres.

Chandler, Tertius, y Gerald Fox (1974), *3000 Years of Urban Growth*, Academic Press, Nueva York.

Charlesworth, Andrew, ed. (1983), *An Atlas of Rural Protest in Britain, 1548-1900*, Croom Helm, Londres.

Chassin, Charles-Louis (1982), *La préparation de la guerre de Vendée*, Dupont, París, 3 vols.

Clark, J. C. D. (1986), *Revolution and Rebellion. State and Society in England in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Cambridge University Press, Cambridge.

Clark, Samuel D., y J. S. Donnelly, eds. (1983), *Irish Peasants: Violence and Political Unrest, 1780-1914*, University of Wisconsin Press, Madison.

Clay, C. G. A. (1984), *Economic Expansion and Social Change: England 1500-1700*, Cambridge University Press, Cambridge, 2 vols.

Comaroff, John (1991), «Humanity, Ethnicity, Nationality: Conceptual and Comparative Perspectives on the U.S.S.R.», *Theory and Society*, 20, pp. 661-688.

Cornwall, Julian (1977), *Revolt of the Peasantry 1549*, Routledge & Kegan Paul, Londres.

Cronin, James E. (1991), *The Politics of State Expansion. War, state and society in twentieth-century Britain*, Routledge, Londres.

Davis, Natalie Zemon (1975), *Society and Culture in Early Modern France*, University of California Press, Berkeley (hay trad. cast.: *Sociedad y cultura en la Francia moderna*, Crítica, Barcelona, 1993).

Dawson, Philip (1972), *Provincial Magistrates and Revolutionary Politics in France, 1789-1795*, Harvard University Press, Cambridge.

Dekker, Rudolf (1982), *Holland in beroering. Oproeren in de 17de en 18de eeuw*, Amboeken, Baarn.
De Vries, Jan (1984), *European Urbanization 1500-1800*, Harvard University Press, Cambridge (hay trad. cast.: *La urbanización de Europa, 1500-1800*, Crítica, Barcelona, 1987).
Dietz, Frederick C. (1932), *English Public Finance 1558-1641*, Century, Nueva York.
Dunn, John (1989), *Modern Revolutions, An Introduction to the Analysis of a Political Phenomenon*, 2.ª ed., Cambridge University Press, Cambridge.
Eisenstadt, S. N. (1992), «The Breakdown of Communist Regimes», *Daedalus*, 121(2), pp. 21-42.
Fitzpatrick, David (1985), «Review Essay: Unrest in Rural Ireland», *Irish Economic and Social History*, 12, pp. 98-105.
Fitzpatrick, Sheila (1982), *The Russian Revolution 1917-1932*, Oxford University Press, Oxford.
Fletcher, Anthony (1968), *Tudor Rebellions*, Longman, Londres.
Forrest, Alan (1975), *Society and Politics in Revolutionary Bordeaux*, Oxford University Press, Oxford.
Friedrich, Carl J., ed. (1966), *Revolution*, Atherton, Nueva York.
Furet, François (1989), «L'idée démocratique est l'avenir de l'idée socialiste» (entrevista), *Le Monde de la Révolution Française*, n.º 1, p. 28.
—, y Mona Ozouf, eds. (1989), *A Critical Dictionary of the French Revolution*, Harvard University Press, Cambridge.
Gambrelle, Fabienne, y Michel Trebitsch, eds. (1989), *Révolte et société. Actes du Colloque d'Histoire au Présent, Paris mai 1988*, Histoire au Présent, París, 2 vols.
Goldstone, Jack A. (1986), «Introduction: The Comparative and Historical Study of Revolutions», en Jack A. Goldstone, ed., *Revolutions. Theoretical, Comparative, and Historical Studies*, Harcourt Brace Jovanovich, San Diego, pp. 1-17.
— (1991), *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*, University of California Press, Berkeley.
Greenfeld, Liah (1990), «The Formation of the Russian National Identity: The Role of Status Insecurity and Ressentiment», *Comparative Studies in Society and History*, 32, pp. 549-591.
Greer, Donald (1935), *The Incidence of the Terror during the French Revolution*, Harvard University Press, Cambridge.
Griffiths, Gordon (1960), «The Revolutionary Character of the Revolt of the Netherlands», *Comparative Studies in Society and History*, 2, pp. 452-472.

Hanson, Paul R. (1989), *Provincial Politics in the French Revolution. Caen and Limoges, 1789-1794*, Louisiana State University Press, Baton Rouge.
't Hart, Marjolein (1989), «Cities and Statemaking in the Dutch Republic, 1580-1680», *Theory and Society*, 18, pp. 663-688.
— (1990), «Public Loans and Lenders in the Seventeenth Century Netherlands», en *Economic and Social History in the Netherlands*, Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, Amsterdam, vol. I, pp. 119-140.
— (1991), «"The Devil or the Dutch": Holland's Impact on the Financial Revolution in England, 1643-1694», *Parliaments, Estates and Representation*, 11, pp. 39-52.
Heller, Henry (1991), *Iron and Blood. Civil Wars in Sixteenth-Century France*, McGill-Queen's University Press, Montreal.
Hirst, Derek (1986), *Authority and Conflict. England, 1603-1658*, Harvard University Press, Cambridge.
Hobbes, Thomas (1990), *Behemoth or the Long Parliament*, University of Chicago Press, Chicago. Acabada hacia 1668; 1.ª ed. oficial en 1682.
Hobsbawm, E. J. (1986), «Revolution», en Roy Porter y Mikulas Teich, eds., *Revolution in History*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 5-46 (hay trad. cast.: *La revolución en la historia*, Crítica, Barcelona, 1990).
Hood, James N. (1971), «Protestant-Catholic Relations and the Roots of the First Popular Counterrevolutionary Movement in France», *Journal of Modern History*, 43, pp. 245-275.
— (1979), «Revival and Mutation of Old Rivalries in Revolutionary France», *Past and Present*, 82, pp. 82-115.
Jessenne, Jean-Pierre (1987), *Pouvoir au village et Révolution. Artois 1760-1848*, Presses Universitaires de Lille, Lille.
Kennedy, William (1964), *English Taxation 1640-1799. An Essay on Policy and Opinion*, Augustus Kelley, Nueva York; 1.ª edición en 1913.
Kimmel, Michael S. (1990), *Revolution. A Sociological Interpretation*, Temple University Press, Filadelfia.
Knecht, R. J. (1989), *The French Wars of Religion 1559-1598*, Longman, Londres.
Koenker, Diane P., y William G. Rosenberg (1989), *Strikes and Revolution in Russia, 1917*, Princeton University Press, Princeton.
Kossmann, E. H. (1978), *The Low Countries 1780-1940*, Clarendon Press, Oxford.
Laitin, David D., Roger Petersen y John W. Slocum (1992), «Language and the State: Russia and the Soviet Union in Comparative Perspective», en Alexander J. Motyl, ed., *Thinking Theoretically About Soviet Nationalities. History and Comparison in the Study of the USSR*, Columbia University Press, Nueva York, pp. 129-168.

Laqueur, Walter (1968), «Revolution», *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Macmillan, Nueva York, vol. 13, pp. 501-507.
Lebrun, François, y Roger Dupuy, eds. (1985), *Les résistances à la Révolution*, Imago, París.
LeDonne, John P. (1991), *Absolutism and Ruling Class. The Formation of the Russian Political Order 1700-1825*, Oxford University Press, Nueva York.
Le Goff, Jacques, y Jean-Claude Schmitt, eds. (1981), *Le Charivari*, Mouton, París.
Le Goff, T. J. A., y D. M. G. Sutherland (1984), «Religion and Rural Revolt in the French Revolution: An Overview», en János M. Bak y Gerhard Benecke, eds., *Religion and Rural Revolt*, Manchester University Press, Manchester, pp. 123-146.
Lenin, V. I. (1967), *Selected Works*, International Publishers, Nueva York, 3 vols. (una edición de las *Obras completas* es la editada por Akal, Madrid, 1977-1978, 40 vols.).
Lepetit, Bernard (1988), *Les villes dans la France moderne (1740-1840)*, Albin Michel, París.
Leroy-Beaulieu, Anatole (1990), *L'Empire des tsars et les Russes*, Robert Laffont, París, 3 vols. 1.ª edición en 1881-1889.
Le Roy Ladurie, Emmanuel, y Michel Morineau (1977), *Histoire économique et sociale de la France. Tome I: de 1450 à 1660. Second Volume: Paysannerie et croissance*, Presses Universitaires de France, París.
Lesthaeghe, Ron J. (1977), *The Decline of Belgian Fertility, 1800-1970*, Princeton University Press, Princeton.
Levy, Jack S. (1983), *War in the Modern Great Power System, 1495-1975*, University Press of Kentucky, Lexington.
Lewis, Gwynne (1978), *The Second Vendée: The Continuity of Counter-Revolution in the Department of the Gard, 1789-1815*, Clarendon Press, Oxford.
—, y Colin Lucas, eds. (1983), *Beyond the Terror. Essays in French Regional and Social History, 1794-1815*, Cambridge University Press, Cambridge.
Luard, Evan (1987), *War in International Society*, Yale University Press, New Haven.
Lucas, Colin (1973), *The Structure of the Terror: The Example of Javogues and the Loire*, Oxford University Press, Londres.
Lyons, Martyn (1980), *Révolution et Terreur à Toulouse*, Privat, Toulouse.
MacCulloch, Diarmaid (1979), «Kett's Rebellion in Context», *Past and Present*, 84, pp. 36-59.
Manning, Roger B. (1988), *Village Revolts. Social Protest and Popular Disturbances in England, 1509-1640*, Clarendon Press, Oxford.

Markoff, John (1985), «The Social Geography of Rural Revolt at the Beginning of the French Revolution», *American Sociological Review*, 50, pp. 761-781.
Martin, Jean-Claude (1987), *La Vendée et la France*, Le Seuil, París.
McPhail, Clark (1991), *The Myth of the Madding Crowd*, Aldine de Gruyter, Nueva York.
McPhee, Peter (1988), «Les formes d'intervention populaire en Roussillon: L'exemple de Collioure, 1789-1815», en Centre d'Histoire Contemporaine du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon, *Les pratiques politiques en province à l'époque de la Révolution française*, Publications de la Recherche, Université de Montpellier, Montpellier, pp. 235-252.
Mironov, B. N. (1985), *Khlebn'ie tsen'i v Rossii za dva stoletiia (XVIII-XIX vv.)*, Nauka, San Petersburgo.
Moody, T. W., y F. X. Martin, eds. (1987), *The Course of Irish History*, Mercier Press, Cork, edición revisada.
Mousnier, Roland (1967), *Fureurs paysannes: les paysannes dans les révoltes du XVII^e siècle (France, Russie, Chine)*, Calmann-Lévy, París.
Nahaylo, Bohdan, y Victor Swoboda (1990), *Soviet Disunion. A History of the Nationalities Problem in the USSR*, Free Press, Nueva York.
Nell, Edward (1991), «Demand and Capacity in Capitalism and Socialism», *Working Paper*, n.º 22, Political Economy Program, New School for Social Research.
O'Brien, Conor Cruise (1989), «Nationalism and the French Revolution», en Geoffrey Best, ed., *The Permanent Revolution. The French Revolution and its Legacy, 1789-1989*, University of Chicago Press, Chicago, pp. 17-48; 1.ª edición en 1988.
O'Brien, Patrick K. (1988), «The Political Economy of British Taxation, 1660-1815», *Review*, 41, pp. 1-32.
— (1989), «The Impact of the Revolutionary and Napoleonic Wars, 1793-1815, on the Long-run Growth of the British Economy», *Economic History Review*, 12, pp. 335-395.
Østergard, Uffe (1992), «Peasants and Danes: The Danish National Identity and Political Culture», *Comparative Studies in Society and History*, 34, pp. 3-27.
Palmer, R. R. (1959, 1964), *The Age of the Democratic Revolution*, Princeton University Press, Princeton, 2 vols.
Palmer, Stanley H. (1988), *Police and Protest in England and Ireland 1780-1850*, Cambridge University Press, Cambridge.
Pérez, Zagorin (1982), *Rebels and Rulers, 1500-1660*, Cambridge University Press, Cambridge.

Popovsky, Linda S. (1990), «The Crisis over Tonnage and Poundage in Parliament in 1629», *Past and Present*, 126, pp. 44-75.
Prevenier, Walter, y Wim Blockmans (1985), *The Burgundian Netherlands*, Fonds Mercator, Amberes.
Richardson, R. C. (1977), *The Debate on the English Revolution*, St. Martin's, Nueva York.
Rosenberg, Harriet G. (1988), *A Negotiated World: Three Centuries of Change in a French Alpine Community*, University of Toronto Press, Toronto.
Rowen, Herbert H., ed. (1972), *The Low Countries in Early Modern Times*, Harper & Row, Nueva York.
Rozman, Gilbert (1976), *Urban Networks in Russia 1750-1800 and Premodern Periodization*, Princeton University Press, Princeton.
Rule, James B. (1989), *Theories of Civil Violence*, University of California Press, Berkeley.
—, y Charles Tilly (1972), «1830 and the Unnatural History of Revolution», *Journal of Social Issues*, 28, pp. 49-76.
Russell, Conrad S. R. (1982), «Monarchies, Wars, and Estates in England, France, and Spain, c. 1580-c. 1640», *Legislative Studies Quarterly*, 7, pp. 205-220.
— (1990), *The Causes of the English Civil War*, Clarendon Press, Oxford.
— (1991), *The Fall of the British Monarchies 1637-1642*, Clarendon Press, Oxford.
Scott, William (1973), *Terror and Repression in Revolutionary Marseilles*, Barnes & Noble, Nueva York.
Shanin, Teodor (1986), *The Roots of Otherness: Russia's Turn of Century*, Yale University Press, New Haven, 2 vols.
Stone, Lawrence (1972), *The Causes of the English Revolution, 1529-1642*, Routledge & Kegan Paul, Londres.
Sugar, Peter F., ed. (1990), *A History of Hungary*, Indiana University Press, Bloomington.
Swanson, Guy E. (1967), *Religion and Regime. A Sociological Account of the Reformation*, University of Michigan Press, Ann Arbor.
Tarrow, Sidney (1989), *Struggle, Politics, and Reform: Collective Action, Social Movements, and Cycles of Protest*, Occasional Paper, n.º 21, Western Societies Programme, Center for International Studies, Cornell University, Ithaca.
—, y Sarah Soule (1991), «Acting Collectively, 1847-49: How the Repertoire of Collective Action Changed and Where it Happened», ensayo inédito presentado a la Social Science History Association, Nueva Orleans.
Thompson, E. P. (1972), «Rough Music: Le Charivari anglais», *Annales; Économies, Sociétés, Civilisations*, 27, pp. 285-312.

Tilly, Charles (1982), «Britain Creates the Social Movement», en James Cronin y Jonathan Schneer, eds., *Social Conflict and the Political Order in Modern Britain*, Croom Helm, Londres, pp. 21-51.
— (1984), «Demographic Origins of the European Proletariat», en David Levine, ed., *Proletarianization and Family History*, Academic Press, Orlando, pp. 1-85.
— (1986), *The Contentious French*, Harvard University Press, Cambridge.
— (1991a), «From Mutiny to Mass Mobilization in Great Britain, 1758-1834», *Working Paper*, n.º 109, Center for Studies of Social Change, New School for Social Research, marzo.
— (1991b), «Revolution, War, and Other Struggles in Great Britain, 1789-1815», *Working Paper*, n.º 127, Center for Studies of Social Change, New School for Social Research, septiembre.
Tracy, James D. (1985), *A Financial Revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and Renteniers in the County of Holland, 1515-1565*, University of California Press, Berkeley.
Trotski, León (1932), *The Russian Revolution*, Simon & Schuster, Nueva York (hay trad. cast.: *La revolución de 1905*, Planeta, Barcelona, 1975).
Underdown, David (1985), *Revel, Riot, and Rebellion. Popular Politics and Culture in England 1603-1660*, Clarendon Press, Oxford.
Van Kalken, Frans (1946), *Histoire de Belgique des origines à nos jours*, Office de Publicité, Bruselas.
Verdery, Katherine (1991), «Theorizing Socialism: A Prologue to the "Transition"», *American Ethnologist*, 18, pp. 419-439.
Wallerstein, Immanuel (1974-1989), *The Modern World System*, Academic Press, Nueva York, 3 vols. hasta la fecha (hay trad. cast.: *El moderno sistema mundial*, Siglo XXI, Madrid, 1984[2]).
Watkins, Susan Cotts (1990), *From Provinces into Nations*, Princeton University Press, Princeton.
Winter, J. M. (1986), *The Great War and the British People*, Harvard University Press, Cambridge.
Wuthnow, Robert (1989), *Communities of Discourse. Ideology and Social Structure in the Reformation, the Enlightenment, and European Socialism*, Harvard University Press, Cambridge.

Índice alfabético

Índice de cuadros

Índice de figuras y mapas

Figuras

Mapas

Índice